

Adaptaciones nacionales del Protocolo Regional de Investigación para Ministerio Público y Policía Nacional en Nicaragua

Odett Leyton
Yaoska Eugarríos
Juan Pablo Sánchez

Colección Documentos de Política nº 30
Área: Justicia

Adaptaciones nacionales del Protocolo Regional de Investigación para Ministerio Público y Policía Nacional en Nicaragua

Odett Leyton
Yaoska Eugarríos
Juan Pablo Sánchez

Documento de Política nº 30

Área: Justicia



PROGRAMA FINANCIADO
POR LA UNIÓN EUROPEA

Edita:

Programa EUROsociAL
C/ Beatriz de Bobadilla, 18
28040 Madrid (España)
Tel.: +34 91 591 46 00
www.eurosoci-al-ii.eu

Con la colaboración:

Conferencia de Ministros de Justicia
de los Países Iberoamericanos



Ministerio Público de Nicaragua



Policía Nacional de Nicaragua



Expertise France



La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de los autores y en ningún caso se debe considerar que refleja la opinión de la Unión Europea.

Edición no venal.

Realización gráfica:

Cyan, Proyectos Editoriales, S.A.

Madrid, junio 2015



No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Agradecimientos

Esta publicación es fruto del esfuerzo conjunto de personas e instituciones con un firme y definido compromiso con la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Todo empezó allá por 2012 cuando cinco Ministerios Públicos y cinco Ministerios de Justicia decidieron participar en la acción de EUROsociAL II **Violencia de Género e Iberoamérica: investigación de delitos, atención a víctimas y coordinación interinstitucional** impulsada desde la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y la COMJIB y ejecutada técnica y financiera por esta última.

El primer hito regional lo logramos al aprobar el Protocolo Regional de Investigación de Delitos de Violencia contra las Mujeres en el Ámbito Intrafamiliar con Perspectiva de Género en Noviembre de 2013 en el seno de la AIAMP con el apoyo de 20 Fiscales Generales de Iberoamérica. Luego en 2014, la Comisión Delegada de Ministros Justicia refrendada por la Plenaria en 2015, aprobó el **Protocolo Regional de Atención Integral a la Víctima de Violencia de Género**.

Son más de dos años trabajando sobre la base de estos instrumentos en las adaptaciones nacionales en siete países: Brasil, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay. Acompañando estos procesos se han formado más de 600 policías, fiscales y peritos forenses en los contenidos de estos protocolos, premisa indispensable para su aplicación. Abordamos en la actualidad el reto de acompañar su aplicación y corregir los posibles errores de su planteamiento inicial.

La publicación de estos protocolos permite que los Ministerios Públicos, Fuerza Pública y Seguridad e Institutos de Medicina Legal difunda entre sus operadores y las usuarias de sus servicios el contenido de las normas técnicas que posibilitan un trabajo conjunto, ordenado y eficaz en pro del acceso a la justicia de las mujeres.

Agradecemos desde la COMJIB el compromiso de Ministerios Públicos, Fiscalías y Policías de estos países y de otros que han colaborado transfiriendo su experiencia y conocimiento: México, España y Argentina. También a los Ministerios de Justicia y

otras instancias de los ejecutivos como los Mecanismos de Igualdad que han apoyado la acción de EUROSociAL desde sus inicios. Igualmente a los institutos de Medicina Legal, especialmente a su Red Latinoamericana y al IML de Nicaragua que ostenta su Secretaría.

Estas publicaciones no habría sido posibles sin los/as expertos/as públicos y privados que se han involucrado en todos los casos más allá de lo esperado con la consecución de los Protocolos. Es un lugar común pero también muy cierto afirmar que las personas que trabajan en el ámbito de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres ponen todo su empeño y dedicación en la causa, en este caso los expertos/as europeos y latinoamericanos no han sido menos.

Madrid, julio 2015

Luz Entrena

*Técnica responsable de las acciones de lucha contra
la violencia de género de EUROSociAL II*

Índice

PROTOCOLO SOBRE LA PERSECUCIÓN PENAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO CONFORME A LA LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, SU REFORMA Y SU REGLAMENTO.....	9
Acuerdo número MP-FGR-004-2014.....	11
Introducción.....	13
Objetivo del Protocolo	15
Principios procesales que rigen la actuación fiscal	17
Marco normativo internacional y nacional.....	21
Antecedentes históricos de la Violencia	27
La actuación fiscal en la fase investigativa	37
A.1. La Denuncia	37
A.2. Formas de Recepción.....	38
A.3. Contenido Mínimo de la Denuncia.....	39
A.4. Directrices que deben de observarse al momento de la recepción de la Denuncia.....	42
A.5. Intervención del ministerio público en caso de que la víctima se aparte de la investigación o del proceso.....	44
A.6. Sobre la Tramitación de la Denuncia	46
De las Medidas de Protección conforme al Código Penal Art. 111.....	49
Diligencias y/o actos de investigación útiles y necesarios para el esclarecimiento de los hechos vinculados a la violencia de genero	55
Actuaciones en la investigación de los delitos sexuales	69
Fin de la investigación	73
La acusación	75

De la actuación fiscal durante el proceso	79
A.1. Aplicación de Penas Agravadas en los Delitos de Violencia Doméstica y Violencia Sexual	82
A.2. Aplicación del principio de oportunidad en casos de violencia de género.....	85
Aspectos dogmáticos “teoría general del delito”	91
Análisis estructural de tipos penales mas frecuentes en materia de violencia de género.....	95
Anexo I. Modelo de formulario para denuncia de violencia de género	145
Anexo 2. Análisis estructural de los delitos regulados y sancionados en la ley 779 ley integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas a la Ley 641 “Código Penal”	151
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	173
I. Presentación	175
II. Objetivo del protocolo	177
III. Principios generales que rigen la actuación de los servidores y servidoras públicos/as del ministerio público en atención a las víctimas de violencia de género.....	179
IV. Derechos de las víctimas de violencia de género	183
V. Marco nacional e internacional	185
Instrumentos internacionales.....	185
Instrumentos nacionales	186
VI. Marco conceptual.....	187
VII. Aspectos generales de atención a víctimas de violencia de género.....	191
Atención adecuada y de calidad	191
¿Qué es la escucha activa?	192
VIII. Intervención en crisis en víctimas de violencia de género	195
Características de una crisis.....	195

IX. Información y orientación a las víctimas.	197
Respecto a la recepción de denuncias en el MP	197
Remisión a la unidad especializada de atención a víctimas de violencia de género del ministerio público	198
X. Valoración de riesgo en las víctimas de violencia de género	199
Niveles de riesgo	201
Vulnerabilidad de la víctima	202
XI. Criterios de actuación en la atención a víctimas de violencia de género en la fase investigativa	205
XII. Atención a víctimas en la fase del proceso judicial.	207
XIII. La retractación	209
XIV. Indicios que permiten identificar la posibilidad de retractación	211
Manejo de la retracción	212
XV. Lineamientos de atención especial a grupos vulnerables	213
Niñas, Niños y Adolescentes	213
Lo que no se debe hacer cuando se entrevista a un niño, niña o adolescente víctima	214
XVI. De la coordinación interinstitucional.	219
Registro de lo actuado	219
De la restitución y la reparación de daños.	219
XVII. Bibliografía	221
Anexos.	223
Valoración de riesgos en caso de delitos sexuales a niñas, niños y adolescentes	223
Formulario de valoración del riesgo contra la víctima de violencia de género ..	224
Ministerio Público. Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia de Género	226
Oficina de atención a víctimas del delito	229
Centro de Atención Fiscal. Distrito.....	232
Remitido a la Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia de Género	232

PROTOCOLO PARA LA INVESTIGACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO DE LOS
DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
COMETIDOS EN EL ÁMBITO SEXUAL E INTRAFAMILIAR 233

Presentación 235

I. Objeto del “Protocolo para la investigación con perspectiva de género
de los delitos de violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes
cometidos en el ámbito sexual e intrafamiliar” 237

II. Régimen jurídico 241

1. Internacional 241

2. Nacional 245

III. La investigación policial especializada en materia de violencia de género,
intrafamiliar y sexual. 263

1. Principios que rigen la investigación 263

2. Procedimientos policiales ante la denuncia, investigación y detención
ante el conocimiento de hechos de naturaleza penal 265

3. Actuación policial con perspectiva de género 295

4. Particularidades de la investigación en los delitos de violencia de género 300

5. Valoración del riesgo (VR) en los delitos de violencia de género 305

6. Del anticipo jurisdiccional de prueba (Arts. 44 Ley 779 y 202 CPP) 313

IV. Bibliografía 317

V. Anexos 319

1. Marco conceptual 319

2. Algunas disposiciones de interés de las 100 Reglas de Brasilia 323

3. Morfología descriptiva 328

**Protocolo sobre la persecución penal
con perspectiva de género conforme a la
ley integral contra la violencia hacia las
mujeres, su reforma y su reglamento**

Acuerdo número MP-FGR-004-2014

**ANA JULIA GUIDO OCHOA, Fiscal General de la República,
en uso de las facultades conferidas por la Ley No. 346 Ley Orgánica
del Ministerio Público, su Reglamento el Decreto 133-2000 y en conformidad
con la Ley No. 779 Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres
y de Reformas a la Ley No. 641 “Código Penal”**

CONSIDERANDO

- I. Que corresponde a la Fiscal General de la República, en su condición de máxima autoridad del Ministerio Público y por las atribuciones conferidas por la Ley, determinar la política institucional mediante instrucciones de carácter particular, respecto del servicio y ejercicio de las funciones encomendadas a los servidores y funcionarios a su cargo.
- II. Que la naturaleza del Ministerio Público es la representación de la sociedad en general y de la víctima del delito, teniendo la obligación de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar, perseguir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, con el fin de garantizar la vida, seguridad y protección de las víctimas de violencia.
- III. Que el Ministerio Público ha organizado el ejercicio de su función acusatoria atendiendo la naturaleza, connotación y complejidad de la violencia física, psicológica, sexual y patrimonial, que se ejerce sobre las mujeres, niños, niñas y adolescentes que se encuentran en condición de vulnerabilidad, por ello y en aras de unificar la actuación fiscal se creó la Unidad Especializada de Delitos Contra la Violencia de Género, bajo acuerdo No. 703 del 06 de Junio del 2006, como un órgano de carácter permanente, bajo la dependencia jerárquica del Fiscal General de la República y con competencia a nivel nacional, cuya misión es brindar un tratamiento prioritario a las víctimas de violencia de género.
- IV. Que el Fiscal General de la República en uso de sus facultades con el propósito de proteger los derechos humanos y brindarle a la víctima de violencia de género un acceso efectivo a la justicia ha aprobado el Protocolo de Actuación Fiscal en materia de Violencia de Género, con el objeto de mantener la unidad de actuación y dependencia jerárquica en dicha materia.

POR TANTO

La Fiscal General de la República en uso de las facultades otorgadas por el Artículo 14 numeral 4 de la Ley No. 346, "Ley Orgánica del Ministerio Público" y, de conformidad con los Artículos 1, 4, 10, 13, 17 y 18 del mismo cuerpo de Ley; Artículo 26, numeral 4 del Decreto 133-2000, "Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público", y en conformidad con la Ley No. 779 LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y DE REFORMAS A LA LEY No. 641 "CÓDIGO PENAL".

ACUERDA: lo siguiente:

PRIMERO: Que en fecha 22 de Febrero del año 2012 la Gaceta Diario Oficial de la República de Nicaragua publicó la Ley 779 Ley Integral Contra la Violencia hacia las mujeres y de reformas a la Ley No. 641, "Código Penal", que el 01 de octubre de 2013 se reforma la Ley 779 bajo la Ley 846 y el 31 de Julio de 2014 entró en vigencia el Reglamento de la Ley 779 Decreto 42-2014 y la Política de Estado para el Fortalecimiento de la Familia Nicaraguense y prevención de la Violencia Decreto 43-2014, le corresponde al Ministerio Público como representante de la sociedad y de la víctima del delito en el proceso penal, adecuar sus normas de actuación para fortalecer la investigación e incorporar la perspectiva de género en la persecución penal en los delitos previstos en las normas antes referidas, por lo tanto, se procede: **"Adecuar el Protocolo de Actuación de la Gestión Fiscal en materia de Violencia de Género conforme a lo que mandata la Ley integral 779 y se fortalece dicha normativa al redefinirse como: "Protocolo de Actuación".**

SEGUNDO: El Protocolo deberá ser puesto en conocimiento a todos los y las Fiscales y servidores del Ministerio Público. Le corresponde a la Unidad Especializada de Delitos Contra la Violencia de Género y los y las Fiscales Departamentales y Regionales velar para que el mismo sea aplicado a efecto de mantener la unidad de actuación y dependencia jerárquica en la materia.

Dado en la ciudad de Managua, a los tres días del mes de Noviembre del año dos mil catorce.

Ana Julia Guido Ochoa
Fiscal General de la República

Introducción

La violencia contra las mujeres, no es una realidad nueva, porque tiene largas raíces en el tiempo, y la misma no puede ser entendida si no partimos **del proceso de socialización diferencial establecido entre los sexos**, es decir, del género, masculino y femenino, donde los primeros tomaron el poder y se erigieron como parámetro de lo humano y de ahí surgió la diferencia sexual significando en desigualdad en perjuicio de las mujeres¹. Esta jerarquía se resuelve en la superioridad masculina y la inferioridad de las mujeres por ser consideradas/os carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Esa violencia basada en la desigualdad entre los sexos convalida la discriminación, se reproduce para garantizar la dominación masculina tanto en el ámbito público como el privado todo con el fin de ejercer control social sobre el comportamiento de las mujeres, así como de los niños, niñas, adolescentes y todo aquel que se encuentre en condición de vulnerabilidad.

Sobre la base del contexto de violencia antes descrito, se afirma que la Desigualdad y la Discriminación que sufre la mujer a nivel mundial constituye una violación a los derechos humanos, razón por la cual en 1969 la Organización de las Naciones Unidas resueltos a eliminar todo acto de discriminación hacia las mujeres aprueban la “Convención sobre la Eliminación de la Violencia contra la mujer” la cual compromete a los Estados Partes a adoptar medidas para suprimir la discriminación en todas sus formas y manifestaciones. De la misma manera la Organización de los Estados Americanos en 1996 convinieron la aprobación de la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer” “Convención Belén do Pará por considerar que la violencia hacia la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de poder históricamente desiguales entre hombres y mujer, los Estados partes deben establecer medidas afirmativas para proteger los derechos de las mujeres.

Nicaragua a través del Gobierno de reconciliación y de unidad nacional, adopta medidas legislativas como parte de los compromisos asumidos al ratificar las convenciones antes mencionadas y aprueba la Ley 779 Ley Integral Contra la Violencia hacia las mujeres y de reforma a la Ley No. 641 “Código Penal”, con su Reglamento (Decreto 42-2014) y desarrolla las políticas públicas que tienen como objetivo desarrollar en la sociedad nicaragüense una cultura basada en valores y actitudes que promuevan relaciones entre hombres y mujeres sustentadas en la equidad, no discriminación, igualdad y respeto de los derechos humanos. El alcance de estás política es fortalecer las capacidades y habilidades de los recursos de las instituciones que trabajan el tema de Violencia, para ello se mandata a crear o adecuar mecanismos, normas de actuación, instrumentos y servicios que mejoren el acceso y oportunidades a mujeres, niños, niñas y adolescentes en materia de prevención, atención y protección de los derechos humanos.

1. Alda Facio y Lorena Fries, Género y Derecho. LOM Ediciones/La Morada, 1era Edición, septiembre de 1999.

Es así, que el Ministerio Público de Nicaragua a través de la Unidad Especializada de Delitos Contra la Violencia de Género como representante de la sociedad y de la víctima del delito en el proceso penal, le corresponde la persecución penal con perspectiva de género conforme lo establecido en la Ley 779² y sobre ese mandato y lo establecido en las Política de Estado³, se procede **adecuar** el “Protocolo de Actuación de la Gestión Fiscal en materia de Violencia de Género” aprobado en Diciembre del 2009, a la legislación nacional existente, para unificar los criterios de la actuación fiscal en la dirección jurídica de la investigación en los delitos de violencia de género cometidos tanto en el ámbito público como en el privado a fin de garantizar un acceso efectivo a la justicia a las víctimas de violencia de Género.

La Adecuación de la normativa interna del Ministerio Público de Nicaragua se está materializando ya que se cuenta con la asesoría y apoyo de Eurosocietal. En este proceso de fortalecimiento institucional se está incorporando las recomendaciones establecidas en el Protocolo Regional para la investigación con perspectiva de género de los delitos de violencia contra las Mujeres cometidos en el ámbito familiar” aprobado en Ecuador en julio de 2014 por la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB).

En el presente protocolo abordaremos la violencia hacia las mujeres en sus diferentes manifestaciones, partiendo del marco normativo y conceptual de la violencia de género por ser fuentes de interpretación y aplicación de los tipos penales que tipifica y señala la ley y el reglamento, se procede a fortalecer la investigación al ampliar las herramientas y técnicas jurídicas que acrediten las estructuras y patrones de poder que sufren las víctimas de violencia; así mismo se analizan los diferentes tipos penales a fin de establecer los presupuestos jurídicos formales y materiales que requiere cada tipo penal en particular de manera que sea una herramienta operativa al momento de ejercer la acción penal y a su vez el presente instrumento establece la política criminal en cuanto a la aplicación de los principios de oportunidad como salidas alternas al proceso.

En fin, este protocolo establece procedimientos a seguir que constituyen acciones positivas para protección de los derechos humanos y a una vida libre de violencia de las mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad⁴, determinándose la vulnerabilidad de la víctima tomando en cuenta el tipo de delito, la relación de la víctima con el agresor, la disponibilidad para acceder a medios de ayuda y asistencia y el perfil psicológico, anímico, económico y social de la

2. Art. 38 y 40. Ley Integral Contra la Violencia hacia las mujeres y de reforma a la Ley No. 641 “Código Penal”. Junio 2012.

3. Decreto 43-2014 “Política de Estado para el Fortalecimiento de la Familia Nicaraguense y prevención de la Violencia”.

4. Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad. XIV Cumbre Judicial Iberoamericana Brasilia, marzo de 2008.

víctima⁵. Por consiguiente los y las fiscales deben adoptar medidas que favorezca el desarrollo humano conforme a los principios de igualdad y no discriminación.

Objetivo del Protocolo

El Objetivo de este protocolo es la Unificación del ejercicio de la acción penal con incorporando la perspectiva de género en la investigación y sanción de las conductas delictivas tipificadas y señaladas en la Ley 779 Ley Integral Contra la Violencia hacia las mujeres y de reforma a la Ley No. 641 “Código Penal” y en el Reglamento Decreto. 42-2014, a fin de visibilizar la asignación social y las relaciones de poder originadas por las diferencias atribuidas social y culturalmente a cada uno de los sexos. Dotar a los y las fiscales de herramientas técnicas científicas y jurídicas para que adopten estrategias que garanticen a las víctimas de violencia de género el acceso efectivo a la justicia, protección especializada, la asistencia integral a las víctimas de violencia de género.

5. Guías de Santiago sobre Protección de Víctimas y Testigos. Documento aprobado en la XVI Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), República Dominicana, Punta Cana, Julio 2008.

Principios procesales que rigen la actuación fiscal

Se procede a retomar los principios rectores contenidos en la Ley Integral Contra la Violencia Hacia las mujeres con el fin de adecuar y armonizar la actuación fiscal a los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por la República de Nicaragua:

Principio de especialización⁶: La Ley Orgánica del Ministerio Público tiene un carácter especializado en el ejercicio de la acción penal, atendiendo la naturaleza del delito se organiza la función acusadora a través de unidades especializadas.

Principio de Legalidad y Objetividad⁷: Su actuación se rige conforme a las disposiciones constitucionales y a las leyes vigentes, tendientes a garantizar un debido proceso, con respeto a los derechos fundamentales y dignidad de las personas que intervienen en el proceso penal.

Principio de obligatoriedad y oportunidad en el ejercicio de la acción penal pública y a instancia particular⁸: El Ministerio Público promoverá la investigación y persecución de los delitos violencia de género. El principio de obligatoriedad del ejercicio de la acción penal obliga al Ministerio Público a abstenerse de ejercer la acción penal sólo cuando de la investigación se determine que el hecho no existió, o que la ley no lo considera delito o que un inculpado contra el que se dirigió la investigación no lo cometió, o que la acción penal no puede proseguirse por una causal objetiva como la prescripción de la acción penal o muerte del inculpado. También cuando la prueba es insuficiente para mantener un pedido condenatorio. Igualmente impone la aplicación del criterio de oportunidad sólo en los casos y con las formalidades que establecen las leyes.

Principio de protección a la familia⁹: La protección, desarrollo y fortalecimiento de la familia es obligación del Estado, la sociedad y los miembros que la integran, a través de los vínculos de amor, solidaridad, ayuda y respeto mutuo que debe existir entre sus integrantes para lograr una mejor calidad de vida.

6. Art. 2. LOMP.

7. Art.5. LOMP.

8. Art. 10 inciso 4 LOMP.

9. Art. 4 inciso a) Decreto 42-2014.

Principio de acceso a la justicia¹⁰: Las Instituciones del Estado y operadores del sistema de justicia deben garantizar a las mujeres, sin ninguna distinción, el acceso efectivo a los servicios y recursos que otorgan, eliminando todo tipo de barreras y obstáculos de cualquier índole que impidan este acceso.

Principio de igualdad real: Toda actuación del sistema de justicia procurará alcanzar la igualdad de las personas sin distinción alguna por razones de género, edad, etnia y discapacidad. Asegurando el respeto y tutela de los derechos humanos, tomando en cuenta las diferencias culturales, económicas, físicas y sociales que prevalecen entre sí, para resolver con criterio de igualdad tomando en cuenta las diferencias.

Principio de la debida diligencia del Estado: El Estado tiene la obligación de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con el fin de garantizar la vida, seguridad y protección de las víctimas de violencia.

Principio del interés superior del niño: Se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente todo aquello que favorezca su pleno desarrollo físico, psicológico, moral, cultural y social, en consonancia con la evolución de sus facultades que le beneficie en su máximo grado y en especial el reconocimiento, vigencia, satisfacción y disfrute de sus derechos, libertades y garantías de forma integral.

Principio de no discriminación: Es la eliminación de toda distinción, exclusión o restricciones basadas en el nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, edad, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica, condición social, discapacidad, que tenga por objeto o resultado, el menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. También es discriminación las acciones u omisiones que no tengan intención de discriminar pero sí un resultado discriminante.

Principio de no victimización secundaria: El Estado deberá garantizar que las autoridades que integran el sistema de justicia y otras instituciones que atienden, previenen, investigan y sancionan la violencia, deberán desplegar medidas especiales de prevención, para evitar situaciones de incompreensión, reiteraciones innecesarias y molestias que pueden ser evitadas a las víctimas

Principio de no violencia: La violencia contra las mujeres constituye una violación de las libertades fundamentales limitando total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos.

10. Art. 4. Ley 779.

Principio de plena igualdad de género: Las relaciones de género deben estar basadas en la plena igualdad del hombre y la mujer, no debiendo estar fundadas en una relación de poder o dominación, en la que el hombre subordina, somete o pretende controlar a la mujer.

Principio de protección a las víctimas: Las víctimas de los hechos punibles aquí descritos tienen el derecho a acceder a los órganos de justicia de forma gratuita y deberán ser atendidas de forma expedita, sin dilaciones indebidas o formalismos inútiles y obtener una resolución en los plazos establecidos por la Ley, sin menoscabo de los derechos de las personas imputadas o acusadas.

Principio de publicidad: El juicio será público, salvo que a solicitud de la víctima de violencia, el tribunal decida que éste se celebre total o parcialmente a puerta cerrada, debiendo informársele previa y oportunamente a la víctima, que puede hacer uso de este derecho.

Principio de resarcimiento: La administración de justicia garantizará los mecanismos necesarios para asegurar que la víctima de violencia tenga acceso efectivo al resarcimiento y reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces como parte del proceso de restauración de su bienestar.

Marco normativo internacional y nacional

El marco jurídico internacional en materia de violencia de género es amplio y recomiendan a los Estados Partes a que adopten medidas adecuadas que prohíban la discriminación y la subordinación de la mujer, así como también afirma que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos, a la dignidad humana, se exhorta a promover y garantizar la máxima participación de la mujer en todas las esferas, en igualdad de condiciones con el hombre, ya que es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y de la paz. Siendo necesario modificar el papel tradicional del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia, para lograr la plena igualdad entre los mismos.

Para el ejercicio de la acción penal es necesario describir los diferentes instrumentos internacionales para que sean invocados e interpretados de forma armónica en la defensa de los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes en todas las etapas del proceso. Destacando los siguientes:

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.	Instrumentos Internacionales
	<p>Aprobada y ratificada en 1948 mediante la cual se declara que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros.</p> <p>El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y Deberes se integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre. Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad.</p>
Declaración Universal de Derechos Humanos.	<p>Adoptada y proclamada el 10 de diciembre de 1948; considerando que Nicaragua como miembro de las Naciones Unidas ha reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se ha declarado resuelto a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Esta declaración contiene numerosos derechos humanos a garantizar y proteger en el desarrollo social de nuestro país</p>

La Convención Americana sobre Derechos Humanos.	Adoptada el 1969, entró en vigor en julio de 1979 y en virtud de ella se creó en la República de Costa Rica, un Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, donde se dispone que los estados partes reconocen la jurisdicción vinculante de dicho tribunal.
Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer.	Suscrita y Ratificada por Nicaragua el 18 de Diciembre de 1979 y entró en vigencia el 03 de Septiembre 1981. Esta convención adoptada por Nicaragua, en el mes de diciembre del año 1,981 ante Naciones Unidas, recomienda la adopción de medidas pertinentes de cara a la erradicación e eliminación de violencia contra la mujer. Estableciéndose medidas concretas para proteger a las mujeres contra la violencia, para llevar a la práctica la igualdad entre hombres y mujeres.
Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder.	La referida declaración fue suscrita por Nicaragua el 29 de noviembre de 1985; establece mecanismos de justicia para las víctimas de delitos de cualquier tipo de violencia o discriminación en todas sus formas y sobre formas de eliminación mediante políticas institucionales de cualquier forma de manifestación de abuso de poder, tanto de las instituciones públicas como privadas.
Del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.	El pacto de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por Nicaragua en el año 1990; constituye un tratado jurídicamente vinculante para Nicaragua, que comprende el derecho a la vida, a la intimidad, a un proceso justo, a la libertad de expresión, a la libertad religiosa, a no ser sometido a la tortura y a la igualdad ante la ley.
Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña.	Aprobada el 2 de septiembre de 1990. Establece el reconocimiento a los derechos del niño y niña, donde el interés de los niños sea la consideración primordial, reconociendo la importancia de la vida familiar para los niños. Dentro del marco de protección se encuentra la eliminación de la venta de niños, la prostitución y pornografía infantil, entre otras.
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belén do Pará”.	Consiste en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar contra la mujer, la cual fue ratificada por Nicaragua el 9 de junio de 1994. Esta convención obliga a los estados partes a penalizar de forma progresiva los delitos que atentan contra la integridad física, psíquica y moral de la mujer causado por el grado de parentesco de afinidad y consanguinidad. Según esta convención, se entiende la violencia contra la mujer, cualquier acción o conducta, basada en género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado.
Recomendación General No. 19. CEDAW. 29/01/92.	Las recomendaciones que realiza el Comité de la CEDAW a los Estados Partes obedece a que los informes que los miembros de dicha Convención no siempre reflejaban la vinculación entre la discriminación contra la mujer, la violencia contra la mujer y las violaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Razón por la cual realizan observaciones concretas para la aplicación de los artículos 2, 3, 6, 11, 12 y 14 con el objeto que los Estados adopten medidas apropiadas y eficaces para eliminar la discriminación y la violación de los derechos hacia las mujeres y el cambio de los patrones socioculturales.

Recomendación General No. 25. CEDAW.	El objetivo de la recomendación No. 25 realiza un análisis sobre las medidas especiales que los Estados partes deben adopten para mejorar de la situación de la mujer para lograr una igualdad sustantiva o de facto con el hombre, realizando una clara alusión sobre medidas de carácter temporal que los Estados Partes establezcan como estrategia necesaria para lograr la igualdad sustantiva de la mujer y el hombre en el goce de los derechos humanos y libertades fundamentales.
Recomendación General No. 28. CEDAW. 16/10/2010	Esta recomendación está dirigida fundamental a las obligaciones generales y específicas establecidas en el art. 2 de la Convención las cuales establecen que deben entender los Estados partes por medios apropiados y medidas apropiadas para concretar la aplicación de las mismas que aseguren la protección de los derechos de la mujer, la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las obligaciones y las medidas adoptadas que hayan adoptado independientemente de la reserva realizada por el Estado al art. 2 de la referida convención.
Guías de Santiago. Asociación Sobre Protección de Víctimas y Testigos. Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), Lima Diciembre de 2005.	La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), aprobó en la Asamblea General Ordinaria las Guías de Santiago, que tienen por finalidad orientar las decisiones de los Ministerios Públicos iberoamericanos en relación con su organización interna y su actividad para alcanzar una meta que se resume en el fortalecimiento de los derechos de víctimas y testigos. La guía presenta recomendaciones esencialmente a los Fiscales Generales, para que promuevan dentro de las instituciones que dirigen las condiciones para que la protección merecida por las víctimas y los testigos pueda ser prestada en la forma indicada.
Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad. Cumbre Judicial Iberoamericana. 2008.	Nacen de la Cumbre Judicial Iberoamericana en el 2008 y tienen como preocupación central el acceso a la justicia de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad por pobreza y pobreza como causa y escenario de vulnerabilidad. Y como se visibiliza la feminización de la pobreza, los efectos del patriarcado, la discriminación laboral y social.

Marco Nacional

En Nicaragua, al suscribir y ratificar los Tratados y Convenciones internacionales anteriormente relacionados a venido adoptando su legislación nacional al aprobar normas en la defensa y protección de los derechos de las mujeres conforme a lo establecido, se plasma en la Constitución Política de Nicaragua que fue reformada parcialmente en Enero del 2014, en la cual el Estado asume la tarea de promover el desarrollo humano¹¹ de los nicaragüenses y proteger a las víctimas del delito, procurando la reparación del daño y garantizando su bienestar físico y psicológico, como su dignidad¹².

11. Constitución Política de Nicaragua. Art. 2, la Gaceta Diario Oficial, Enero 2014.

12. Constitución Política de Nicaragua. Art. 8, la Gaceta Diario Oficial Enero 2014.

La protección constitucional de las mujeres es desarrollada con las leyes que han venido siendo aprobadas desde el 2012 como la Ley Integral Contra la Violencia hacia las mujeres y de reforma a la Ley No. 641 "Código Penal" la cual tiene como propósito prevenir, sancionar y erradicar la violencia, impulsando cambios en los patrones socioculturales y patriarcales que sostienen las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres.

La protección de los derechos de la víctima de violencia de género dentro del ordenamiento jurídico nicaragüense, exhorta a las y los funcionarios públicos a velar por el cumplimiento de las leyes especiales sobre las leyes generales, a fin de garantizar procesos legales y justos tanto en la vía penal como civil, se debe aplicar los principios rectores del proceso a fin de lograr la igualdad real de las personas y la coparticipación en las responsabilidades familiares¹³ en las relaciones entre el hombre y la mujer en los ámbitos públicos como privados.

Existen diversos instrumentos normativos a nivel nacional que se han aprobado e implementado para combatir la violencia entre los cuales se destaca:

Constitución Política de la República de Nicaragua.	Ordenamiento Jurídico Nicaragüense.
	<p>La Constitución Política de Nicaragua, establece la organización de los Poderes Públicos del Estado (Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral), los cuales son independientes entre sí y se deben coordinar armónicamente, subordinados únicamente a los intereses supremos de la nación y a lo establecido en la Constitución.</p> <p>Por lo tanto, los operadores de Justicia, deben interpretar y subordinar su actuación en base al respeto de los derechos y garantías de las víctimas del delito que se encuentran consagrados en la Constitución Política en el Art. 5 "el respeto a la dignidad de la persona"; Art. 27 "Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. Art. 36 Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Art. 70 "La persona, la familia y la comunidad son elementos protagónicos del plan de desarrollo humano de la nación" Art. 71. La niñez goza de protección especial y de todos los derechos que su condición requiere, por lo cual tiene plena vigencia la Convención Internacional del Niño y la Niña. Art. 72 El matrimonio y la unión de hecho estable están protegidos por el Estado; descansan en el acuerdo voluntario del hombre y la mujer y podrán disolver por mutuo consentimiento o por la voluntad de una de las partes. La ley de la materia lo regulará.</p>

13. Código de la Familia. Art. 2 inciso g), la Gaceta Diario Oficial. Agosto 2014.

<p>Ley 641 “Código Penal de la República de Nicaragua”</p>	<p>El Código Penal de Nicaragua aprobado en el 2008. El cual regula y sanciona toda acción y omisión que constituya delito o falta. Por consiguiente, este cuerpo normativo de forma general y particular contiene las conductas delictivas que atentan contra la vida, la integridad física, psicológica, sexual y patrimonial de las mujeres, niños, niñas, adolescentes, o discapacitados o personas de la tercera edad para mendicidad e incorpora de forma expresa en su arto 5 el reconocimiento y protección a la víctima, obligando al Estado a tratar a las víctimas con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano.</p> <p>Y con respecto a los delitos que afectan a la integridad física y psicológica cometidos en el ámbito doméstico e intrafamiliar establece la solicitud y adopción de medidas de protección de urgencia.</p>
<p>Ley No 406: “Código Procesal Penal de la República de Nicaragua”</p>	<p>Ley 406 “Código Procesal Penal”. La vigencia de la normativa adjetiva que data desde el año 2002 proporciona avances cualitativos de las herramientas procesales encaminadas a la persecución de los delitos contra la violencia de género, tales como medidas cautelares, libertad probatoria, privacidad en casos de esta naturaleza y un sistema de valoración de la prueba conforme a los criterios racionales que implican experiencia humana y lógica jurídica.</p> <p>Podemos observar que Arto 3 y 9 CPP en concordancia con el arto 5 del Nuevo Código Penal garantiza el respeto a la dignidad humana, con la debida protección de derechos y en condiciones de igualdad. Garantizando el derecho de la víctima a una efectiva intervención procesal desde su inicio, hasta la culminación del mismo.</p> <p>La víctima posee sus debidas garantías las cuales están plasmadas en los artículos 109 y 110 CPP que establecen quienes pueden ser víctimas y los derechos que tiene en el debido proceso.</p>
<p>Ley No. 287: “Código de la Niñez y la Adolescencia”</p>	<p>Ley No. 287 publicada el 27 de mayo de 1998, en la Gaceta Diario oficial, su principal objetivo tal y como lo establece la Constitución Política es el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes a gozar de una especial protección de la legislación nacional.</p>
<p>Ley No. 346: “Ley Orgánica del Ministerio Público”</p>	<p>Ley Número 346 que conforma el actuar de los fiscales en el ejercicio de la acción penal en nombre y representación de la víctima y la sociedad, estableciendo las bases normativas sobre la investigación y el ejercicio legítimo de la acusación ante los tribunales de justicia, mediante el establecimiento de unidades especializadas de acuerdo a la materia específica con sus respectivos principios rectores de actuación fiscal y de atención integral a las víctimas de los diferentes delitos.</p>
<p>Decreto No 862: “Ley de Adopción” Ley reguladora de las Relaciones entre Padre, Madre e Hijos. Ley No. 143: “La Ley de Alimentos” Ley No. 623: “Ley de Paternidad Responsable”</p>	<p>La Ley de adopción, ley reguladora de las relaciones entre padres, madres e hijos, ley de alimentos y ley de paternidad responsable, quedan derogadas y las mismas serán aplicadas en la tramitación de los casos que se realicen antes de la entrada en vigencia del nuevo código de familia.</p>

Ley 779, Ley Integral Contra la Violencia hacia las mujeres y de reforma a la Ley No. 641 “Código Penal”	Entró en vigencia el 22 de junio del año 2012 la cual tiene por objeto actuar contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres, con el propósito de proteger los derechos humanos de las mujeres y garantizarle una vida libre de violencia, que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación; establecer medidas de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y prestar asistencia a las mujeres víctimas de violencia, impulsando cambios en los patrones socioculturales y patriarcales que sostienen las relaciones de poder.
Ley 846, reforma la Ley 779.	Entró en vigencia el 01 de octubre del 2013 y modifica el art. 46 de la Ley 779, basando su reforma en la aplicación de la Mediación en los delitos menos graves, así como la competencia objetiva de los jueces para la tramitación judicial de los mismos.
Reglamento Decreto 42-2014.	Con el propósito de desarrollar normas reglamentarias que faciliten la aplicación efectiva de la Ley 779 y su reforma, de cara a fortalecer una práctica unificada en los distintos ámbitos de competencia de las instituciones que intervienen en su aplicación, el reglamento entró en vigencia el día 31 de Julio del año 2014. Entre los aspectos más relevantes del mismo esta: Desarrollar las Políticas Públicas del Estado como las Consejerías Familiar Institucional; la mediación ante el Ministerio Público y ante el Poder Judicial; la aplicación de los delitos, de las medidas precautelares y funciones de los órganos especializados.
Ley 870 “Código de la Familia”, agosto de 2014.	El Código de la familia establece el régimen jurídico de la familia y sus integrantes. Así como las relaciones jurídicas intrafamiliares, las de ésta con tercero y las entidades del sector público y privado. En este cuerpo de leyes se establece al Ministerio Público determinar la responsabilidad penal en caso de Incumplimiento de los deberes alimentarios.
Decreto 43-2014 “Políticas de Protección a la Familia”.	La Política de Estado está dirigida al fortalecimiento de la familia nicaragüense y prevención de la violencia, como la promoción, protección y restitución de los derechos humanos de las familias, las mujeres, niñas, niños y adolescentes a fin de garantizarles una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación.

La actuación fiscal debe velar por el cumplimiento armónico de lo establecido en las leyes, en el reglamento, así como también las normativas que la Fiscal General de la República ha dictado sobre la materia como:

1. Directriz No. 01-2014 “Procedimiento para la Derivación a Consejería Familiar Institucional a Víctimas de violencia de género de delitos menos graves.
2. Protocolo de Actuación del Ministerio Público para la Atención a Víctimas de Violencia de Género, que nos mandata conforme al Modelo de Atención Integral a coordinar acciones de prevención, atención, protección investigación y sanción con las instituciones del sector justicia, salud, educación, etc por ser la violencia un problema de salud pública¹⁴ y de seguridad ciudadana¹⁵.

14. Decreto 67/96 del Ministerio de Salud (MINSa). Reconoce la violencia intrafamiliar como un problema de salud pública.

15. Art. 8. Ley 779.

Antecedentes históricos de la Violencia

La lucha por el reconocimiento de las mujeres como sujetos humanos y sujetos de derechos, es y ha sido siempre la lucha por la igualdad entre los dos sexos y para lograr ello, los y las fiscales al dirigir jurídicamente la investigación para ejercer la acción penal con perspectiva de género en los delitos que se cometen en contra de las mujeres, deben comprender adecuadamente como se construyó la diferencia sexual entre varones y mujeres se instauró el sistema patriarcal a lo largo de la historia.

La dominación del hombre sobre la mujer se basó en las diferencias biológicas entre los sexos, teniendo su origen histórico en la familia, cuya jefatura la ejerció el padre y en ese orden se proyectó a todo el orden social. Por consiguiente, desde el punto de vista político, se justificó que las mujeres no necesitaban representación social ni política fuera del ámbito privado puesto que el jefe de la familia patriarcal encarnaba los intereses de sus integrantes. Así se concibieron los derechos ciudadanos¹⁶ y consagraron haciendo una clara distinción entre los hombres, sujetos de ciudadanía por pertenecer al ámbito público y las mujeres sin esta calidad, catapultándola solo al espacio privado (familia) y es así que el sistema patriarcal se ha mantenido y reproducido, adquiriendo un carácter universal y ancestral que tiende a solaparse con una especie de orden natural y eterno de la sociedad. Según este supuesto *orden natural* el sexo es un factor determinante en la construcción jerárquica de la sociedad, y esta jerarquía se resuelve en la superioridad masculina.

La construcción social de lo femenino y lo masculino de manera jerarquizada, es una forma de conocer nuestro entorno que responde a distinciones sociales que representan las relaciones entre los géneros como relaciones de subordinación y que son redefinidas constantemente a la luz de otras realidades como la clase, etnia, edad, nacionalidad, etc, de allí que las formas en cómo se nos revelan los géneros en cada sociedad varía según de una cultura a otra o de una época histórica a otra, convirtiéndose en un problema de discriminación hacia las mujeres.

El sistema patriarcal puede entenderse bien como un sistema de adjudicación de espacios –público y privado– según el cual los hombres connotan como valioso aquellos espacios, actividades y cualidades que se reservan y designan como masculinas, y, en contrapartida, devalúan todo aquello que denominan como femenino, se afianza los privilegios y la posición de poder que ejerce los hombres.

Se entiende por género o sexo-género la construcción social de la diferencia sexual entre varones y mujeres. Efectivamente, nacer niño o niña en nuestra sociedad pone en marcha un complejo mecanismo de procesos sociales por los que comienza la

16. “La declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano” Revolución Francesa. 1789.

construcción social del sexo, es decir, del género, femenino o masculino¹⁷.

La lucha organizada de las mujeres por la demanda de igualdad sexual durante más de dos siglos de historia, ha propiciado el desarrollo de sociedades cada vez más igualitarias. Desde los años 60 en adelante, las mujeres han ganado un conjunto de derechos que ha significado ampliación de libertades y mayores igualdades respecto a los hombres. El reconocimiento de los derechos de las mujeres se materializa cuando la comunidad internacional¹⁸ establece: que la “violencia contra la mujer” es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, que incluye las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada.

Abarca los siguientes actos:

1. La violencia física, sexual o psicológica que tenga lugar en la familia, incluyendo los malos tratos, el abuso sexual de niñas en el ámbito familiar, la violencia relacionada con la dote, la violación marital, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales dañinas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia referida a la explotación.
2. La violencia física, sexual o psicológica que suceda dentro de la comunidad, que incluye la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educacionales o en otros lugares de la comunidad, el tráfico sexual de las mujeres y la prostitución forzada.
3. La violencia física, sexual o psicológica perpetrada o tolerada por el Estado donde quiera que ésta ocurra.

Nicaragua define el concepto de violencia de género en la “Ley 763 “Ley de los derechos de las personas con discapacidad”¹⁹ estableciendo: “Es violencia ejercida contra las mujeres por su condición de ser mujeres que va desde la discriminación, menosprecio y la exclusión hasta la agresión física, psicológica y los delitos contra la vida produciéndose en diferentes ámbitos de la vida familiar, laboral, educativo, comunitario, entre otros”.

El estado de Nicaragua ha venido trabajando en la igualdad real de los derechos de las mujeres, al establecer en la Constitución política que: “La persona, la familia y la comunidad son elementos protagónicos del plan de desarrollo humano de la nación”

A los efectos del Protocolo de Actuación en materia violencia de género del Ministerio Público de Nicaragua retomamos el concepto de género establecido en el Protocolo

17. Que es la perspectiva de Género. Ana de Miguel Alvarez, Universidad Rey Juan Carlos.

18. Art. 1 y 2 CEDAW. Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 1969.

19. Art. 3. Definiciones. Gaceta Diario Oficial. Julio 2011.

Regional para la investigación con perspectiva de género de los delitos de violencia contra las Mujeres cometidos en el ámbito familiar, aprobado por la Asociación Iberoamericana de los Ministerios Públicos (AIMP), entendiéndose como violencia de género: *todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico, sexual o patrimonial para la mujer, así como la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, siempre que se cometa en el marco de una relación de afectividad, con o sin convivencia, sea actual o pasada. Incluye también en su ámbito de aplicación los actos de violencia contra las mujeres cometidos por familiares y miembros del mismo hogar por razón de discriminación de género o en el marco de relaciones de poder asimétricas*²⁰.

Por consiguiente la violencia de género es una violación de los derechos humanos de la mujer y como una forma de discriminación que impide que la mujer participe plenamente en la sociedad y realice su potencial como ser humano.

El reconocimiento formal de derechos de las mujeres no ha modificado mecánicamente la condición de las mujeres. La comisión de un delito de violencia requiere de una investigación especializada, cuyo esclarecimiento debe orientarse tomando en cuenta el contexto o condición de las mujeres, conforme a las características y comportamientos, roles, actitudes, valoraciones impuestas dicotómicamente a cada sexo mediante procesos de socialización mantenidos y reforzados por la ideología e instituciones patriarcales y que hacen aparecer los sexos como diametralmente opuestos por diferencias biológicas entre los dos sexos²¹.

El ejercicio de la acción penal en una política de acción positiva y una clara manifestación del principio de la debida diligencia del Estado al lograr que el conflicto penal sea resuelto a través de un proceso legal y justo que sancione la violencia e impulsa cambios en la dinámica de poder en los patrones socioculturales y patriarcales.

Marco conceptual sobre violencia de género

Sexo:

Se refiere a las características físicas y biológicas de los seres humanos que los define como varón y Mujer.

20. Página 4, inciso 2 del Protocolo Regional para la investigación con perspectiva de género de los delitos de violencia contra las Mujeres cometidos en el ámbito familiar" Secretaría General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) EUROSOCIAL II, Ecuador, Julio 2014.

21. Alda Facio y Lorena Fries, Género y Derecho. Pag. 34. LOM Ediciones/La Morada, 1era Edición, septiembre de 1999.

Genero:

Es el conjunto de características sociales y culturales, roles, actitudes, valores que definen como se debe comportar una mujer y un hombre, según el proceso de socialización, por tanto es una construcción social y no una condición natural.

Equidad:

Trato justo dirigido a lograr la igualdad efectiva mediante acciones positivas que permitan el reconocimiento de las condiciones específicas de cada persona o grupo.

Igualdad:

Condición equivalente en el goce efectivo de los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de mujeres y hombres sin discriminación alguna

El medio para lograr la igualdad es la equidad de género, entendida como la justicia en el tratamiento a mujeres y hombres de acuerdo a sus respectivas necesidades.

Teoría de género:

Posibilita una nueva visión, una nueva interpretación de la realidad. Supone la adquisición de una nueva red conceptual, “una gafas” que nos muestran una realidad ciertamente distinta de la que percibe la mayor parte de la gente.

Trata de explicar cómo se construye el ser hombre o ser mujer sobre los cuerpos sexuados femeninos o masculinos de las personas.

Enfoque o Perspectiva de Género: Una mirada que incluye las experiencias y necesidades de mujeres y hombres sin invisibilizar las relaciones de poder entre los hombres. Permite que los varones describan y registren sus realidades desde su ser sexuado, y no como representantes de la toda humanidad, lo cual les da la ventaja de poder expresar problemas que puedan tener como pertenecientes al sexo- género masculino.

Es una acción directa sobre la sociedad basada en el hecho que es posible cambiar o transformar el orden de géneros, si existe una voluntad política.

Desde esta perspectiva se reconoce no sólo que existe un orden de géneros, sino que además se le considera opresivo. Y colocarse desde esta perspectiva significa e implica anunciar públicamente que se está en una posición contraria a la opresión de género, a medida que tomamos conciencia de esta opresión no sólo vamos a estar en contra sino a favor de intervenir con una voluntad activa en la construcción de alternativas no opresivas de género. Por ende se adoptan políticas de acción positiva que tienen como

fin combatir las discriminaciones indirectas que atentan contra la igualdad de oportunidades de los colectivos históricamente subordinados e inferiorizados.

Concepto de violencia²²: “Es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.”

CONCEPTO DE LAS DIFERENTES FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONFORME A LA LEY 779. “Ley Integral Contra la Violencia hacia las mujeres y de reformas a la Ley 641 “Código Penal”.

- a) **Misoginia:** Son conductas de odio hacia la mujer y se manifiestan en actos violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer.
- b) **Violencia física:** Es toda acción u omisión que pone el peligro o daña la integridad corporal de la mujer, que produzca como resultado una lesión física.
- c) **Violencia en el ejercicio de la función pública contra la mujer:** Aquella realizada por autoridades o funcionarios públicos, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar, denegar o impedir que las mujeres tengan acceso a la justicia y a las políticas públicas.
- d) **Violencia laboral contra las mujeres:** Aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, salario digno y equitativo, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, esterilización quirúrgica, edad, apariencia física, realización de prueba de embarazo o de Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH/sida u otra prueba sobre la condición de salud de la mujer. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral.
- e) **Violencia patrimonial y económica:** Acción u omisión que implique un daño, pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción en los objetos, documentos personales, valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, bienes de una mujer y los recursos propios o compartidos en el ámbito familiar o de pareja.
También constituye violencia patrimonial y económica el control de los bienes y recursos financieros, manteniendo así el dominio sobre la mujer, la negación de proveer los recursos necesarios en el hogar, desconocimiento del valor económico del trabajo doméstico de la mujer dentro del hogar y la exigencia para que abandone o no inicie un trabajo remunerado.

22. Organización Mundial de la Salud.

- f) Violencia psicológica:** Acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, decisiones y creencias de la mujer por medio de la intimidación, manipulación, coacción, comparaciones destructivas, vigilancia eventual o permanente, insultos, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud mental, la autodeterminación o su desarrollo personal.
- g) Violencia sexual:** Toda acción que obliga a la mujer a mantener contacto sexual, físico o verbal, o participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad o su libertad sexual, independientemente que la persona agresora pueda tener con la mujer una relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco.

Las diferentes formas de violencia descritas en los acápite anteriores deben ser analizadas tomando en cuenta el tipo de delito, la relación de la víctima con el agresor si la relación se circunscribe en el ámbito público o en el ámbito privado, así como también se examinará la disponibilidad que tiene la víctima para acceder a medios de ayuda y asistencia y el perfil psicológico, anímico, económico y social de la misma.

Conforme al art. 2 de la Ley 779 la relación entre la víctima con el agresor se define conforme al ámbito de aplicación de la ley se hará a quien ejerza violencia contra las mujeres de manera puntual o de forma reiterada.

Entendiéndose por Violencia en el ámbito público: Es la que por acción u omisión dolosa o imprudente, tiene lugar en la comunidad, en ámbito laboral e institucional o cualquier otro lugar, que sea perpetrada en contra de los derechos de la mujer por cualquier persona o por el Estado, autoridades o funcionarios públicos.

Violencia en el ámbito privado: La que se produce dentro del ámbito familiar o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. Sin embargo a efecto de lo establecido en el art. 3 del Decreto 42-2014 "Reglamento de la Ley 779" el ámbito de aplicación para el delito de Femicidio se circunscribe a las relaciones de pareja, entendiéndose las relaciones afectivas entre esposo, ex esposo, conviviente, ex conviviente, novio o ex novio.

Es importante tener presente que la violencia que sufre la mujer en el ámbito privado concretamente en el ámbito de la pareja, es una violencia que tiene un carácter **instrumental**, por cuanto persigue asegurar el dominio de uno sobre otra, con la finalidad de mantener la desigualdad y privilegios.

Es una **violencia discontinua**, ya que no es predecible por la víctima y se va construyendo en un proceso global y continuo que se inicia con la desigualdad, el dominio y se completa con la violencia como forma de mantener esa desigualdad. **Es una violencia**

invisible, de ella generalmente solo vemos la cúspide, la agresión, no se ve el resto del proceso. Es una **violencia que genera daños en diversas dimensiones** de la persona (física, psíquica, sexual, social o patrimonial), que provoca la anulación de la personalidad de la víctima y una fuerte dependencia emocional.

Por supuesto, esta violencia genera daños en la familia y en la sociedad. El agresor tiene pleno control de sí mismo y está trabajando para controlar y debilitar aún más a la víctima. Por consiguiente debemos entender cómo piensa el agresor y como el ciclo se repite cada vez y el nivel de violencia aumenta. Por consiguiente hay que identificar en qué etapa o fase del ciclo de la violencia se encuentra inmersos que sólo se rompe cuando la víctima tiene la certeza de contar con apoyos en el exterior. En este marco es preciso ganar su confianza en el sistema judicial, disponer de recursos asistenciales que contribuyan a romper la dependencia emocional respecto del posible agresor, así como resolver cuestiones relativas, entre otras, al sostenimiento e integridad de los/as hijos/as en común, al uso de la vivienda y a las obligaciones y derechos patrimoniales. Sólo a través del acompañamiento y empoderamiento de las víctimas es posible asegurar su participación y colaboración con la investigación criminal.

El ciclo de la violencia

La gravedad del problema de la violencia en el hogar, reside en que esta forma de violencia no se presenta de manera ocasional y esporádica, por el contrario, es una violencia reiterativa, cuya gravedad y frecuencia van en crecimiento, es un problema progresivo, un círculo vicioso que se auto alimenta y conserva y se ejerce contra los más débiles de la familia, la mujer, los niños, niñas, ancianos, personas con discapacidad, sino que la gravedad

La psicóloga norteamericana, LEONORE WALKER construyó una teoría que nos ayuda a comprender la dinámica en la que entra la persona agresora y su ciclo definido de agresión. Identificando un ciclo definido en el agresor de acumulación de tensión, seguido de un episodio de explosión, que termina en la mayoría de los casos con un episodio de tregua amorosa, es en ese momento que la víctima se presenta nuevamente ante los despachos judiciales a solicitar que se deje sin efecto la denuncia o a desistir o abandonar el caso. Debemos tener claro que esta fase es conocida como la luna de miel.

Continúa expresando la psicóloga LEONORE WALKER, que aunque parezca extraño, los ciclos de agresión pueden aparecer desde que las relaciones se inician (noviazgo o nacimiento de los hijos o después de muchos años).

Es importante para los fiscales que enfrentan la persecución de estos delitos, que la comprensión del ciclo de la violencia posibilita reconocer en qué etapa del ciclo se

encuentra el victimario y que nivel de riesgo puede estar viviendo la víctima; razón por la cual, el o la fiscal deben saber identificar tanto en la etapa investigativa como judicial, en qué fase se encuentra la víctima, a fin de poder tomar la posición jurídica pertinente, que garantice protección legal.

Es menester señalar que estas etapas varían en tiempo e intensidad, en consecuencia cada fase puede diferir según las personas, los años de violencia, su gravedad y el grado de deterioro psíquico (síndrome de indefensión aprendida) que sufre la víctima.

1. Primera etapa. Fase 1, aumento de

El agresor expresa insatisfacción y hostilidad; aún no en extremo, con tendencia a destruir los bienes materiales, discutir, gritar. La mujer procura detener la hostilidad para no agravar la situación. Muchas víctimas en esta fase enfrentan las agresiones tratando de calmar a la persona agresora: siendo condescendientes, anticipando los deseos de la persona agresora, alejándose, tratando de comprender la vida difícil del agresor.

En esta etapa la víctima no está en capacidad de valorar lo que está pasando porque su energía la está dirigiendo a evitar que el daño sea mayor, es decir evitar la explosión violenta. Entonces buscar estrategias para sobrevivir al abuso, al terror y a la falta de control es la prioridad. Por esta razón muchas víctimas utilizan mecanismos como la **NEGACIÓN**, que es la fase donde la víctima niega lo que pasa y niega los sentimientos que le genera tanto abuso; la **RACIONALIZACIÓN**, que es la fase donde la víctima busca explicaciones que justifiquen el abuso en factores externos o en características negativas de la persona afectada; la **MINIMIZACIÓN**, se relaciona con las anteriores, la víctima minimiza lo que pasa, consideran que el mal efectuado fue el menor, que pudo haber desencadenado en un hecho más grave y en ocasiones expresan “No fue mucho lo que me hizo”.

2. Segunda etapa. Fase 2, explosión

Constituye una descarga incontenible de tensiones acumuladas en la fase anterior. El agresor ataca tanto física como verbalmente. La pérdida de control del agresor y su enorme grado de destructividad es lo que distingue esta fase. La persona ofensora está convencida que debe darle una lección a la víctima. Al terminar justifican que su intención no era hacer daño, pero ya la víctima está seriamente lesionada tanto física como emocionalmente. Esta etapa genera en la víctima gran estado de ansiedad, depresión y síntomas psicossomáticos como insomnio, pérdida del apetito, comer compulsivo y gran fatiga.

En este momento se genera un distanciamiento entre la persona afectada y el agresor que puede convertirse en la oportunidad de tomar la decisión de interponer la denuncia, irse de la casa y en casos muy graves, aislarse o hasta suicidarse.

3. Tercera etapa. Fase 3, arrepentimiento, reconciliación, luna de miel

El agresor se disculpa y promete que los actos de violencia no se repetirán. Se convierte en un período de calma que se caracteriza por un comportamiento cariñoso y de arrepentimiento por parte del ofensor. Uno de los problemas más serios en esta fase es que se genera una dinámica interminable en la que el victimario solo promete cambiar a diferencia de la persona afectada que si cede a sus necesidades, derechos y recursos.

Es en esta fase donde cualquier iniciativa que se quiso tomar para poner límite a la situación de abuso se abandonará. Esto se debe a que el comportamiento cariñoso del agresor antecedido de tanta violencia hace entrar a las víctimas en profundos estados de confusión. Se siente un gran miedo a represalias futuras si no cede. Se recibe en esta fase el cariño y cuidado que se anhela. La persona agresora busca a otras personas que presionen a la víctima para que lo perdonen, quienes la convencerán de que ella es culpable del rompimiento del hogar, si no acepta la disculpa del ofensor. Se le hace sentir que es responsable de lo que le pase a la persona agresora. Amenaza con matarse si lo deja y como éste necesita ayuda se la tiene que dar. No se sabe con certeza el tiempo que puede durar esta fase, pero sí es más larga que la segunda fase. La mayoría de las víctimas reportan que antes que se den cuenta, el comportamiento cariñoso y la calma, dan lugar otra vez a los incidentes pequeños, se repite la fase uno de aumento de la tensión y un nuevo ciclo de comportamiento agresivo empieza, hasta llegar a la muerte.

Entendida así, en la violencia sobre la mujer en el ámbito de la pareja se aprecia claramente la relación existente entre esta violencia y el femicidio como **“último acto”** de dominación y consecuencia del incremento paulatino de la agresividad del hombre sobre la mujer.

La actuación fiscal en la fase investigativa

En este apartado se pretende dotar a los y las fiscales, asistentes fiscales de un instrumento útil que permita recolectar información elemental y necesaria al momento que las víctimas o personas distintas a las mismas se presenten a nuestras instalaciones a denunciar un hecho presuntamente delictivo vinculado a la violencia de género, que permita orientar acciones concretas para la ejecución de un plan investigativo en procura de esclarecer los hechos y la obtención de elementos de convicción que permitan determinar de manera objetiva la procedencia del ejercicio de la acción penal.

Las denuncias por delitos de violencia de género serán recogidas, de forma prioritaria, por personal de fiscalía con formación específica en la materia.

A.1. La Denuncia

La Denuncia es la noticia criminis que efectúa una persona para poner en conocimiento al Ministerio Público o la Policía Nacional, hechos que presuntamente constituyen delito. Los delitos vinculados con la Violencia de Género son de acción pública.

Cuando la víctima se presente de forma directa al Ministerio Público a interponer la denuncia, el contenido de la denuncia deberá de contener los requisitos de la Entrevista Única del Modelo de Atención Integral.

Interpuesta la Denuncia de un hecho vinculado a violencia física, psicológica, sexual o patrimonial que sufre una mujer, niño, niña o adolescente tanto en el ámbito público como privado, se procederá a realizar acciones que permitan establecer si la conducta denunciada tiene relevancia penal por estar prevista en la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer y sus reformas al Código Penal por ser constitutivas de un delito. Como parte de las acciones a realizar se deberá entrevistar a la víctima del delito o testigos del hecho, la cual será tomada por el o la fiscal o asistente fiscal, cuya misión será obtener información que permita reconstruir la historia del ilícito.

Ahora bien, desde el momento en que se interpone la denuncia, se da inicio a un proceso investigativo, el cual debe realizarse con la debida diligencia. Debe tenerse claro que el denunciante no tiene que aportar ninguna prueba a su denuncia. Sin embargo, resulta pertinente y de gran utilidad si al momento de su recepción se pueda obtener algún indicio o información que facilite corroborar la veracidad de los hechos denunciados, es decir debe haber una probabilidad fundada de la comisión de un delito y por ello, ha de entenderse que la autoridad debe recoger elementos probatorios suficientes para considerar que quien ha de ser investigado puede ser responsable del hecho que se investiga. La exigencia de probabilidad fundada requiere el desarrollo de una actividad de investigación mínima que permita verificar el indicio inicial contra el denunciado, sobre todo cuando el indicio es únicamente la denuncia planteada por el ofendido.

A.2. Formas de Recepción

La denuncia puede interponerla cualquier persona, ya sea de forma verbal o escrita ante la Policía Nacional o ante el Ministerio Público, cuando esta tenga noticia de un delito, ya que lo que se persigue es auxiliar a la víctima²³.

Las víctimas de violencia de género recibirán atención de forma inmediata y prioritaria.

El personal encargado de recibir la denuncia debe presentarse a la víctima para facilitar la confianza y cercanía, empleando la empatía, la escucha activa, una posición cercana y respetuosa.

Deberá estimularse la denuncia como acción que se emprende para romper una relación abusiva. Se debe entender el estado emocional de la víctima y no juzgar su decisión en caso de no querer presentar denuncia o en el caso de retirarla posteriormente. Se evitarán culpabilizadores o minimizadores del acto de violencia.

Si la víctima presenta lesiones físicas que requieren asistencia sanitaria se coordinará con la Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia de Género para el traslado y acompañamiento al centro médico, previo a formalizar la denuncia. El informe médico se incorporará a la denuncia.

Si la víctima refiere haber sido víctima de delito sexual, será trasladada a centro médico para recibir atención de las lesiones físicas, si las tuviere. Se oficiará y coordinará con el instituto de medicina legal o con los servicios médicos a fin de asegurar la aplicación del protocolo de atención a las víctimas de violencia sexual.

23. Art. 88, 113 y 222 CPP.

Los y las fiscales levantarán de oficio una denuncia cuando tenga noticia por cualquier medio de comunicación de la comisión de un delito.

No es necesario que se dirija contra una persona determinada, aunque en el caso de que existiera algún sospechoso, el o la denunciante debe especificarlo.

Los y las fiscales procederán a leerle la denuncia a la víctima, para que la ratifique, apruebe, firme o ponga su huella digital, asegurarse de que entiende lo que está firmando. Eso se hace con el objeto de corregir errores, omisiones de la víctima en su entrevista. Además se le garantizará una copia de la denuncia. En caso que el denunciante no sepa leer, ni escribir se deberá asegurarse de que comprende el contenido del documento donde plasma su huella digital, como firma. También firmará el entrevistador, debiendo identificarse con su respectiva credencial.

A.3. Contenido Mínimo de la Denuncia²⁴

1. Encabezado:
2. Datos de identificación del denunciante:
3. Datos de identificación de la víctima:
4. Datos de identificación del denunciado si se conocen:
5. Composición del Grupo Familiar.
6. Descripción o narración de los hechos.
7. Datos de interés.
8. Denuncias anteriores.
9. Otros Datos de Interés.
10. Ratificación de la Denuncia.

A efecto del inciso 6 “Descripción o narración de los hechos” se procederá a observar lo siguiente para la obtención de la información.

Fecha, Hora y Lugar de ocurrencia

En este acápite debe procurarse obtenerse en primera instancia de ser posible y de acuerdo a la naturaleza del hecho denunciado, la fecha, hora aproximadas de ocurrencia o en su defecto el intervalo de tiempo en que los hechos han venido aconteciendo (es importante, tratar de ubicar a la persona conforme a fechas relevantes o significativas a nivel personal o social, como cumpleaños, eventos, feriados nacionales, locales, vacaciones, etc.

24. Ver anexo. Formato de Denuncia.

En el caso del lugar de ocurrencia, debe describirse la dirección lo más exacta del lugar de los hechos, de ser posible, de lo contrario debe tratarse de obtener puntos de referencia o lugares más aproximados para lograr ubicar la posible escena del delito.

Las Circunstancias de los hechos

Para lograr obtener información sobre los hechos denunciados, es aconsejable que la víctima relate los hechos de forma libre y posteriormente se le harán preguntas, pero es para conocer los hechos y poder ayudarle mejor y se procederá a sistematizar la información en orden cronológico.

Durante la entrevista se indagará sobre las distintas formas de violencia que haya sufrido la víctima en su relación, sea violencia física, psíquica, sexual o patrimonial.

Se debe primero realizar preguntas abiertas y después cerradas. Se pasa de los hechos a cosas más puntuales y así obtener elementos que le permita a los y las fiscales elaborar su teoría del Caso.

Las preguntas abiertas

- a) **Cuándo:** El elemento de Tiempo: Una de las dificultades encontradas en este tipo de hechos es lograr establecer las fechas de ocurrencia, por lo que se hace necesario que el entrevistador tenga la mayor aproximación del evento, procurando un referente amplio y un referente específico. Referente amplio: Es aproximarse al año, mes o periodos prolongados de ocurrencia de los hechos. Referente específico es para determinar la fecha precisa de ocurrencia del hecho, expresado si fue de día o de noche, hora o establecer algún evento que aproxime a la fecha de ocurrencia del hecho. Con respecto a entrevista **con niños** es fundamental que se logre ubicarlos dentro de un período aproximado en el que aconteció el hecho delictivo.
- b) **Dónde:** Elemento de Locación: Lugar de ocurrencia, el lugar específico, invitarlo /a, a que describa todo lo que observó en el lugar donde se encontraba. Para conocer sobre cómo ocurrió la violencia, estableciendo distancia, visibilidad, condiciones, circunstancias del entorno.
- c) **Quién hizo:** Sujeto Activo (Autor)
 - Relación de parentesco del agresor con la víctima:
 - Si es conocido o no.
 - Descripción física del autor.
 - Si el delito fue ejecutado por 2 ó más victimarios se deberá identificar a cada sujeto y su participación en el delito. Para determinar autoría y participación en el hecho denunciado.
- d) **Qué hizo:** Acción realizada a ser objeto de imputación.- (Comisión del hecho delictivo). Describir las circunstancias de:

Modo de ejecución:

- Instrumentos utilizados (arma de fuego, arma blanca, objetos contundentes y sustancias psicotrópicas).
- Situación de vulnerabilidad de la víctima, edad, discapacidad, incapacidad, enfermedad, embarazo, etc, aprovechada por el imputado.
- Describir si hay un contexto de amenazas o intimidación que ponga a la víctima en una situación de desventaja.
- Se debe indagar sobre el hecho que generó la denuncia y los **antecedentes de violencia física, psicológica, patrimonial y sexual. Los antecedentes de violencia en el tiempo, los recordados por la víctima, los de mayor significado en los últimos diez años de su vida, los de trascendencia física y/o psíquica con impacto médico y/o psicológico. (obtener nombres de centros de asistencia médica y psicológica).**

e) **A quién se lo hizo:** Sujeto Pasivo (Víctima).

f) **Resultado de la Acción:**

g) **Móvil** de la acción o el por qué.

Objetos o Instrumentos utilizados en el hecho

Atendiendo las circunstancias de comisión del hecho delictivo y en caso que se hubiese utilizado objetos o instrumentos para agredir o intimidar, se deberá procurar obtener información sobre las características particulares de los objetos, con el objetivo de cumplir con uno de los requisitos contemplados en el artículo 77 inciso 5 CPP, como es el de especificación, así mismo esta información resulta importante para orientar en caso que sea posible, la ocupación de los mismos, como evidencia material y ofrecerlos al momento del ejercicio de la acción penal.

Descripción de los elementos de convicción que se conocen

Debe tenerse en cuenta que en la recepción de la denuncia además de tratar de conocer la relación histórica de los hechos tiene como objetivo **obtener información relacionada a la identificación de Prueba testifical, pericial o documental que nos permita fortalecer el testimonio de la víctima:** Las preguntas deben dirigirse para obtener dicha información de la siguiente forma: ¿Quiénes estaban presentes, nombres y direcciones de las personas que han vivenciado el hecho en tiempo pasado como actual? Ya sea de forma directa, circunstancial o periférica. Todo ello es para identificar prueba personal, prueba documental. En cuanto a la obtención de **expertos técnicos** es necesario ahondar si la víctima de manera particular ha sido atendida de forma privada, como psicólogos, psiquiatras, médicos, hospitales ó en centros asistenciales públicos, etc) para la demostración del hecho denunciado y determinar qué diligencias investigativas se pueden realizar y que medidas precautelares decretar.

Valoración del Riesgo

Se procederá a solicitar a la Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia de Género o sus dependencias en los departamentos y regiones donde hubiere, el informe de valoración del riesgo en que se encuentra la víctima de sufrir nuevas agresiones y/o peligrosidad de su situación. En este particular se debe ser cauteloso y minucioso en procura de obtener la mayor cantidad de datos posibles a fin de proceder a decretar las Medidas de Precautelares conforme al art. 24 de la Ley Integral Contra la Violencia hacia las mujeres y reforma al Código Penal Ley 641. Para la valoración y verificación del riesgo la Unidad de Atención a Víctimas deberá de auxiliarse de los gabinetes de la familia, comunidad y vida, facilitadores judiciales, pastorales religiosas, religiosos, promotoras voluntarias y solidarias y consejeros y consejeras familiares y demás expresiones comunitarias.

Probable Calificación Jurídica de los Hechos

En este punto, se procederá a establecer que los hechos denunciados al estar revestidos de relevancia penal, se adecuarán, a la posible calificación provisional que regula el Código Penal y la Ley 779 Ley Integral contra la Violencia hacia las mujeres y de reformas a la Ley 641 "Código Penal".

Para incorporar estos requisitos en la recepción de la denuncia se recomienda el uso del Formato Anexo.

A.4. Directrices que deben de observarse al momento de la recepción de la Denuncia

1. Es importante que la víctima se siente fortalecida con la entrevista, que sienta confianza con el equipo a cargo de su caso (Ministerio Público) por ello se le debe brindar información sobre los derechos de las víctimas en el proceso tanto investigativo como judicial de conformidad al art. 34 de la Constitución Política, art. 5 del Código Penal y art. 9, 109 y 110 del Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, art. 7 de la Ley 779.
2. Aclarar a la víctima, que en los casos que sea procedente se puede derivar a la Consejería Familiar Institucional²⁵ observando el procedimiento establecido en la Directriz No. FG-001-2014 dictada por la Fiscal General de la Republica el 12 de septiembre de 2014 y/o aplicar un Principio de Oportunidad como la Mediación Previa²⁶ en los delitos expresamente señalados en la Ley 846 y en el reglamento.

25. Art. 8, 9, 10 y 11 Decreto 42-2014 "Reglamento de la Ley 779"

26. Art. 46 Ley 846 que reforma Ley 779.

3. Los y las fiscales deberán tomar decisiones que permitan resguardar su seguridad y la de su familia, decretar las medidas precautelares que amerite el caso basados en el informe que emita la Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia de Género y determinar sobre el ejercicio de la acción penal.
4. Información sobre las redes de apoyo existentes en su Comunidad, que le pueden brindar apoyo psicológico y acompañamiento durante el proceso, como asistencia legal en materia civil.
5. Si de la entrevista o declaración del denunciante o víctima se desprende que el hecho no es constitutivo de delito y el asunto debe ventilarse administrativamente o en la vía civil, se procederá a orientar y derivar al usuario a:

En caso de incumplimiento de Deberes Alimenticios y aún no se ha agotado la vía administrativa y/o judicial, ni existe acuerdo contractual entre las partes. En este tipo de casos se puede remitir a la persona a la Unidad Especializada de Atención a víctimas de violencia de género del Ministerio Público o sus dependencias en caso de no contar con dicha instancia se procederá a derivar a:

- A la Delegación de MIFAMILIA que le corresponde de acuerdo al domicilio del destinatario de la Obligación.
- A las Oficinas de la Defensoría Pública al área de Familia, para la tramitación de la demanda de pensión alimenticia vía civil.
- A los Bufetes Jurídicos de las Universidades que brindan servicios gratuitos.
- A las Redes de Apoyo existentes en la comunidad, que brindan asesoría legal y acompañamiento en los casos que se encuentren vinculados a la violencia ejemplo: Patria Potestad, Divorcio, Pensión de Alimentos, etc.

Dicha remisión deberá utilizar los formatos de referencia y contrarreferencia establecidos en el Protocolo de Actuación del Ministerio Público en Atención a las víctimas de Violencia de Género, de lo cual se llevará un registro.

Recomendación

La experiencia en el tratamiento de los delitos vinculados a la violencia de género, nos ha confirmado:

- Que normalmente las personas afectadas por malos tratos en el hogar o violencia sexual, solicitan ayuda después que han agotado los medios a su alcance para detener la agresión: silencio, aislamiento, paciencia, auto culpabilización, etc.
- La situación de estrés y conmoción que representa el delito conduce a sentimientos de vulnerabilidad: temor, inseguridad, falta de confianza, aspectos que deben ser comprendidos en la asistencia.

Por lo tanto los y las Fiscales al momento de tener contacto con una víctima de violencia en cualquier fase del proceso, ya sea investigativa como judicial, deberán abordarles con perspectiva de género, lo que significa:

- Que debe de partirse de las diferentes formas de violencia reguladas en la Ley Integral Contra la Violencia hacia las mujeres, las que son cometidas dentro de las relaciones de poder.
- Enfocar la atención al objetivo de promover que las víctimas del delito supere su situación de desigualdad mediante el empoderamiento, es decir, mediante el apoyo que fortalezca su autoestima y le permita reconocerse como persona y adquirir capacidad para ejercer libremente sus derechos humanos.

A.5. Intervención del ministerio público en caso de que la víctima se aparte de la investigación o del proceso²⁷

En caso de que la víctima, en cualquier momento de la investigación o del procedimiento, manifieste su intención de no denunciar o no seguir adelante con el proceso, los y las fiscales adoptarán todas las medidas debidas para garantizar la protección de la víctima y la continuación del proceso hasta su resolución definitiva.

En todo caso, los y las fiscales deberán:

Con respecto a la víctima:

- a. Informar a la víctima de los derechos que le asisten y los recursos disponibles en apoyo y acompañamiento a las víctimas de violencia de género.
- b. Tratar de averiguar los motivos de la víctima para no denunciar o no seguir con el procedimiento e informarle, en su caso, de las medidas de protección de orden civil que pudieran adoptarse (Divorcio, Guarda y Tutela, Pension de Alimentos). En ningún caso y de ninguna manera la víctima será presionada para actuar en contra de su voluntad y decisión. Deberá procurársele la información más exhaustiva para que tome la decisión de forma libre y debidamente informada.
- c. La víctima será remitida a la Unidad Especializada de atención a la víctima de violencia de género del Ministerio Público o sus dependencias donde las hubiere o en su defecto algún Centro y organismo de atención a fin de que le brinde acompañamiento para su empoderamiento y evitar situaciones de riesgo.

27. La actuación del Ministerio Público ante la retractación de la víctima es retomada de forma literal del Protocolo Regional para la Investigación con perspectiva de género de los delitos de Violencia contra las Mujeres cometidos en el ámbito intrafamiliar.

Con respecto a la investigación del delito:

- a. A falta de denuncia o intención de la víctima de participar en el proceso, el/la fiscal deberá continuar con la investigación o el procedimiento en los delitos graves cuando se evidencia el eminente peligro para la vida e integridad física de la víctima.
- b. Si la víctima decide intervenir en el proceso, deberá aceptarse su participación, cualquiera que sea el estado de la investigación o del procedimiento.
- c. En los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, una vez interpuesta la denuncia por la víctima y siempre que se disponga de medios de prueba suficientes, deberá continuarse y sobre todo se identifica conflictos de intereses entre el representante legal y el menor víctima.

En caso de retractación de la víctima:

- a. En caso de retractación de la denuncia interpuesta, los y las fiscales deberán actuar con diligencia a fin de conocer las circunstancias en que se produce tal retractación, valorando así posibles presiones de terceras personas o del presunto agresor, o situaciones de dependencia emocional, económica o de cualquier tipo que condicionen la libre determinación de la víctima.
- b. En todo caso la víctima deberá ser informada de las consecuencias de poder incurrir en un delito de denuncia falsa o de falso testimonio.
- c. La víctima será remitida a la oficina de atención a la víctima o a los servicios de atención coordinada para que por los/as profesionales se realice la valoración del riesgo de sufrir nueva agresión y se elabore informe de la situación familiar, económica, social y cultural de la víctima que permita indagar las causas de la retractación.
- d. En caso de que existan sospechas de presiones externas, de dependencia de cualquier tipo respecto del posible agresor o de temor de la víctima a sufrir cualquier perjuicio derivado del proceso penal, deberán los y las fiscales valorar el la voluntad de la víctima se encuentra viciada y no se logra conformar el elemento subjetivo del dolo, cuya consecuencia jurídica es la no formulando acusación contra la víctima por denuncia falsa o falso testimonio.
- e. En caso de que la o el fiscal entienda que existe riesgo de que la víctima sufra a lo largo de la investigación presiones mediante violencia, amenaza, oferta o promesa de dinero u otros beneficios con el fin de que desista del proceso o se retracte de su declaración, se solicitará, cuando proceda, la práctica anticipada de la prueba como medio de asegurar la participación de la víctima a lo largo del proceso, de acuerdo con el arto. 44 de la Ley 779 en concordancia al arto. 202 CPP. La misma práctica se seguirá en caso de que él o la fiscal valore la existencia de razones objetivas que dificulten la participación de la víctima en la investigación o en el proceso por razón de la lejanía de su domicilio, por dificultades de desplazamiento en caso de las mujeres adultas mayores o con alguna discapacidad, la ausencia de medios

de transporte o la carencia de recursos económicos suficientes para garantizar su estadía y alimentación.

- f. Asimismo, el o la fiscal tomará declaración de las personas que puedan aportar algún dato sobre la investigación. En caso de que se aprecie el riesgo de que el o la testigo no pueda rendir su testimonio en el juicio por un obstáculo difícil de superar, el o la fiscal podrá solicitar la práctica anticipada de la prueba, de acuerdo a las prescripciones legales antes mencionadas

A.6. Sobre la Tramitación de la Denuncia

Al momento de atender un hecho de violencia conocido por cualquier medio de una víctima en crisis que demanda atención urgente, los y las fiscales al valorar la información y detectar una situación de riesgo inminente, directos y actuales para la vida e integridad física de la víctima o su cuadro familiar, deberá establecer y disponer acciones inmediatas que eviten e interrumpan la concreción del daño. Para ello, procederá a dictar las medidas precautelares y para el cumplimiento de las mismas según las medidas ordenadas se auxiliará de la Policía Nacional para la aplicación de dichas medidas. Todo ello sin perjuicio que se documente con la víctima los restantes factores de riesgo para formalizar las medidas precautelares.

El Fiscal desde el mismo momento que se hubiese formalizado la denuncia de un hecho que pudiera ser constitutivo de los delitos establecidos en la Ley 779 y sus reformas a la Ley 641.

- 1) En el caso que la denuncia fuera interpuesta por persona distinta a la víctima, los y las fiscales procederán a coordinar la investigación con la Policía Nacional para esclarecer el hecho denunciado, garantizar las medidas de aseguramiento y protección a la víctima, ejecutar la detención y cumplir el proceso de atención conforme al Modelo de Atención Integral.
- 2) Cuando la denuncia es interpuesta de forma directa por la víctima, los y las Fiscales deberán re direccionar la atención del caso conforme al Modelo de Atención Integral para ello elaborarán con la Policía Nacional o la Comisaría de la Mujer y Niñez el plan de investigación, para que se practiquen las diligencias respectivas con las instrucciones jurídicas, detallando de manera clara y precisa las acciones de averiguación que deben de practicarse, debiendo resaltarse de manera breve que se pretende obtener o conocer con dicho acto investigativo y así los y las Fiscales contará con los elementos pertinentes para determinar la existencia del hecho. Así mismo se debe establecer el tiempo prudencial para la remisión de los resultados de los actos de investigación orientados, para la determinación del ejercicio de la acción penal.
- 3) Adjuntar al oficio que contiene las orientaciones jurídicas, copia de la denuncia, Requerimientos Forenses y en los casos, en que hubiese decretado Medidas de

Precautelares. Así mismo se deberá adjuntar copia de cualquier otra diligencia efectuada por el Ministerio Público, a fin de evitar duplicidad en los actos de investigación.

- 4) En caso que el sospechoso o investigado sea un miembro del núcleo familiar y la víctima sea menor de dieciocho años, incapaz o carezca de representante legal o exista conflicto de intereses de éstos con la víctima, se deberá poner en conocimiento de la autoridad administrativa competente del Ministerio de la Familia, a fin de que apliquen las Medidas de Protección Especial a Niños, Niñas y Adolescentes que en derecho correspondan, desde el inicio de la investigación y evitar que la víctima continúe expuesta a futuras agresiones y se le garantiza el acceso a la justicia.
- 5) Dar seguimiento de manera operativa al cumplimiento de los requerimientos de investigación.

B. Para la efectividad de la investigación debe garantizarse

- La inmediata y exhaustiva toma de entrevistas tanto de la víctima como de testigos si los hubiere.
- Recabar con carácter de urgencia, todos los indicios que corroboren los hechos, así como la responsabilidad del sospechoso, para lo cual se debe recabar información de los vecinos, personas del entorno familiar, laboral, escolar o de servicios sociales que evidencien malos tratos anteriores por parte del presunto agresor, así como de su personalidad y posibles adicciones, así como condiciones de vulnerabilidad o indicativos emocionales en las esferas de funcionamientos antes mencionadas en los casos de violencia sexual. La recopilación de esta información, debe valorarse no sólo de cara a la obtención de elementos de convicción, sino para valorar la situación de riesgo de la víctima ante posibles agresiones y decidir sobre las medidas a adoptar y decretar.
- Debe obtenerse prueba periférica, que acredite de una u otra forma el hecho principal.
- Orientar la ocupación de las armas o instrumentos peligrosos vinculados al hecho delictivo que se encuentren en poder del agresor o en el domicilio familiar.
- La verificación de intervenciones policiales y/o denuncias anteriores en relación con la víctima o el presunto agresor.
- En caso de que la víctima manifieste agresiones anteriores a su integridad, se verificará si fue atendida por servicios médicos estatales o privados.
- Se comprobará el cumplimiento de medidas de protección establecidas con anterioridad por autoridad judicial en relación a las personas involucradas.
- Se debe velar para que las diligencias de inspección ocular sea debidamente documentada, siempre que sea posible mediante fotografías u otros medios técnicos, que sirvan de apoyo al especialista.
- En los casos que por las relaciones de parentesco o afinidad con la víctima, la naturaleza o complejidad del delito, la víctima pueda estar expuesta a presiones, mediante violencia, amenazas, ofertas o promesas de dinero u otros beneficios análogos, a fin de

que su dicho llegue a juicio, se deberá siempre que resulte posible documentar sus entrevistas, fijándose a través de medios audiovisuales, conforme al Principio de Libertad Probatoria, incorporándose al Juicio Oral y Público tal como lo señala el artículo 210 o solicitar el anticipo de la prueba de conformidad al art. 44 inciso a) de la Ley 779.

- A efecto de mantener la unidad de actuación en materia de violencia de género, los y las fiscales deberán consultar cuando el caso así lo requiera, con los Fiscales Especializados Contra la Violencia de Género y en aquellos casos cuando la trascendencia del delito este revestida de una connotación a nivel local como nacional, deberán informar y coordinar acciones con la Unidad Nacional.
- En las Sedes Departamentales o Regionales, donde existe Oficina de Atención a Víctimas, se debe coordinar con dicha oficina, el apoyo para el tratamiento y ayuda en la recuperación de la víctima y/o a través de los Centros de Protección u Atención existentes en la comunidad realizando las respectivas derivaciones a fin de garantizar el principio de integralidad.

D. Sobre las Medidas de Protección de Urgencia

Las medidas de protección surgen de la aplicación del Principio de Reconocimiento y Protección de las Víctimas, art. 5 Pn por consiguiente este es un acápite que se desarrolló en el Protocolo de Actuación de la Gestión Fiscal en materia de Violencia de Género, sin embargo debe ser ajustado o adecuarse a las nuevas facultades y disposiciones que el legislador nicaragüense adoptó en la Ley 779 en el Título III Capítulo II. Por consiguiente, los y las fiscales al momento de valorar su aplicación o solicitud la situación deberán realizar un estudio del riesgo y las condiciones de vulnerabilidad de la víctima y ceñirse al procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley 779 y complementaran su análisis con el capítulo que se desarrolla en el Protocolo de Actuación de Atención a Víctimas de Violencia de Género sobre los factores de riesgos para la solicitud y aplicación de las mismas.

De las Medidas de Protección conforme al Código Penal Art. 111²⁸

Las medidas de protección constituyen una herramienta jurídica de gran utilidad e importancia para la protección de la vida e integridad física de las víctimas, ya que las mismas están dirigidas a proteger y salvaguardar los derechos de las víctimas, por lo que su uso y aplicación debe hacerse de forma adecuada y racional.

Las medidas de protección reguladas en el art. 111 del Código Penal son aplicables para las víctimas del delito de Violencia Doméstica e Intrafamiliar y de cara a la entrada en vigencia de la Ley 779 el art. 155 del Código Penal fue objeto de adición en cuanto a los sujetos de protección y determinando la competencia funcional y objetiva de este tipo delictivo al Juez Ordinario quien conoce y resuelve el conflicto penal y es la autoridad competente para decretar la aplicabilidad de las medidas de protección.

En la fase investigativa pueden ser solicitadas por el Ministerio Público y/o Policía Nacional, las cuales tienen un plazo máximo de vigencia de diez días.

Sin embargo, el primero de octubre del 2013 la Ley 846 “Ley que modifica el art. 46 y de Adición a los artículos 30, 31 y 32 de la Ley Integral Contra la Violencia hacia la Mujer y de reformas a la Ley 641, Código Penal, la competencia funcional y objetiva del delito de Violencia Doméstica e Intrafamiliar pasó a ser del conocimiento del Juez Especializado en Violencia siempre y cuando la víctima sea mujer, niño, niña, adolescentes, adulto mayor, discapacitados que se hallen o hubieren estado ligado al autor del delito por relación de consanguinidad, afinidad, sujetos a tutela, cónyuges, ex cónyuges, convivientes en unión de hecho, ex convivientes en unión de hecho, novios, ex novios o cualquier relación de afectividad. Bajo esta premisa legal, los y las fiscales deberán solicitar al Juez Especializado el decreto de las medidas de protección del delito de VIF en contra del sujeto activo hombre o mujer cuando la víctima tenga los requisitos exigidos por la norma penal los cuales son:

28. Ley 846. Art. 32 Capítulo 3. Competencia objetiva delito de Violencia doméstica e intrafamiliar.

a) La mujer (sujeta activa)

- i. La víctima sea un hombre y con el cual fue cónyuge, conviviente en unión de hecho estable, o persona a quien se halle o hubiere estado ligado de forma estable por relación de afectividad.
- ii. Cuando las víctimas sean hijas e hijos propios del cónyuge o conviviente.
- iii. Cuando la víctima sea hombre o mujer se encuentre en la condición de adulto mayor, discapacitados (Ascendientes, descendientes, parientes colaterales por consanguinidad, afinidad, adopción o sujetos a tutela).
- iv. Novio y ex novio.

b) El hombre (sujeta activo)

- i. Cuando las víctimas sean hijos propios del cónyuge o conviviente, ya sean adolescente o adulto dentro de las relaciones pre-establecidas en dicha norma legal.
- ii. Cuando la víctima sea hombre y se encuentre en la condición de adulto mayor, discapacitados y tienen una relación de consanguinidad dentro del cuarto grado (Ascendientes, descendientes, parientes colaterales por consanguinidad, afinidad, adopción o sujetos a tutela).

Por lo tanto, la aplicación de las medidas de protección se solicita ante el Judicial para que sean decretadas en contra de la persona imputada mujer ó hombre dentro del marco de las relaciones anteriormente señaladas.

• **Medidas Precautelares conforme a la Ley 779 Ley Integral Contra la Violencia hacia las mujeres y de reformas a la Ley No. 641 "Código Penal"**²⁹.

Las medidas precautelares son de naturaleza preventiva, para proteger a la víctima mujer agredida en su integridad física, psicológica, sexual y patrimonial, así como toda acción que viole o amanece los derechos contemplados en la referida ley, para evitar nuevos actos de violencia. Por consiguiente las acciones de los y las fiscales deben dirigirse a que se adopten medidas que le garanticen una atención integral (médica, psicológica, social y legal) las cuales deben ir de la mano con las acciones que el Ministerio Público en coordinación con la Policía Nacional o Comisaría de la Mujer, realicen en aras de esclarecer el hecho que generó la denuncia.

La norma procesal es taxativa al establecer que el sujeto protegido es la víctima mujer entendiéndose mujer niña, adolescentes, adulta y adulta mayor. Es importante que los y las fiscales al momento de valorar el hecho denunciado o investigado, deben de adoptar de forma inmediata la aplicación de las medidas precautelares que restituyan el derecho legítimo de la víctima que ha sido vulnerado, debiendo observar criterios de proporcionalidad, racionalidad, necesidad y urgencia al momento de ser decretadas.

29. Art. 23 y 24 de la Ley 779.

Para poder decidir de manera objetiva y proporcional sobre el decreto de las Medidas Precautelares los y las fiscales deben de realizar un **examen individualizado del riesgo que corre la víctima frente al agresor y para ello se solicitará la intervención de la Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia de Género o demás instancias y procedimiento que refiere el Protocolo de la referida Unidad, para que emitan el informe de la valoración del riesgo** con el fin que el uso o aplicación de las medidas sea debidamente motivado y justificado en razón de los factores de riesgos que se identifican en la denuncia y se verifican con el informe.

Los parámetros que deben tomar en cuenta los y las fiscales al momento de fundamentar y justificar el decreto de las medidas precautelares, son los indicadores establecidos en el Protocolo de Actuación del Ministerio Público en la Atención a víctimas de violencia de género³⁰.

El decreto de las medidas precautelares por el Ministerio Público

Los y las fiscales al momento de decretar las medidas pre-cautelares deben motivar la aplicación de las mismas conforme el informe de riesgo debidamente identificado y establecer que la medida que se imponga al agresor es la idónea en base a los principios de proporcionalidad, acceso a la justicia y de protección a las víctimas. Por Ejemplo:

- Si se trata de una mujer que fue expulsada del hogar por parte del agresor, y éste se quedó en la vivienda con los hijos/as, la medida más idónea, justa, equitativa y proporcional para garantizar la restitución de los derechos de la víctima sería la prevista en el numeral a), c) y j) del artículo 24 de la Ley 779, los y las fiscales deberán ordenar el abandono inmediato del hogar, en este acápite no se discute quien es el dueño o titular de la propiedad, ya que eso se deberá ventilar en otra área del derecho, lo que se pretende es reintegrarla a la víctima a la vivienda de la cual fue sacada con violencia o intimidación y se levantará el inventario de los bienes muebles existentes en el domicilio familiar para salvaguardar el patrimonio de la mujer y de los hijos. De igual manera resulta idóneo decretar las contempladas en los numerales b), e) f) del precitado artículo.
- Las y los fiscales, deben de tener presente que si se decreta las medidas antes mencionadas, debe orientarse a la autoridad policial, que al momento de su ejecución para ingresar al domicilio, solicitaran a otro de los moradores que autorice el ingreso de la autoridad policial, garantizando dicho diligencia con el levantamiento del Acta respectiva, conforme a las luces del art. 217 párrafo 2do. del Código de Procedimiento Penal.
- Si la persona contra quien se dicta la medida se niega a cumplir con la resolución del Ministerio Público, los y las fiscales deberán orientar a la autoridad policial, que estos

30. Ver pagina

deben proceder a detener al imputado ya que estamos en flagrancia de delito de **Desobediencia o desacato a la Autoridad tal como lo regula el art. 462 del Código Penal y art. 29 párrafo infine de la Ley 779 y art. 231 del Código Procesal Penal.**

Debe tenerse presente:

- Que lo anteriormente planteado es y debe ser, sin perjuicio de la facultad y deber de la Policía Nacional de Intervenir de manera preventiva, para evitar la consumación de las conductas, agresivas o de maltrato al interior de la familia que presuntamente constituyan delito.

Ver Anexo, encontrará el Formato para Decretar las Medidas Precautelares.

Seguimiento del Cumplimiento de las Medidas de Precautelares

Decretadas las Medidas de Precautelares por la autoridad competente en los casos vinculados a violencia tanto en el ámbito público como privado, se deberá realizar el seguimiento de las mismas a través de la **Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia de Género** o en su defecto se procederá a coordinar acciones para el seguimiento con centros de atención (ONGs) que tengan presencia en el territorio y brindan apoyo psicosocial a la víctima. El seguimiento de las medidas, se hará dentro del plazo establecido y el órgano encargado de realizar el seguimiento emitirá un informe sobre el cumplimiento o no de las medidas y sobre la base del mismo los y las fiscales valorarán la medida cautelar cuando se ejerza la acción penal ante el juez competente.

Los y las Fiscales deben de tener en cuenta que el arto. 26 de la Ley 779 Ley Integral Contra la Violencia hacia las mujeres y de reforma a la Ley 641 "Código Penal", establece un término de 20 días para la vigencia de las medidas, las cuales pueden ser prorrogables por una sola vez, y por lo tanto se debe estar atento al cumplimiento de las medidas ya que la efectividad de las mismas se encuentra en el seguimiento que la autoridad que las decreta realice.

Cuando se decrete el abandono y reintegro de la víctima al hogar de donde fue expulsada con violencia, intimidación o coacción, los y las fiscales deberán coordinar con la Policía Nacional la ejecución y cumplimiento de dicha medida precautelar, de conformidad al art. 29 de la Ley 779 y art. 462 del Código Penal; estableciendo la designación del órgano policial (describir la delegación o la especialidad a ejecutar la resolución), sobre la base de los Principios de Legalidad, Obligatoriedad y Objetividad, art. 1, 5, 8, 10 inciso 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y art. 225 del Código Procesal Penal la Policía deberá rendir informe sobre la ejecución de la medida ordenada por el Ministerio Público.

Esto significa que los y las fiscales para garantizar que las medidas de los literales a) y c) de la Ley 779 deben coordinar acción con la ejecución, pero el seguimiento de la misma le corresponderá canalizarlo al Ministerio Público así como el resto de medidas que se adopten en dicha resolución, para ello, los y las fiscales deberán disponer de las redes de derivación para que informen el comportamiento del imputado.

No debemos obviar que el fin de la medida es garantizar la integridad de la víctima, así como también deben los y las fiscales paralelamente diligenciar el cumplimiento de las investigaciones, con el fin de pronunciarse sobre el ejercicio de la acción penal. En esta etapa se valorará la pertinencia del anticipo jurisdiccional de la prueba, garantizando la participación activa de la víctima para obtener un elemento de prueba que sirva de base al judicial al momento de su valoración y decisión judicial.

Diligencias y/o actos de investigación útiles y necesarios para el esclarecimiento de los hechos vinculados a la violencia de género

La búsqueda y la obtención de los medios de prueba, inician en la etapa investigativa, con la finalidad de corroborar la existencia de un hecho punible, las circunstancias, modalidad y descubrir quienes participaron en el.

Dicha etapa es fundamental y sus resultados decisivos para determinar el ejercicio de la acción penal o para abstenerse de su ejercicio, ya que debemos de recordar, que la prueba es el entorno sobre el cual gira todo el proceso. Es por ello que se ha considerado de suma importancia incluir este apartado con el objetivo de que sirva de guía al momento de dirigir jurídicamente la investigación y que como funcionarios podamos tener conciencia sobre la utilidad y pertinencia de los medios o fuentes probatorias que podemos orientar para recabar, sin detrimento de los principios de libertad probatoria y licitud de la prueba que rigen nuestro sistema procesal penal.

Generalidades

¿Qué es Prueba?

Es todo medio que produce un conocimiento cierto o probable de cualquier cosa o hecho, es decir es la fuente que nos suministra ese conocimiento y puede ser cualquier objeto o dato del que se pueda obtener algún juicio acerca de lo que sucedió. Ese conocimiento puede ser directo o indirecto, positivo o negativo, dudoso, probable o improbable, puede servir tanto para afirmar la existencia del hecho y la participación del imputado o acusado, como para desvirtuar uno o ambos extremos.

Por otra parte para que ese dato probatorio pueda ser útil y cumpla con su finalidad, es muy importante que su obtención se haya producido por los medios legales establecidos y que al momento de su incorporación al juicio, se observen las normas procesales previstas al efecto.

Objeto y pertinencia de la prueba

Objeto de prueba es todo aquello susceptible de ser probado; aquello sobre lo que debe o puede recaer la prueba. Para que la prueba sea pertinente, todas las pruebas deben estar referidas al thema de prueba, es decir al hecho previsto como hipótesis en la norma.

En Materia Penal aun cuando hay movilidad en la determinación inicial del thema de prueba, se puede trabajar varias hipótesis, para establecer si el delito es uno u otro o una pluralidad o en ciertas modalidades, de todas maneras el thema de prueba siempre será el hecho previsto como hipótesis en la norma.

La dirección de la investigación

Le corresponde al Ministerio Público asumir la dirección funcional de la investigación de los delitos, coordinar y llevar el control jurídico de las actividades que realice la Policía Nacional para determinar el ejercicio de la acción penal y promover en el caso que lo amerite la respectiva acción penal ante los jueces y tribunales competentes.

Según el Modelo de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género en Nicaragua, el Ministerio Público ejercerá la persecución penal con perspectiva de género y constituye otra de las puertas de entrada al MAI por lo que para cumplir con su función acusadora según el arto. 37 de la Ley 779, se fortalecerá gradualmente la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género de tal manera que exista en cada Sede Fiscal distrital y municipal del país, fiscales enlaces de la Unidad, quienes brindarán la asesoría y asistencia técnica a las Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia y elaboraran el plan de investigación para el esclarecimiento del hecho denunciado como la aplicación de medidas de atención y reparación a la víctima del delito.

Una vez recibido el informe policial, los y las fiscales deberán elaborar la teoría del caso, con el objetivo de incorporar el mayor número posible de elementos de convicción ya sea prueba científica, testimonial, documental, material, etc., a fin de que la prueba del delito no dependa de forma exclusiva o primordial de la declaración de la víctima.

La víctima tendrá derecho a ser informada de la marcha de la investigación aunque no intervenga directamente, ya sea por sí misma o por algún representante. Informando sobre el estado de la causa, velando por brindar información clara, sin embargo no se dará información alguna que atente contra la reserva de las investigaciones, o que puedan lesionar los derechos de la víctima y el imputado³¹. A efectos del esclarecimiento de los hechos se tomarán en consideración posibles aportes que la víctima realice a la marcha de la investigación a fin de incorporar nuevos medios de prueba.

31. Art. 52 Reglamento de la LOMP

Actuaciones en el lugar de los hechos

- En las Sedes Fiscales donde se esté implementando el Modelo de Atención Integral, cuando las particularidades del caso lo requieran o se estime necesario por la naturaleza y gravedad del delito para efectos de la investigación, el o la fiscal enlace podrá trasladarse al lugar de los hechos, para dirigir la investigación y garantizar la legalidad de las actuaciones policiales y de la cadena de custodia.
- El o la fiscal orientará que en la investigación se recopilen todas las evidencias posibles en el lugar de los hechos tales como: sangre, elementos pilosos, semen, saliva, fibras, uñas, tierra o cualquier otro objeto que ayude a establecer la presencia del presunto agresor o de la víctima, primordialmente en los casos de Violación o Femicidio.
- En caso de hallar armas, deberá hacerse constar mediante recibo de ocupación, Acta de inspección ocular o Acta de allanamiento según el caso, haciendo constar tipo de arma (características), lugar de hallazgo y estado en que se encuentra.
- El Acta que contenga la inspección ocular y la recolección de la evidencia deberá contener una descripción del lugar de comisión de los hechos, del estado físico en que se encuentra (referencia a posible rotura de cristales, objetos rotos o desordenados...). Si es posible se fijará fotográficamente la escena del crimen.
- Podrá fotografiarse a la víctima del delito cuando resulte difícil su traslado a centro de salud por razón de la ubicación geográfica de la víctima o cuando exprese su negativa a ser examinada por el o la médico (a) forense. Para ello será preciso el consentimiento informado de la víctima y la incorporación de las fotos a las actuaciones con la debida garantía a la privacidad y al derecho a la propia imagen.
- Se incautarán los objetos relacionados con el delito, debiendo preservar la cadena de custodia. Por ej. objetos rotos, mobiliario roto o golpeado, prendas rotas o por el suelo, desorden, manchas de fluidos en pared o suelo.
- El o la fiscal verificará que se tomen datos de los y las testigos que se encuentren presentes en el lugar del hecho, con el fin de obtener su declaración inmediata o, si esto no es posible, citarlos para que a la mayor brevedad posible rindan su declaración.

Actuaciones relacionadas con la víctima

Durante décadas el único protagonista del delito ha sido el acusado. Las legislaciones se han interesado más por la imputabilidad del delincuente que por sus víctimas. Y tradicionalmente el Derecho Penal ha prestado atención a las lesiones físicas de las víctimas haciendo caso omiso al daño o lesión psíquica. El interés que surge por la víctima es muy reciente.

Desde el punto de vista pericial las víctimas se dividen en:

- Víctima directa: La que sufre en sentido estricto la ofensa.
- Víctima indirecta: La que sin participar en los hechos es victimizada debido al sufrimiento, menoscabo o muerte de aquella. Son las personas que rodean a la

ofendida. Ej. Madre de una hija que ha sufrido una brutal agresión sexual y asesinato.

- Víctima primaria: Generada por el propio hecho delictivo.
- Víctima secundaria: Surge por el complejo aparato jurídico-penal, incluso por el mal funcionamiento de los servicios sociales. Por ello, muchas víctimas prefieren no denunciar un hecho o bien una vez denunciado se arrepienten de ello y se retractan. Los elementos que intervienen en la victimización pueden ser varios: una policía burocrática e insensible, médicos forenses que se preocupan más por la toma de muestras o búsqueda de evidencia que por el factor humano de toda relación médico-paciente; jueces o juezas con sus largas esperas y la mezcla entre los delincuentes, policías, funcionarios y víctimas; las defensas, los fiscales y el juicio que la hace reexperimentar los hechos; la lenta administración de justicia; el miedo a no ser creídas; el temor a represalias, la vergüenza y el deseo de preservar la integridad familiar ante los demás.
- Víctima simple o complicada: Es complicada cuando al hecho delictivo le siguen otros actos o situaciones que generan más problemas. Ej. Mujer violada que desarrolla un embarazo o una infección por VIH o que acaba en ruptura matrimonial.

Especial mención en delitos de violencia física y psicológica

- La víctima deberá ser examinada por el o la médico forense a fin de acreditar las lesiones físicas sufridas, las secuelas y gravedad de las mismas de acuerdo con nuestra legislación penal. Se orientará que en caso de que la víctima presente lesiones propias de un maltrato continuado, el médico o médica forense lo haga constar en el dictamen médico legal (por ej. cicatrices de antiguas lesiones ocasionadas por el agresor, típico casos de violencia reiterada).
- Deberá adjuntarse al Informe Policial epicrisis médico emitidos por los centros de salud u hospitales públicos o privados, cuando así lo refieran las víctimas de haber sido lesionadas en otras ocasiones por el mismo agresor, así como informes emitidos por psicólogos (as) que hayan trabajado con la víctima o con quienes haya seguido tratamiento o terapia en casos de antecedentes de violencia psicológica, para establecer claramente el nexo causal.
- Cuando la víctima refiera haber denunciado anteriormente por hechos análogos a cualquier manifestación de violencia y producidas por el mismo agresor, se documentará el informe policial ya sea con antecedentes policiales o judiciales previos al hecho de violencia, actas de trámite de mediación, resoluciones judiciales condenatorias por delitos de violencia de género, resoluciones por las que se haya aplicado la suspensión condicionada del proceso por delitos de la misma naturaleza o cualquier otra resolución judicial que muestre el carácter violento del posible responsable. Del mismo modo se incorporará a las actuaciones documentación acreditativa de las medidas precautelares y del cumplimiento de las mismas. En caso de desobediencia o desacato a la medida, se procederá a documentar otro

informe policial para procesarlo por ese delito, tal y como lo establece el art. 29 de la Ley 779.

- Cuando el o la fiscal lo estime necesario se practicará con la víctima reconocimiento fotográfico, reconocimiento de personas o de objetos.
- El informe psicológico podrá ir orientado, entre otros aspectos, a valorar la afectación de la víctima para el desarrollo de su vida cotidiana (si existe disfunción en alguna área de su vida) o informar sobre el nexo causal entre la situación de violencia sufrida por el agresor y el estado anímico de la víctima, para descartar cualquier otra situación premórbida que pueda desvincularlo.
- El estudio o trabajo social irá orientado a la valoración psicosocial de las consecuencias de la violencia en la vida personal, familiar, laboral, afectiva, de descanso y de proyección de futuro de la víctima. A través de entrevistas a sus familiares más cercanos, compañeros (as) de trabajo, vecinos (as) o amistades se podrá valorar el impacto que la violencia ha ejercido en diversos planos de la vida de la víctima y en las condiciones de vulnerabilidad que se encuentra (por ej. pobreza extrema, edad ya sea menor o adulta mayor, si pertenecen a grupos étnicos o religiosos, si tiene redes de apoyo o disponibilidad de acceder a ellas) Además, establecer en los antecedentes de la conducta del agresor los recursos de que se vale para mantener el sometimiento de la víctima, su patrón de conducta, si es violento o agresivo, si es consumidor o adicto a algún tipo de sustancia, cómo se comporta con ella dentro del núcleo familiar y entorno social. El art. 39 del Reglamento N° 42-2014, establece que durante el proceso investigativo, la Comisaría de la mujer y la Niñez (a través de la trabajadora social) realizará investigación social del entorno comunitario de la víctima. Por lo tanto, debe reflejarse en ese estudio social un enfoque intercultural con capacidad de integrar en el abordaje de la víctima y del presunto agresor los elementos derivados del sistema de ideas, creencias y normas que regulan el comportamiento de su grupo de identidad (organización económica, organización política, familia, parentesco, lenguaje, ciencias, religiones, normas morales) en la medida en que influyen en el marco de la violencia de género.

Se garantizará la privacidad de la práctica de la prueba pericial. La víctima no podrá ser obligada a someterse a una prueba pericial médica, psicológica o social ni ésta podrá practicarse en presencia de los o las representantes de la defensa. La víctima de violencia de género y de los delitos derivados de ello no deberá exponerse a la reconstrucción de los hechos, salvo cuando resulte necesario recrear la escena del delito y la secuencia de los hechos. En ningún caso la víctima participará en la práctica de dicha diligencia a fin de evitar su revictimización, al igual que no lo hará en testimonios en presencia del agresor, salvo casos de extrema necesidad para lograr el esclarecimiento de los hechos como finalidad del proceso penal y respetando las medidas mínimas de protección hacia ella en su contacto visual con el agresor

En la investigación de los delitos de violencia psicológica debe constar en el informe psicológico los criterios que determinan el grado de afectación de la víctima como consecuencia de los actos de violencia, además criterios de credibilidad del testimonio

y primordialmente el tipo de tratamiento que requiera su afectación (sicoterapéutico o especializado). Por ello, se establece en el arto. 38 del Reglamento que el especialista en sicología se deberá tomar el tiempo necesario para determinar el resultado de la pericia practicada.

En el informe psicológico que se oriente para determinar daño síquico deberá tomarse en cuenta lo siguiente:

- La existencia de un cuadro psicopatológico concreto, es decir los síntomas que presente la víctima deben encajar en un cuadro o síndrome clínico identificable.
- El menoscabo psíquico producido por efecto de la situación denunciada se traduce en una alteración mental nueva o novedosa en la biografía del sujeto (en ocasiones por descompensación de los rasgos psicopatológicos premoridos) o en un agravamiento de una enfermedad anterior.
- La enfermedad psíquica que se diagnostique debe tener una relación de causalidad con la situación denunciada. El nexo puede ser directo (causa el trastorno) o indirecto (actúa como concausa que acelera, agrava o desencadena una patología perimórbida)

En la investigación de delitos de violencia física, si la víctima empleara la violencia para defenderse frente a su posible agresor, los y las fiscales actuarán con la debida diligencia para conocer las circunstancias exactas en que se produjo el hecho. Para ello solicitarán informe de trabajo social donde se determine el tipo de relación existente entre víctima y presunto agresor por si hubiera un historial de maltrato previo u otras circunstancias que pudieran influir en la víctima. Deberán tener en consideración para sus actuaciones las consecuencias del síndrome de mujer maltratada.

Los y las fiscales realizarán todas las averiguaciones oportunas para determinar con exactitud el modo en que se produjeron las agresiones recíprocas, los instrumentos o armas empleados en la agresión y las circunstancias que enmarcaron el hecho violento. Si resultara acreditado el uso legítimo de la defensa, se procederá a la desestimación de la denuncia de acuerdo con lo establecido en el arto. 224 CPP, tomando en consideración que es una eximente justificante de la conducta ilícita que elimina la antijuridicidad como categoría del delito. En otro caso, se formulará acusación o se planteará otro tipo de salida alternativa, apreciándose la legítima defensa o el ser sujeto del síndrome de mujer maltratada como circunstancia eximente o atenuante de la responsabilidad criminal. En ese sentido se debe hacer un análisis de los presupuestos para que se constituya legítima defensa, según el arto. 34.4 inco. a) tomando en consideración que la integridad síquica de la víctima de violencia está en un peligro constante y en gradual deterioro por el ciclo de la violencia en el que se encuentra inmersa y por la escalada de la violencia. Debe entenderse que a menudo estas respuestas violentas defensivas son una reacción a múltiples ataques previos sin que la víctima haya tratado de defenderse o buscado auxilio de las autoridades. En ocasiones las

víctimas que se sienten solas, aisladas, sin amparo del sistema de protección de víctimas, recurren a la violencia como único mecanismo para poner fin a su situación. Corresponde a los y las fiscales aplicar la perspectiva de género y analizar el ciclo de la violencia en cada caso concreto para comprender la conducta de la víctima, plantear la respuesta penal más ajustada a esa situación y evitar nuevas revictimizaciones.

Actuaciones relacionadas con el agresor

- El presunto agresor tendrá derecho a ser asistido y defendido por profesional en derecho en la toma de declaración y en el resto de diligencias de investigación que se practiquen.
- En el momento de su detención podrá procederse a la requisa corporal con el fin de buscar entre las ropas o adheridos al cuerpo, armas, pertenencias u objetos relacionados con el delito.
- Se llevará a cabo una inspección corporal del posible responsable a fin de identificar lesiones, huellas, ropa manchada con sangre u objetos que puedan estar relacionados con el hecho delictivo, así como también señas físicas que corroboren datos ofrecidos por la víctima tales como señales físicas, tatuajes, cicatrices, heridas, lunares, etc.
- El o la fiscal orientará la práctica de la valoración física cuando el presunto agresor presente muestras de haber sufrido lesiones en el transcurso de la agresión así como para valorar la presencia de sustancias tóxicas.
- En caso de ser necesario para la investigación del delito se procederá, a la toma de muestras de fluidos corporales de sangre, la revisión de genitales para comprobar si hubo contacto sexual con la víctima así como a tomar las muestras necesarias para buscar evidencias de la víctima en el cuerpo y genitales del probable responsable. En estos casos, además de lo establecido en el arto. 238 CPP sobre la Investigación corporal y la extracción de fluidos biológicos, también el arto. 45 de La Ley 779, lo regula señalando el deber del Juez o Jueza de Violencia de practicar estos actos de forma inmediata en los delitos contra la vida y delitos contra la libertad e integridad sexual de la víctima sólo en aquellos casos que sea pertinente por el hallazgo de una evidencia que pueda ser analizada y comparada con fluidos, atendiendo criterios de proporcionalidad, siempre y cuando no ponga en peligro la salud de la persona investigada y cuando sea indispensable para identificar al presunto responsable del hecho.
- El o la fiscal valorará la necesidad de practicar prueba pericial psiquiátrica o psicológica a fin de determinar el estado mental del presunto agresor, la posible influencia de sustancias tóxicas en la comisión del hecho así como la presencia de rasgos culturales misóginos o discriminatorios y de irrespeto hacia las mujeres. Para ello, se realizará la solicitud al Instituto de Medicina legal, ya sea de manera directa en la etapa investigativa o ante el Juez o la Jueza Especializado (a) en Violencia en la etapa procesal.

Según el arto. 37 del Reglamento, si para lograr un peritaje completo en la determinación de violencia psicológica, podrá si fuese necesario, examinarse psicológicamente al agresor. Asimismo, el arto. 41 del Reglamento establece que durante el proceso es facultad de la autoridad judicial orientar la valoración psicológica del agresor ante el Instituto de Medicina Legal y la investigación social del entorno comunitario, a través de la Comisaría de la Mujer.

Si el presunto agresor fuera miembro de la policía o del Ejército, deberá ponerse en conocimiento de la Unidad Especializada de delitos contra la Violencia de Género (UE-DCVG) de forma inmediata, quien asumirá el control y dirección de la investigación. Sin perjuicio de la valoración del riesgo que se efectúe, se adoptarán las cautelas necesarias para prohibir al presunto agresor la posesión y uso de armas durante el tiempo que dure la investigación o hasta la finalización del proceso adoptando la respectiva medida precautelar o cautelar. Si fuera necesario, en coordinación con los mandos policiales, se promoverá apartar al presunto agresor del servicio como policía, especialmente del acceso a armas de fuego o de otro tipo.

Valoración psiquiátrica del agresor

La siquiatria forense estudia los fenómenos psicopatológicos, los denomina y clasifica, relata cuáles son sus manifestaciones clínicas y la incidencia de estas manifestaciones clínicas en el comportamiento del sujeto. Todo ello lo pone en relación con el hecho enjuiciado en las llamadas consideraciones médico forenses. Se realiza en el ámbito de la justicia y tiene como finalidad aplicar esos conocimientos de esta ciencia de la medicina para conocer el estado mental del imputado o enjuiciado y ponerlo en relación con el delito del que viene siendo acusado.

Para orientar o solicitar una valoración siquiátrica del presunto agresor y en casos de que ésta se pretenda utilizar como eximente de responsabilidad penal, eximente incompleta o atenuante muy cualificada, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

- El perito médico sólo es medio de prueba para acreditar enfermedad o estado de salud y no es un detector de mentiras, ni puede establecer culpabilidades.
- La pericia siquiátrica valora la situación del individuo en un momento pasado (en el momento de los hechos) por lo que no está exenta de cierta imprecisión pues no es un arte adivinatorio. Al examinar a un individuo sabemos cómo se encuentra en el momento presente, pero la enfermedad mental, más que en cualquier otra enfermedad médica puede variar en cualquier momento porque su curso no es lineal. La pericia legal o forense tiene una serie de retos, como es el valorar unos hechos que han ocurrido mucho antes, la dudosa colaboración del paciente y las discrepancias que existen entre los peritos.
- En el informe pericial siquiátrico interesa el diagnóstico que se dará siguiendo la nomenclatura de las clasificaciones internacionales (CIE o DSM), se determinará el

grado de incidencia de esta enfermedad mental en la conducta del sujeto y pondremos en relación ese trastorno con el hecho que se enjuicia.

- No todo acto delictivo es motivado por una conducta psicopatológica y para que esté motivado por ésta es preciso que afecte: El conocimiento: inteligencia y pensamiento (capacidad de comprender lo injusto de un hecho) y la Voluntad: Capacidad de dirigir libremente la acción.
- Cuando se refiera a un trastorno mental como psicótico, existe una alteración en la percepción de la realidad y creación de su realidad. Cuando se habla de psicópata (antisocial o disocial) se refiere a la persona cuya forma de ser se caracteriza por el incumplimiento de las normas sociales. La neurosis (trastornos de ansiedad) se refiere a la expresión de la angustia, donde el comportamiento puede estar muy alterado pero en este caso la persona no confunde la realidad no está alterada su percepción de la misma. Y tanto en la demencia como en el retraso mental la alteración es intelectual.
- El consumo de drogas y alcohol en muchos casos es responsable de facilitar conductas violentas. Sin embargo, para entender los efectos de las sustancias en el comportamiento humano hay que distinguir por un lado los que son cuadros agudos de intoxicación y por otro, cuadros psíquicos que produce el consumo habitual de sustancias y que se denominan abuso y dependencia y por último los trastornos psíquicos inducidos por las drogas y el alcohol que en algunos casos son indistinguibles de trastornos psíquicos primarios como depresión, psicosis o delirios. El alcohol, cannabis sativa o marihuana y la cocaína base crack son las sustancias más consumidas y con frecuencia están implicadas en el comportamiento agresivo y violento. En estos casos se orientará la investigación en el sentido de establecer si el agresor en el momento de comisión de los hechos había consumido alguna de estas sustancias y si esto afectó de manera significativa su comprensión de la realidad y le impidió actuar de manera distinta ante el evento y si éste no se colocó en esta condición a sabiendas de las probables consecuencias con el ánimo de cometer el delito y librarse de la responsabilidad penal.

Existen tres grupos de delitos relacionados con la violencia a la mujer: Delitos contra la libertad o indemnidad sexual (Ej. Violación); delitos contra la integridad física y psíquica (Ej. Violencia psicológica y física) y delitos contra la vida (Ej. Femicidio); los cuales se corresponden con el estudio de tres grupos de agresores, pero que según las entidades patológicas clasificadas el CIE-10 y DSM-IV, hay ausencia en la mayoría de los casos de patología psiquiátrica. Esto es, que en la mayoría destacan rasgos de personalidad pero que no repercuten ni modifican la imputabilidad. Los agresores sexuales son un grupo heterogéneo que difieren tanto en los rasgos de personalidad como en la forma de ejecutar su agresión. Los más peligrosos son aquellos con parafilias de tipo sádico que precisan del sufrimiento físico o moral de la víctima como fuente de placer y que nutren el tipo de agresor sexual en serie. En el caso de los maltratadores familiares, destacan aquellos portadores de un trastorno delirante de tipo celotípico, interés derivado de la gravedad de sus conductas que con frecuencia acaban en el homicidio de

la pareja. Los femicidas, destaca en todos ellos el componente sexual de estos asesinatos y la prevalencia de factores socioculturales. El alcohol y la droga tienen un papel de facilitadores de conductas antisociales.

Especial mención a la investigación del delito de femicidio

Por Femicidio se entiende la muerte violenta de una mujer, por el mero hecho de serlo. Se trata de una categoría jurídico política que evidencia la violencia extrema ejercida sobre las mujeres por la inequidad de género e incluye según el arto. 9 de la Ley 779 y el Reglamento N° 42-2014, todas las muertes de mujeres causadas en el ámbito de las relaciones de pareja.

Este tipo de Femicidio íntimo es el más frecuente según las estadísticas por lo que pone en evidencia la relación fundamental entre el delito en sí mismo y la violencia sobre la mujer en el ámbito familiar y en concreto en el ámbito de la pareja.

A partir de la autopsia, se puede encontrar indicios que apunten a la existencia de una violencia habitual precedente lo que determinará la actuación investigadora diferente según existan denuncias precedentes o no. Si las agresiones previas fueron denunciadas será procedente la acumulación de todos los informes policiales pendientes, si su estado procesal lo permite y si no es posible se tendrán que traer a la causa incoada por el Femicidio, copia de aquellas, pues además que de las mismas se pueden aportar indicios que corroboren la participación del imputado en la comisión del Femicidio, se podrá valorar la conducta violenta reiterada a los efectos que la ley permita dosificar la pena y la apreciación de circunstancias agravantes. Si las anteriores agresiones no fueron denunciadas lo procedente será abrir una línea de investigación adecuada para su acreditación (estudio social en el entorno familiar, laboral y vecinal de la víctima, así como investigación sobre actuaciones médicas anteriores)

Para la investigación del delito de Femicidio o de tentativa de Femicidio se tomará en cuenta lo siguiente:

- Se iniciará de oficio tan pronto como se tenga conocimiento o sospecha del delito y cualquiera que sea el medio por el que se haya tenido conocimiento de la muerte, incluidos los medios de comunicación.
- Son diligencias fundamentales la inspección y descripción del lugar donde presumiblemente se ha cometido el delito así como la descripción del estado y circunstancias del cadáver, datos que serán relevantes para el Médico Forense que después que realice la autopsia siendo esta prueba una pericial que resuelva muchas cuestiones relativas a la víctima, al hecho y al autor.
- La diligencia del levantamiento del cadáver requiere la intervención de la Fiscalía y del Médico Forense.

- Es fundamental la recogida y etiquetado de indicios utilizando para ello las técnicas adecuadas a fin de que no se produzcan alteraciones o contaminaciones en los tales indicios procediendo al traslado y envío de las muestras al laboratorio con especial cuidado de la cadena de custodia, de manera que se tendrán que adoptar las medidas necesarias para que la recogida de la custodia y examen de las muestras se verifique en condiciones que garanticen su autenticidad. Los vestigios pueden ser biológicos (semen, saliva, cabellos, orín, sangre,...) o no biológicos (cristal, plástico,...) todos ellos fundamentales en el devenir investigador pues de ellos se pueden obtener datos que permitan la identificación del autor. En relación a los biológicos de los mismos se obtendrá el ADN de la persona a la que pertenezcan (presunto autor del hecho) lo que determina la necesidad de cotejar ese ADN con el del imputado.
- Cuando el equipo técnico de la policía y el Médico Forense se presenten a la escena del crimen, deben comprobar primero si la persona presenta signos de vida y solicitar urgentemente asistencia sanitaria para su traslado al centro médico más cercano. En todo caso custodiarán la escena del delito para conservar las pruebas. Deberán avisar sin dilación al o la fiscal enlace encargada de la dirección de la investigación.
- La investigación en el lugar de los hechos corresponde a la Comisaría de la Mujer bajo la dirección del Ministerio Público, que será la encargada de realizar una primera inspección del lugar, recoger los primeros indicios y plantear la teoría del caso del delito, recoger la declaración de los y las testigos y proceder a la detención del presunto agresor.
- En caso de no ser posible la presencia de la Comisaría de la Mujer, corresponderá a la Dirección de Auxilio Judicial realizar la investigación del delito. Deberán identificar los datos y testigos relevantes, proceder a la detención del presunto agresor, identificar los diversos objetos de interés para la investigación, proceder a su fijación escrita o por fotografía, recogida, conservación y entrega, siguiendo la cadena de custodia.
- El Ministerio Público se encargará de dar formación especializada a las investigadoras de las Comisaría de la Mujer con el fin de mejorar la técnica de investigación criminalística en este tipo de delitos, especialmente en caso de muerte o lesiones graves.
- Toda diligencia de investigación realizada deberá hacerse constar por escrito, incluyendo datos que permitan precisar con exactitud la hora de llegada y la ubicación de la escena.
- Se solicitará la fijación, recolección y embalaje de rastros de sangre en el lugar de la investigación para establecer a quien pertenecen y proceder a su posterior comparación, si fuera necesario.
- En caso de fallecimiento, el levantamiento del cadáver será practicado en todo caso por representante del instituto de medicina legal, quien procederá a la fijación y levantamiento de evidencias en el cadáver, a su recolección y embalaje. En el caso de existir indicios como folículos pilosos, fibras, hisopos de uñas, fluidos biológicos, ropas u otros objetos se pondrán a disposición de la autoridad para su envío al Instituto de Criminalística, garantizando la cadena de custodia.

- Deberá identificarse el cadáver, recogiendo sus características fisonómicas, señas particulares, complexión, tomando fotografías y la ficha decadactilar.
- El o la médico forense, llevará a cabo una exploración ginecológica para recoger las muestras biológicas que puedan determinar la existencia, en su caso, de contacto sexual previo a la muerte.
- La autopsia médico-legal tendrá como finalidad determinar la causa de la muerte, así como describir la concurrencia de lesiones innecesarias para causar la muerte o mutilaciones en su cuerpo, lesiones con características de forcejeo o lucha, posibles indicios de delito sexual, uso de armas o lesiones previas propias de un maltrato habitual, todo ello con el objeto de comprobar el posible Femicidio.
- El o la fiscal, cuando sea necesario, oficiará a los peritos en psicología y trabajo social a fin de que practiquen las pruebas periciales necesarias para determinar las circunstancias en que se ha cometido el crimen: relación previa entre víctima y presunto agresor, actos de violencia previos, presencia en el presunto agresor de patrones culturales misóginos o de discriminación e irrespeto a las mujeres o, en su caso, elaborar el estudio comparativo entre víctima y presunto agresor para determinar la posible ventaja física entre ambos, elementos que contribuyen a la acreditación del marco de desigualdad y de poder en que se ejerce esta forma de violencia.
- Los y las fiscales aplicarán la perspectiva de género evitando la aplicación de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal que puedan justificar la conducta del presunto agresor o culpabilizar a la víctima de lo sucedido. A estos efectos no se dará ninguna consideración especial a los posibles intentos de suicidio de los agresores.
- En caso de suicidio o intento de suicidio del presunto agresor, se desarrollará la investigación de la muerte de forma semejante a lo antes expuesto, a fin de acreditar la autoría del hecho y las circunstancias de su comisión.
- En caso de que se solicite valoración psiquiátrica del imputado o agresor, por sospecha que éste padezca algún tipo de enfermedad o trastorno mental, el fiscal deberá tener en cuenta las clasificaciones internacionales DSM-IV y CIE-10 y el manejo de las mismas servirá para hacer las solicitudes pertinentes a los psiquiatras forenses, de tal manera que se establezca en el diagnóstico además del tipo de trastorno que padece, transitorio o permanente, si éste al momento de los hechos provocó una alteración en su conducta tal que no tenía pleno conocimiento y voluntad de su actuar, para que pueda constituirse en una eximente de responsabilidad penal o una eximente incompleta que le atenúe la pena.

En caso de tentativa de Femicidio:

- Si la víctima hubiera sufrido lesiones como consecuencia del acto, los y las fiscales se apoyarán fundamentalmente en los medios de prueba médicos para diferenciar el hecho como delito de Femicidio en grado de tentativa (acabada o inacabada) o como delito de lesiones con sus respectivos agravantes.

- El informe del instituto de medicina legal deberá establecer pautas para la valoración del riesgo vital de las lesiones sufridas. Se valorará especialmente el lugar o zona del cuerpo afectado por la acción agresiva y su vulnerabilidad e importancia para la vida de la víctima; la clase, características y dimensiones del arma o instrumento empleado y si ésta es idónea para causar resultados mortales; la dirección, número y violencia de los golpes; la fuerza empleada y la gravedad de las lesiones sufridas.
- El o la fiscal procurará demostrar la intención de causar la muerte para poder calificar el hecho en grado de tentativa. Para tal fin se servirán de la declaración de la víctima, de los testigos, de las investigaciones policiales y de los resultados del informe médico forense.
- Con el fin de valorar las circunstancias y motivación del delito se deberán tomar en consideración los siguientes factores: condiciones del lugar y tiempo de comisión del delito; las circunstancias conexas con la acción; las manifestaciones del propio autor, en particular las palabras precedentes y acompañantes a la agresión, así como la actividad anterior y posterior al delito, tales como insultos, provocaciones o amenazas; las relaciones previas existentes entre el imputado y la víctima; la causa del delito; la intervención posterior del agresor, auxiliando o desatendiendo a la víctima, pese a comprender la gravedad del acto y las personalidades de autor y víctima.
- Durante la práctica de las diligencias de investigación se extremarán las cautelas para evitar la confrontación visual entre la víctima sobreviviente y el presunto agresor.
- El o la fiscal velará para que la víctima sobreviviente, sus familiares y los o las testigos estén protegidos durante toda la investigación y el procedimiento frente al riesgo de nuevas agresiones, presiones o intimidaciones del presunto agresor o de su entorno. Los y las fiscales, en todo caso adoptarán, solicitarán o coordinarán las medidas precautelares o cautelares.
- El Ministerio Público será responsable de ofrecer a las víctimas sobrevivientes y a sus familias seguimiento y acompañamiento a lo largo del proceso. A través de la oficina de atención a la víctima se coordinará la actuación con el resto de instituciones, especialmente con la Comisaría de la Mujer para garantizar la seguridad.
- Especial atención se tomará sobre niños, niñas y adolescentes descendientes de la víctima y el presunto agresor. Se les deberá garantizar desde el primer momento de conocido el hecho protección, seguridad y acompañamiento especializado garantizando su permanencia temporal o definitiva en el ámbito familiar más idóneo. Para ello se podrá solicitar la intervención del Ministerio de la Familia a fin de que se apliquen medidas de protección, en virtud de su interés superior según el arto. 76 y siguientes del CNA.

Actuaciones en la investigación de los delitos sexuales

En el caso de delitos sexuales deberán realizarse, además de las expuestas anteriormente, las siguientes:

- a. Cuando la víctima presente lesiones que precisen atención médica, será trasladada a un centro hospitalario o médico. Con el fin de conservar los posibles indicios del delito y asegurar a la víctima la atención debida, deberá ser examinada por un equipo interdisciplinario formado, preferentemente, por médico forense, psiquiatra o psicóloga trasladado al efecto o por profesionales del centro hospitalario actuando en coordinación con el Instituto de medicina legal.
- b. Deberá informarse a la víctima del derecho a recibir el tratamiento de retrovirales (para evitar el contagio de VIH). En caso de que la víctima esté de acuerdo, será trasladada al hospital, si no lo ha sido previamente. En todo caso, será preciso el consentimiento de la víctima o de su representante legal o institución autorizada.
- c. La evaluación física de la víctima debe determinar la existencia de lesiones extragenitales, paragenitales e intragenitales, tiempo de evolución y sanación así como las secuelas de las mismas. Del mismo modo evidenciará si se encontraron en la víctima o en sus ropas restos de sangre, semen, saliva, elementos pilosos u otros elementos que contribuyan a identificar al agresor y el lugar donde ocurrió el hecho. El informe referirá también la presencia, en su caso, de sustancias tóxicas en la víctima así como otros datos relevantes para el caso. Se podrán practicar análisis de orina, de sangre o tomar muestras de cabello para analizar la presencia de sustancias tóxicas.
- d. Deberá realizarse una inspección corporal (arto. 237 CPP) del posible agresor en la que se determine la existencia de lesiones en su cuerpo, especialmente en genitales, presencia de elementos pilosos, sangre, saliva semen u otros elementos que ayuden a relacionar al posible responsable con la víctima y a poder identificar el lugar del hecho.
- e. Las pruebas periciales deberán ir orientadas a analizar el daño en la salud mental de la víctima como consecuencia de la agresión.
- f. En el caso de que la víctima sea niño, niña o adolescente, el examen médico, si se realizara, se llevará a cabo por especialistas en atención a la niñez y la adolescencia o pediatras, preferentemente de sexo femenino.

En el caso de que la denuncia de delito sexual se interponga transcurridas más de 72 horas desde la comisión del acto, los y las fiscales deberán actuar con toda la diligencia debida para acreditar los hechos, entre otros:

- a. Valorar con el instituto de medicina legal o en coordinación con el sistema de salud nacional la conveniencia y oportunidad de llevar a cabo informe médico forense para recogida de posibles muestras o valoración de lesiones, a la vista del tiempo transcurrido. Deberá tomarse en cuenta que la ausencia de lesiones físicas externas no es sinónimo de consentimiento por parte de la víctima.
- b. Si la víctima hubiera guardado las prendas de ropa del día de los hechos, deberá ser enviada al Laboratorio Central de Criminalística para el examen de las mismas, la recogida de muestras de cabello, semen o de cualquier otra muestra que permita determinar la existencia de contacto o relación sexual.
- c. Si se estima necesario y el tiempo transcurrido lo permite, se podrá llevar a cabo una inspección ocular del lugar de los hechos, por si pudiera obtenerse alguna prueba que apoye la versión de la víctima.
- d. Podrá llevarse a cabo también un informe de valoración psicológica que determine el impacto causado en la salud física y psicológica de la víctima (alteraciones del sueño y alimentación, inseguridad y desconfianza, cambios bruscos de conducta, entre otros) por los hechos sufridos.

La investigación de los delitos de violencia patrimonial

El Ministerio Público actuará con toda la diligencia debida para acreditar la comisión de los actos de violencia económica, de modo que siempre que la víctima refiera haber sufrido algún tipo de presión o impedimentos para el ejercicio de sus derechos económicos, deberán llevarse a cabo las diligencias de averiguación oportuna para acreditar, entre otros:

- a. Documental de negocios jurídicos por los que se impide el acceso a la titularidad de los bienes o por los que se perturba la posesión o tenencia de los bienes, por ejemplo, limitaciones a la disposición de los salarios o la existencia de cuentas bancarias de titularidad exclusiva del esposo.
- b. Prueba testifical de familiares, parientes o terceras personas que acrediten la limitación en el acceso o en la tenencia de bienes muebles o inmuebles, titularidad o cotitularidad de la esposa o actos de privación de bienes titularidad de la esposa.
- c. Acreditación de diferencias en el estilo de vida de ambos esposos, siempre que sea posible demostrar la disposición de patrimonio del esposo, frente a la situación de penuria o escasez de la víctima y sus hijos o hijas.
- d. En el caso de destrucción o deterioro de los bienes titularidad de la esposa, podrá practicarse inspección ocular en el domicilio o lugar de los hechos, que se apoyará

en medios fotográficos o grabaciones que permitan acreditar el estado final de los objetos y bienes de su propiedad tras el hecho violento denunciado.

- e. Documentos que acrediten en su caso el valor de los bienes deteriorados o dañados, actualizándose con respecto al salario mínimo del sector industrial.-

El Ministerio Público se servirán también de informes periciales de trabajo social que muestren la situación de dependencia económica, la limitación del acceso y ejercicio de los derechos patrimoniales por la víctima y cualquier otra circunstancia que revele la violencia económica a que pueda haber estado sometida. El informe de trabajo social irá orientado a la valoración, desde un punto de vista psicosocial, de las consecuencias de la violencia económica en la vida personal, familiar, laboral y de ocio de la víctima. A través de entrevistas a sus familiares más cercanos, compañeros (as) de trabajo, vecinos o amistades se podrá valorar el impacto que la violencia ha ejercido en diversos planos de la vida de la víctima.

Fin de la investigación

Finalizada la investigación, el o la fiscal según el caso, formulará acusación, decretará falta de mérito, desestimación de la denuncia u optar por alguna de las salidas alternativas al proceso. En todo caso, la finalización del proceso se realizará incorporando la perspectiva de género.

Con el fin de garantizar la debida protección de la víctima y asegurar la respuesta penal ajustada a la gravedad de los hechos, el o la fiscal formulará acusación por el delito correspondiente siempre que disponga de elementos de prueba suficientes para acreditar la existencia del hecho punible y la probable responsabilidad del agresor.

Los y las fiscales no aplicarán salidas alternativas del proceso que permitan minimizar la conducta violenta y perpetuar estructuras de poder y dominación del hombre sobre la mujer, para ello eludirán la aplicación de soluciones que benefician y empoderan al agresor, sin garantizar debidamente la seguridad de la víctima.

Los y las fiscales optarán por la aplicación de salidas alternativas al proceso, según nuestra legislación, por voluntad expresa de la víctima cuando se considere más oportuno para evitar la revictimización y garantizar la reparación del daño.

Los y las fiscales velarán para que las medidas precautelares o cautelares adoptadas estén en vigor hasta la finalización del proceso por resolución definitiva. Se pretende asegurar la protección de las víctimas, cualquiera que sea el curso del proceso, especialmente en caso de ulteriores recursos.

La acusación

Con la investigación allegada los y las Fiscales determinan que se encuentran ante un hecho que tiene relevancia penal por susbimir dicha conducta delictiva a una norma penal que se encuentra debidamente tipificada y existe un cuerpo probatorio que determina la autoría del hecho, la lesión al bien jurídico protegido sobre quien recayó la acción delictiva. Conformada la teoría del caso se procederá a ejercer la acción penal transversalizando el enfoque de género en todo el proceso penal (desde la admisión de la acusación, el juicio oral bajo las reglas de la contradicción y la inmediación hasta la obtención de la sentencia firme) debiéndose observar lo siguiente:

- a. El libelo acusatorio debe imputar el hecho delictivo describiendo los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, manteniendo la correlación entre los hechos que se incluyen en el escrito de acusación y los medios de prueba de que se dispone para acreditarlos. Recordando a los y las fiscales que no deben confundir la redacción de los hechos acusados con los medios de prueba.
- b. El relato de los hechos se realizará mediante la descripción de la acción llevada a cabo por el autor de los mismos, describiendo el nexo causal, la posición de poder, dominio que ejerce el agresor según el hecho que se le imputa, así mismo deberán plasmar las condiciones de vulnerabilidad de la víctima y las consecuencias de la acción delictiva. Para cumplir con este apartado debemos recordar que el art. 77 del Código Procesal Penal establece los requisitos de la acusación, por consiguiente, debemos recordar:

Una acusación es Clara

1. Al redactarse de un modo comprensible para el destinatario. Esto implica, cuidados en la redacción, en la puntuación y en la ortografía.
2. Se narra los hechos de un modo lógico y cronológico, debiéndose imputar los hechos desde la óptica de quien los está realizando y por consiguiente plasmar cada elemento del tipo penal hasta agotar toda la narración de la acción que le interesa al tipo penal.

3. Si hay agravantes del tipo penal debe describirse en la relación de hechos.
4. El texto imputativo debe utilizarse en tercera persona: él hizo, ella realizó, ellos se dirigieron. No se debe narrar en primera persona: yo hice, yo realicé, nosotros nos dirigimos. Dado que el texto imputativo refiere a hechos ya ocurridos, los verbos o tiempos verbales deben estar en pretérito (pasado); nunca en presente.

Una acusación es precisa

1. **Por precisión** entendemos la labor de atribuir un hecho. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define “precisión como determinación, exactitud, puntualidad, concisión”.
Atribuir un hecho, en realidad está compuesto de dos momentos jurídicos diferentes:
 - a) La imputación (la expresión precisa de que la acción típica ha sido realizada).
 - b) La individualización (el señalamiento de la persona o personas a las que se le atribuye la realización de esa acción).Atribuir, entonces, es imputar un hecho, individualizar a su autor y en consecuencia atribuirle ese hecho como obra suya.
2. El fiscal no debe temer acusar sin individualizar, cuando individualizar no sea posible, porque para ello puede hacer uso de la teoría del codominio funcional del hecho, la cual no lo exime de describir bien la acción, pero le permite no tener que indicar con altísima precisión que acción llevó a cabo cada uno de los participantes.

La acusación debe ser específica

1. Por especificación entendemos la delimitación precisa del objeto que se está refiriendo en la acción narrada. Los elementos que pueden ser “especificados” son aquellos que pueden ordenarse en términos de “género o especie”, digámoslo así “de lo general a lo particular”. Por especificación se utiliza para los objetos (elementos objetivos del tipo) y precisión se utiliza para los sujetos (elementos subjetivos del tipo).
2. La especificación sirve para describir características particulares de objetos cuyas variantes también cambian la calificación jurídica, sea por que agravan, califican o atenúan.

La acusación debe ser circunstanciada

1. Que la acción debe ser circunstanciada significa que cada uno de los hechos narrados, debe describir lo que llamamos accidentes del hecho, éstos son descriptores de tiempo, lugar, modo, instrumentos, compañía, distancia, relación, etc, todos los cuales precisan y limitan la acción.

2. Los descriptores circunstanciales son: cómo, dónde y cuándo.
3. Debe evitarse la falta de precisión temporal cuando se refieren hechos cuya fecha exacta de comisión no se conocen (precisión sincrónica, o sea en una fecha única), pero sí puede ubicarse el hecho entre dos momentos históricos aproximados. (Precisión diacrónica, o sea entre una fecha y otra).
4. Al referir un hecho entre dos puntos del tiempo, debe tenerse especial cuidado en que el transcurso del tiempo entre uno y otro punto no implique la prescripción de la acción penal. La forma correcta de citar hechos de esa naturaleza es: **“Sin que pueda precisarse la fecha exacta, pero entre Enero (término inicial) y Febrero del 2011 (término final)”. “Hechos ocurridos entre el mes de Diciembre del 2008 a Enero del 2009, sin que pueda precisarse la fecha exacta” (contiene el término inicial y el término final del hecho).**
 - a) Se evitará cualquier expresión que actúe como justificación de la conducta del agresor. Un ejemplo de ello es: “Y golpeo a la mujer sin justificación alguna” ó “Se encontraba en estado de ebriedad”
 - b) Se eludirán expresiones que puedan culpabilizar a la víctima o minimizar la violencia ejercida, basadas en estereotipos o prejuicios sobre las mujeres.
 - c) Con respecto a la medida a solicitar para garantizar las finalidades del proceso conforme a lo establecido en el art. 166 CPP y la seguridad de la víctima (art.1 Ley 779), los y las fiscales tomarán en cuenta el tipo de delito, la magnitud del daño ocasionado, las circunstancias de su comisión para solicitar la medida cautelar adecuada a la luz del principio de proporcionalidad y objetividad. Debemos de recordar que conforme a la Ley 745 en su art. 44 la prisión preventiva es la única medida a imponer en delitos que atentan contra la libertad e integridad sexual, así como los cometidos dentro del ámbito familiar, sin embargo, la prisión preventiva es la última ratio a solicitar en delitos menos graves y la misma se solicitará atendiendo los factores de riesgo que se circunscribe en el caso concreto.
 - d) Se valorarán con enfoque de género las circunstancias que puedan incidir en la determinación de la pena a solicitar y, en su caso, en la determinación de la responsabilidad civil. Los y las fiscales promoverán formas de reintegración, reparación del daño e indemnización de los perjuicios que incluyan formas de reparación simbólica, a fin de lograr la reparación integral del perjuicio. Para ello, coordinarán acciones con la Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia de Género.
 - e) Los y las fiscales deberán valorar, analizar y enfocar la investigación con el objetivo de descartar estrategias de defensa que pretendan justificar la violencia de género argumentando el estado de emoción violencia o la defensa del honor por parte del presunto agresor como causas de atenuación o exención de la responsabilidad criminal. Estas prácticas son contrarias al enfoque de género y actúan como justificaciones de la conducta dominante sobre la mujer, culpabilizando a ésta de lo sucedido.
 - f) En caso de que el acusado cometa los hechos bajo los efectos del alcohol o de sustancias tóxicas o estupefacientes, y ello constituya la conducta habitual, los

y las fiscales, valorarán no aplicar la atenuación de la responsabilidad criminal por actuar bajos los efectos de dichas sustancias cuando la ingesta habitual de alcohol o drogas exponga a la víctima a una mayor situación de riesgo. Por consiguiente, al momento del interrogatorio se debe acreditar si el agresor en el momento de comisión de los hechos había consumido alguna de estas sustancias y si esto afectó de manera significativa su comprensión de la realidad y le impidió actuar de manera distinta ante el evento y a su vez acreditar que éste se colocó en esta condición a con el ánimo de cometer el delito y librarse de la responsabilidad penal.

De la actuación fiscal durante el proceso

En todas las etapas del proceso los y las fiscales deberán seguir las siguientes directrices y recomendaciones en materia de violencia de género:

- Respetar y velar por que se respete desde el inicio del proceso el Principio de Reconocimiento y Protección de la víctima, consagrado en el art. 5 del código penal, sobre todo en aquellas audiencias donde la víctima este presente y solicite su intervención.
- Solicitar y fundamentar las Medidas Cautelares necesarias para cada caso en concreto, teniendo en cuenta para ello las finalidades y criterios previstos en el art. 166 del Código de Procedimiento Penal. Para lo cual deberán analizar de manera objetiva y proporcional las siguientes circunstancias: La peligrosidad del agresor, la cercanía con el agresor, la gravedad del hecho denunciado de acuerdo a sus circunstancias y la necesidad de protección de la víctima y testigos fundamentando la necesidad de su adopción.
- Cuando se solicite o se impongan Medidas Cautelares Alternas a la Prisión Preventiva, se debe solicitar la orden judicial de protección y auxilio dirigida a la autoridad policial y garantizarle a la víctima la copia de dicha orden para que la pueda hacer valer ante la autoridad más cercana en caso de amenaza fuera o dentro de su domicilio ³². De igual forma deberá de realizarse coordinación con la Unidad de Atención a Víctimas para el seguimiento de las medidas, con la finalidad que en caso de incumplimiento de una de las medidas de manera oportuna se solicite al Judicial en caso de ser procedente la Revisión de las Medidas Cautelares conforme lo disponen los art. 171 y 172 del Código Procesal Penal.
- Coordinar con la Oficina de Atención a Víctimas y/o Centros de Apoyo a la Mujer y/o Niñez y Adolescencia, la atención y seguimiento de las víctimas presentes en el territorio, a fin de garantizar la asistencia a la víctima para su empoderamiento y su participación en el proceso penal. Es deber de los y las fiscales promover y garantizar la atención integral de la víctima ya que no basta con cumplir con la solución del conflicto penal al esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales, sino también la respuesta del sistema de justicia debe dirigirse a proteger y restituir los derechos de las víctimas.

32. Art. 25 inciso g) Ley 779.

- Asesoramiento a la víctima y preparación de testigos. La víctima debe conocer sobre las posibles incidencias del caso y comprender lo vital de su colaboración; prepararla para soportar el estar frente al victimario, pero velar que su comparecencia sea por el tiempo pertinente y que se respete su dignidad humana y por supuesto evitar la victimización secundaria³³.
- Utilización de la prueba anticipada conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Ley 779:
 - Cuando la víctima o testigo corra el peligro de ser expuesto a presiones mediante violencia, amenaza, oferta o promesa de dinero u otros beneficios análogos.
 - Por razones de reprogramación, suspensión o interrupción del juicio oral y público cuando la víctima se vea imposibilitada de presentarse o prolongar su permanencia en el asiento del tribunal para acudir a la nueva convocatoria de juicio, por encontrarse el domicilio de la víctima alejando del asiento del tribunal, o haya poco acceso a medios de transporte por hay peligro de muerte de la víctima o es residente en el extranjero. Ante esta situación es menester vigilar que se cumplan con los requerimientos legales que señala el referido artículo concatenado al art. 202 del Código Procesal Penal.
- Protestar de manera respetuosa las decisiones y resoluciones judiciales que vulneren derechos y garantías constitucionales, procesales de las víctimas y/o denieguen su derecho de acceder a la justicia; asegurándose que dichas protestas consten en las respectivas actas a fin de valorar los medios de impugnación que resulten procedentes.
- Promover los Recursos de Impugnación que correspondan sobre todas aquellas resoluciones judiciales que denieguen el derecho de acceder a la justicia a las víctimas y/o resulte evidente la mala aplicación de la Ley Sustantiva en perjuicio de las víctimas.
- Velar por el cumplimiento de los plazos establecidos para la duración máxima del proceso, solicitando las interrupciones del cómputo del plazo, cuando la demora sea atribuible a la defensa u obedezca a razones de caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo establece el art. 134 del Código Procesal Penal.
- Estar atento al cumplimiento del Intercambio de Información y Pruebas por parte de la Defensa con la finalidad de solicitar conforme al procedimiento establecido en los art. 277, 279 y 280 del Código Procesal Penal, la Audiencia Preparatoria, para la exclusión de las pruebas ofrecidas que resulten impertinentes, inútiles e ilegales.
 - A efecto de garantizar la reproducción de la prueba durante el juicio oral y público es importante ofrecer o incorporar en el escrito de intercambio de información de prueba, el nombre del perito como la persona que en su defecto lo supervisó.
- En los casos de agresiones sexuales a niños, niñas y adolescentes, los y las fiscales deberán de solicitar que el juicio se desarrolle en privado como una Medida necesaria para preservar la indemnidad de las víctimas y evitar que estas revivan públicamente acontecimientos que han impactado o comprometen su equilibrio psicológico

33. Art. 4 inciso j) Ley 779.

y emocional. Todo con fundamento en el art. 34 de la Constitución Política y art. 13, 281 y 285 del Código Procesal Penal.

- Cuando en juicio deban de rendir testimonios menores de edad víctimas de agresiones sexuales, se debe solicitar al juez de la causa que se tomen las Medidas Necesarias de acuerdo a las condiciones del Despacho Judicial (solicitar mamparas), a fin de evitar la confrontación directa y personal entre la víctima y su agresor, lo que adquiere caracteres dramáticos sobre todo cuando éste, es además su padre o una persona estrechamente relacionada con el círculo familiar, por lo que cualquier medida encaminada a mermar las tensiones se justifica en la supremacía del interés superior del niño, niña y adolescente y en el principio de reconocimiento y protección de la víctima, sin que se vulnere por ello garantías relacionadas al derecho de defensa.
- Emplear un lenguaje asequible durante los interrogatorios a víctimas y testigos, evitando formular preguntas en tono imperativo o intimidatorio, procurando estimular su colaboración y poner especial énfasis en la necesidad de su comparecencia al acto de juicio³⁴.
- Objetar las preguntas formuladas por la defensa que denigren y/o estigmaticen a la víctima, así como las preguntas impertinentes, capciosas y repetitivas que se formulen durante el contra interrogatorio, tal a como se encuentra previsto en los art. 316 del Código Procesal Penal.
- Evitar la confrontación entre la víctima y el acusado, cuando estos deban de coincidir de manera inevitable en las audiencias o despacho fiscal en procura de una solución alterna al conflicto, mediante la aplicación de un criterio de oportunidad si resultare procedente conforme a la ley.
- Oponerse a las Clausuras Anticipadas, cuando la solicitud verse en la falta de interés en el proceso por parte de la víctima, el o la Fiscal deberá realizar el debate final, cuando se cuenta o se ha evacuado prueba de cargo suficiente, pertinente y necesario para acreditar el hecho acusado. Dicha acción del Fiscal debe ser aún mantenida en aquellos delitos de acción pública a instancia particular, ya que el requisito de procedibilidad para instar a la acción penal ya fue subsanado en las primeras etapas del proceso penal.
- Sobre el debate de la pena en caso de declaración de culpabilidad: Solicitud de penas y formas de ejecución de la misma. Es importante, que los y las Fiscales aporten pruebas, que acrediten las circunstancias agravantes del tipo penal.
- La actuación del Fiscal en la etapa de Ejecución de la Pena, debe dirigirse a garantizar lo siguiente:
 - Observancia y seguimiento del cumplimiento de la pena o medida de seguridad impuesta al acusado en el juzgado de ejecución o segunda instancia.
 - Que todo debe ser tramitado con el Juez de Ejecución, para llevar el control sobre el cumplimiento de la pena.

34. Ver pag Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia de Género sobre lo que no se debe hacer a la hora de entrevistar con un menor de edad.

- Pronunciarse en tiempo y forma, sobre la situación de los beneficios legales a los que pueda tener derecho el agresor o victimario, de manera objetiva, asegurando que se cumplan con las prohibiciones y condiciones que establece cada uno de los beneficios legales solicitados.
- Conocer y determinar el comportamiento en régimen carcelario del condenado por violencia de género, a fin de poder tener un efectivo pronunciamiento ante las solicitudes de los beneficios legales o penas diferidas para discernir objetivamente sobre la utilidad y proporcionalidad de su aplicación.
- Es importante destacar en las audiencias de incidentes de pena diferidas, sobre todo en la suspensión de la ejecución de la pena, que se cumplan los requisitos del arto 88 Nuevo Código Penal, sobre todo en lo relativo a la reincidencia y a la satisfacción de las responsabilidades civiles

A.1. Aplicación de Penas Agravadas en los Delitos de Violencia Doméstica y Violencia Sexual

Tomando en consideración que la función primordial de la pena es la tutela jurídica, entendida como protección de los bienes e intereses cuyo pacífico disfrute ha de garantizar el Derecho. Por lo tanto el sistema de ejecución de penas, orienta a la reeducación y reinserción del condenado a la sociedad

En consecuencia cuando hablamos de penas agravadas nos debe regir la necesidad de concreción y certeza dimanantes del principio de legalidad y la necesidad de adaptar la pena al hecho delictivo en concreto y al delincuente en particular, tanto por razones de utilidad y conveniencia, como por imperativos de justicia.

Por otra parte, debemos observar que las medidas de seguridad que recoge nuestra ley penal sustantiva se acoge a un modelo exclusivo de peligrosidad criminal y de medidas de seguridad post delictuales, rechazándose modelos de peligrosidad social y de medidas de seguridad pre delictuales. Es decir no se puede imponer medida sin que el sujeto haya delinquido anteriormente. Por ello para solicitar medidas de seguridad debe tomarse en cuenta que esta dirigida a dos clases de sujetos: a los inimputables y a los semi imputables.

El Nuevo Código Penal recoge las agravantes de modo tasado, mediante un sistema cerrado que no admite la creación de agravantes analógicas.

- 1) Agravantes generales contenidas en el Código Penal en lo relativo a casos de violencia intrafamiliar o violencia de género:
 1. **Arto 36 inciso 5:** El cual contiene como agravante general la discriminación por motivos de sexo, orientación sexual, enfermedad o discapacidad que padezca.

2. **Arto 36 inciso 7:** Referido al abuso de confianza cuando el autor aprovecha la posición alcanzada como consecuencia de la confianza depositada por la víctima, en violación de los principios de lealtad y fidelidad, derivados por los vínculos de parentesco.
 3. **Arto 36 inciso 11:** Referido al prevalimiento en razón de género. Cuando el hecho realizado se ejecuta aprovechándose de una relación de dependencia, autoridad o afinidad, para causar perjuicio a otra persona en razón de su sexo, sea que deriven esas relaciones del matrimonio, unión de hecho estable u otra relación de afinidad o laboral y aún cuando la relación hubiera cesado.
- 2) Agravantes mixtas: atenuante o agravante:
1. **Arto 37 Nuevo Código Penal:** El parentesco podrá ser atenuante o agravante de responsabilidad penal, según la naturaleza, motivos y efectos del delito, la de ser la víctima u ofendido el cónyuge o compañero en unión de hecho estable del ofensor; lo mismo que sus parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
- 3) Agravantes específicas contenidas en la parte especial del Código Penal en lo relativo a la violencia doméstica o intrafamiliar y violencia sexual:
- El nuevo código penal contiene dentro de diversos tipos penales y formas de punición, una serie de circunstancias específicas que agravan la responsabilidad penal de los autores penales, cuando en las formas o modos de ejecución de los actos delictivos se realicen mediante violencia doméstica o intrafamiliar o cualquier manifestación de violencia que se aplique en el ámbito privado según lo establecido en el art. 2 de la Ley 779. Al respecto cabe señalar las siguientes:
1. El Arto 58: señala dentro de las formas de inhabilitación especial las que conlleven el ejercicio de los derechos derivados de la relación padre, madre e hijos, tutela o guarda, la que consiste en la privación del penado del ejercicio de estos derechos durante el tiempo de la condena.
 2. El arto 183: establece la pena de inhabilitación especial para ejercer los derechos derivados de la relación madre, padre e hijos, tutela o guarda. Tales señalamientos están dentro de las disposiciones comunes para los delitos de violación agravada, estupro agravado, abuso sexual, explotación sexual, actos sexuales con adolescentes mediante pago y pornografía, promoción del turismo con fines de explotación sexual, proxenetismo agravado, rufianería o trata de personas con fines de esclavitud o explotación sexual cuando el autor del hecho sea el padre, madre o responsable legal del cuidado de la víctima.
 3. El arto 161: que regula el delito de utilización de niños, niñas, adolescentes, discapacitados o personas de la tercera edad para mendicidad, en el párrafo segundo, señala la pena de inhabilitación especial para ejercer los derechos derivados de la relación madre, padre e hijos, tutela o guarda; como pena accesoría, cuando el autor de este delito fuera el responsable legal.
 4. El arto 169: regula la violación agravada en sus incisos a) Cuando el autor cometa el delito prevaliéndose de una relación de superioridad, autoridad, parentesco, dependencia o confianza con la víctima, o de compartir permanentemente el

hogar familiar con ella; y el inciso c) Cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad o discapacidad física o psíquica para resistir, o se trate de una persona embarazada o mayor de setenta y cinco años de edad.

5. El arto 171: que contiene la figura de estupro agravado, expresa cuando éste sea cometido por quién esté encargado de la educación u orientación espiritual, guarda o custodia de la víctima o por persona que mantenga con ella relación de autoridad, dependencia o familiaridad o comparta permanentemente el hogar familiar con ella.
6. En el título V del Nuevo Código Penal, regula los delitos contra la familia, específicamente en el capítulo II que contiene los delitos de Alteración de la maternidad y paternidad, establece en los tipos penales de simulación de parto, alteración de filiación y sustitución de niña o niño, agravantes específicas cuando éstas conductas fueran realizadas por un ascendiente, tutor o guardador de niño, o niña y agrega la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de la relación madre, padre e hijos, tutela o guarda que tuviere sobre el hijo o descendiente simulado, ocultado, entregado o sustituido.
7. Dentro de los delitos patrimoniales se encuentra la figura del hurto agravado en el arto **220 inciso h)** el que establece agravante cuando el hurto se haya realizado abusando de las circunstancias personales de la víctima.

Sobre las Penas Accesorias relativas a los delitos de Violencia de Género

Consideraciones Generales

De acuerdo al Diccionario de derecho usual del Dr. Guillermo Cabanellas penas accesorias son: "Las que por declaración legal aun cuando se exija el pronunciamiento por el tribunal sentenciador acompaña a otra la principal."

La justificación de la existencia de las penas accesorias por las que junto a la pena principal, se priva de determinados derechos al condenado se basa en la pérdida de legitimidad para el ejercicio de los mismos por parte de quien resulta condenado en un proceso penal.

De acuerdo a nuestra legislación las penas accesorias se clasifican en:

- La privación de otros derechos
- Días Multas
- La Multa

La privación de otros derechos en los delitos vinculados a la violencia de género conlleva gran connotación desde el punto de vista de la seguridad jurídica de la víctima y para la sociedad. Es por ello que los y las fiscales en el debate de pena deberán solicitar las penas accesorias que conlleven la privación de otros derechos en concordancia al tipo penal y a las circunstancias y modalidades del hecho.

Son penas privativas de otros derechos de acuerdo al art. 54 del código penal:

- Las de inhabilitación absoluta
- Las de inhabilitación especial
- La privación del derecho a la tenencia y portación de armas
- La privación del derecho a residir en determinados lugares o de acudir a ellos.
- El trabajo en beneficio de la comunidad.
- La Obligación de participar en programas de orientación, atención y prevención dirigidos a modificar sus conductas violentas para evitar reincidencia³⁵.

Para el cumplimiento de esta línea de actuación los y las fiscales deberán observar las siguientes disposiciones del Código Penal:

De conformidad a los artículos 59 y 60 de nuestro código Penal, establece la privación del derecho de portación de arma, y del derecho a residir en determinado lugar, en la cual se establece que se debe revocar la autorización de portar arma y prohíbe su nueva obtención.

El arto 159 establece quien exponga al peligro o la integridad de un niño o niña o persona incapaz de valerse por sí misma, la abandone o coloque en situación de desamparo, si el autor fuera el responsable legal del cuidado del niño o niña o incapaz de valerse por sí misma se impondrá además de la pena principal, la inhabilitación especial de los derechos de la relación madre, padre e hijos, tutela o guarda

Art. 183 el cual establece como pena de inhabilitación especial, por el plazo señalado para la pena de prisión de los derechos derivados de la relación madre, padre e hijos , tutela o guarda cuando el autor de violencia agravada , estupro agravado , abuso sexual, explotación sexual, actos sexuales con adolescentes mediante pago y pornografía, promoción del turismo con fines de explotación sexual , proxenetismo agravado, rufianearía o trata de personas con fines de esclavitud o explotación sexual sea el padre madre o responsable legal de los cuidados de la víctima.

Así mismo los y las fiscales en la audiencia de debate de pena deberán solicitar el Decomiso de los Bienes o instrumentos utilizados en la comisión del hecho delictivo, tal a como dispone el art. 112 del código penal.

A.2. Aplicación del principio de oportunidad en casos de violencia de género

La aplicación de los nuevos institutos procesales que permiten finalizar el proceso penal, sin que llegue a la fase del debate, tales como: Consejería Familiar Institucional,

35. Ejecución de la Pena de los delitos regulados y señalados en la Ley 779 Art. 50.-

mediación (previa y durante el proceso), acuerdo, suspensión condicional de la persecución penal y la prescendencia de la acción penal, cobran especial importancia cuando se trata de aplicarlos en delitos derivados de violencia de género.

Los y las fiscales deben analizar las situaciones específicas de violencia, aunque no siempre dejan evidencias físicas, pero sí producen efectos profundos que trascienden al campo emocional de las víctimas y sus otras esferas de desenvolvimiento social. Por tanto para detectar la violencia es necesario mirar más allá de lo físico y explorar conductas y actitudes que nos puedan mostrar formas, ciclos, historias, niveles de afectación, peligro real u otros para lo cual los peritos forenses son un recurso vital para esta tarea.

Abordaremos en este protocolo la aplicación de las Consejería Familiar Institucional y los principios de oportunidad como la mediación, acuerdo y suspensión de la persecución penal, en virtud que el acuerdo condicionado, depende de circunstancias especiales de aceptación de hechos acusados y cooperación en posteriores persecuciones, lo que obedece al manejo de política criminal del Ministerio Público, igual que con la institución procesal de Prescendencia de la acción penal que corresponde a disposiciones específicas del Fiscal General de la República.

La actuación fiscal en la mediación previa

Es por ello, que es necesario que los y las fiscales, se preparen y conozcan las dimensiones de esa problemática para erradicar el mal manejo sobre la visión de la violencia donde históricamente se ubica como un problema del ámbito privado, mirando con indiferencia como el hogar se convierte en un espacio peligroso e inseguro, donde menos se posibilita el adecuado y armónico desarrollo físico, intelectual, sexual y psicológico de sus miembros. No obstante existen otra gama de delitos donde no existe una prohibición expresa de la aplicación del principio de oportunidad. En consecuencia

En los delitos comprendidos en el art. 46 de la Ley 846 arto. 13 y 14 del Reglamento y 15 inc a violencia física literal b) y violencia psicológica literal b) que son sujetos a Mediación son:

1. La mediación sólo procederá en los delitos menos graves
 - a) Violencia física si se provocan lesiones leves (artículo 10 literal a);
 - b) Violencia psicológica si se provoca daño a su integridad psíquica que requiera tratamiento psicoterapéutico (artículo 11 literal a);
 - c) Violencia patrimonial y económica exceptuando la explotación económica de la mujer (artículo 12 literal e);
 - d) Intimidación o amenaza contra la mujer (artículo 13);
 - e) Sustracción de hijos o hijas (artículo 14);

- f) Violencia laboral (artículo 15);
- g) Violencia en el ejercicio de la función pública contra la mujer (artículo 16);
- h) Omisión de denunciar (artículo 17);
- i) Obligación de denunciar acto de acoso sexual (artículo 18);
Violencia Psicológica inciso b) y Violencia física inciso b).

Debemos tomar en consideración que el Nuevo Código Penal establece imperativamente en el artículo 181 la restricción de la Mediación y otros beneficios de suspensión de pena; cuando el delito sexual sea cometido contra niños, niñas y adolescentes.

En los delitos antes descritos la Mediación es una facultad que el Ministerio Público puede ejercer o aplicar bajo los siguientes parámetros de actuación:

- Que el hecho denunciado por la víctima debe ser orientado jurídicamente por el Ministerio Público, para el esclarecimiento de los hechos, la obtención de los elementos de convicción y el análisis de la valoración del riesgo que enfrenta la víctima, lo que nos permita determinar el ejercicio de la acción penal. Esto obedece a que el efecto jurídico de la falta de acuerdo o del incumplimiento de los acuerdos reparatorios, obliga al Ministerio Público a ejercer o reanudar la acción penal.
- Para la valoración del riesgo los y las Fiscales deberá auxiliarse de los indicadores o factores de riesgos regulados en el Protocolo de la Actuación de la Gestión Fiscal en materia de violencia de género.
- Para la validez de la Mediación los y las fiscales deberán verificar lo siguiente:
 1. **Validez y procedencia:** Es verificar si el delito denunciado es objeto de mediación y si esta procede conforme los requisitos previstos y autorizados en la ley y el reglamento. Se debe explicar sobre los alcances y trascendencia jurídica de la aplicación de este principio de oportunidad.
 2. **Verificación de la Voluntad de las víctimas:** Los y las fiscales deben de corroborar de forma personal, si la voluntad de la víctima está libre de todo vicio, amenaza, coacción, chantaje e intimidación, por lo que debe plasmarse esa voluntad de forma expresa.
 3. **Verificación de Antecedentes Judiciales:** Para proceder aplicar el principio de oportunidad de la mediación, deberán contar con el requisito formal antecedente judicial establecido en el art. 46 de la Ley 846 y art. 16 y 17 del reglamento. Debiendo corroborar el último domicilio del imputado de los últimos tres años.
 4. **Verificación de Mediaciones anteriores:** En el entendido que la mediación procede por una sola vez, las y los fiscales deben confirmar y solicitar a la Oficina de Criterio de Oportunidad del Ministerio Público adscrita al Departamento de Planificación y Estadística, que el imputado no haya sido beneficiado con este principio en otro departamento o región del país, con la misma víctima u otra víctima y conductas delictivas establecidas en la competencia objetiva del art. 32 de la Ley 779.

- En los casos donde se solicite la Mediación Previa con imputado detenido, durante los fines de semana, días feriados, semana santa, vacaciones de fin e inicio de año, y no se obtenga la constancia de antecedente judicial, se procederá al ejercicio de la acción penal que corresponda.
- Cuando se solicite al Ministerio Público aplicar la mediación previa y del análisis del informe policial se desprenda que los elementos de prueba son insuficientes, no procederá la mediación hasta complementar la investigación, para ello, los y las fiscales orientarán jurídicamente la ampliación de la investigación, a su vez decretarán las medidas precautelares reguladas en el art. 24 de la Ley 779 y coordinar con la Policía Nacional la ejecución de las mismas. De dicha resolución se le informará a las partes.
- Los y las fiscales deben de brindar la información jurídica acerca de los alcances de la mediación a las partes en conflicto, así como propiciar el consejo jurídico a la víctima.
- En los casos denunciados de aparente naturaleza penal y con la investigación allegada se determine que es de naturaleza civil, los y las fiscales deberán pronunciarse sobre la falta de procedencia de la mediación y fundamentar su resolución conforme a lo establecido en el arto 224.225 CPP.
- Las y los fiscales deberán declarar improcedente la mediación cuando en las conversaciones o propuestas del imputado a la víctima se evidencie que la voluntad de la víctima esta viciada por existir elementos de intimidación, coacción o amenaza que invalide su capacidad de negociar y se afiance la relación desigual de poder del agresor para con la víctima, ya que dichos acuerdos no tienen proporcionalidad, ni vienen a reparar el daño cometido y se desprende de ellos, que la víctima seguirá sometándose a los intereses del agresor quedando subsumida dentro del ciclo de la violencia o espiral, por ende los y las fiscales deberán dictar una resolución de improcedencia debidamente fundamentada con los instrumentos jurídicos (nacionales, internacionales Leyes, Códigos, Directrices, Convenciones y Tratados que regulan la materia) y procederán a ejercer la acción penal correspondiente presentando el respectivo libelo acusatorio ante el Juez Competente.
- Una vez declarada la improcedencia de la Mediación, y la víctima haciendo alusión a su derecho de querer continuar con la celebración de este principio de oportunidad y se presente ante el Juez de la causa solicitando la inscripción de la Mediación, y a su vez el o la Fiscal se encuentran convocados para la realización de la Audiencia Preliminar, la actuación del Fiscal deberá circunscribirse a defender la improcedencia de la Mediación y continuar con las finalidades de la audiencia, en caso de que el Juez resuelva inscribir la mediación, por considerar que se antepone la voluntad de la víctima, se les orienta a los y las fiscales que deberán dejar protesta y apelar de dicho auto por impedirnos el ejercicio de la acción penal (art. 376 inciso 4 del CPP), por ser el Ministerio Público el facultado para ofrecer medidas alternativas a la persecución penal o limitarla alguna o algunas infracciones o personas que participaron en el hecho punible.

- Derecho de la víctima vrs potestad del Ministerio Público.
- En los territorios donde no hay presencia fiscal se faculta a los Jueces Locales Penales o Únicos a realizar Mediación de conformidad a la LOPJ y art. 46 parte infine del párrafo 9no de la Ley 846 que reforma la Ley 779, los jueces podrán realizar mediaciones cuando las partes le soliciten que admita la aplicación de este principio de oportunidad, el procedimiento se ceñirá conforme a lo establecido al fiscal debiendo levantar un acta de los acuerdos e inscribir la mediación, dictando el correspondiente auto.
- Encontrándose el Fiscal en Sede Judicial y las partes le solicitan Mediación, el Juez remitirá a las partes al Fiscal para que la Mediación se formalice ante dicha institución y se recogan los acuerdos mediante el acta correspondiente la cual será presentada ante el Juez dentro del plazo de 10 días
- Para considera la validez y procedencia de la mediación no basta que la víctima exprese la voluntad de realizar mediación, sino los y las fiscales que la voluntad de esta no este viciada de ninguna forma (dolo, engaño, coacción, amenazas, dependencia, intimidación), para lo cual los y las fiscales deberán tomar en cuenta los elementos aportados en el informe policial y realizar la valoración del riesgo.
- Declarada la procedencia de la Mediación los y las fiscales deberán asegurarse que se establezca claramente el Acuerdo reparatorio, la forma de cumplimiento, el régimen de prueba, si es total o parcial, para su debida inscripción ante el Judicial y posterior control de legalidad según lo establecido en el art. 46 párrafo ocho de la Ley 846.
- **Seguimiento .**
- En los casos en que concurran varios tipos penales e investigados y proceda en alguno de ellos aplicar el principio de oportunidad según la ley 846, los y las fiscales podrán efectuar una MEDIACION PARCIAL y continuar el ejercicio de la acción penal con los que proceda. Debiendo llevar un efecto control y registro de las mediaciones declaradas procedentes y válidas.
- Si un hecho denunciado por Violencia Económica y Patrimonial específicamente el regulado en el inciso c) que corresponde a la **Limitación al ejercicio del derecho de propiedad art. 12 dela Ley 779**, las partes soliciten al Ministerio Público la aplicación de una Mediación Previa, los y las fiscales deberán verificar previamente que en el informe policial role resolución judicial sobre los bienes que conforman el patrimonio familiar. De no contar con esta resolución los y las fiscales deberán declarar la falta de procedencia de la Mediación, en base a lo establecido en la Ley 415 "**Ley de Patrimonio Familiar "Ley 415"**", debiendo realizar las debidas derivaciones al área de Familia de la Defensoría Pública y/o Centro de atención que brinden asistencia jurídica en materia civil "familia", para que las partes obtengan dicha resolución. Para el ejercicio de la acción penal el Ministerio Público requiere por ser un elemento normativo del tipo penal "bienes que formen parte del patrimonio familiar" tener claramente definido cuales son los bienes que conforman el patrimonio familiar volviéndose esto una condición de procedibilidad.

- Apelaciones:

- a) Mediación.

- b) La Suspensión Condicional de la Persecución Penal.

Criterio de oportunidad regulado en los art. 63 al 68 del Código Procesal. El cual establece la viabilidad de su aplicación, en los delitos menos graves, cuya aplicación es sólo una sola vez a favor del acusado, el cual una vez iniciado el proceso y antes de que la causa sea remitida a juicio, manifieste su conformidad con los hechos imputados y se somete durante un plazo, a un régimen de prueba, el cual debe cumplirse satisfactoriamente con determinadas obligaciones legales e instrucciones que impone el tribunal para el caso concreto, con consecuencias jurídicas ante el incumplimiento de las medidas.

Entre la Mediación y la Suspensión Penal de la persecución penal; la aplicación de este segundo principio de oportunidad, es el que resulta más idóneo y proporcional en los delitos de violencia de género cuya competencia se debe ventilar en un juzgado local, por ser los delitos que se produzcan menos graves, esto obedece a que el sistema o reglas de régimen de prueba que recoge la Sentencia; tienen una doble finalidad, la primera permite que el acusado, trate factores personales, los cuales inciden en su comportamiento violento en el núcleo familiar y el establecer una obligación jurídica, esta viene a ayudar o mejorar su condición educacional, emocional y social, lográndose la reinserción del mismo en la sociedad y en su comunidad. La segunda finalidad que cumple este principio, que se le brinda mayor protección y seguridad jurídica a las víctimas, ya que ofrece la posibilidad de alejar a la persona agresora del grupo familiar y someterla a un tratamiento psicológico, de participar en programas especiales de tratamiento para combatir el alcoholismo o la drogadicción, lo que permite, una vez concluido este régimen pueda establecer relaciones armónicas con las personas del núcleo familiar, ejerciendo sus derechos y cumpliendo sus obligaciones conforme la ley de materia (leyes de familia) y a su vez puede realizar una reparación integral del daño patrimonial, tomando en cuenta que una de las manifestaciones de la violencia intrafamiliar es la violencia patrimonial, en donde el agresor sustrae o destruye los bienes propiedad de la víctima.

- c) Acuerdo Simple:

Esta figura de carácter procesal la cual tiene su fundamento legal en el art. 61 Código Procesal Penal, es un instituto procesal cuyo objetivo versa en la posibilidad de que el imputado, una vez iniciado el proceso penal, admita los hechos acusados, en su beneficio y por economía procesal, de manera tal que se evita la sustanciación de un juicio oral y público, obteniendo en su lugar una disminución de la sanción penal, o la prescindencia parcial de la persecución penal o disminuir el grado de participación.

Cuando el acusado y su defensa busquen un acercamiento con el Ministerio Público en procura de un acuerdo. Los y las fiscales en los delitos vinculados a la violencia de género deberán tener en cuenta que la aplicación de este criterio de oportunidad

evita la revictimización, además de permitir la obtención de una sentencia condenatoria de manera expedita conforme las finalidades del proceso penal previstas en el art. 7 del Código Procesal Penal.

Siendo una facultad del Ministerio Público decidir sobre la aplicación de este criterio de oportunidad y de negociar la sanción penal así como las circunstancias de su ejecución. Los y los fiscales en los delitos de violencia de género deberán:

1. Procurar la presencia de la víctima o su representante al momento de practicarse la negociación del acuerdo y brindarle la oportunidad de opinar.
2. En caso de que la víctima, exprese que no está de acuerdo con la aplicación de dicho principio de oportunidad, así lo plasmarán en el documento que recoge el Acuerdo, a la vez notificarán a la víctima de la realización de la audiencia de control de legalidad que realice el Judicial, a fin de que la misma exprese lo que tenga a bien, garantizando que en el trámite, se le dio la intervención de ley, como en derecho corresponde. Los y las Fiscales, deberán de tomar en cuenta, que en violencia de género siempre resulta recomendable evitar la revictimización, máxime si en la negociación se ha logrado garantizar el principio de justicia que señala el Código Procesal Penal.
3. En caso en que la víctima no se encuentre presente a pesar de haber sido citada se deberá Notificar de manera formal sobre los términos y condiciones en que se ha suscrito el acuerdo. Y aún cuando hubiese estado presente se deberá Notificar a la víctima dejándose constancia en el Acta respectiva.

Aspectos dogmáticos “teoría general del delito”

Con el fin de cumplir uno de los objetivos planteados en este Protocolo, como es la Unificación de criterios en la Gestión Fiscal, se ha considerado de suma importancia incluir un acápite que contenga consideraciones de carácter dogmático aplicables de manera general y común al momento de analizar los diferentes tipos penales, incluyendo en este apartado el análisis de los tipos básicos, que con mayor frecuencia se manifiesta la Violencia de Género.

Se pretende proporcionar a los y a las fiscales de un pormenorizado análisis del Bien Jurídico Protegido, de los sujetos activos y pasivos y así como de los conceptos o elementos normativos que integran estos tipos penales, con el fin de facilitarles una guía práctica de consulta en el cumplimiento de sus funciones.

Para ello, es necesario recordar que modernamente la doctrina define al delito como una conducta típica, antijurídica y culpable. De ahí que el fiscal en primer lugar debe realizar un análisis de la tipicidad en la etapa investigativa, sin perjuicio del análisis posterior de la antijuridicidad y culpabilidad que requiere cada hecho para poder considerar si estamos ante la presencia de un delito o no.

Dentro del análisis de la tipicidad, que se subdivide en tipo objetivo y tipo subjetivo, el tipo objetivo consiste en primer lugar en la "acción" determinada por el verbo rector que generalmente lo componen verbos transitivos o intransitivos. Debemos entonces distinguir que aunque en un tipo penal encontremos varios verbos o acciones, no todos delimitan cual es la acción perseguible, porque podemos encontrar verbos que sólo están subordinados a la oración principal y no son verbo rector. Ej. El verbo "matar", es intransitivo porque no requiere de ningún complemento que lo explique porque se explica por sí mismo. Por el contrario, el verbo "Promover" no se explica por sí mismo y requiere de un objeto que le dé forma al verbo para comprender qué es lo que se promueve y por ello encontramos en la norma. "Promover la corrupción sexual".

En segundo lugar, encontramos el bien jurídico tutelado que en este tipo de delitos es la libertad. No obstante, algunos delitos que afectan también otros derechos, como lo es la autodeterminación sexual, la indemnidad sexual, la familia, según el caso. Aquí se requiere además de un simple análisis del bien jurídico tutelado, requiere de una valoración desde el punto de vista del principio de lesividad, es decir del análisis de hasta qué punto se puso en peligro o se violentó el bien jurídico protegido.

Los sujetos activos y pasivos pueden ser indeterminados si no requieren de ninguna condición especial para constituirse el delito o determinados, si la ley establece alguna especialidad en cuanto a la edad, el sexo, parentesco o condición social de autoridad o poder.

Elementos Normativos que a su vez se subdividen en socioculturales, si requieren una interpretación por parte del judicial de acuerdo con la concepción que se tiene dentro de la sociedad en que vivimos, técnicos o periciales, si requiere del auxilio de un especialista en determinada materia para su comprensión y jurídicos si no requieren de ninguna interpretación porque ya la ley establece su definición o significado. Finalmente, los elementos subjetivos que implícitamente conllevan la intencionalidad del agente en la comisión del delito y se logra identificar dentro de descripción del tipo penal con las frases: "a sabiendas de", "con la finalidad de", "con el propósito de", "sin la autorización de".

Al cumplimiento de todos estos requisitos del tipo penal se le llama "Principio de Plenitud del Tipo Penal", según el cual si falta uno de los requisitos exigidos, no tenemos tipicidad y consecuentemente no sería viable analizar las siguientes etapas (antijuridicidad y culpabilidad) puesto que no estaríamos ante la presencia de una conducta delictiva y le compete al fiscal de manera objetiva desestimar la denuncia.

Al cumplirse los requisitos establecidos en la tipicidad, se debe analizar si la conducta es Antijurídica, entendiéndose esta como el comportamiento típico contrario al ordenamiento jurídico como un todo, es decir, contrario a todas las ramas del ordenamiento,

sin embargo no basta con el solo hecho que exista una relación de oposición entre la acción y el ordenamiento jurídico, sino que es necesario que exista una vulneración o puesta en peligro al bien jurídico que la norma quiere proteger. El contenido de la antijuricidad, no se agota con el desvalor del resultado, sino que requiere que la misma se derive de una acción desaprobada (desvalor de la acción). Así mismo, no podemos obviar que el ordenamiento jurídico no solo consagra prohibiciones y mandatos, **sino también autorizaciones para actuar** y estas son las llamadas Causas de Justificación, las cuales eliminan la contradicción de la conducta con el ordenamiento jurídico y por ende se excluye la responsabilidad penal, en virtud de la inexistencia del presupuesto de antijuricidad, para ello debe de existir congruencia entre el tipo objetivo y el tipo subjetivo.

Y por último, se entra a analizar el tercer elemento clásico de la teoría del delito como es la Culpabilidad, “Culpable es aquel que no es disculpable”, es decir, culpable es aquel que no determina su conducta de acuerdo a lo que le exige la ley, y delinque pudiéndose haberse comportado de otra manera, en consecuencia la conducta le es imputable por las condiciones de orden personal y social imperantes en el medio donde actúa el sujeto, le permitían dirigir su comportamiento de una manera acorde con lo que le exigía el ordenamiento jurídico y no lo hizo. Para ello, es importante determinar la capacidad de culpabilidad, reconocimiento o comprensión del carácter ilícito de la conducta y la posibilidad de motivarse de acuerdo a esa comprensión. Es importante recordar, que para la determinación de la responsabilidad penal, poco importaría que la eximente, esté en la antijuricidad o en la culpabilidad si el resultado es el mismo, pues no se da la existencia plena de un delito.

Análisis estructural de tipos penales mas frecuentes en materia de violencia de género

Es importante destacar que los tipos penales que a continuación se describen son los que usualmente forman parte de hechos delictivos de violencia de género. De tal manera que se pretende dar a conocer sus principales manifestaciones y presupuestos jurídicos formales y materiales que contiene el tipo en particular, a fin que a los fiscales se les facilite la solicitud de diligencias pertinentes a la investigación para una eficaz demostración de la tipicidad en el proceso penal.

Analisis estructural de los delitos regulados y sancionados en la ley 779 ley integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas a la ley 641 “codigo penal”

Art. 9: Delito de Femicidio

Elementos Objetivos del Tipo:

Sujeto Activo: Es quien realiza la conducta, acción u omisión. El sujeto activo es el Hombre en su calidad de cónyuge, ex cónyuge, conviviente, ex conviviente, novio y ex novio.

Se debe entender que la condición de conviviente o ex conviviente implica a las parejas que tienen o mantuvieron una relación de pareja.

Sujeto Pasivo: Es la persona sobre quien recae la conducta típica. El sujeto pasivo es la Mujer en su condición de adolescente, adulta y adulta mayor.

Bien Jurídico Protegido: Derecho fundamental o valor que protege la norma.

- Vida y
- El Derecho a vivir libre de violencia.

Acción: Dar muerte a una mujer.

Verbo Rector: Matar

Elementos Normativos:

- Relación de pareja o de intimidad. REVISAR REFORMA REG.
- Reiterada manifestación de violencia.
- Menosprecio del cuerpo de la víctima.
- Satisfacción de instintos sexuales.
- Mutilación del cuerpo.
- Misoginia.

Iter criminis:

En este tipo penal caben todas las formas de ejecución, es decir cabe la Conspiración, Proposición y Provocación, tentativa, frustración y consumación del delito.

Es fundamental que se delimite cada fase de ejecución del delito en el caso concreto en concordancia con el artículo 28 del Código Penal.

Concursos de Delito:

Por tratarse este tipo penal que afecta bienes jurídicos eminentemente personales, cabe apreciar la concurrencia de los concursos (real e ideal). Ejemplo de ello es el tipo penal de violación básico y agravado con el delito de Femicidio, ya que la circunstancia regulada en el inciso 4) del arto. 34 del reglamento Decreto 42-2014, no debe subsumirse al delito de violación ya que se debe distinguir el instinto sexual del acceso carnal.

El delito de Femicidio que puede concurrir con el delito de aborto sin consentimiento.

Núcleos Problemáticos:

Es importante destacar que en este tipo penal se puede presentar núcleos problemáticos en la interpretación de la conducta realizada por el sujeto activo. Ejemplo:

1. Se suele confundir la Amenaza o Intimidación con la Tentativa de Femicidio y la Tentativa con la Frustración de este tipo penal. Para estos supuestos planteados debe entenderse que:
 - a) Que la amenaza es un delito de mero actividad que no requiere para su consumación más que expresar de cualquier forma el mal que se pretenda causar a la víctima. En cambio en la tentativa se requiere que el sujeto activo de inicio a los actos que llevan a la consumación del delito.

- b) En lo que respecta a la diferencia entre Tentativa y Frustración, con respecto a la Tentativa debemos de representar si el sujeto activo pudo o tenía la capacidad de realizar más actos para lograr su pretensión. En cambio en el caso de la frustración el sujeto activo debe de realizar todos los actos encaminados a lograr un resultado, es decir, debe de poner en peligro o afectar significativamente el bien jurídico protegido pero por causas externas no se dio la consumación. Tomando en cuenta los elementos objetivos de cuál era la intención del sujeto, expresiones proferidas, antecedentes del autor, naturaleza del arma, dirección, intensidad, el número de golpes, estocadas, heridas o disparos, arma empleada, zona anatómica atacada y potencial resultado letal.
2. **Conexidad y concursos de delitos:** En estos casos hay que hacer una clara diferencia de los hechos que pueden generar conductas subsumibles en concursos reales e ideales, ejemplos la Violación, aborto, también aquellas conductas que pueden generar conexidad de causas, entendiéndose que la conexidad es para efecto de establecer competencia y los concursos es para establecer la pena a imponer.
 3. En el caso del Femicidio en grado de Frustración cuando la víctima sobreviviente tiene una afectación psicológica producto de una **manifestación reiterada de violencia**, deberá de imputarse como Femicidio bajo la circunstancia del art. 9 inciso c) de la Ley 779 y inciso 3 del art. 34 del Reglamento. En los demás supuestos contemplados en el art. 34 del reglamento podría considerarse el concurso de Violencia Psicológica siempre que la valoración del daño psíquico lo determine y permita su individualidad.
 4. De conformidad al Decreto 42-2014 debe entenderse que el ámbito de aplicación del delito de Femicidio se circunscribe a las relaciones de pareja.
 5. En lo que respecta a la solicitud de pena a imponer, se deberá fundamentar la misma de conformidad al penúltimo párrafo del art. 9 de la Ley 779, es decir la pena oscilará de 20 a 25 años de prisión, si concurren dos o más circunstancias del art. 34 se aplicará la pena máxima, debiendo invocar las circunstancias del asesinato como agravantes específicas para aumentar la pena un tercio.
Las reglas para la aplicación de la pena del art. 78 no tendrán lugar cuando las circunstancias de los hechos conlleven aplicar estrictamente su propia regla de pena. En los demás casos se registrarán por las disposiciones del art. 78 Pn tomando en cuenta las circunstancias agravantes genéricas que no sean inherentes al delito, así como las atenuantes y circunstancias personales del sujeto y la ejecución material del hecho y medios empleados.

Artículo 10. Violencia física

Si como consecuencia de la violencia física ejercida por el hombre en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, causare a la mujer cualquiera de las lesiones físicas tipificadas en el presente Código, se le aplicara la pena siguiente:

- a) Si se provoca lesiones leves, será castigado con pena de ocho meses a un año y cuatro meses de prisión;
- b) Si se provoca lesiones graves, será castigado con pena de dos años y ocho meses a seis años y ocho meses de prisión;
- c) Si se provoca lesiones gravísima, será sancionado con pena de siete años y seis meses a trece años y cuatro meses de prisión.

Elementos Objetivos del Tipo:

Sujeto Activo: Determinado El hombre

Sujeto Pasivo: Determinado La mujer (niña, adolescente, adulta y adulta mayor)

Bien Jurídico Protegido:

- Integridad y Salud Física.

El bien jurídico protegido ha de ser entendido como la incolumidad personal, definida por Conde Pumpido Ferreiro como sinónimo de sano, integro, indemne y sin lesión.

Verbo Rector: Ejercer y Causar

Elementos Normativos:

- Violencia Física. Art. 8 inciso b) de la Ley 779.
- Relaciones desiguales de poder: Art. 2 del Decreto 42-2014.
- Lesiones Leves.
- Lesiones Graves.
- Lesiones Gravísimas.

Iter criminis:

Debido a las particularidades de este tipo penal, no cabe apreciar las formas imperfectas de ejecución, es decir no cabe la tentativa ni la frustración, esto en virtud de que se prevé que la conjunción de cualquier tipo de fuerza, violencia contra la mujer, viene a materializarse en una lesión física.

Concursos de Delito:

Admite las diferentes formas de concursos.

Núcleos problemáticos:

- Si durante la investigación no se determina la relación desigual de poder no se podrá imputar este delito sino que el mismo se deberá de tramitar en la jurisdicción común. Art. 10 de la Ley 779, art. 2 y 36 del Reglamento Decreto 42-2014.
- Determinada la relación de poder la misma debe ser debidamente descrita e imputada en el libelo acusatorio por ser este un elemento objetivo del tipo penal.
- Para la subsunción del daño físico se debe de avocar al concepto normativo del tipo penal básico de lesiones regulado en los artículos 150, 151, 152 y 153 del Código Penal concatenado al art. 58 de la Ley 779 y a efectos de pena deberá invocarse las establecidas en el art. 10 de la Ley 779.
- De la valoración física realizada por el Medico Forense la cual determine que la misma no requiere además de tratamiento médico después de la primera asistencia facultativa, el caso deberá tramitarse como Falta penal y no como delito de Intimidación o Amenaza, ya que se produjo un resultado.

Artículo 11. Violencia psicológica

Quien mediante acción u omisión con el propósito de denigrar, controlar las acciones, comportamientos y creencias de la mujer que haya sido o sea su cónyuge, ex cónyuge, conviviente en unión de hecho estable, ex conviviente en unión de hecho estable, novio, ex novio, ascendiente, descendiente, pariente colaterales por consanguinidad, afinidad y cualquier otra relación interpersonal; ejerza amenaza directa o indirecta, intimidación, manipulación, humillación, aislamiento, ofensas, vigilancia, comparaciones destructivas, chantaje, acoso, hostigamiento y cualquier otra circunstancia análoga que tenga como resultado un perjuicio en la salud psicológica, por la devaluación de su autoestima o el desarrollo personal, será sancionado de la siguiente manera:

- a) Si se provoca daño a su integridad psíquica que requiera, tratamiento psicoterapéutico, será castigado con pena de ocho meses a un año y cuatro meses de prisión; **En este acápite se entenderán aquellos casos donde engloba cualquier tipo de tratamiento para su recuperación, sesiones clínicas, el proceso psicoterapéutico requiere el cambio y sanación y no logró causar disfunción.**
- b) Si se causara disfunción en cualquiera de las áreas de funcionamiento personal, laboral, escolar, familiar o social que requiera un tratamiento especializado en salud mental, será castigado con pena de dos años y ocho meses a seis años y ocho meses de prisión; **son las áreas donde se expresa la disfunción pero cualquier tipo de daño te puede generar una disfunción ej la adicción al alcoholismo o drogodependencia va a tener a una repercusión. Un adicto va a requerir un tratamiento específico, pero va a tener una repercusión a nivel social (vecinos) a nivel personal (autoestima) hay una anomalía, a nivel familiar (relacion conflictual con la familia o con la pareja).**

- c) Si se causara una enfermedad psíquica que aún con la intervención especializada la persona no pueda recuperar su salud mental de manera permanente, será sancionado con pena de siete años y seis meses a trece años y cuatro meses de prisión.

Elementos Objetivos del Tipo:

Sujeto Activo: Es Determinado cuando se establece que el sujeto debe tener la condición de cónyuge, ex cónyuge, conviviente, ex conviviente, novio o ex novio, ascendientes, descendientes, parientes colaterales por consanguinidad, afinidad.

Se torna como sujeto Indeterminado: Cuando se trate de cualquier relación interpersonal la cual puede estar referida a (vecino, amigo, compañero de trabajo o de estudio).

Sujeto Pasivo: Determinado (Mujer, niña, adolescente, adulta y adulta mayor)

Bien Jurídico Protegido:

- Integridad o Salud Psíquica de la mujer

Acción: Causar un perjuicio a la salud psíquica o al desarrollo personal de la mujer.

Omisión: No cumplir con su posición de garante.

Elementos Subjetivos del Tipo: Debe establecer con claridad en la imputación el propósito de la conducta del sujeto activo para establecer el dolo y nexo causal.

- Denigrar.
- Controlar.

Verbo Rector:

1. Amenazar.
2. Intimidar.
3. Manipular.
4. Humillar.
5. Aislar.
6. Ofender.
7. Vigilar.
8. Comparar.
9. Chantajear.
10. Acosar
11. Hostigar.

Elementos Normativos:

- Relación interpersonal Negativa y positiva.
- La salud psíquica o psicológica.
- Disfunción.
- Tratamiento psicoterapéutico o especializado.
- Enfermedad Psíquica o mental.
- Devaluación de la autoestima.

Elemento Normativo/cultural:

- Cualquier otra circunstancias análoga.
- Comparaciones destructivas.

Elementos Descriptivos:

- Incisos a) b) y c) del presente artículo.

Iter criminis: No cabe las formas imperfectas de ejecución solo la consumación.

Concursos de Delito: Admite las diferentes formas de concursos. Cabe destacar que uno de los verbos rectores del delito de Violencia Psicológica es Amenazar o Intimidar, en ese sentido si en el informe psicológica se establece estos hechos como generadores de la afectación psíquica el mismo debe imputarse como Violencia Psicológica, pero si en la investigación acontecen hechos de amenazas o intimidación posterior a la pericia, los mismos deben ser imputados bajo la figura del concurso real de delitos.

En la práctica se ha observado que la investigación allegada determina que la víctima en su testimonio y en el informe psicológico ha estado sometida a diferentes formas de violencia Física, Psicológica y también Sexual donde se evidencia que hubo relaciones sexuales no consentidas en la relación de pareja, la cual se describe en la acusación de forma superficial, sin especificar o circunstanciar la misma y la subsumen como parte del tipo penal de la Violencia Psicológica o no la imputan, invisibilizando la violencia sexual siendo un delito independiente y que el mismo debe de imputarse y calificarse en concurso real

Si la afectación psíquica se deriva de una violencia sexual fuera del ámbito de las relaciones de pareja deberá imputarse como Violación Agravada ya que se circunscribe o se subsume a la agravante específica de este tipo penal porque constituye un grave daño a la salud de la víctima. Es importante destacar que en este supuesto la gravedad del daño a la salud que hace referencia el art. 169 inciso d) del Código Penal debe interpretarse como a cualquier alteración a la salud física o psíquica producto de ese acto concreto.

Núcleos Problemáticos:

1. Como parámetros para aplicar la ley 779 y ejercer la acción penal en el tipo de violencia psicológica o de violencia intrafamiliar debemos de tomar en cuenta que si los eventos ocurrieron en años anteriores al 22 de Junio del año dos mil doce y cuyo resultado se verifica una vez entrada en vigencia de la ley, el juez competente para conocer de dicha causa es el ordinario a razón del nexo causal, ya que se había el quebrantamiento a la salud psíquica.
En los casos donde concurren hechos anteriores y posteriores a la entrada en vigencia de la Ley y se verifica que existe una alteración a nivel psíquico el juez competente es el especializado.
2. Cabe aclarar que los eventos que producen un perjuicio en la salud psicológica no prescriben ya que estos actos son reiterados en el tiempo y son producidos de manera habitual por el historial de la violencia, recordando que la misma es crónica, sistemática y mantenida en el tiempo.
3. Cuando se presenten conductas que puedan ser subsumidas en concurso aparente de normas entre la violencia psicológica de la Ley 779 y el tipo penal de Violencia Intrafamiliar o doméstica regulada en el art. 155 del Código Penal de Nicaragua, se procederá de conformidad al artículo 11 inciso a) de la Ley 641 "la norma especial prevalece sobre la general".
4. De la valoración psíquica realizada por el psicólogo o psiquiatra Forense la cual determine que tiene un daño pero no requiere tratamiento psicoterapéutico, el caso deberá tramitarse como Falta penal y no como delito de Intimidación o Amenaza, ya que se produjo una afectación pero que no es constitutiva de delito. En estos casos deberá de ofrecerse la solución de dicho conflicto a través de la figura de la Mediación en la DIRAC o las Consejerías Familiares que brinda el Ministerio de la Familia.

Art. 12 Violencia Patrimonial y económica.

Sujeto Activo: El hombre. Es cualificado porque es quien está ligado a la mujer por relación de consanguinidad, afinidad, cónyuge, ex cónyuge, conviviente en unión de hecho estable, ex conviviente en unión de hecho estable, novio, ex novio y relación de afectividad. Todas estas cualidades del sujeto pasivo a su vez se convierten en elementos normativos de carácter jurídico y sociocultural que requerirán de interpretación judicial.

Sujeto Pasivo: La mujer.

Bien Jurídico Protegido: Es pluriofensivo por las diferentes manifestaciones de las conductas del sujeto activo, pero de forma general protege:

- El patrimonio.
- El ejercicio al derecho de propiedad.
- El derecho de vivir sin violencia.
- El derecho al trabajo.

La conducta ilícita se puede dar por ACCIÓN U OMISIÓN

1. Verbo Rector inciso a):

- Sustraer

Elementos Normativos:

- Bien o bienes
- Valor
- Posesión
- Titularidad
- Salario Mínimo
- Sector industrial

2. Verbos Rectores inciso b)

- Sustraer
- Inutilizar
- Hacer desaparecer
- Deteriorar

Elementos Normativos:

- Bien o bienes
- Posesión
- Dominio
- Tenencia
- Salario mínimo
- Sector Industrial

3. Verbos Rectores inciso c)

- Impedir
- Limitar
- Prohibir

Elementos Normativos:

- Uso
- Disfrute
- Administración
- Transformación
- Disposición
- Bienes
- Patrimonio (Familiar o de la mujer)

4. Verbos Rectores inciso d)

- Sustraer
- Disponer

Elementos Normativos:

- Ganancias
- Actividad económica familiar
- Derechos de la Mujer

Elemento Subjetivo:

- Para su exclusivo beneficio personal

5. Verbo Rector inciso e)

- Hacerse mantener

Elementos normativos:

- Violencia
- Amenazas
- Intimidación
- Coacción
- Total
- Parcial

6. Verbos Rectores inciso f) Aquí la conducta omisiva

- Negarse a proveer
- Obligar a que abandone o no inicie

Elementos Normativos:

- Recursos necesarios
- Hogar
- Trabajo remunerado

Elementos Descriptivos:

- Sustracción patrimonial.
- Daño patrimonial.
- Limitación al ejercicio del derecho de propiedad.
- Sustracción de las utilidades de las actividades económicas familiares.
- Explotación económica de la mujer.
- Negación del derecho a los alimentos y al trabajo.

Iter criminis:

No cabe las formas imperfectas de ejecución sólo la consumación de cada una de las conductas descritas en el presente artículo.

Concursos: Este tipo penal admite la aplicación de concursos de delitos.

Núcleos problemáticos:

a) Sustracción patrimonial:

En este inciso no debe ser un requisito o condición para la Acreditación del patrimonio de la mujer la exigencia de una formalidad o la entrega de un documento, ya que nos regimos por el principio de libertad probatoria, debemos de recordar que todo se puede probar por cualquier medio lícito y no tazando la prueba.

Para una acusación precisa y circunstanciada se debe describir cada uno de los bienes sustraídos en la medida de lo posible, así como el valor de los mismos y de esta manera evitar el rechazo de la acusación.

Si el valor del bien no alcanza el monto equivalente a un salario mínimo mensual del sector industrial conforme a la tabla vigente al momento de los hechos, el tratamiento de la causa será como constitutivo de una falta penal y se podrá resolver el conflicto a través de la Mediación en la DIRAC o la Consejería Familiar Institucional (MIFAM).

b) Daño patrimonial:

Es necesario determinar cuantía del daño de los bienes destruidos o inutilizados a la luz del principio de libertad probatorio y en los casos que resulta que la cuantía es menor al salario mínimo del sector industrial se resolverá conforme a lo establecido en el párrafo segundo del inciso anterior.

Aquí no debe de ser una limitante para el ejercicio de la acción penal demostrar la titularidad de dichos bienes, basta que se encuentren en posesión de la víctima al momento de los hechos.-

c) Limitación al ejercicio del derecho de propiedad.

El núcleo problemático en este acápite, se presenta con la interpretación del elemento normativo “Patrimonio Familiar”, debido a que existe la Ley de Patrimonio Familiar que en su artículo 1 establece que de cara al art. 75 Cn debe entenderse por patrimonio familiar únicamente bienes inmuebles separados del patrimonio particular de una persona y vinculados directamente a familias de escasos recursos económicos, con el fin de asegurarle la mejor satisfacción de sus necesidades. Esto podría ser alegado por las defensas como condición de procedibilidad para demostrar si los bienes son o no patrimonio familiar.

Ahora bien, con la entrada en vigencia del Código de la Familia ya no se mantiene el concepto de patrimonio familiar descrito en la Ley antes referida, sino el de Vivienda Familiar según el arto. 93 del Código de la Familia referidos al inmueble destinado para la habitación de los integrantes de la familia, pero para efectos de interpretación al momento del ejercicio de la acción penal en casos de Violencia Patrimonial **el concepto de patrimonio familiar que rige por el principio de especialidad es el establecido en el arto. 2 del Decreto 42-2014**, que lo define como los bienes muebles e inmuebles adquiridos entre los cónyuges, ex cónyuges, ex convivientes, relación de consanguinidad (4to grado de consanguinidad y 2do de afinidad) que se utilicen para el uso, goce y disfrute y satisfacción de las necesidades.

d) Sustracción de las utilidades de las actividades económicas familiares.

Para el ejercicio de la acción penal en esta modalidad, se debe establecer claramente el beneficio personal exclusivo del hombre que ejerce la violencia y el perjuicio que ocasionó a la mujer, de lo contrario, no se cumpliría con todos los elementos constitutivos del delito y consecuentemente estaríamos ante un hecho atípico en sentido concreto.

e) Explotación económica de la mujer.

Podría confundirse el medio para lograr la imputación con otro tipo de delitos como lo es la intimidación o amenazas contra la mujer, violencia física y violencia psicológica, en este caso, el poder acreditar la violencia, intimidación, amenaza o coacción, son elementos constitutivos de este delito, son el medio que el hombre utiliza para hacerse mantener, de tal manera que todos estos actos de violencia se subsumen en esta modalidad del tipo penal de Violencia Patrimonial y no se debe imputar en concurso con esos otros delitos.-

f) Negación del derecho a los alimentos y al trabajo.

No se requiere una condición de procedibilidad para ejercer la acción penal en este delito. Es importante que en esta modalidad, los y las fiscales distingan que el ámbito de protección de este tipo penal se circunscribe a la mujer que se encuentre conviviendo o no con el imputado y que éste se negare a proveer los recursos en el hogar, esta conducta no debe confundirse con lo regulado y sancionado en el

art. 217 del Código Penal de Nicaragua “Incumplimiento de deberes alimentarios” el cual no fue objeto de reforma por la Ley 779 ya que su ámbito de protección está dirigido a proteger los derechos derivados de la relación padre, madre e hijos, guarda y tutela.

Artículo 13. Intimidación o amenaza contra la mujer

El hombre que mediante expresiones verbales, escritos, mensajes electrónicos o cualquier otro medio intimide o amenace a una mujer con la que se halle o hubiere estado ligado por relación de consanguinidad, afinidad, sujetos a tutela, cónyuges, ex-cónyuges, convivientes en unión de hecho estable, ex convivientes en unión de hecho estable, novios, ex novios, relación de afectividad; con causarle un daño grave y probable de carácter físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial, será sancionado con prisión de seis meses a un año.

La pena será de seis meses a dos años de prisión, en las siguientes circunstancias:

- a) Si la intimidación o amenaza se realizare en el domicilio o residencia de la mujer, en el domicilio de familiares, amistades o cualquier lugar donde se haya refugiado;
- b) Si el hecho se cometiere en presencia de las hijas o hijos de la víctima;
- c) Si el autor del delito se valiere del cargo como funcionario público o de su pertenencia al cuerpo policial o militar;
- d) Si el hecho se cometiere con armas cortopunzantes, contundente, de fuego u objeto capaz de causar daño a la integridad física o a la salud.

Elementos Objetivos del Tipo:

Sujeto Activo: Determinado Cualificado Hombre que se halle o hubiere estado ligado al sujeto pasivo por relación de consanguinidad, afinidad, tutela, cónyuge, ex cónyuge, conviviente en unión de hecho estable, ex conviviente en unión de hecho estable, novio, ex novio y relación de afectividad.

Sujeto Pasivo: Determinado cualificado, dentro de las condiciones (afectividad, consanguinidad, sujetos a tutela) que recoge este tipo penal (Mujer, niña, adolescente, adulta y adulta mayor)

Bien Jurídico Protegido:

- Libertad de actuar
- Seguridad.
- Seguridad Laboral.
- Integridad Psíquica, Física, Sexual de la mujer
- Patrimonio.

Verbo Rector:

- Intimidar: Acción y efecto de intimidar, este verbo refiere a causar o infundir miedo. Es un acto que intenta generar miedo en otra persona para que ésta haga o no haga lo que la otra persona desea (Enciclopedia libre, internet).
- Amenazar: Anunciar, presagiar o ser inminente algún mal, dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a otro.

Elementos Normativos:

- Relación de afectividad.
- Daño grave y probable.

Elementos Descriptivos:

- Incisos a) b) c) y d) del presente artículo.

Iter criminis:

No cabe las formas imperfectas de ejecución solo la consumación del delito por ser un delito de peligro por ser un delito de mera actividad.

Concursos de Delito: Admite las diferentes formas de concursos.

Cuando se trate de que las Amenazas o Intimidación se dan dentro del contexto del delito de Violencia psicológica no se acusará en concurso real por ser verbos rectores del delito mencionado. Sin embargo, cuando sea un hecho posterior a la valoración psíquica podrá imputarse como un concurso.

Núcleos Problemáticos:

Es Menester determinar que el objeto, el lugar, las características personales del autor, el medio utilizado para realizar la amenaza sea capaz por su estructura y característica de infringirle un daño a la integridad física, psíquica, sexual, patrimonial y laboral, es necesario analizar la intimidación o la amenaza tomando en cuenta los antecedentes dentro del contexto de la violencia y la condición de vulnerabilidad de la víctima.

A efectos de la imputación de este delito se debe describir claramente las circunstancias agravantes que establece este tipo penal.

Artículo 14. Sustracción de hijos o hijas

Cuando el padre u otro familiar ejerza o haya ejercido violencia contra la mujer y como un medio de continuar ejerciendo violencia hacia ésta, sustraiga a su hijo o hija del poder de su madre que legítimamente esté encargada de la custodia, del tutor o persona encargada de su crianza y lo retenga sin su consentimiento, será castigado con pena de dos a cuatro años de prisión.

Elementos Objetivos del Tipo:

Sujeto Activo: Cualificado

- Padre
- Familiar varón o mujer dentro del cuarto de consanguinidad y segundo de afinidad) Art. 37 Pn.

Sujeto Pasivo: Cualificado:

- Madre.
- Persona encargada de su crianza.
- Tutor
- Hijo o Hija.

Bien Jurídico Protegido:

- Las relaciones familiares Madre-Padre e Hijos.
- Una vida Libre de violencia.
- Interés superior del niño, niña y adolescente.

Verbo Rector:

- Sustraer

Acción:

- Ejercer violencia contra la mujer.

Elementos Normativos:

- Legalmente encargado de la custodia.
- Retener sin consentimiento.

Elementos Descriptivos:

- Madre legalmente encargada de la custodia.
- Tutor.
- Persona encargada de su crianza.

Iter criminis:

No cabe las formas imperfectas de ejecución solo la consumación del delito por ser un delito de resultado.

Concursos de Delito: Admite las diferentes formas de concursos.

Elemento subjetivo: A Título de Dolo.

Núcleos Problemáticos:

- a) En este tipo penal se debe interpretar el término **Legalmente**: No sólo lo que provenga de una sentencia judicial o una resolución administrativa sino también lo que establece el derecho consuetudinario, es decir, aquella madre o persona encargada de su crianza que siempre ha estado a cargo de su cuidado.
- b) Cuando no se logre acreditar que el padre o familiar (sujeto activo) ha ejercido o ejerce violencia de acuerdo a este tipo penal, y si se demuestra la sustracción se deberá imputar conforme a lo establecido en el art. 218 del Código Penal.
- c) Para efectos de este tipo penal se deberá entender que también el aspecto socio cultural de lo que se entiende por hijos que puede ser aquellos niños, niñas o adolescentes que la pareja haya criado en el seno del hogar y que no sean hijos biológicos, ni adoptados legalmente

Artículo 15. Violencia laboral

Quien impida o limite el ejercicio del derecho al trabajo de las mujeres, a través del establecimiento de requisitos referidos a sexo, edad, apariencia física, estado civil, condición de madre o no, sometimiento a exámenes de laboratorio, prueba del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH/Sida) o de otra índole para descartar estado de embarazo, obstaculice o condicione el acceso, salario, ascenso o la estabilidad en el empleo de las mujeres, será sancionado con cien a trescientos días multa.

Si se trata de una política de empleo de una institución pública o privada, quien ejerza la discriminación, se impondrá la pena máxima. Todo ello sin perjuicio de la corresponsabilidad establecida en el artículo 125 del presente Código.

Elementos Objetivos del Tipo:

Sujeto Activo:

- Indeterminado Hombre o mujer.

Sujeto Pasivo:

- Las mujeres.

Bien Jurídico Protegido:

- Derecho al trabajo.
- Derecho a no ser discriminada.

Verbo Rector:

- Impedir.
- Limitar.
- Obstaculizar
- Condicionar.

Elemento Subjetivo del Tipo:

- Doloso

Elementos Normativos:

- Derecho al trabajo.
- Trabajo.
- Ascenso.
- Salario.
- Estabilidad en el empleo.
- Política de empleo.
- Institucion pública y privada
- Discriminacion.
- Sometimiento a exámenes de laboratorio.
- Apariencia física.
- Estado civil
- Sexo, edad, condición de madre, prueba de virus VIH, prueba de embarazo.

Iter criminis:

- No cabe las formas imperfectas de ejecución porque es un delito de mera actividad.

Concursos de Delito:

- Admite las diferentes formas de concursos.
- Se debe considerar que al analizar esta conducta se puede presentar el concurso aparente de normas ya que en el Código penal se encuentra regulado en el art. 315 y 427 el delito de discriminación y estas situaciones se resolverán conforme lo establecido en el art. 11 inciso a) del Código Penal que dice que la norma especial prevalece sobre la general.

Núcleos Problemáticos:

- En este delito se persigue al sujeto activo sea hombre o mujer, por el reproche consiste en la discriminación que sufre la mujer por el hecho de ser mujer en las relaciones laborales, a diferencia del delito de discriminación regulado en el art. 315 Pn que extienden a otras formas de discriminación derivada de la relación laboral.
- El verdadero núcleo problemático para delimitar la responsabilidad individual sobre la política institucional pública y privada, es probatorio, por lo tanto será necesario realizar una investigación que establezca quienes tomaron la decisión sobre la política institucional.

Artículo 16. Violencia en el ejercicio de la función pública contra la mujer

Quien en el ejercicio de la función pública, independientemente de su cargo de forma dolosa, retarde, obstaculice, deniegue la debida atención o impida que la mujer acceda al derecho a la oportuna respuesta en la institución a la cual ésta acude, a los fines de gestionar algún trámite relacionado con los derechos que garantiza la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas a la Ley No. 641, Código Penal, será sancionado con pena de doscientos a quinientos días multa e inhabilitación especial en el ejercicio del cargo por un período de tres a seis meses. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que correspondan.

Si los actos anteriores se cometen por imprudencia la pena será de cien a doscientos días multas e inhabilitación del cargo por un período máximo de tres meses.

Si como resultado de las conductas anteriormente señaladas, se pusiesen en concreto peligro la vida e integridad de la mujer, la pena será de seis meses a un año de prisión e inhabilitación especial para ejercer el cargo por el mismo período.

Elementos Objetivos del Tipo:

Sujeto Activo: Cualificado

- Funcionario, funcionaria o empleado, empleadas públicas.

Sujeto Pasivo:

- Mujer

Bien Jurídico Protegido:

- Derecho a recibir y acceder al servicio público de forma pronta y eficaz.
- El acceso de la mujer a los derechos establecidos en la ley 779 arto 7. y en el arto. 4 de la Convención Belém Do Pará. Derecho a una vida libre de violencia y discriminación.

Verbo Rector:

- Impedir.
- Obstaculizar.
- Retardar
- Denegar.

Elementos Subjetivos del Tipo:

- Doloso.
- Imprudente.

Elementos Normativos:

- Función pública.
- Debida atención.
- Oportuna respuesta.
- Concreto peligro.
- Responsabilidades administrativas

Iter criminis:

- No cabe las formas imperfectas de ejecución por ser un delito de mera actividad.

Concursos de Delito:

- Admite las diferentes formas de concursos.

Núcleos Problemáticos:

- No toda repuesta de un servidor público puede subsumirse a la violencia en el ejercicio de la función pública, sino aquella en que la conducta del funcionario es expresa a impedir, obstaculizar y denegar el servicio público, no incluye negativas que por norma o reglas tenga cada institución.
- Es imprudencia la falta de observancia a las leyes, normas, protocolos de actuación, circulares, reglamentos, directrices por parte del funcionario público cuando no realiza su función con la debida diligencia.
- Sin embargo no deberá identificarse como conducta imprudente la falta de respuesta producto de la carencia de recursos de cada Institución.

Artículo 17. Omisión de denunciar

Las personas que de acuerdo a la legislación procesal penal tengan obligación de denunciar los delitos de acción pública, una vez que tengan conocimiento que una mujer, niño, niña o adolescente ha sido víctima de violencia, deberán denunciar el hecho ante la Policía Nacional o al Ministerio Público a más tardar en el término de cuarenta y ocho horas. El que incurra en esta omisión se sancionará con pena de doscientos a quinientos días multa.

Elementos Objetivos del Tipo:

Sujeto Activo: De conformidad al art. 223 CPP son sujetos activos:

- Funcionario, funcionaria o empleado, empleada públicas que conozcan de los ilícitos en sus funciones.
- Directores de Centros de Educación (públicos y privados) Art. 48 CNA.
- Personas que prestan servicios de salud.
- Las personas que por disposición de la ley, de la autoridad o de un acto jurídico tuvieron a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o el control de bienes o intereses ajenos, siempre que conozcan del hecho con motivo del ejercicio de sus funciones.

Sujeto Pasivo:

- El titular del bien jurídico es el Estado.
- Mujer.

- Niño.
- Niña.
- Adolescentes.

Bien Jurídico Protegido:

- Derecho al acceso a la justicia.
- Debida diligencia del Estado.

Verbo Rector:

- No Denunciar.

Elementos Subjetivos del Tipo:

- Doloso.

Elementos Normativos:

- Obligación de denunciar.
- Delitos de acción pública.
- En ejercicio de la función pública.

Iter criminis:

- No cabe las formas imperfectas de ejecución solo la consumación del delito.

Concursos de Delito:

- Admite las diferentes formas de concursos.

Núcleos Problemáticos:

- Si el sujeto activo no denuncia dentro de las 48 horas, por el principio de lesividad no debe acusar a una persona que interpone denuncia fuera del término establecido y se le deberá considerar como testigo del caso.
- Se debe tomar en cuenta que el sujeto activo de este delito solo son los que están contemplados en el art. 223 CPP y art. 48 CNA.

Artículo 18. Obligación de denunciar acto de acoso sexual

Toda autoridad jerárquica en centros de empleo, de educación o de cualquier otra índole, que tenga conocimiento de hechos de acoso sexual realizados por personas que

estén bajo su responsabilidad o dirección y no lo denuncie a la Policía Nacional o el Ministerio Público, será sancionada con pena de cincuenta a cien días multa.

Elementos Objetivos del Tipo:

Sujeto Activo: Se considera como sujeto activo a efecto de este tipo penal:

- Autoridad jerárquica. Concepto de jerarquía es una cadena escalonada y se refiere al número de niveles en la jerarquía.

Sujeto Pasivo:

- Mujer (niña, adolescente, adulta y adulta mayor)
- Niño.

Bien Jurídico Protegido:

- Libertad Sexual
- Derecho al acceso a la justicia.
- Debida diligencia del Estado.

Verbo Rector:

- Denunciar.

Acción:

- No cumplir con la obligación de denunciar el hecho delictivo.

Elementos Subjetivos del Tipo:

- Doloso.

Elementos Normativos:

- Autoridad jerárquica.
- Otra índole.
- Acoso sexual.

Iter criminis:

- No cabe las formas imperfectas de ejecución solo la consumación del delito por ser un delito de resultado.

Concursos de Delito:

- No admite las diferentes formas de concursos.

Núcleos Problemáticos:

- Autoridad jerárquica: Cuando se trate de funcionarios públicos, se actuará de conformidad al arto. 38 CP.
- Fiscal debe acreditar y establecer los niveles jerárquicos.

Violación (Tipo básico): Arto. 167 CP *“Quien tenga acceso carnal o se haga acceder o introduzca a la víctima o la obligue a que se introduzca dedo, objeto, instrumento con fines sexuales, por vía vaginal, anal o bucal, usando fuerza violencia, intimidación o cualquier otro medio que prive a la víctima de voluntad, razón o sentido, será sancionado con pena de ocho a doce años de prisión. Pueden ser autores o víctimas de este delito, personas de uno u otro sexo”.*

Bien Jurídico: La libertad sexual que se define como la facultad de auto determinarse en materia sexual sin ser forzado o abusado por otro, por lo tanto este delito castiga el uso de la fuerza o el hecho de que el autor del delito se valga de alguna circunstancia desfavorable en que se encuentre la víctima para abusar sexualmente de ella. La libertad sexual es el derecho que tiene la persona de elegir con quién, cuándo y dónde tener acceso carnal o si lo desea, prescindir de ello.

Sujeto Activo: Indeterminado. Este tipo admite su comisión por parte de cualquier persona independientemente de su sexo.

Según los grados de participación en el delito de violación, podemos decir que por ser un delito de propia mano, no admite la autoría mediata o intelectual, partiendo de que el agente debe realizar personalmente el tipo penal para constituirlo. Si partimos del hecho que la coautoría no es otra modalidad de autoría sino una autoría directa de dos o más personas, este tipo penal lo pueden cometer varios sujetos en coautoría. Dentro de los grados de participación, cabe la figura del inductor, siempre y cuando producto de su actuar provoque al autor directo a cometer el delito o al menos iniciar los actos ejecutivos. En cuanto a los partícipes, sí cabe la participación de otras personas como cómplices, inductores o colaboradores necesarios, por cuanto no tienen una participación directa, pero pueden conocer del hecho y ayudar a facilitar la perpetuación del delito, con actos secundarios como amarrar a la víctima, golpearla, vigilar que nadie observe e impida su consumación, asimismo, puede que el tercero aliente, motive o incite al autor, o bien alguien que facilite los medios para que el autor llegue a acceder a la víctima, en condiciones que por el contrario, por sí solo no lo hubiese logrado. La figura del encubridor dejó de existir en nuestra legislación penal como grado de participación y constituye un tipo penal autónomo según el arto. 470 CP.

Sujeto Pasivo: Indeterminado. Cualquier persona puede ser víctima de este delito con independencia de su sexo.

Acción o verbo rector:

- Tener
- Hacerse acceder
- Introducir
- Obligar

Los primeros dos verbos son transitivos ya que requieren un complemento directo que les dé el sentido que por sí solos no lo tienen. Los verbos “introducir y obligar” no requieren de ningún complemento para su comprensión. El verbo “tener” se complementa con “acceso carnal”. Para distinguir este tipo de verbos nos preguntamos ¿Qué es lo que se tiene? La respuesta es “acceso carnal”, que se convierte en un elemento normativo. El acceso carnal es la penetración del órgano genital de un hombre en la vagina, ano o boca de otra persona. Si bien es cierto, sólo el hombre puede acceder o penetrar con su pene, no quiere decir que una mujer no pueda acceder a un hombre, es por ello que el tipo penal contiene el otro verbo rector de carácter transitivo “Hacerse acceder” lo que significa que personas de ambos sexos pueden ser obligados a acceder al autor por otros medios descritos en la norma.-

Elementos objetivos:

- Dedo
- Objeto
- Instrumento

Por objeto ha de entenderse todo cuerpo sólido que por su tamaño y forma idónea resulte apto para la introducción por las vías descritas, en cierto modo como un sustituto del órgano genital masculino y que resulte adecuado para dar algún significado sexual al hecho de la introducción. La manipulación o introducción del objeto, puede ser llevada a cabo por el autor de la agresión, pero en otras ocasiones puede ser el propio sujeto pasivo quien se vea forzado a introducirse a sí mismo el objeto bajo la coacción violenta o intimidación del agresor configurándose el tipo de violación.

Elemento Subjetivo:

- Con fines sexuales:
Intuye que sólo se puede imputar la acción a título de dolo directo, es decir, que este tipo penal no admite dolo eventual. Se requiere demostrar entonces que la conducta del agente fue realizada con esa finalidad, de lo contrario, se tendría que adecuar

la conducta a otro tipo penal o declarar la atipicidad en sentido concreto a falta de uno de los elementos del tipo objetivo.

Elementos Normativos:

- **Acceso Carnal:**

Como ya dijimos, el acceso carnal supone la penetración del órgano genital del hombre en la vagina, ano o boca de otra persona. Este concepto obedece a una visión masculina de la sexualidad, de ahí que en sentido amplio el concepto de acceso carnal implica acceder sexualmente a otra persona entendido en sus dos vertientes, es decir tanto la acción de penetrar como la de hacerse penetrar.

- **Vía vaginal, anal o bucal:**

Se refiere a la introducción del órgano masculino, dedo, objeto o instrumento en la vagina de la mujer (vía vaginal) o en el ano de una persona (vía anal). Partiendo de la exigencia del elemento subjetivo previsto por el tipo, sólo cabe suponer en esta modalidad la introducción del órgano masculino en la cavidad bucal de una persona, así como la introducción de la lengua en órgano genital de la mujer.

- **Usando fuerza, violencia o intimidación.**

El término violencia constituye una de las principales acepciones de la voz fuerza. Violencia es toda energía física exterior a la víctima dirigida a doblegar su voluntad. La intimidación se ha definido en la jurisprudencia española como la amenaza de palabra u obra de causar un daño injusto que infunda miedo en el sujeto pasivo.

- **Cualquier otro medio que prive a la víctima de voluntad, razón o sentido.**

Para efectos penales habrá que valorarse como privación de voluntad todas aquellas situaciones en que las personas no se encuentran en condiciones de decidir al respecto, con arreglo a sus intereses, ni tiene ni se le da la oportunidad de pronunciarse sobre dicha relación. De tal manera que se puede decir que está privada de sentido toda aquella persona carente de conciencia, bien sea de modo transitorio o permanente.

La jurisprudencia española ha interpretado que para valorar la privación de sentido basta y resulta suficiente la manifiesta incapacidad psíquica de la víctima para defenderse del ataque al no poseer la lucidez necesaria para conocer el alcance y trascendencia de los actos. De tal manera que no es preciso el empleo o el aprovechamiento de una privación de sentido o razón total.

Algunos supuestos de privación de sentido:

- El sueño natural o inducido ya que no tiene excesiva trascendencia el iter que ha conducido al estado de inconsciencia, siempre que el agente se sirva de ese estado.
- La administración de sustancias tales como: analgésicos, hipnóticos, sedantes, tranquilizantes, narcóticos, alcohol, etc.

Iter criminis:

El delito de Violación se consuma con la introducción del pene, dedo, objeto o instrumento por escaso que sea en la vagina, ano o boca del sujeto pasivo. Si la introducción ha tenido lugar por cualquier causa que no sea el propio y voluntario desistimiento, pero al menos el sujeto ha dado inicio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, el delito subsiste en grado de tentativa.

No existe violación en grado de frustración, ya que realizar todos los actos constitutivos del delito requiere la penetración para el acceso carnal. Por cuanto sólo cabe el delito de violación en grado de tentativa. Ej. El agente puede iniciar con los actos de ejecución desnudando a la víctima, amarrándola, lesionándola para lograr su indefensión hasta ser sorprendido por una tercera persona.

También el agente puede desistir de la consumación del delito una vez iniciado los actos ejecutivos, pero responde penalmente por los delitos cometidos hasta el momento de su desistimiento. Por ejemplo, las lesiones ocasionadas a la víctima o el abuso sexual o lúbricos tocamientos con fines sexuales.

En cuanto a la provocación y la apología del delito, según el arto. 32 CP la apología sólo se castiga como forma de provocación cuando el agente incita a cometer el delito por medios adecuados para su eficacia. De tal forma que consideramos que perfectamente se puede dar apología en el delito de violación en el supuesto de que sean varios los autores y uno incite al otro a cometerlo. La provocación en el caso de la violación no está señalada expresamente en la ley, por lo que significa que no cabe la provocación del delito de violación. No obstante, si se llega a iniciar los actos ejecutivos, es decir que se cometa el delito de violación en grado de tentativa, el que indujo a cometerlo sería castigado como inductor, de acuerdo con el último párrafo del arto. 32 CP.

Concursos:

El concurso aparente de tipos o leyes ocurre cuando una misma acción entra en varios tipos penales que protegen un mismo bien jurídico. Un supuesto distinto es el concurso de delitos donde una o varias acciones producen una o varias lesiones jurídicas. Varias acciones penales entran en varios tipos penales que protegen distintos bienes jurídicos pero realizados entre sí de menor a mayor. En estos casos existe una sola lesión al bien jurídico tutelado, por tanto, un solo delito. Es incorrecto hablar de concurso aparente de normas porque realmente sí concurren las normas y leyes, lo que en realidad es aparente es la concurrencia de lesiones jurídicas. El concurso aparente no se determina por la intención del sujeto activo, sino que es la descripción de cada tipo penal la que dilucida el problema, por medio del principio de especialidad, subsidiariedad y consunción.

Por el principio de especialidad, en el caso de la violación, éste es el tipo general y la violación agravada es el específico, tiene las características generales de la violación, pero también sus agravantes específicas y en ello radica su especialidad.

El precepto subsidiario se aplica en defecto del principal ya sea expresa o tácitamente dicho. Dos tipos penales se encuentran en relación de subsidiariedad cuando a) Uno de ellos, el aplicable, protege el mismo bien jurídico de un ataque mayor que el otro. B) Uno de ellos, el aplicable, protege un bien jurídico diferente que comprende el bien jurídico resguardado por el tipo penal desplazado.

Este tipo penal admite concurso real en el caso de la muerte de la víctima. Es decir, que puede concurrir con el delito de Femicidio, Homicidio o Asesinato, según el caso, siempre y cuando se logre acreditar que el acceso carnal fue antes de la muerte de la víctima, ya que puede llegarse a constituir un delito imposible puesto que los elementos normativos que exige el tipo penal de Violación como son *“fuerza, violencia, intimidación u otro medio que prive de la voluntad”*, sólo podría darse en un ser vivo. La conducta podría adecuarse al delito de Profanación de Cadáveres contemplado en el arto. 191 CP.

El tipo penal de secuestro simple puede entrar en concurso aparente de normas con el de violación en concurso real. El código de 1974, establecía la finalidad sexual para la retención o sustracción de una persona en el tipo penal de Rapto. Al no existir este delito, en la actualidad el secuestro simple no contiene ese elemento subjetivo, por lo que indistintamente de su finalidad, se comete el delito de secuestro. Sin embargo, si el secuestro fue el medio necesario para la comisión del delito de Violación, se imputarían ambos delitos en concurso medial.

El tipo penal de Lesiones tanto físicas como síquicas pueden ser subsumidos por el de violación en concurso ideal, siempre y cuando las lesiones físicas hayan sido ocasionadas para consumar el hecho del acceso carnal y que el daño síquico haya sido a consecuencia de ese evento traumático. No obstante, si el daño a la integridad síquica es grave, ésta podría constituirse en una agravante.

En el ámbito privado o de pareja que es común la violencia sexual, puede concurrir el delito de Violencia psicológica y Violencia Física. Para la violencia psicológica se deberá diferenciar lo siguiente: Si el resultado del daño síquico es a consecuencia directa del hecho mismo de la violación, se deberá imputar la Violencia Psicológica en concurso ideal. Pero, si además de la Violación como hecho puntual, hay un historial de actos de violencia, se deberá imputar en concurso real. Es decir, debe establecerse claramente el nexo causal. La violencia física puede ser subsumida por la Violación puesto que la violencia es un elemento normativo del tipo penal de Violación. No obstante, también puede haber actos de violencia indistintos del hecho puntual de la violación que habrá de imputarse en concurso real.

Núcleo problemático:

Partiendo del hecho que el acceso carnal implica la penetración del órgano genital del hombre en la vagina, ano o boca de una persona. En los supuestos que el sujeto activo sea hombre y el sujeto pasivo también lo sea, si el sujeto activo la acción que realiza es introducir en su boca el pene del sujeto pasivo, o lo que comúnmente conocemos como (practicar sexo oral) no sería posible acusar por el delito de Violación, sin embargo, la conducta no puede considerarse atípica, debe ser imputada como un hecho punible y acusarse como Abuso Sexual de acuerdo con el arto. 172 CP.

Como dijimos anteriormente, el delito de Violación concurre con otros delitos como Violencia Sicológica, Violencia Física, Femicidio, Homicidio, Asesinato, etc... En la praxis surgen problemas en cuanto a la competencia objetiva y funcional. El artículo 11 inco. 1° establece que la norma especial prevalece sobre la general. De tal manera que la competencia cuando concurre el delito de Violación, será por especialidad el Juez o Jueza Especializado (a).

Violación a menores de catorce años. Arto. 168 CP *“Quien tenga acceso carnal o se haga acceder con o por persona menor de catorce años o quien con fines sexuales le introduzca o la obligue a que se introduzca dedo, objeto o instrumento por vía vaginal, anal o bucal, con o sin su consentimiento, será sancionado con pena de doce a quince años de prisión”.*

Bien Jurídico:

Esta clase de violación impropia, que si bien parte del tipo penal base de violación, por lo que contiene sus mismos verbos rectores, contiene un bien jurídico tutelado distinto que es la Indemnidad Sexual. El legislador trata de proteger la **Indemnidad Sexual** que consiste en el libre desarrollo de la sexualidad, es la seguridad que deben tener todos en el ámbito sexual para poder desarrollarse, por eso las leyes penales se preocupan en especial, de proteger la indemnidad sexual de los menores de edad, por ser los más vulnerables en este aspecto.

Sujeto Activo:

Es indeterminado.

Sujeto pasivo:

Determinado por la edad y lo constituyen personas menores de catorce años indistintamente del sexo.

Acción o verbo rector:

- Tener
- Hacerse acceder
- Introducir
- Obligar

Elementos objetivos:

- Dedo
- Objeto
- Instrumento

Elementos Normativos:

- Acceso Carnal
- Vía vaginal, anal o bucal
- Con o sin consentimiento

Es un elemento normativo de carácter jurídico, en virtud de que el consentimiento está definido en nuestra legislación civil. De acuerdo con el arto. 2471 del Código Civil. “Para que el consentimiento sea válido se necesita que el que lo manifiesta sea legalmente capaz”. El arto. 2472 C establece que toda persona es capaz excepto los dementes, los impúberes y los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito o de otro modo claro o indubitable. De la misma manera el arto. 278 C. dice: *“La época de la mayor edad se fija sin distinción de sexo en los veintiún años cumplidos. **El mayor de edad, puede disponer libremente de su persona y bienes**”* De ello se desprende que un menor de veintiún años no puede disponer de su persona, es decir, no tiene la capacidad de auto determinarse, ni puede otorgar consentimiento y por consiguiente, tampoco tiene “voluntad”. En el Código de la Familia que entrará en vigencia en diciembre del año 2014, establece en el arto. 21 que la mayoría de edad sin distinción de sexo es a los dieciocho años cumplidos. No obstante, la práctica nos dice que como la mayoría de las víctimas adolescentes de este delito, lo consienten, no estaríamos ante un consentimiento legal sino una simple manifestación de voluntad de acceder a la relación sexual, pero sin estar autorizada por la ley, de tal manera que formalmente se constituye el tipo penal con el sólo hecho de que exista ese acceso carnal con persona menor de catorce años.

Elementos subjetivos:

- Con fines sexuales

Violación Agravada:

El tipo básico de Violación y el delito de Violación a menores de catorce años, se agravan, según el art. 169 CP: *“Se impondrá la pena de doce a quince años de prisión cuando:*

- a) El autor cometa el delito prevaleándose de una relación de superioridad, autoridad, parentesco, dependencia o confianza con la víctima, o de compartir permanentemente el hogar familiar con ella;*
- b) La violación sea cometida con el concurso de dos o más personas;*
- c) Cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad o discapacidad física o psíquica para resistir, o se trate de una persona embarazada o mayor de sesenta y cinco años de edad; o*
- d) Resulte un grave daño en la salud de la víctima.*
Si concurren dos o más de las circunstancias previstas en este artículo, se impondrá la pena máxima”.

El art. 58 de la Ley 779, adicionó a este artículo en su inciso d) una agravante más en el literal e) *“Que la víctima resulte embarazada a consecuencia de la violación.”*

Este tipo penal contiene los mismos **verbos rectores, sujetos, elementos objetivos, normativos y subjetivos** de los delitos de Violación y Violación a Menores de Catorce años. Únicamente, amplía su cobertura a circunstancias que constituyen más elementos normativos en razón de la condición de vulnerabilidad o indefensión de la víctima y la alevosía en la conducta del autor o autores.

Núcleo problemático:

En la práctica se nos presentan problemas relativos a las penas, valoraciones de agravantes, atenuantes y beneficios aplicables. El tipo base de violación tiene como agravantes específicas el tipo penal de Violación a menores de catorce años y Violación agravada, las cuales serían aplicables en los casos concretos y no cabría la aplicación de las agravantes genéricas del art. 36 CP, a menos que la agravante genérica no esté contenida dentro de las agravantes específicas del tipo penal base de violación por ej. La reincidencia. De todas formas, la calificación jurídica seguiría siendo Violación y no violación agravada.

El parentesco, lo establece el art. 37 CP como circunstancia mixta. No obstante, dicha circunstancia, en la violación sólo podría considerarse como agravante y constituiría el hecho punible en Violación agravada de acuerdo con el art. 169 CP inciso a).

En cuanto a las atenuantes, de los artículos que contemplan la violación, no se establece ninguna atenuante, serían aplicables por tanto, las atenuantes genéricas del art. 35 CP.

Cuando concurren dos circunstancias agravantes o más, el último párrafo del arto. 169 CP establece que se aplicará la pena máxima, lo cual es una regla de pena que la o el judicial deberá aplicar. No obstante, el Ministerio Público está facultado para disminuir sanción penal según el arto. 61 CPP y en aras de la aplicación de ese principio de oportunidad, valorando el caso concreto, cuando las víctimas son niños, niñas o adolescentes que resulte perjudicial para su salud síquica exponerlos a una declaración en juicio, por el principio de no victimización secundaria, se podrá tomar en cuenta la aplicación del principio de oportunidad del Acuerdo Simple.

La pena es la consecuencia jurídica del delito, de modo que al existir una culpabilidad, una vez hecho el juicio de reproche, después de demostrar la responsabilidad ilícita del autor, es menester imponer una pena justa y para ello el legislador impuso las reglas establecidas en el arto. 78 CP. No obstante, tal y como lo dispone el arto. 79 CP y en virtud de que el tipo penal de violación tiene sus agravantes específicas como lo es la Violación agravada y las inherentes al delito como lo es la Violación a menores, **dichas reglas no son aplicables.**

En cuanto a la penalidad, existen Dispositivos amplificadores del tipo penal de Violación Agravada establecido en su Arto. 183 CP., por cuanto señala que si el autor de este delito es el padre, madre o responsable legal del cuidado de la víctima, se impondrá además la pena de inhabilitación especial por el plazo señalado para la pena de prisión de los derechos derivados de la relación madre, padre e hijos, tutela o guarda. Esto a su vez implica que son inaplicables las reglas establecidas en el arto. 66 CP porque entrarían en conflicto con las específicas para este tipo penal.

El arto. 181 CP es claro en establecer que cuando el delito sexual sea cometido contra niños, niñas y adolescentes, no habrá lugar a trámite de mediación ni cualquier beneficio de suspensión de pena. Dicha disposición se mantiene en las leyes 745, Ley 779, su reforma Ley 846 y su Reglamento Decreto N° 42-2014, que prohíben la mediación en este tipo de delitos y el beneficio de Suspensión de Ejecución de Pena. No obstante, este beneficio cabría en relación a las víctimas mayores de dieciocho años, excluidas del Código de la Niñez y la Adolescencia como adolescentes.

En cuanto al beneficio de libertad condicional, cabe aplicarla en este delito, siempre y cuando el procesado cumpla con los requisitos del arto. 96 CP. El arto. 93 CP establece que los delitos perseguibles a instancia de parte como lo es el caso particular de la violación a mujeres mayores de dieciocho años, no se pueden otorgar sin oír a la parte ofendida.

Explotación sexual, pornografía y acto sexual con adolescentes mediante pago. Arto. 175 CP reformado por la Ley 779 en su arto. 58

“Quien induzca, facilite, promueva o utilice con fines sexuales o eróticos a personas menor de dieciséis años o discapacitado haciéndola presenciar o participar en un comportamiento o espectáculo público o privado, aunque la víctima consienta en presenciar ese comportamiento o participar en él, será penado de cinco a siete años de prisión y se impondrá de cuatro a seis años de prisión cuando la víctima sea mayor de dieciséis y menor de dieciocho años de edad. Quien promueva, financie, fabrique, reproduzca, publique, comercialice, importe, exporte, difunda, distribuya material para fines de explotación sexual por cualquier medio sea directo, mecánico, digital, audio visual o con soporte informático, electrónico o de otro tipo, la imagen o la voz de persona menor de dieciocho años en actividad sexual o eróticas, reales o simuladas, explícitas e implícitas o la representación de sus genitales con fines sexuales, será sancionado con pena de cinco a siete años de prisión y de ciento cincuenta a quinientos días multa. Quien con fines de explotación sexual, posea material pornográfico o erótico en los términos expresados en el párrafo anterior, será sancionado con la pena de uno a dos años de prisión. Quien ejecute acto sexual o erótico con persona mayor de catorce años y menor de dieciocho años de edad de cualquier sexo, pagando o prometiéndole pagar o darle a cambio ventaja económica o de cualquier naturaleza, será sancionado con pena de prisión de cinco a siete años. Para los fines establecidos en este Código y en las leyes especiales, se entenderá por explotación sexual todo tipo de actividad en que se usa el cuerpo de un menor de dieciocho años de edad o incapaz, aun así sea con su consentimiento para sacar ventaja o provecho de carácter sexual, erótico, económico, comercial, de reconocimiento público, publicitario o de cualquier otra índole”.

Bien Jurídico:

Libertad e integridad sexual.

Sujeto Activo:

Indeterminado (hombre o mujer)

Sujeto pasivo:

Determinado:

- a) Por la edad (menores de dieciséis años) En la explotación sexual
- b) Discapacitado. En la Explotación sexual.
- c) Mayor de dieciséis y menor de dieciocho años. En la explotación sexual
- d) Menor de dieciocho años (Pornografía)

- e) Mayor de catorce y menor de dieciocho años (Acto sexual con adolescentes mediante pago)

Acción o verbo rector en la Explotación Sexual:

- Inducir
- Facilitar
- Promover
- Utilizar

Elementos Descriptivos:

- Haciéndola presenciar o participar en un comportamiento o espectáculo

Elementos Normativos:

- Persona
- Discapacitado
- Público o privado
- Consienta (aunque la víctima de su consentimiento)

Elementos subjetivos:

- Con fines sexuales o eróticos

Acción o verbo rector en la Pornografía:

- Promover
- Financiar
- Fabricar
- Reproducir
- Publicar
- Comercializar
- Importar
- Exportar
- Difundir
- Distribuir

Elementos Descriptivos:

- Por cualquier medio.
- En actividad sexual o erótica, reales o simuladas, explícitas e implícitas o la representación de sus genitales.

Elementos objetivos:

- Material pornográfico o erótico
- La imagen
- La voz

Elementos Normativos:

- Directo
- Mecánico
- Digital
- Audiovisual
- Con soporte informático
- Electrónico
- Genitales

Elemento Subjetivo:

- Con fines de explotación sexual

Acción o verbo rector en Acto sexual con adolescentes mediante pago

- Ejecutar

Elementos Normativos:

- Explotación sexual
- Acto sexual o erótico
- Persona
- Sexo
- Ventaja económica
- Cualquier naturaleza

Elemento descriptivo:

- Pagando o prometiendo pagar

Núcleo Problemático:

En la práctica el elemento subjetivo se convierte en un conflicto para el ejercicio de la acción penal, ya que suele interpretarse por los judiciales que los fines de explotación sexual se reducen únicamente a la ventaja económica, desconociendo que en esta reforma de dicho artículo es donde se define este elemento normativo y lo extiende a

cualquier ventaja o provecho sexual, erótico, económico, comercial, de reconocimiento público, publicitario o de cualquier otra índole. De tal manera que se rechazan acusaciones o se archivan causas donde el Ministerio Público no puede demostrar esa ventaja económica. Por lo tanto, debe hacerse un análisis de la finalidad específica del sujeto activo y que pueda encasillarse en cualquiera de las definiciones establecidas al respecto.

Incumplimiento de los Deberes Alimentarios. Arto. 217 CP.

“Se impondrá pena de prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial por el mismo período para ejercer los derechos derivados de la relación padre, madre e hijos, guarda o tutela a:

- a) Quien estando obligado a prestar alimentos conforme la ley de la materia, mediante resolución provisional o definitiva u obligación contractual, o mediante acuerdo ante cualquier organismo o institución, deliberadamente omita prestarlos.
- b) Quien estando obligado al cuidado o educación de otra persona, incumpla o descuide tales deberes, de manera que ésta se encuentre en situación de abandono material o moral.

La pena será de dos a tres años de prisión, cuando el autor a sabiendas de su obligación alimentaria se ponga en un estado en el cual le sea imposible cumplir con su deber alimentario o por haber empleado cualquier medio fraudulento para ocultar sus bienes, o haber renunciado o abandonado su trabajo con el fin de evadir su responsabilidad.

También incurrirá en este delito, quien omita el deber alimentario por haber traspasado sus bienes a terceras personas en el plazo comprendido a doce meses anteriores al planteamiento del proceso judicial para el cobro del deber alimentario, durante el proceso judicial de cobro alimentario y hasta seis meses posteriores al dictado de la resolución estimatoria firme de la existencia del crédito alimentario o del deber de satisfacerlo.

Quedará exenta de pena impuesta la persona que pague los alimentos debidos, garantice razonablemente el ulterior cumplimiento de sus obligaciones o garantice convenientemente el cuidado y educación de la persona a su cargo.

El empleador que no realice la retención de los montos del salario del deudor alimentario ordenada por el Juez u oculte información en relación con los salarios u otros aspectos de interés para el establecimiento del monto que debe atender para cumplir el deber alimentario, que haya sido solicitada por la autoridad jurisdiccional, será responsable por desobediencia a la autoridad.

Para los efectos de este artículo, se entenderá como deudores alimentarios también a los hijos en relación a sus padres, cuando estén obligados a prestar alimentos, así como los hermanos con respecto a su hermano incapaz.”

El Tipo Objetivo: Elementos del Tipo:

Bien Jurídico:

El derecho a la subsistencia y formación integral de los alimentistas.

La ley N° 143 “Ley de Alimentos” que en su Arto. 2, define que se entiende por Alimentos:

- a) Alimentos propiamente dichos.
- b) De Atención Médica y Medicamentos.
- c) De Vestuario, Educación y Habitación.
- d) De educación e instrucción aprendizaje de una profesión u oficio
- e) Culturales y de recreación.

De lo que se desprende, el interés del Estado en garantizar el buen funcionamiento del conglomerado de derechos y deberes que surgen de una relación familiar. Lo que permite una interpretación amplia en cuanto a los bienes jurídicos protegidos en el entendido que la omisión o incumplimiento de un deber derivado por la ley resulta altamente lesivo para los intereses individuales de los beneficiarios.

Ello implica una serie de bienes jurídicos básicos de la personalidad tales como la educación, la salud física y síquica y la recreación, cuyo aseguramiento depende de la conducta de terceros. Se trata de brindar seguridad a los alimentistas, protegiendo tales bienes con el fin de preservarlos no sólo de una inminente lesión sino incluso del surgimiento de situaciones peligrosas, en el plan de desarrollo humano de la nación establecido en nuestra constitución política.

La ley No. 870 “Código de Familia” en su arto. 306, que define:

“Los alimentos son bienes necesarios que se proporcionan para la vida de una persona. Comprenden una prestación económica que guarda la debida relación entre las posibilidades económicas de quien está obligado a darlos y las necesidades de quien deberá recibirlos.

Además de las necesidades alimenticias propiamente dichas, se considera también como alimentos, los servicios necesarios para garantizar una mejor calidad de vida, tales como:

- a) Atención médica y medicamentos, rehabilitación y educación especial, cuando se trate de personas con alguna discapacidad independientemente de su edad;
- b) Vestuario;
- c) Habitación;
- d) Educación y aprendizaje de una profesión u oficio;
- e) Culturales y de recreación”.

Sujeto Activo: De acuerdo con la Ley N° 143

- 1. Padre
- 2. Madre
- 3. Hijos en relación a sus padres, cuando estén obligados a prestar alimentos
- 4. Hermano con respecto al hermano incapaz
- 5. El cónyuge
- 6. El compañero en unión de hecho estable
- 7. Representante Legal (Tutor o Tutora)

Sujeto Pasivo: De acuerdo con el Código de Familia

- 1. Los padres.
- 2. El Cónyuge que esté imposibilitado para trabajar por motivos de enfermedad o cualquier causa similar.
- 3. Hermano incapaz
- 4. Al compañero en unión de hecho estable.
- 5. Ascendientes y descendientes del grado de consanguinidad más cercano cuando se encuentren en estado de desamparo.

La obligación de dar alimentos a los hijos y a los nietos cesa cuando los alimentistas alcanzan su mayoría de edad (actualmente es a los 21 años y según el Código de la Familia será a los 18 años) cuando hayan sido declarados mayores por sentencia judicial, emancipados en escritura pública, por matrimonio, salvo en casos de enfermedad o discapacidad que les impida obtener por sí mismos sus medios de subsistencia.

Igualmente subsistirá esta obligación con respecto a los hijos que no hayan concluido sus estudios superiores, si los están realizando de manera provechosa.

Cuando se trata del cónyuge en el caso de disolución del vínculo matrimonial por mutuo consentimiento sin llegar a un acuerdo sobre la obligación alimenticia, el Juez en la sentencia de divorcio establecerá la pensión para el cónyuge que esté imposibilitado para trabajar por motivos de enfermedad o cualquier causa similar, a juicio del juzgador. Esta obligación cesará cuando el cónyuge favorecido contraiga nuevo matrimonio, establezca una unión de hecho estable o llegare a tener solvencia económica.

Código de Familia, establece en el artículo 316, en el orden siguiente:

- a) A los hijos e hijas que no han alcanzado la mayoría de edad, a los mayores de edad, hasta que cumplan los veintiún años de edad, cuando estén realizando estudios, siempre que no hayan contraído matrimonio, ni se hayan declarado en unión de hecho estable y no estén laborando, y a las personas con discapacidad. Los concebidos y no nacidos, se consideran personas menores de edad;
- b) El o la cónyuge o conviviente mientras no tenga para su congrua sustentación;
- c) A los hermanos y hermanas, a los ascendientes y descendiente hasta el segundo grado de consanguinidad, cuando se encuentren en estado de necesidad o desamparo. Si la persona llamada en grado anterior a la prestación no estuviera en condiciones de soportar la carga en todo o parte, dicha obligación será puesta en todo o en parte a cargo de las personas llamadas en grado posterior.

La situación típica generadora del deber de actuar se origina de la existencia de una obligación establecida mediante un acuerdo, contrato o resolución judicial aún de carácter provisional a favor de los hijos, cónyuge, compañero en unión de hecho estable, ascendiente o descendiente.

La no realización de la acción debida se concreta en dejar de pagar la prestación económica fijada.

Como en todo delito omisivo resulta imprescindible la capacidad personal de acción. De ahí la atipicidad del incumplimiento si el obligado carece de los medios materiales necesarios para hacer frente al pago de la pensión. Sin embargo no se puede negar la capacidad de acción ante cualquier empeoramiento de las condiciones habituales de vida del obligado si tales modificaciones no conducen a una situación de mera subsistencia.

Por razones semejantes, la capacidad de acción tampoco desaparecerá si el obligado al pago abandona voluntariamente su actividad laboral aun teniendo posibilidades de continuar con ella sin dificultades.

Conducta típica:

- a) Omitir prestar alimentos**
- b) Incumplir o Descuidar**

El tipo penal de incumplimiento de deberes alimenticios, es un delito de omisión pura o propia, los sujetos activos tienen una posición de garante con respecto de los sujetos pasivos, se castiga la omisión al deber de actuar, fijado expresamente en la norma.

En este caso el sujeto activo omite un acto propio de su función como garante, cuando deja de hacer una conducta, a la que está obligado de acuerdo con ese deber de garante que le deriva de la especial situación en la que se encuentra con respecto al sujeto pasivo. Pese a saber que debe cumplir con una obligación, el sujeto activo conscientemente no hace nada para realizar la labor encomendada.

Elementos Descriptivos (modo y tiempo):

- Deliberadamente.

Lo deliberado consiste en que el padre, madre u representante legal (Tutora o Tutor), a pesar de conocer su obligación o deber de prestar alimentos y tener capacidad económica “tener condiciones” no lo hace.

- Doce meses anteriores al planteamiento del proceso judicial para el cobro del deber alimentario
- Durante el proceso judicial de cobro alimentario
- Seis meses posteriores al dictado de la resolución estimatoria firme de la existencia del crédito alimentario o deber satisfecho.

Elementos Normativos:

- Alimentos
- Resolución provisional o definitiva
- Obligación Contractual
- Acuerdo
- Organismo
- Institución
- Cuidado
- Educación
- Persona
- Abandono material o moral
- Deudores alimentarios
- Bienes

Elemento Subjetivo:

A sabiendas de su obligación alimentaria se ponga en un estado en el cual le sea imposible cumplir con su deber alimentario o por haber empleado cualquier medio fraudulento para ocultar sus bienes o haber renunciado o abandonado su trabajo, **con el fin de evadir su responsabilidad.**

Iter criminis:

El delito se consuma con la mera conducta omisiva del que debiendo cumplir su obligación no lo hace o retardar o rehusarse a cumplir con las obligaciones establecidas.

Queda claro que las meras liberalidades (regalos, pagos de viajes, etc.) no eximen del pago de la pensión, no se puede validar la creencia errónea del obligado de estar cumpliendo por una vía alternativa con el deber de asistencia impuesta en el convenio o resolución judicial.

Exención de pena:

Queda exento de pena impuesta la persona que pague los alimentos debidos, garantice razonablemente el ulterior cumplimiento de sus obligaciones o garantice convenientemente el cuidado y educación de la persona a su cargo.

Coresponsabilidad:

El empleador que no realice la retención de los montos del salario del deudor alimentario ordenada por Juez u oculte información en relación con los salarios u otros aspectos de interés para el establecimiento del monto que debe atender para cumplir el deber alimentario, que haya sido solicitada por la autoridad jurisdiccional, **será responsable por DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD**. En tal caso se acusa por conexidad en el mismo expediente, sin embargo no se imputa el delito de Incumplimiento de deberes alimentarios en ningún grado de participación, sino como autor del delito de Desobediencia a la autoridad.

Núcleo Problemático:

El problema se genera por las modalidades del incumplimiento pues en el tipo penal no se consideran modalidades del incumplimiento pero se debe considerar que estos pueden ser incumplimientos totales o parciales de forma temporal o por largos períodos incumplidos, de tal manera que todo debe ser valorado de acuerdo a las obligaciones asumidas por el obligado o establecidas por el Juez Civil en la sentencia ya sea como renta presuntiva u obligaciones contractuales y el daño causado o la puesta en peligro del bien jurídico protegido.

Existen diversos criterios en relación a la modalidad de incumplimiento de la obligación, pero en todos se ha coincidido que deber ser analizado cada caso de forma particular, pues en nuestra legislación las decisiones que el tribunal toma en materia de familia no constituyen cosa juzgada y eso significa que la obligación puede ser objeto de alguna modificación invocada por alguna de las partes, que puede causar efecto no

desde que se ha solicitado la modificación sino desde que el tribunal competente se pronuncia a favor de la modificación.

En relación a sentencia de alimentos, la ley 143 “Ley de Alimentos”, estas se deben tramitar en efecto devolutivo, lo que permite en la vía civil ejecutar las mismas, no así en la vía penal, esta consecuencia trasciende en la vía penal, y se está ante una condición de procedibilidad o de la resolución de un antejuicio, se suspenderá su ejercicio hasta que desaparezca el obstáculo.

En las sentencias definitivas, u obligación contractual, o mediante acuerdo ante cualquier organismo o institución, están sujetas a competencia territorial y en tal caso se atenderá a lo establecido en las reglas de competencia “En los de los delitos por omisión, el lugar donde debía ejecutarse la acción omitida”, que comúnmente es el domicilio del alimentista.

Si bien es cierto en materia civil o de familia puede reclamarse hasta un año anterior a la demanda por los alimentos atrasados y dejados de percibir, en materia penal, ya existe sentencia de la Sala Especializada en Violencia de Managua, dictada a las once de la mañana del diez de junio del dos mil trece, en la cual se reitera el criterio de la Unidad en que por la particularidad permanente de comisión de este delito, que se mantiene en el tiempo hasta en tanto el sujeto activo no comience a cumplir con su obligación y por ser los alimentos derechos irrenunciables e imprescriptibles, tampoco podemos hablar de prescripción de la acción penal y se imputará todo el tiempo en que el sujeto activo se haya mantenido en comisión del delito.

No basta que en la relación de hechos de la acusación se impute el incumplimiento de la obligación por parte del sujeto activo, sino lo deliberado de su conducta, para evitar rechazos de acusación.

Entre más claro y preciso estén señalados los acuerdos, mejor será nuestra imputación, no podemos imputar hechos sin tiempos, modos y lugares de pago, se debe establecer el equivalente en efectivo el monto adeudado aunque éste se haya fijado en porcentaje, es por ello que se requiere conocer y demostrar los ingresos mensuales del investigado para hacer una sencilla operación matemática y establecer de forma precisa los montos que se deben. Lo que comúnmente se fija en especie (calzado, comida, ropa, útiles escolares y uniformes) se deben soportar con facturas de lo que la persona representante de la víctima haya asumido en su totalidad para establecer equitativamente lo que debe entregar en efectivo el sujeto activo que corresponda a lo establecido en especies en la resolución o acuerdo del que se trate. Todo con el ánimo de evitar rechazos de acusaciones.

Violencia doméstica o intrafamiliar. Arto. 155 CP reformado por el arto. 59 de la Ley 779 inciso d)

Quien ejerza cualquier tipo de fuerza, violencia o intimidación física o psicológica, en perjuicio de quien haya sido su cónyuge o conviviente en unión de hecho estable o contra la persona a quien se halle o hubiere estado ligado de forma estable por relación de afectividad, niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, sobre las hijas e hijos propios del cónyuge, conviviente o sobre ascendientes, descendiente, parientes colaterales por consanguinidad, afinidad, adopción o sujetos a tutela. En el caso de niños, niñas y adolescentes no se podrá alegar el derecho de corrección disciplinaria. A los responsables de este delito se les impondrá las siguientes penas:

- a) Lesiones leves, la pena será de uno a dos años de prisión.
- b) Lesiones graves, la pena será de tres a siete años de prisión.
- c) Lesiones gravísimas, la pena será de cinco a doce años de prisión.

Además de las penas de prisión anteriormente señaladas, a los responsables de violencia intrafamiliar, se les impondrá la inhabilitación especial por el mismo período de los derechos derivados de la relación entre madre, padre e hijos o con la persona sujeta a tutela.

Tipo Objetivo: Elementos del tipo penal

Sujeto Activo: Indeterminado (hombre o mujer) cualificado porque debe haber estado ligado al sujeto pasivo como su cónyuge o conviviente en unión de hecho estable... por relación de afectividad, sobre las hijas e hijos propios del cónyuge, conviviente o sobre ascendientes, descendiente, parientes colaterales, por consanguinidad, afinidad, adopción o sujetos a tutela. Todos estos elementos calificadores se convierten a su vez en elementos normativos de carácter jurídico y sociocultural ya que requerirán de una interpretación judicial.

Sujeto Pasivo: Indeterminado (hombre o mujer) cualificada por su condición de vulnerabilidad, niños, niñas, adolescentes, persona adulta mayor, personas con discapacidad o por su vínculo o parentesco con el sujeto activo ascendientes, descendientes, parientes colaterales (hermanos), por consanguinidad, afinidad, adopción o sujetos a tutela. Todos estos elementos calificadores se convierten a su vez en elementos normativos de carácter jurídico y sociocultural porque requieren de interpretación judicial.

Bien Jurídico Protegido:

- Integridad y Salud Física:

El bien jurídico protegido ha de ser entendido como la incolumidad personal, definida por Conde Pumpido Ferreiro como sinónimo de sano, integro, indemne y sin lesión.

Verbo Rector:

- Ejercer

Elementos Normativos:

- Cualquier tipo de fuerza
- Violencia
- Intimidación física o psicológica
- Derecho de corrección disciplinaria
- Lesiones Leves (que nos remite al concepto del arto. 151 CP reformado en el arto. 58 inco. b) de la Ley 779)
- Lesiones Graves (que nos remite al concepto del arto. 152 CP reformado en el arto. 58 inco. c) de la Ley 779)
- Lesiones Gravísimas(que nos remite al concepto del arto. 151 CP reformado en el arto. 59 inco. c) de la Ley 779)

Iter criminis:

Debido a las particularidades de este tipo penal, no cabe apreciar las formas imperfectas de ejecución, es decir no cabe la tentativa ni la frustración, esto en virtud de que se prevé que la conjunción de cualquier tipo de fuerza, violencia o intimidación física o psicológica consuma el delito, sin requerimiento de ningún elemento subjetivo a diferencia del delito de Violencia psicológica, que tiene el propósito de someter, controlar o denigrar a la mujer.

Concursos de Delito:

Admite las diferentes formas de concursos.

Núcleo problemático:

En cuanto a las penas de este delito, si bien el arto. 155 CP nos remite al concepto de Lesiones leves, lesiones graves y lesiones gravísimas contempladas en los artos. 151, 152, 153 CP, se debe tomar en cuenta que todos estos artículos fueron reformados por la Ley 779 como ya se dijo anteriormente, pero las penas que el Ministerio Público debe solicitar son las establecidas en el arto. 155 CP reformado en el arto. 59 inco. d) de la Ley 779 aunque para efectos de conceptos se tenga que remitir a lo establecido en los tipos penales base.

Este tipo de delito da cobertura a todas las manifestaciones de violencia en el ámbito familiar que no contempla la Violencia psicológica ni requiere de comprobar el elemento subjetivo del propósito de denigrar, controlar o someter a la mujer.

De la aplicación del principio de oportunidad en casos de violencia de género

La aplicación de los nuevos institutos procesales que permiten finalizar el proceso penal, sin que llegue a la fase del debate, tales como: mediación, acuerdo, suspensión condicional de la persecución penal y la prescindencia de la acción penal, cobran especial importancia cuando se trata de aplicarlos en delitos derivados de violencia de género.

Es por ello, que es necesario que los y las fiscales, se preparen conozcan las dimensiones de esa problemática para erradicar el mal manejo sobre la visión de la violencia intrafamiliar donde históricamente se ubica como un problema del ámbito privado, mirando con indiferencia como el hogar se convierte en un espacio peligroso e inseguro, donde menos se posibilita el adecuado y armónico desarrollo físico, intelectual, sexual y psicológico de sus miembros.

Debemos tomar en consideración que el Nuevo Código Penal establece imperativamente en el artículo 181 la restricción de la Mediación y otros beneficios de suspensión de pena; cuando el delito sexual sea cometido contra niños, niñas y adolescentes.

No obstante existen otra gama de delitos donde no existe una prohibición expresa de la aplicación del principio de oportunidad. En consecuencia los y las fiscales deben analizar las situaciones específicas de violencia, aunque no siempre dejan evidencias físicas, pero sí producen efectos profundos que trascienden al campo emocional de las víctimas y sus otras esferas de desenvolvimiento social. Por tanto para detectar la violencia es necesario mirar más allá de lo físico y explorar conductas y actitudes que nos puedan mostrar formas, ciclos, historias, niveles de afectación, peligro real u otros para lo cual los peritos forenses son un recurso vital para esta tarea.

Abordaremos en este protocolo solamente la aplicación del principio de oportunidad dirigido a la mediación, acuerdo y suspensión de la persecución penal, en virtud que el acuerdo condicionado, depende de circunstancias especiales de aceptación de hechos acusados y cooperación en posteriores persecuciones, lo que obedece al manejo de política criminal del Ministerio Público, igual que con la institución procesal de Prescindencia de la acción penal que corresponde a disposiciones específicas del Fiscal General de la República.

b) La Mediación: Art. 46 de la Ley 846

Dentro del ámbito de la violencia intrafamiliar se debe tomar en cuenta que el agresor se vale del poder que ejerce sobre la víctima, quienes se encuentran en una situación

de dependencia, creando en ellas sentimientos de desesperanza, culpabilidad, lastima, impotencia, etc. Dichas secuelas inciden sobre la capacidad de la víctima para tomar decisiones libremente, lo que se convierte en un obstáculo para negociar con el victimario en un plano de igualdad, lo que trae como consecuencia un consentimiento viciado, que no es el objetivo de esta institución procesal.

En consecuencia no se puede homologar la mediación, cuando se desprenda de las diligencias practicadas (informe policial) y de los acuerdos mismos recogidos en la tramitación de la mediación, que evidencie la situación de desventaja y sometimiento de la víctima para aceptar el acuerdo. Por ende para homologar dicha mediación, se debe de establecer que el mismo no se haya realizado sobre la voluntad viciada de la víctima, que no existe ningún indicativo de coacción o amenaza que invaliden su capacidad de negociación.

Si del contenido de la Mediación se evidencia, que la víctima ha quedado en clara desventaja frente al imputado sometándose a los intereses de éste u otros se deberá considerarse no válida, ni procedente, esto significa en aquellos supuestos cuando la víctima es la que se obliga o asume compromisos, como si fuera la víctima, la persona objeto de investigación, lo que desvirtúa la naturaleza y finalidad del criterio de oportunidad, en consecuencia los y las Fiscales deben de rechazar la mediación, porque es una manifestación clara del sometimiento de la víctima y que se subsume a una de las fases del ciclo de la violencia, así mismo, dicha improcedencia se debe declarar en base a los Principios de Proporcionalidad y de Equidad, entre las partes en conflicto y aplicación del enfoque de género, y en cumplimiento del Instructivo No. FG-003-2003, emitido por el Fiscal General de la República

Declarar la improcedencia cuando el imputado haya reincidido en la comisión de un delito de igual naturaleza. Esto en virtud de que con la aplicación de este criterio de oportunidad no se ha establecido la paz jurídica ni la convivencia social armónica finalidades previstas en el art. 7 del código de procedimiento penal no solo para el proceso sino para otras soluciones alternas basada en las disposiciones de la acción penal tales como la Mediación y acuerdos.

El Ministerio Público, para considerar la procedencia y validez de la Mediación deberá contar con los elementos de investigación necesarios que corroboren la existencia de un hecho punible y la participación del imputado. Establecer en coordinación con la Comisaría de la Mujer y la Niñez, los mecanismos de control y de seguimiento de la Mediación y en las sedes departamentales y regionales con la dependencia de la Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia de Género.

c) La Suspensión Condicional de la Persecución Penal

Criterio de oportunidad regulado en los art. 63 al 68 del Código Procesal. El cual establece la viabilidad de su aplicación, en los delitos menos graves, cuya aplicación es

sólo una sola vez a favor del acusado, él cual una vez iniciado el proceso y antes de que la causa sea remitida a juicio, manifieste su conformidad con los hechos imputados y se somete durante un plazo, a un régimen de prueba, el cual debe cumplirse satisfactoriamente con determinadas obligaciones legales e instrucciones que impone el tribunal para el caso concreto, con consecuencias jurídicas ante el incumplimiento de las medidas.

Entre la Mediación y la Suspensión Penal de la persecución penal; la aplicación de este segundo principio de oportunidad, es el que resulta más idóneo y proporcional en los delitos de violencia de género cuya competencia se debe ventilar en un juzgado local, por ser los delitos que se produzcan menos graves, esto obedece a que el sistema o reglas de régimen de prueba que recoge la Sentencia; tienen una doble finalidad, la primera permite que el acusado, trate factores personales, los cuales inciden en su comportamiento violento en el núcleo familiar y el establecer una obligación jurídica, esta viene a ayudar o mejorar su condición educacional, emocional y social, lográndose la reinserción del mismo en la sociedad y en su comunidad. La segunda finalidad que cumple este principio, que se le brinda mayor protección y seguridad jurídica a las víctimas, ya que ofrece la posibilidad de alejar a la persona agresora del grupo familiar y someterla a un tratamiento psicológico, de participar en programas especiales de tratamiento para combatir el alcoholismo o la drogadicción, lo que permite, una vez concluido este régimen pueda establecer relaciones armónicas con las personas del núcleo familiar, ejerciendo sus derechos y cumpliendo sus obligaciones conforme la ley de materia (leyes de familia) y a su vez puede realizar una reparación integral del daño patrimonial, tomando en cuenta que una de las manifestaciones de la violencia intrafamiliar es la violencia patrimonial, en donde el agresor sustrae o destruye los bienes propiedad de la víctima.

d) Acuerdo Simple

Esta figura de carácter procesal la cual tiene su fundamento legal en el art 61 Código Procesal Penal, es un instituto procesal cuyo objetivo versa en la posibilidad de que el imputado, una vez iniciado el proceso penal, admita los hechos acusados, en su beneficio y por economía procesal, de manera tal que se evita la sustanciación de un juicio oral y público, obteniendo en su lugar una disminución de la sanción penal, o la prescindencia parcial de la persecución penal o disminuir el grado de participación.

Cuando el acusado y su defensa busquen un acercamiento con el Ministerio Público en procura de un acuerdo. Los y las fiscales en los delitos vinculados a la violencia de género deberán tener en cuenta que la aplicación de este criterio de oportunidad evita la revictimización, además de permitir la obtención de una sentencia condenatoria de manera expedita conforme las finalidades del proceso penal previstas en el art. 7 del Código Procesal Penal.

Siendo una facultad del Ministerio Público decidir sobre la aplicación de este criterio de oportunidad y de negociar la sanción penal así como las circunstancias de su ejecución. Los y los fiscales en los delitos de violencia de género deberán:

4. Procurar la presencia de la víctima o su representante al momento de practicarse la negociación del acuerdo y brindarle la oportunidad de opinar.
5. En caso de que la víctima, exprese que no está de acuerdo con la aplicación de dicho principio de oportunidad, así lo plasmarán en el documento que recoge el Acuerdo, a la vez notificarán a la víctima de la realización de la audiencia de control de legalidad que realice el Judicial, a fin de que la misma exprese lo que tenga a bien, garantizando que en el trámite, se le dio la intervención de ley, como en derecho corresponde. Los y las Fiscales, deberán de tomar en cuenta, que en violencia de género siempre resulta recomendable evitar la revictimización, máxime si en la negociación se ha logrado garantizar el principio de justicia que señala el Código Procesal Penal.
6. En caso en que la víctima no se encuentre presente a pesar de haber sido citada se deberá Notificar de manera formal sobre los términos y condiciones en que se ha suscrito el acuerdo. Y aun cuando hubiese estado presente se deberá Notificar a la víctima dejándose constancia en el Acta respectiva.

Glosario

Perjuicio a la salud: se presenta cuando se vulnera cualquiera de las funciones orgánicas o mentales, manifestadas clínicamente por signos o síntomas, así como, alteraciones detectables por exámenes de laboratorio o medios diagnósticos cuando se requieran.

El menoscabo psíquico producido por efecto de la situación denunciada, se traduce en una alteración mental nueva o novedosa en la biografía del sujeto (en ocasiones por descompensación de los rasgos psicopatológicos premórbidos) o en un agravamiento de una enfermedad anterior.

Grave enfermedad psíquica: se entiende como aquella condición de salud psíquica que genera síntomas que son particularmente graves o los síntomas que dan lugar a un notable deterioro de la actividad social, laboral o amenazan la vida.

Indicadores de maltrato psicológico: son los síntomas y signos, indicativos de alteraciones a nivel del área psicológica autoestima baja, de ira, estado de vulnerabilidad, entre otros o de trastornos psiquiátricos como del estado de ánimo, de ansiedad, depresión, ideación o intento suicida, angustia, de personalidad; abuso o dependencia a sustancias, síndromes, mecanismos de defensa, entre otros, contemplados en el CIE 10 o el DSM IV u otros.

Integridad psíquica: Es el estado de conservación de todas las habilidades motrices, emocionales e intelectuales. Maltrato psicológico: es toda aquella conducta o conjunto de conductas que ocasionan, causan, o provocan en una o más personas un perjuicio, daño, sufrimiento, malestar y/o perturbación psíquica.

- Menoscabo: disminución de la salud psíquica manifestada por síntomas y/o signos que configuran un cuadro clínico o una enfermedad orgánica o funcional.
- **Persistente:** situación, evento o síntoma que se mantiene firme o durará por largo tiempo (más de dos años).

Psicoterapia: en lo referente al art. 151 del Código Penal y para efecto de esta norma se entiende como tratamiento médico la psicoterapia, que consiste en el tratamiento de naturaleza psiquiátrico/psicológico que se brinda a toda persona que sufre un daño psíquico.

Tratamiento-Psicoterapéutico: La psicoterapia es el proceso de cambio conductual, cognitivo y emocional que se produce gracias a la interacción entre el psicólogo clínico y el paciente –afectado–. Mediante el diálogo, la reflexión, la realización de ejercicios, el aprendizaje de técnicas y la utilización de herramientas adecuadas; el psicoterapeuta como guía del cambio, logra reducir considerablemente o eliminar por completo los síntomas que producen el malestar psicofísico y emocional. Pero el objetivo fundamental de la psicoterapia es ayudar a resolver problemas nucleares que producen el malestar y mejorar la calidad de vida de las personas. En este sentido, el tratamiento es integral, ya que se basa no solo en los aspectos patológicos del individuo, sino también en el desarrollo de sus potencialidades personales

Salud psíquica: es la capacidad de autonomía mental para reaccionar ante las dificultades y los cambios del ambiente. El individuo necesita, pues, vivir satisfecho consigo mismo y en su relación con las demás personas.

Grados de autoestima:

Tres estados:

- Tener una **autoestima alta** equivale a sentirse confiadamente apto para la vida, o, usando los términos de la definición inicial, sentirse capaz y valioso; o sentirse aceptado como persona
- Tener una **baja autoestima** es cuando la persona no se siente en disposición para la vida; sentirse equivocado como persona. No sentirse valioso, merecedor de la felicidad.
- Tener un **término medio de autoestima** es oscilar entre los dos estados anteriores, es decir, sentirse apto e inútil, acertado y equivocado como persona, y manifestar estas incongruencias en la conducta –actuar, unas veces, con sensatez, otras, con irreflexión, reforzando, así, la inseguridad.
- En el caso de la víctima de violencia tanto el maltrato físico y emocional va a tener un impacto en la autoestima del tipo baja, especialmente el maltrato emocional en forma de humillación, ofensas, que van dirigidos de forma directa a menoscabar la valía de la víctima. En cuyo caso vamos encontrarnos manifestaciones que expresan este deterioro, como la indefensión aprendida, la inseguridad permanente, termina sintiéndose un ser incapaz, este tipo de maltrato por acumulativo y reiterativo se puede

constituir en un trauma psíquico y podemos encontrarnos con depresiones graves, ideas de muerte, o intentos, etc.

Evaluación del nivel de deterioros según OMS

Se entiende como disfunción: toda perturbación que altere el funcionamiento normal y habitual en las diferentes actividades que lleva a cabo, y en las distintas áreas vitales de relación del individuo.

Escala de funcionamiento y discapacidad de la OMS

1. cuidado personal y supervivencia
2. funcionamiento laboral/académico
3. funcionamiento familiar
4. funcionamiento social/comunitario

Descripción de las diferentes disfunciones Escala OMS

- Ninguna Disfunción: El funcionamiento del paciente está en relación a las normas de su grupo de referencia y contexto sociocultural.
- Disfunción Mínima: Esta presente una desviación de las normas en una o más áreas, las perturbaciones son menores, pero persisten, la mayor parte del tiempo.
- Disfunción Obvia: La desviación de las normas es conspicua y las disfunciones interfieren con la adaptación social, la disfunción en por lo menos un área persiste casi todo el tiempo, disfunciones más severas solo por algunos días.
- Disfunción Severa: Las desviación de las normas son más marcadas en la mayoría de las áreas y persisten más de la mitad del tiempo.
- Disfunción muy Severa: Las desviaciones en todas las áreas son muy severas y persisten prácticamente todo el tiempo.
- Disfunción Máxima: Las desviaciones han alcanzado un punto crítico puede estar presente un claro peligro para la existencia del propio paciente o vida Social y/o la vida de otros.

En el caso de las víctimas de violencia vamos a ver por ejemplo deterioros en el ámbito laboral, que se manifiestan en inestabilidad general en el desempeño, ausencias laborales, baja en el rendimiento, falta de concentración, perturbación en el ritmo natural de las tareas con sus consecuentes efectos o es incapaz de trabajar.

En el plano personal, marcada inseguridad, estado de alerta, puede manifestarse un descuido en su arreglo, expresan antes me arreglaba ahora me da igual, no me dan ganas de bañarme etc. En el plano familiar, abandona la familia o deja de visitar a su familia, se aísla, deja de hacer actividades que antes hacía etc. En lo social evita a sus amigos, no sale, cada vez pierde el interés en salir. Para dar algunos ejemplos.

Anexo I. Modelo de formulario para denuncia de violencia de género

DEPENDENCIA/ÓRGANO ACTUANTE:

FECHA:

HORA:

DENUNCIA PENAL: Sí No

Nº EXPEDIENTE:

I. DENUNCIANTE (completar cuando el/la denunciante sea diferente a la víctima)

APELLIDO:

NOMBRE:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD Nº:

EXHIBE: Sí No No tiene

NACIONALIDAD:

FECHA NACIMIENTO:

VÍNCULO CON LA VÍCTIMA:

REPRESENTA A UNA INSTITUCIÓN: Sí No ¿Cuál?

DOMICILIO:

TELÉFONOS:

¿PIDE RESERVA DE IDENTIDAD?: Sí No

II. VÍCTIMA

APELLIDOS:

NOMBRE

APODO:

SEXO:

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:

NACIONALIDAD

ESTADO CIVIL:

PERTENENCIA A COMUNIDAD ÍNDIGENA, MINORÍA, MIGRANTE O DESPLAZADA INTERNA:

Sí No ¿Cuál?

LENGUA MATERNA:

NECESITA INTÉRPRETE: Sí No ¿De qué lengua?

DOCUMENTO DE IDENTIDAD N°:

EXHIBE: Sí No No tiene

OCUPACIÓN:

TRABAJO INFORMAL: Sí No ¿Cuál?

INGRESOS PROPIOS: Sí No

DEPENDENCIA ECONÓMICA DEL AGRESOR? Sí No

NIVEL EDUCATIVO:

a) Analfabeto/a

b) Primaria completa/incompleta

c) Secundaria completa/incompleta

d) Terciaria/universitaria completa/incompleta

DOMICILIO ACTUAL (en caso de domicilio de difícil acceso añadir referencias o croquis)

TELEFONO PARTICULAR:

TELEFONO CELULAR:

HORARIO EN QUE PUEDE SER CONTACTADO/A: TELÉFONO Y DIRECCIÓN PERSONA DE REFERENCIA:

III. DENUNCIADO

APELLIDOS:

NOMBRE:

APODO:

SEXO:

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:

NACIONALIDAD

ESTADO CIVIL:

PERTENENCIA A COMUNIDAD ÍNDIGENA, MINORÍA, MIGRANTE O DESPLAZADA INTERNA:

Sí No ¿Cuál?

OCUPACIÓN:

TRABAJO INFORMAL: Sí No ¿Cuál?

INGRESOS PROPIOS: Sí No

NIVEL EDUCATIVO:

- a) Analfabeto/a b) Primaria completa/incompleta
c) Secundaria completa/incompleta d) Terciaria/universitaria completa/incompleta

DOMICILIO ACTUAL (en caso de domicilio de difícil acceso añadir referencias o croquis)

TELEFONO PARTICULAR: TELEFONO CELULAR:

RELACIÓN CON LA VÍCTIMA:

- | | | |
|--------------------------|----------------|-----------------------|
| a) Esposo/a | b) Ex esposo/a | c) Pareja conviviente |
| d) Ex pareja conviviente | e) Novio/a | e) Ex novio/a |
| f) Padre/madre | g) Hijo/a | h) Hermano/a |
| i) Otro (especificar) | | |

IV. COMPOSICIÓN GRUPO FAMILIAR

CONVIVE CON EL AGRESOR? Sí No

VIVIENDA: a) Propia b) Del agresor c) De ambos d) Alquilada e) Prestada/cedida f) En precario

¿COMPARTE LA VIVIENDA CON OTRO GRUPO FAMILIAR? Sí No

Nombre y apellidos de los miembros del hogar	Edad	Sexo	Vínculo	Discapacitado/a?	Víctima de la violencia Si/No	Testigo de la violencia Si/No

Hijos/as no convivientes? ☐ Sí ☐ No

V. HECHOS

RELATO DE LOS HECHOS (El relato de los hechos será cronológico, claro y preciso. Se solicitará a la víctima que exponga los hechos con sus propias palabras, sin modificar sus expresiones en atención a la eventual crudeza de las mismas. Describirá todos los hechos, aunque no haya denunciado antes)

.....

.....

.....

.....

.....

LUGAR DE LOS HECHOS:

FECHA/S DE LOS HECHOS:

MOTIVOS ESGRIMIDOS POR EL AUTOR:

TIPO DE VIOLENCIA (Física, psicológica, patrimonial o sexual) El maltrato ocasionado debe relatarse con todo tipo de detalles, huyendo de expresiones genéricas y reflejando lo más fielmente posible las palabras utilizadas, los insultos, las amenazas..., así como las acciones que se hayan producido)

.....

.....

.....

.....

MEDIOS UTILIZADOS PARA LA COMISIÓN DEL HECHO (En caso de utilización de objetos o instrumentos para agredir o intimidar, se deberá ofrecer descripción de los mismos)

.....

.....

VI. DATOS DE INTERÉS

SE HA PRODUCIDO LA VIOLENCIA EN PRESENCIA DE NIÑOS/AS O ADOLESCENTES? Sí No

ALGUN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA HA SIDO OBJETO DE MALTRATO? Sí No No sabe

AUMENTO DE LA VIOLENCIA EN LOS ÚLTIMOS DOS MESES? Sí No No sabe

LA VÍCTIMA ESTÁ EMBARAZADA? Sí No No sabe

LA VÍCTIMA TIENE UNA DISCAPACIDAD? Sí No No sabe

LA VÍCTIMA HA RECIBIDO ASISTENCIA MÉDICA POR LA VIOLENCIA? Sí No No sabe

LA VÍCTIMA PADECE ALGUNA ENFERMEDAD? Sí No ¿Cuál?

EL AGRESOR TIENE ANTECEDENTES PENALES/CAUSAS PENALES EN TRÁMITE? Sí No No sabe

EL AGRESOR CONSUME ABUSIVAMENTE ALCOHOL/DROGAS? Sí No No sabe

EL AGRESOR SE ENCUENTRA EN TRATAMIENTO PSIQUIÁTRICO Y/O TIENE DIAGNOSTICADA ENFERMEDAD MENTAL? Sí No No sabe

EL AGRESOR TIENE ANTECEDENTES DE ACTOS DE VIOLENCIA O AMENAZAS A OTRAS PERSONAS?

Sí No No sabe

EL AGRESOR TIENE ARMAS DE FUEGO? Sí No

EL AGRESOR UTILIZÓ ARMAS INTIMIDATORIAMENTE? Sí No No sabe

EL AGRESOR AMENAZÓ A LA VÍCTIMA DE MUERTE O DE LESIONARLA GRAVEMENTE? Sí No No sabe

EL AGRESOR HA AMENAZADO/INTENTADO SUICIDARSE? Sí No No sabe

VII. DENUNCIAS ANTERIORES

Efectuada/s ante:

Fecha:

Autoridad interviniente/s:

Se dictó medida de protección y/o cautelar? Sí No ¿Cuál?

Otras denuncias:

OTROS DATOS INTERÉS:

¿ESTÁ EN TRÁMITES DE SEPARACIÓN O DIVORCIO? Sí No

TIENE ABOGADO/A? Sí No

APELLIDO Y NOMBRE:

APORTA DOCUMENTACIÓN DE OTROS ORGANISMOS QUE HAN INTERVENIDO EN EL ASUNTO? Sí No

Se hace entrega de copia al/la denunciante y se le notifica que la presente denuncia será remitida para su tramitación a _____ donde continuará el trámite. El/la denunciante lee íntegramente, firmando a continuación.

.....

Firma denunciante

.....

Firma funcionario/a

.....

Firma representante legal (si denunciante es menor)

.....

Firma intérprete (si lo precisa)

Anexo 2. Análisis estructural de los delitos regulados y sancionados en la ley 779 ley integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas a la Ley 641 “Código Penal”

Art. 9: Delito de Femicidio

Elementos Objetivos del Tipo:

Sujeto Activo: Es quien realiza la conducta, acción u omisión. El sujeto activo es el Hombre en su calidad de cónyuge, ex cónyuge, conviviente, ex conviviente, novio y ex novio.

Se debe entender que la condición de conviviente o ex conviviente implica a las parejas que tienen o mantuvieron una relación de pareja.

Sujeto Pasivo: Es la persona sobre quien recae la conducta típica. El sujeto pasivo es la Mujer en su condición de adolescente, adulta y adulta mayor.

Bien Jurídico Protegido: Derecho fundamental o valor que protege la norma.

- Vida y
- El Derecho a vivir libre de violencia.

Acción: Dar muerte a una mujer.

Verbo Rector: Matar

Elementos Normativos:

- Relación de pareja o de intimidad. REVISAR REFORMA REG.
- Reiterada manifestación de violencia.

- Menosprecio del cuerpo de la víctima.
- Satisfacción de instintos sexuales.
- Mutilación del cuerpo.
- Misoginia.

Iter criminis:

En este tipo penal caben todas las formas de ejecución, es decir cabe la Conspiración, Proposición y Provocación, tentativa, frustración y consumación del delito.

Es fundamental que se delimite cada fase de ejecución del delito en el caso concreto en concordancia con el artículo 28 del Código Penal.

Concursos de Delito:

Por tratarse este tipo penal que afecta bienes jurídicos eminentemente personales, cabe apreciar la concurrencia de los concursos (real e ideal). Ejemplo de ello es el tipo penal de violación básico y agravado con el delito de Femicidio, ya que la circunstancia regulada en el inciso 4) del arto. 34 del reglamento Decreto 42-2014, no debe subsumirse al delito de violación ya que se debe distinguir el instinto sexual del acceso carnal.

El delito de Femicidio que puede concurrir con el delito de aborto sin consentimiento.

Núcleos Problemáticos:

Es importante destacar que en este tipo penal se puede presentar núcleos problemáticos en la interpretación de la conducta realizada por el sujeto activo. Ejemplo:

6. Se suele confundir la Amenaza o Intimidación con la Tentativa de Femicidio y la Tentativa con la Frustración de este tipo penal. Para estos supuestos planteados debe entenderse que:
 - a) Que la amenaza es un delito de mero actividad que no requiere para su consumación más que expresar de cualquier forma el mal que se pretenda causar a la víctima. En cambio en la tentativa se requiere que el sujeto activo de inicio a los actos que llevan a la consumación del delito.
 - b) En lo que respecta a la diferencia entre Tentativa y Frustración, con respecto a la Tentativa debemos de representar si el sujeto activo pudo o tenía la capacidad de realizar mas actos para lograr su pretensión. En cambio en el caso de la frustración el sujeto activo debe de realizar todos los actos encaminados a lograr un resultado, es decir, debe de poner en peligro o afectar significativamente el bien jurídico protegido pero por causas externas no se dio la consumación. Tomando en cuenta los elementos objetivos de cuál era la intención del sujeto, expresiones proferidas, antecedentes del autor, naturaleza del arma, dirección,

intensidad, el número de golpes, estocadas, heridas o disparos, arma empleada, zona anatómica atacada y potencial resultado letal.

7. **Conexidad y concursos de delitos:** En estos casos hay que hacer una clara diferencia de los hechos que pueden generar conductas subsumibles en concursos reales e ideales, ejemplos la Violación, aborto, también aquellas conductas que pueden generar conexidad de causas, entendiéndose que la conexidad es para efecto de establecer competencia y los concursos es para establecer la pena a imponer.
8. En el caso del Femicidio en grado de Frustración cuando la víctima sobreviviente tiene una afectación psicológica producto de una **manifestación reiterada de violencia**, deberá de imputarse como Femicidio bajo la circunstancia del art. 9 inciso c) de la Ley 779 y inciso 3 del art. 34 del Reglamento. En los demás supuestos contemplados en el art. 34 del reglamento podría considerarse el concurso de Violencia Psicológica siempre que la valoración del daño psíquico lo determine y permita su individualidad.
9. De conformidad al Decreto 42-2014 debe entenderse que el ámbito de aplicación del delito de Femicidio se circunscribe a las relaciones de pareja.
10. En lo que respecta a la solicitud de pena a imponer, se deberá fundamentar la misma de conformidad al penúltimo párrafo del art. 9 de la Ley 779, es decir la pena oscilará de 20 a 25 años de prisión, si concurren dos o más circunstancias del art. 34 se aplicará la pena máxima, debiendo invocar las circunstancias del asesinato como agravantes específicas para aumentar la pena un tercio.
Las reglas para la aplicación de la pena del art. 78 no tendrán lugar cuando las circunstancias de los hechos conlleven aplicar estrictamente su propia regla de pena. En los demás casos se regirán por las disposiciones del art. 78 Pn tomando en cuenta las circunstancias agravantes genéricas que no sean inherentes al delito, así como las atenuantes y circunstancias personales del sujeto y la ejecución material del hecho y medios empleados.

Artículo 10. Violencia física

Si como consecuencia de la violencia física ejercida por el hombre en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, causare a la mujer cualquiera de las lesiones físicas tipificadas en el presente Código, se le aplicara la pena siguiente:

- d) Si se provoca lesiones leves, será castigado con pena de ocho meses a un año y cuatro meses de prisión;
- e) Si se provoca lesiones graves, será castigado con pena de dos años y ocho meses a seis años y ocho meses de prisión;
- f) Si se provoca lesiones gravísima, será sancionado con pena de siete años y seis meses a trece años y cuatro meses de prisión.

Elementos Objetivos del Tipo:

Sujeto Activo: Determinado El hombre

Sujeto Pasivo: Determinado La mujer (niña, adolescente, adulta y adulta mayor)

Bien Jurídico Protegido:

- Integridad y Salud Física.

El bien jurídico protegido ha de ser entendido como la incolumidad personal, definida por Conde Pumpido Ferreiro como sinónimo de sano, integro, indemne y sin lesión.

Verbo Rector: Ejercer y Causar

Elementos Normativos:

- Violencia Física. Art. 8 inciso b) de la Ley 779.
- Relaciones desiguales de poder: Art. 2 del Decreto 42-2014.
- Lesiones Leves.
- Lesiones Graves.
- Lesiones Gravísimas.

Iter criminis:

Debido a las particularidades de este tipo penal, no cabe apreciar las formas imperfectas de ejecución, es decir no cabe la tentativa ni la frustración, esto en virtud de que se prevé que la conjunción de cualquier tipo de fuerza, violencia contra la mujer, viene a materializarse en una lesión física.

Concursos de Delito:

Admite las diferentes formas de concursos

Núcleos problemáticos:

- Si durante la investigación no se determina la relación desigual de poder no se podrá imputar este delito sino que el mismo se deberá de tramitar en la jurisdicción común. Art. 10 de la Ley 779, art. 2 y 36 del Reglamento Decreto 42-2014.
- Determinada la relación de poder la misma debe ser debidamente descrita e imputada en el libelo acusatorio por ser este un elemento objetivo del tipo penal.
- Para la subsunción del daño físico se debe de avocar al concepto normativo del tipo penal básico de lesiones regulado en los artículos 150, 151, 152 y 153 del Código

Penal concatenado al art. 58 de la Ley 779 y a efectos de pena deberá invocarse las establecidas en el art. 10 de la Ley 779.

- De la valoración física realizada por el Medico Forense la cual determine que la misma no requiere además de tratamiento médico después de la primera asistencia facultativa, el caso deberá tramitarse como Falta penal y no como delito de Intimidación o Amenaza, ya que se produjo un resultado.

Artículo 11. Violencia psicológica

Quien mediante acción u omisión con el propósito de denigrar, controlar las acciones, comportamientos y creencias de la mujer que haya sido o sea su cónyuge, ex cónyuge, conviviente en unión de hecho estable, ex conviviente en unión de hecho estable, novio, ex novio, ascendiente, descendiente, pariente colaterales por consanguinidad, afinidad y cualquier otra relación interpersonal; ejerza amenaza directa o indirecta, intimidación, manipulación, humillación, aislamiento, ofensas, vigilancia, comparaciones destructivas, chantaje, acoso, hostigamiento y cualquier otra circunstancia análoga que tenga como resultado un perjuicio en la salud psicológica, por la devaluación de su autoestima o el desarrollo personal, será sancionado de la siguiente manera:

- d) Si se provoca daño a su integridad psíquica que requiera, tratamiento psicoterapéutico, será castigado con pena de ocho meses a un año y cuatro meses de prisión; **En este acápite se entenderán aquellos casos donde engloba cualquier tipo de tratamiento para su recuperación, sesiones clínicas, el proceso psicoterapéutico requiere el cambio y sanación y no logró causar disfunción.**
- e) Si se causara disfunción en cualquiera de las áreas de funcionamiento personal, laboral, escolar, familiar o social que requiera un tratamiento especializado en salud mental, será castigado con pena de dos años y ocho meses a seis años y ocho meses de prisión; **son las áreas donde se expresa la disfunción pero cualquier tipo de daño te puede generar una disfunción ej la adicción al alcoholismo o drogodependencia va a tener a una repercusión. Un adicto va a requerir un tratamiento específico, pero va a tener una repercusión a nivel social (vecinos) a nivel personal (autoestima) hay una anomalía, a nivel familiar (relación conflictual con la familia o con la pareja).**
- f) Si se causara una enfermedad psíquica que aún con la intervención especializada la persona no pueda recuperar su salud mental de manera permanente, será sancionado con pena de siete años y seis meses a trece años y cuatro meses de prisión.

Elementos Objetivos del Tipo:

Sujeto Activo: Es Determinado cuando se establece que el sujeto debe tener la condición de cónyuge, ex cónyuge, conviviente, ex conviviente, novio o ex novio, ascendientes, descendientes, parientes colaterales por consanguinidad, afinidad.

Se torna como sujeto Indeterminado: Cuando se trate de cualquier relación interpersonal la cual puede estar referida a (vecino, amigo, compañero de trabajo o de estudio).

Sujeto Pasivo: Determinado (Mujer, niña, adolescente, adulta y adulta mayor)

Bien Jurídico Protegido:

- Integridad o Salud Psíquica de la mujer

Acción: Causar un perjuicio a la salud psíquica o al desarrollo personal de la mujer.

Omisión: No cumplir con su posición de garante.

Elementos Subjetivos del Tipo: Debe establecer con claridad en la imputación el propósito de la conducta del sujeto activo para establecer el dolo y nexa causal.

- Denigrar.
- Controlar.

Verbo Rector:

12. Amenazar.
13. Intimidar.
14. Manipular.
15. Humillar.
16. Aislar.
17. Ofender.
18. Vigilar.
19. Comparar.
20. Chantajear.
21. Acosar
22. Hostigar.

Elementos Normativos:

- Relación interpersonal Negativa y positiva.
- La salud psíquica o psicológica.
- Disfunción.
- Tratamiento psicoterapéutico o especializado.
- Enfermedad Psíquica o mental.
- Devaluación de la autoestima.

Elemento Normativo/cultural:

- Cualquier otra circunstancias análoga.
- Comparaciones destructivas.

Elementos Descriptivos:

- Incisos a) b) y c) del presente artículo.

Iter criminis: No cabe las formas imperfectas de ejecución solo la consumación.

Concursos de Delito: Admite las diferentes formas de concursos. Cabe destacar que uno de los verbos rectores del delito de Violencia Psicológica es Amenazar o Intimidar, en ese sentido sí en el informe psicológica se establece estos hechos como generadores de la afectación psíquica el mismo debe imputarse como Violencia Psicológica, pero si en la investigación acontecen hechos de amenazas o intimidación posterior a la pericia, los mismos deben ser imputados bajo la figura del concurso real de delitos.

En la práctica se ha observado que la investigación allegada determina que la víctima en su testimonio y en el informe psicológico ha estado sometida a diferentes formas de violencia Física, Psicológica y también Sexual donde se evidencia que hubo relaciones sexuales no consentidas en la relación de pareja, la cual se describe en la acusación de forma superficial, sin especificar o circunstanciar la misma y la subsumen como parte del tipo penal de la Violencia Psicológica o no la imputan, invisibilizando la violencia sexual siendo un delito independiente y que el mismo debe de imputarse y calificarse en concurso real

Si la afectación psíquica se deriva de una violencia sexual fuera del ámbito de las relaciones de pareja deberá imputarse como Violación Agravada ya que se circunscribe o se subsume a la agravante específica de este tipo penal porque constituye un grave daño a la salud de la víctima. Es importante destacar que en este supuesto la gravedad del daño a la salud que hace referencia el art. 169 inciso d) del Código Penal debe interpretarse como a cualquier alteración a la salud física o psíquica producto de ese acto concreto.

Núcleos Problemáticos:

5. Como parámetros para aplicar la ley 779 y ejercer la acción penal en el tipo de violencia psicológica o de violencia intrafamiliar debemos de tomar en cuenta que si los eventos ocurrieron en años anteriores al 22 de Junio del año dos mil doce y cuyo resultado se verifica una vez entrada en vigencia de la ley, el juez competente para conocer de dicha causa es el ordinario a razón del nexo causal, ya que se había el quebrantamiento a la salud psíquica.

En los casos donde concurren hechos anteriores y posteriores a la entrada en vigencia de la Ley y se verifica que existe una alteración a nivel psíquico el juez competente es el especializado.

6. Cabe aclarar que los eventos que producen un perjuicio en la salud psicológica no prescriben ya que estos actos son reiterados en el tiempo y son producidos de manera habitual por el historial de la violencia, recordando que la misma es crónica, sistemática y mantenida en el tiempo.
7. Cuando se presenten conductas que puedan ser subsumidas en concurso aparente de normas entre la violencia psicológica de la Ley 779 y el tipo penal de Violencia Intrafamiliar o doméstica regulada en el art. 155 del Código Penal de Nicaragua, se procederá de conformidad al artículo 11 inciso a) de la Ley 641 “la norma especial prevalece sobre la general”.
8. De la valoración psíquica realizada por el psicólogo o psiquiatra Forense la cual determine que tiene un daño pero no requiere tratamiento psicoterapéutico, el caso deberá tramitarse como Falta penal y no como delito de Intimidación o Amenaza, ya que se produjo una afectación pero que no es constitutiva de delito. En estos casos deberá de ofrecerse la solución de dicho conflicto a través de la figura de la Mediación en la DIRAC o las Consejerías Familiares que brinda el Ministerio de la Familia.

Art. 12 Violencia Patrimonial y económica

Elementos Objetivos del Tipo:

Sujeto Activo: El hombre que se halle o hubiere estado ligada al sujeto pasivo por relación de consanguinidad, afinidad, cónyuge, ex cónyuge, conviviente en unión de hecho estable, ex conviviente en unión de hecho estable, novio, ex novio y relación de afectividad.

Sujeto Pasivo: La mujer

Bien Jurídico Protegido: Es pluriofensivo por las diferentes manifestaciones de las conductas del sujeto activo, pero de forma general protege:

- El patrimonio.
- el ejercicio al derecho de propiedad
- y el derecho a la libertad al trabajo.

La Acción está dirigida a limitar y restringir el derecho patrimonial de la mujer. En la conducta **omisiva aplica en la conducta descriptiva del inciso f) en el presente artículo.**

Verbo Rector:

- a) sustraer
- b) destruir, inutilizar, desaparecer, deteriorar.
- c) Impedir, limitar y prohibir.
- d) Sustraer, disponer
- e) Hacerse mantener.
- f) Negarse a proveer, obligar.

Elementos Subjetivos del Tipo:

Doloso.

Fin Beneficio personal para el sujeto activo.

Elementos Normativos:

- Patrimonio familiar:
- Bienes
- Posesión
- Titularidad
- Salario Mínimo del Sector Industrial.
- Dominio o tenencia
- Economía familiar
- Trabajo remunerado.

Elemento normativo cultural:

- Relación de afectividad.

Elementos Descriptivos:

- Sustracción patrimonial.
- Daño patrimonial,
- limitación al ejercicio del derecho de propiedad.
- Sustracción de las utilidades de las actividades económicas familiares.
- Explotación económica de la mujer.
- Negación del derecho a los alimentos y al trabajo.

Iter criminis:

No cabe las formas imperfectas de ejecución sólo la consumación de cada una de las conductas descritas en el presente artículo.

Concursos: Este tipo penal admite la aplicación de concursos de delitos.

Núcleos problemáticos:

g) **Sustracción patrimonial:**

En este inciso no debe ser un requisito o condición para la Acreditación del patrimonio de la mujer la exigencia de una formalidad o la entrega de un documento, ya que nos regimos por el principio de libertad probatoria, debemos de recordar que todo se puede probar por cualquier medio lícito y no tazando la prueba.

En lo que respecta al valor del bien si este no alcanza el valor del salario mínimo conforme a la tabla del sector industrial, el tratamiento del mismo será como constitutivo de una falta penal y se podrá resolver el conflicto a través de la Mediación en la DIRAC o la Consejería Familiar Institucional (MIFAM).

h) **Daño patrimonial:**

Es necesario determinar cuantía del daño de los bienes destruidos o inutilizados a la luz del principio de libertad probatorio y en los casos que resulta que la cuantía es menor al salario mínimo del sector industrial se resolverá conforme a lo establecido en el párrafo segundo del inciso anterior.

i) **Limitación al ejercicio del derecho de propiedad.**

El núcleo problemático en este acápite, se presenta con la interpretación del elemento normativo "Patrimonio Familiar", debido a que existe la Ley de Patrimonio Familiar que en su artículo 1 establece que de cara al art. 75 Cn debe entenderse por patrimonio familiar únicamente bienes inmuebles separados del patrimonio particular de una persona y vinculados directamente a familias de escasos recursos económicos, con el fin de asegurarle la mejor satisfacción de sus necesidades. De ahí se desprende una evidente contracción con la definición que establece el art. 2 del Decreto 42-2014 el cual define que son los bienes muebles e inmuebles adquiridos entre los cónyuges, ex cónyuges, ex convivientes, relación de consanguinidad (4to grado de consanguinidad y 2do de afinidad) que se utilicen para el uso, goce y disfrute y satisfacción de las necesidades.

Ahora bien, con la entrada en vigencia del Código de la Familia en diciembre del año 2014, ya no mantiene el concepto de patrimonio familiar. Para efecto de la interpretación del concepto de patrimonio familiar, se procederá a regirse por el concepto establecido en el reglamento,

j) **Sustracción de las utilidades de las actividades económicas familiares.**

k) **Explotación económica de la mujer.**

l) **Negación del derecho a los alimentos y al trabajo.**

Este tipo penal no requiere condiciones de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal.

Es importante que en el supuesto del inciso f) del presente artículo los y las fiscales distingan que el ámbito de protección de este tipo penal se circunscribe a la mujer que

se encuentre conviviendo o no con el imputado y que éste se negare a proveer los recursos en el hogar, esta conducta no debe confundirse con lo regulado y sancionado en el art. 217 del Código Penal de Nicaragua "Incumplimiento de deberes alimentarios" el cual no fue objeto de reforma por la Ley 779 ya que su ámbito de protección esta dirigido a proteger los derechos derivados de la relación padre, madre e hijos, guarda y tutela.

Artículo 13. Intimidación o amenaza contra la mujer

El hombre que mediante expresiones verbales, escritos, mensajes electrónicos o cualquier otro medio intimide o amenace a una mujer con la que se halle o hubiere estado ligado por relación de consanguinidad, afinidad, sujetos a tutela, cónyuges, ex-cónyuges, convivientes en unión de hecho estable, ex convivientes en unión de hecho estable, novios, ex novios, relación de afectividad; con causarle un daño grave y probable de carácter físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial, será sancionado con prisión de seis meses a un año.

La pena será de seis meses a dos años de prisión, en las siguientes circunstancias:

- e) Si la intimidación o amenaza se realizare en el domicilio o residencia de la mujer, en el domicilio de familiares, amistades o cualquier lugar donde se haya refugiado;
- f) Si el hecho se cometiere en presencia de las hijas o hijos de la víctima;
- g) Si el autor del delito se valiere del cargo como funcionario público o de su pertenencia al cuerpo policial o militar;
- h) Si el hecho se cometiere con armas cortopunzantes, contundente, de fuego u objeto capaz de causar daño a la integridad física o a la salud.

Elementos Objetivos del Tipo:

Sujeto Activo: Determinado Cualificado Hombre que se halle o hubiere estado ligado al sujeto pasivo por relación de consanguinidad, afinidad, tutela, cónyuge, ex cónyuge, conviviente en unión de hecho estable, ex conviviente en unión de hecho estable, novio, ex novio y relación de afectividad.

Sujeto Pasivo: Determinado cualificado, dentro de las condiciones (afectividad, consanguinidad, sujetos a tutela) que recoge este tipo penal (Mujer, niña, adolescente, adulta y adulta mayor)

Bien Jurídico Protegido:

- Libertad de actuar
- Seguridad.

- Seguridad Laboral.
- Integridad Psíquica, Física, Sexual de la mujer
- Patrimonio.

Verbo Rector:

- Intimidar: Accion y efecto de intimidar, este verbo refiere a causar o infundir miedo. Es un acto que intenta generar miedo en otra persona para que ésta haga o no haga lo que la otra persona desea (Enciclopedia libre,internet)
- Amenazar: Anunciar, presagiar o ser inminente algún mal, dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a otro.

Elementos Normativos:

- Relación de afectividad.
- Daño grave y probable.

Elementos Descriptivos:

- Incisos a) b) c) y d) del presente artículo.

Iter criminis:

No cabe las formas imperfectas de ejecución solo la consumación del delito por ser un delito de peligro por ser un delito de mera actividad.

Concursos de Delito: Admite las diferentes formas de concursos.

Cuando se trate de que las Amenazas o Intimidación se dan dentro del contexto del delito de Violencia psicológica no se acusará en concurso real por ser verbos rectores del delito mencionado. Sin embargo, cuando sea un hecho posterior a la valoración psíquica podrá imputarse como un concurso.

Núcleos Problemáticos:

Es Menester determinar que el objeto, el lugar, las características personales del autor, el medio utilizado para realizar la amenaza sea capaz por su estructura y característica de infringirle un daño a la integridad física, psíquica, sexual, patrimonial y laboral, es necesario analizar la intimidación o la amenaza tomando en cuenta los antecedentes dentro del contexto de la violencia y la condición de vulnerabilidad de la víctima.

A efectos de la imputación de este delito se debe describir claramente las circunstancias agravantes que establece este tipo penal.

Artículo 14. Sustracción de hijos o hijas

Cuando el padre u otro familiar ejerza o haya ejercido violencia contra la mujer y como un medio de continuar ejerciendo violencia hacia ésta, sustraiga a su hijo o hija del poder de su madre que legítimamente esté encargada de la custodia, del tutor o persona encargada de su crianza y lo retenga sin su consentimiento, será castigado con pena de dos a cuatro años de prisión.

Elementos Objetivos del Tipo:

Sujeto Activo: Cualificado

- Padre
- Familiar varón o mujer dentro del cuarto de consanguinidad y segundo de afinidad) Art. 37 Pn.

Sujeto Pasivo: Cualificado:

- Madre.
- Persona encargada de su crianza.
- Tutor
- Hijo o Hija.

Bien Jurídico Protegido:

- Las relaciones familiares Madre-Padre e Hijos.
- Una vida Libre de violencia.
- Interés superior del niño, niña y adolescente.

Verbo Rector:

- Sustraer

Acción:

- Ejercer violencia contra la mujer.

Elementos Normativos:

- Legalmente encargado de la custodia.
- Retener sin consentimiento.

Elementos Descriptivos:

- Madre legalmente encargada de la custodia.
- Tutor.
- Persona encargada de su crianza.

Iter criminis:

No cabe las formas imperfectas de ejecución solo la consumación del delito por ser un delito de resultado.

Concursos de Delito: Admite las diferentes formas de concursos.

Elemento subjetivo: A Título de Dolo.

Núcleos Problemáticos:

- d) En este tipo penal se debe interpretar el término **Legalmente**: No sólo lo que provenga de una sentencia judicial o una resolución administrativa sino también lo que establece el derecho consuetudinario, es decir, aquella madre o persona encargada de su crianza que siempre ha estado a cargo de su cuidado.
- e) Cuando no se logre acreditar que el padre o familiar (sujeto activo) ha ejercido o ejerce violencia de acuerdo a este tipo penal, y si se demuestra la sustracción se deberá imputar conforme a lo establecido en el art. 218 del Código Penal.
- f) Para efectos de este tipo penal se deberá entender que también el aspecto socio cultural de lo que se entiende por hijos que puede ser aquellos niños, niñas o adolescentes que la pareja haya criado en el seno del hogar y que no sean hijos biológicos, ni adoptados legalmente

Artículo 15. Violencia laboral

Quien impida o limite el ejercicio del derecho al trabajo de las mujeres, a través del establecimiento de requisitos referidos a sexo, edad, apariencia física, estado civil, condición de madre o no, sometimiento a exámenes de laboratorio, prueba del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH/Sida) o de otra índole para descartar estado de embarazo, obstaculice o condicione el acceso, salario, ascenso o la estabilidad en el empleo de las mujeres, será sancionado con cien a trescientos días multa.

Si se trata de una política de empleo de una institución pública o privada, quien ejerza la discriminación, se impondrá la pena máxima. Todo ello sin perjuicio de la corresponsabilidad establecida en el artículo 125 del presente Código.

Elementos Objetivos del Tipo:

Sujeto Activo:

- Indeterminado Hombre o mujer.

Sujeto Pasivo:

- Las mujeres.

Bien Jurídico Protegido:

- Derecho al trabajo.
- Derecho a no ser discriminada.

Verbo Rector:

- Impedir.
- Limitar.
- Obstaculizar
- Condicionar.

Elemento Subjetivo del Tipo:

- Doloso

Elementos Normativos:

- Derecho al trabajo.
- Trabajo.
- Ascenso.
- Salario.
- Estabilidad en el empleo.
- Política de empleo.
- Institucion pública y privada
- Discriminacion.
- Sometimiento a exámenes de laboratorio.
- Apariencia física.
- Estado civil
- Sexo, edad, condición de madre, prueba de virus VIH, prueba de embarazo.

Iter criminis:

- No cabe las formas imperfectas de ejecución porque es un delito de mera actividad.

Concursos de Delito:

- Admite las diferentes formas de concursos.
- Se debe considerar que al analizar esta conducta se puede presentar el concurso aparente de normas ya que en el Código penal se encuentra regulado en el art. 315 y 427 el delito de discriminación y estas situaciones se resolverán conforme lo establecido en el art. 11 inciso a) del Código Penal que dice que la norma especial prevalece sobre la general.

Núcleos Problemáticos:

- En este delito se persigue al sujeto activo sea hombre o mujer, por el reproche consiste en la discriminación que sufre la mujer por el hecho de ser mujer en las relaciones laborales, a diferencia del delito de discriminación regulado en el art. 315 Pn que extienden a otras formas de discriminación derivada de la relación laboral.
- El verdadero núcleo problemático para delimitar la responsabilidad individual sobre la política institucional pública y privada, es probatorio, por lo tanto será necesario realizar una investigación que establezca quienes tomaron la decisión sobre la política institucional.

Artículo 16. Violencia en el ejercicio de la función pública contra la mujer

Quien en el ejercicio de la función pública, independientemente de su cargo de forma dolosa, retarde, obstaculice, deniegue la debida atención o impida que la mujer acceda al derecho a la oportuna respuesta en la institución a la cual ésta acude, a los fines de gestionar algún trámite relacionado con los derechos que garantiza la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas a la Ley No. 641, Código Penal, será sancionado con pena de doscientos a quinientos días multa e inhabilitación especial en el ejercicio del cargo por un período de tres a seis meses. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que correspondan.

Si los actos anteriores se cometen por imprudencia la pena será de cien a doscientos días multas e inhabilitación del cargo por un período máximo de tres meses.

Si como resultado de las conductas anteriormente señaladas, se pusiesen en concreto peligro la vida e integridad de la mujer, la pena será de seis meses a un año de prisión e inhabilitación especial para ejercer el cargo por el mismo período.

Elementos Objetivos del Tipo:

Sujeto Activo: Cualificado

- Funcionario, funcionaria o empleado, empleadas públicas.

Sujeto Pasivo:

- Mujer

Bien Jurídico Protegido:

- Derecho a recibir y acceder al servicio público de forma pronta y eficaz.
- El acceso de la mujer a los derechos establecidos en la ley 779 arto 7. y en el arto. 4 de la Convención Belém Do Pará. Derecho a una vida libre de violencia y discriminación.

Verbo Rector:

- Impedir.
- Obstaculizar.
- Retardar
- Denegar.

Elementos Subjetivos del Tipo:

- Doloso.
- Imprudente.

Elementos Normativos:

- Función pública.
- Debida atención.
- Oportuna respuesta.
- Concreto peligro.
- Responsabilidades administrativas

Iter criminis:

- No cabe las formas imperfectas de ejecución por ser un delito de mera actividad.

Concursos de Delito:

- Admite las diferentes formas de concursos.

Núcleos Problemáticos:

- No toda repuesta de un servidor público puede subsumirse a la violencia en el ejercicio de la función pública, sino aquella en que la conducta del funcionario es expresa a impedir, obstaculizar y denegar el servicio público, no incluye negativas que por norma o reglas tenga cada institución.
- Es imprudencia la falta de observancia a las leyes, normas, protocolos de actuación, circulares, reglamentos, directrices por parte del funcionario público cuando no realiza su función con la debida diligencia.
- Sin embargo no deberá identificarse como conducta imprudente la falta de respuesta producto de la carencia de recursos de cada Institución.

Artículo 17. Omisión de denunciar

Las personas que de acuerdo a la legislación procesal penal tengan obligación de denunciar los delitos de acción pública, una vez que tengan conocimiento que una mujer, niño, niña o adolescente ha sido víctima de violencia, deberán denunciar el hecho ante la Policía Nacional o al Ministerio Público a más tardar en el término de cuarenta y ocho horas. El que incurra en esta omisión se sancionará con pena de doscientos a quinientos días multa.

Elementos Objetivos del Tipo:

Sujeto Activo: De conformidad al art. 223 CPP son sujetos activos:

- Funcionario, funcionaria o empleado, empleada públicas que conozcan de los ilícitos en sus funciones.
- Directores de Centros de Educación (públicos y privados) Art. 48 CNA.
- Personas que prestan servicios de salud.
- Las personas que por disposición de la ley, de la autoridad o de un acto jurídico tuvieron a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o el control de bienes o intereses ajenos, siempre que conozcan del hecho con motivo del ejercicio de sus funciones.

Sujeto Pasivo:

- El titular del bien jurídico es el Estado.
- Mujer.
- Niño.

- Niña.
- Adolescentes.

Bien Jurídico Protegido:

- Derecho al acceso a la justicia.
- Debida diligencia del Estado.

Verbo Rector:

- No Denunciar.

Elementos Subjetivos del Tipo:

- Doloso.

Elementos Normativos:

- Obligación de denunciar.
- Delitos de acción pública.
- En ejercicio de la función pública.

Iter criminis:

- No cabe las formas imperfectas de ejecución solo la consumación del delito.

Concursos de Delito:

- Admite las diferentes formas de concursos.

Núcleos Problemáticos:

- Si el sujeto activo no denuncia dentro de las 48 horas, por el principio de lesividad no debe acusar a una persona que interpone denuncia fuera del término establecido y se le deberá considerar como testigo del caso.
- Se debe tomar en cuenta que el sujeto activo de este delito solo son los que están contemplados en el art. 223 CPP y art. 48 CNA.

Artículo 18. Obligación de denunciar acto de acoso sexual

Toda autoridad jerárquica en centros de empleo, de educación o de cualquier otra índole, que tenga conocimiento de hechos de acoso sexual realizados por personas que

estén bajo su responsabilidad o dirección y no lo denuncie a la Policía Nacional o el Ministerio Público, será sancionada con pena de cincuenta a cien días multa.

Elementos Objetivos del Tipo:

Sujeto Activo: Se considera como sujeto activo a efecto de este tipo penal:

- Autoridad jerárquica. Concepto de jerarquía es una cadena escalonada y se refiere al número de niveles en la jerarquía.

Sujeto Pasivo:

- Mujer (niña, adolescente, adulta y adulta mayor)
- Niño.

Bien Jurídico Protegido:

- Libertad Sexual
- Derecho al acceso a la justicia.
- Debida diligencia del Estado.

Verbo Rector:

- Denunciar.

Acción:

- No cumplir con la obligación de denunciar el hecho delictivo.

Elementos Subjetivos del Tipo:

- Doloso.

Elementos Normativos:

- Autoridad jerárquica.
- Otra índole.
- Acoso sexual.

Iter criminis:

- No cabe las formas imperfectas de ejecución solo la consumación del delito por ser un delito de resultado.

Concursos de Delito:

- No admite las diferentes formas de concursos.

Núcleos Problemáticos:

- Autoridad jerárquica: Cuando se trate de funcionarios públicos, se actuará de conformidad al arto. 38 CP.
- Fiscal debe acreditar y establecer los niveles jerárquicos.

Elemento accesorio de modo

La omisión, el acto de rehusarse a cumplir una obligación o el retardar su (entrega o deposito) conducta, esta debe estar injustificada para su configuración, lo que obliga a realizar un estudio de la antijuridicidad material de la conducta, para determinar, si además de que el asunto pasa el nivel de análisis de tipicidad de la teoría del delito, y que también no se encuentra justificado en otras ramas del ordenamiento jurídico que hayan obligado al padre, madre u representante legal (Tutora o Tutor), a no cumplir con la conducta que se esperaba de él; el cumplimiento de un deber legal.

Protocolo de actuación en atención a víctimas de violencia de género

Yaosca Eugarrios Calderón, Yvonne Avilés Castillo y Suyen Reyes

I. Presentación

En las últimas décadas, el fenómeno de la violencia contra las mujeres ha sido un tema de gran preocupación a nivel internacional, por lo tanto, se han creado diversos instrumentos internacionales para combatir esta problemática que afecta a todas las Naciones. Los documentos más importantes a nivel internacional son dos tratados: la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).¹

En el 2010 el Estado Nicaragüense promulgó la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres una forma de implementar acciones para combatir la violencia contra las mujeres. En este sentido, el Ministerio Público como representante de la sociedad y de la víctima del delito en el proceso penal ejercerá la persecución penal con perspectiva de género, desde la orientación de la investigación y persecución de los delitos previstos y sancionados en dicha ley. Así mismo, se encargará a través de la Unidad Especializada de Atención a víctima de violencia de Género a la atención integral, procurando la protección de las víctimas, el respeto a los derechos humanos, y su reintegración social.

Este protocolo es parte del compromiso de la Fiscal General de la República con la sociedad Nicaragüense, en particular con las víctimas de violencia de género, para asegurar que la atención brindada a las víctimas tenga los estándares necesarios de calidad y calidez para su representación. Contiene reglas de actuación para las y los fiscales y servidores/as públicos, estableciendo procedimientos a seguirse para responder apropiadamente a las víctimas, creando mecanismos de coordinación tanto a lo interno de la institución, como externos con los demás operadores del sistema, con el fin que se respeten los Derechos básicos que tiene toda víctima antes, durante y después del proceso penal.

1. Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

II. Objetivo del protocolo

El presente Protocolo tiene por objetivo principal unificar criterios de actuación de servidores y servidoras del Ministerio Público, estableciendo mecanismos que faciliten el debido abordaje de las víctimas de violencia de género, así como servir de facilitadores para que estas accedan a los servicios de atención médica, jurídica, psicológica y social de forma integral como parte de la restitución de derechos; tomando en cuenta sus condiciones de vulnerabilidad.

III. Principios generales que rigen la actuación de los servidores y servidoras públicos/as del ministerio público en atención a las víctimas de violencia de género

1) Principio de coordinación institucional:² Asegurar que los prestadores de servicios Públicos, tales como: Ministerio Público, Policía Nacional, Defensoría Pública, Instituto de Medicina legal, Poder Judicial, Procuraduría de los Derechos Humanos, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, Instituto Nicaragüense de la Mujer, Sistema Penitenciario Nacional y autoridades comunales, coordinen las acciones que requiera la protección de las personas afectadas por la violencia de género con el fin de propiciar la atención integral y la comunicación fluida entre las instituciones involucradas en los diferentes niveles de atención a la víctima, garantizando así mayor eficacia y respuestas para las persona afectadas por la violencia.

2) Principio de intervención de la víctima:³ La persona ofendida o víctima del delito tiene derecho a ser atendido de manera integral como parte del proceso penal desde su inicio y en todas las instancias y brindar datos oportunos en cualquier etapa del proceso.

3) Principio de no violencia:⁴ La violencia contra la mujer constituye una violación de las libertades fundamentales, limitando total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos.

4) Principio atención individualizada:⁵ La atención individualizada hace referencia a que cada caso será estudiado de manera específica para proporcionar la atención de conformidad con las necesidades y condiciones de la persona en concreto. Aunque

2. Ley: 779 Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas a la ley 641 "Código penal", capítulo II, arto 4, literal d.

3. Código Procesal Penal. Arto. 9

4. Ley: 779 Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas a la ley 641 "Código penal", capítulo II, arto 4, literal k.

5. Decreto No 42-2014 capítulo II arto 4 literal : a

habrá casos muy similares, todos presentarán diferencias y por lo tanto necesitarán de un plan de trabajo y seguimientos específicos.

5) Principio de protección a la familia: ⁶ La protección, desarrollo y fortalecimiento de la familia es obligación del Estado, la sociedad y los miembros que la integran, a través de los vínculos de amor, solidaridad ayuda y respeto mutuo que debe existir entre sus integrantes para lograr una mejor calidad de vida.

6) Principio de Respeto a la dignidad humana: ⁷ Toda persona debe ser tratada con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano, con protección de los derechos que de ella derivan y en condición de igualdad.

7) Principio de plena igualdad de género: ⁸ Constituye que las relaciones de género deben estar fundamentadas en la plena igualdad entre hombre y mujer, no debiendo estar sujetas a una relación de poder y/o dominación donde el hombre subordina, somete y/o pretende controlar a la mujer.

8) Principio de debida diligencia del Estado: ⁹ Es obligación del Estado brindar respuesta inmediata, oportuna, eficiente, eficaz y responsable en la investigación, persecución y sanción del delito de trata de persona, así como los mecanismos para la reparación del daño incluyendo la atención a las víctimas y sus familiares.

Es hacer que los procesos legales estén en tiempo y forma y que los delitos no prescriban o carezcan de fundamentación legal, o no se repare el daño de la víctima.

9) Principio de no re victimización: ¹⁰ Es la responsabilidad y obligación del Estado en garantizar que los servidores públicos que integran el Sistema de Justicia y otras instituciones que atienden, previenen, investigan y sancionan la violencia, adopten las providencias pertinentes y necesarias para evitar que las víctimas sean vistas y tratadas con discriminación, incomprensión, reiteraciones innecesarias y molestias durante la investigación, proceso penal y judicial y cualquier otra forma de victimización secundaria.

10) Principio de Privacidad. ¹¹ Es la obligación que tiene el Estado y sus autoridades de garantizar la privacidad desde la investigación hasta el proceso judicial, debe evitarse toda acción u omisión que vulnere la vida privada de la víctima, su entorno familiar, domicilio, honra y reputación, incluyendo la exposición ante los medios de comunicación y opinión pública. Asegurar la privacidad y la confidencialidad del

6. Decreto No 42-2014 capítulo II arto 4 literal : a

7. Ley 779: Ley integral contra la violencia hacia las mujeres y de reforma a la ley 641 Código Penal. Arto. 4 literal: f, i.

8. Ley especial e integral contra la trata de persona: Arto 5 literal 5, 6 y 7.

9. Ley 779: Ley integral contra la violencia hacia las mujeres y de reforma a la ley 641 Código Penal. Arto. 4 literal g.

10. Ley 779: Ley integral contra la violencia hacia las mujeres y de reforma a la ley 641 Código Penal. Arto. 4 literal: j.

11. 779: Ley integral contra la violencia hacia las mujeres y de reforma a la ley 641 Código Penal. Arto 5 literal 12

caso; evita la re victimización, y facilita la empatía, confianza y seguridad de la víctima y de los y las que la rodean.

11) Principio de resarcimiento¹² La administración de justicia garantizara los mecanismos para asegurar que la víctima de violencia tenga acceso efectivo al resarcimiento y reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces como parte del proceso de restauración de su bienestar.

12) Principio de integralidad:¹³La protección de las víctimas de violencia requieren de atención medica, jurídica, psicológica y social de e forma integral y oportuna para detectar, proteger y restituir derechos.

13) Principio de no discriminación:¹⁴ Es la eliminación de toda distinción, exclusión o restricciones basadas en el nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, edad, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica, condición social, discapacidad, que tenga por objeto o resultado, el menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. También es discriminación las acciones u omisiones que no tengan intención de discriminar, pero si un resultado discriminante.

14) Principio del interés superior del Niño:¹⁵ Es todo aquello que favorece el pleno desarrollo integral de los Niños, Niñas y Adolescentes en consonancia con la evolución de sus facultades, que le benefician en su máximo grado y especialmente en la vigencia y satisfacción de sus derechos, libertades y garantías de manera integral.

12. Ley integral contra la violencia hacia las mujeres y de reforma a la ley 641 Código Penal. Arto 4 literal o.

13. Ley 779: Ley integral contra la violencia hacia las mujeres y de reforma a la ley 641 Código Penal. Arto. 4 literal: f, i.

14. Ley 779: Ley integral contra la violencia hacia las mujeres y de reforma a la ley 641 Código Penal. Arto. 4 literal: f, i.

15. Ley 287: Código de la Niñez y Adolescencia. Arto. 10

IV. Derechos de las víctimas de violencia de género

Los derechos Humanos son aquellos con los que la persona humana nace los cuales son inherentes, irrenunciables e intransferibles, independientemente de su clasificación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política de Nicaragua refieren que todos los seres humanos ¹⁶ nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición. Por ello es imperativo para los servidores públicos y privados que atienden a las personas en el ejercicio de sus funciones, velar por la observancia y cumplimiento de los siguientes derechos:

- 1) El derecho a la Igualdad y no discriminación: ¹⁷Es la Condición equivalente en el goce efectivo de los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de mujeres y hombres sin discriminación, distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer sobre la base de la igualdad en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.
- 2) El derecho a la protección: Es aquel donde el estado a través de los funcionarios o servidores Públicos velen por brindar protección para resguardar la vida, integridad física y emocional de la víctima
- 3) El derecho a la información¹⁸ es el derecho que tienen las víctimas de ser informadas del estado de su causa y de los derechos que tiene en todas las etapas del Proceso Penal.
- 4) Derecho a una asistencia eficaz:¹⁹ El Estado, a través del Ministerio Público y de cara al ejercicio de la acción penal brindará una pronta y eficaz representación de la víctima y de la sociedad, para lograr el verdadero acceso a la justicia, para ello le proporcionará a las víctimas un o una fiscal para que les represente y defienda sus derechos.

16. Declaración Universal de Derechos Humanos. Arto 1, 2 y 3.

17. Ley No. 648 Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades. Arto 1 literal b y g.

18. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Arto 19 .

19. Ley orgánica del Ministerio Público arto 1. Protocolo de actuación del Ministerio Público en atención a las víctimas de delito, Arto V: Derechos fundamentales de las víctima literal 3:

- 5) Derecho a medidas preventivas especiales:²⁰ Las víctimas particularmente vulnerables tiene derecho a no sufrir actos de re victimización secundaria o ultraje al ingresar al sistema de justicia penal, para lo cual deberán adoptarse medidas encaminadas a la protección de las víctimas instituidas en el art. 195 del código procesal penal.
- 6) Derecho a la Salud y Educación:²¹ Las víctimas de violencia de género deben gozar de estos derechos a pesar de estar atravesando un proceso penal. Las y los fiscales procurarán orientar, informar sobre las condiciones básicas de acceso a estos servicios (salud física y mental, inserción escolar para niños, niñas y adolescentes, etc.)
- 7) Derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral, sexual, patrimonial o económica:²² Las víctimas de violencia de género deben ser respetadas en toda su integralidad por ello, se involucran diversos aspectos en relación a su protección (, medidas de protección, Atención psicológica y jurídica, acompañamiento social) en todos los ámbitos de su vida durante el proceso.

20. Cáp.V: Derechos fundamentales de las víctimas literal 5: Protocolo de actuación del Ministerio Público en atención a las víctimas de delito.

21. 24 y 25 Ley 779: Ley integral contra la violencia hacia las mujeres y de reforma a la ley 641 Código Penal. Arto.7 literal b y c

22.

V. Marco nacional e internacional

Instrumentos internacionales

- Carta de la Organización de las Naciones Unidas
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), adoptada por Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en 1994
- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979.
- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
- Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
- Declaración Universal de Derechos Humanos.
- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
- Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.
- Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
- Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
- Declaración internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas.
- Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para Víctimas de Delitos y de Abuso de Poder.
- Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.
- Guías de Santiago sobre protección de víctimas y testigos.
- Convención de Palermo. Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos
- Recomendaciones 19, 25 y 28 de las Naciones Unidas.

Instrumentos nacionales

- Constitución Política de Nicaragua.
- Ley No. 406: Código Procesal penal.
- Ley No.641: Código Penal de la Republica de Nicaragua.
- Ley No. 779: Ley integral contra la violencia hacia las mujeres y de reforma a la ley 641 Código Penal.
- Ley No. 846: Reformas a la ley 779.
- Decreto 42-2014 Reglamento a la ley 779.
- Ley 346: Ley Orgánica del Ministerio Público.
- Ley No. 586: Reglamento Ley Orgánica del Ministerio Público.
- LEY No. 287: Código de la Niñez y la Adolescencia.
- Ley Especial e integral contra la Trata de personas.
- Políticas de Protección a la familia, decreto 43-2014.
- Modelo de Atención Integral a víctimas de violencia de género en Nicaragua.
- Directriz FGR 01-06-2012 Implementación de la ley 779.
- Directriz No. FG-001-2014 Procedimiento para la derivación a consejería familiar institucional a víctimas de violencia de género de delitos menos graves.
- Protocolo de Actuación del Ministerio Público en la Atención a Víctimas de Violencia de Género.
- Protocolo de Actuación Fiscal en Materia de Violencia de Género.

VI. Marco conceptual

Violencia:²³ “Uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar muerte, daño físico, psicológico, sexual, patrimonial y trastorno del desarrollo.

Género:²⁴ Debe ser entendido como ese “conjunto de normas, costumbres y hábitos sociales que condicionan el comportamiento dependiendo de lo que es ser hombre o una mujer”, por lo tanto implica una construcción cultural y no biológica.

Equidad de género:²⁵ Se entiende como el trato imparcial de mujeres y hombres, según sus necesidades respectivas, ya sea con un trato equitativo o con uno diferenciado pero que se considera equivalente por lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades.

Enfoque de género. Es una alternativa que implica abordar primero el análisis de las relaciones de género para basar en él la toma de decisiones y acciones para el desarrollo. Reconoce que el género es una construcción social y cultural que se produce históricamente y por lo tanto es susceptible de ser transformada. Toma en cuenta además, las diferencias por clase, etnia, raza, edad y religión.

Violencia de género Es una construcción social, no una derivación espontánea de la naturaleza, entendiendo por tal: aquella que se ejerce en contra de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. La perspectiva de género por tanto “hace referencia al contexto socio-histórico-cultural donde tiene lugar la violencia de género y las circunstancias del autor y la víctima.

23. (véase OMS, 2003, 5, citado en Monclús, 2005, 29).

24. Guía de actuación para la atención sanitaria a mujeres víctimas de violencia de género. Equipo de Coordinación. Delegación Provincial de Salud, España, octubre 2007.

25. , Guía de actuación para la atención sanitaria a mujeres víctimas de violencia de género. Equipo de Coordinación. Delegación Provincial de Salud, España, octubre 2007.

Misoginia:²⁶ Son conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en actos violentos y crueles contra ellas por el hecho de ser mujer.

Violencia psicológica:²⁷ Acción u omisión destinada a degregar o controlar las acciones, comportamientos, decisiones y creencias de la mujer por medio de la intimidación, manipulación, coacción, comparaciones destructivas, vigilancias eventuales o permanentes, insultos, amenazas directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud mental, la autodeterminación o su desarrollo personal.

Víctima:²⁸ "Se entenderá por víctimas a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones delictivas.

Víctimas directas: ²⁹Es la que sufre el daño psicológico, la amenaza a la propia vida, una lesión física grave y la percepción del daño como intencionado.

Víctimas indirectas o colateral:³⁰ Son los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y también las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

Victimización Primaria: ³¹ Está constituida por el reflejo individual de la víctima y las diversas consecuencias perjudiciales primarias producidas por el delito, de índole física, económica, psicológica y social.

La victimización secundaria:³² Es la que se deriva de las relaciones de la víctima con el sistema jurídico penal, con el aparato represivo del Estado, y supone en último término, el frustrante choque entre las legítimas expectativas de las víctimas y la realidad institucional. La victimización secundaria se produce cuando se entra en contacto con el sistema judicial más concretamente con sus resultados, estamos ante un hecho de violencia institucional. Es decir, la victimización secundaria se produce a nivel jurídico procesal y social (p. Ej.: retardación de justicia, la práctica de diligencias innecesarias, la atención despersonalizada, burocrática o trato contrario a la dignidad humana etc.)

26. Ley 779: Ley integral contra la violencia hacia las mujeres y de reforma a la ley 641 Código Penal. Arto. 8, literal a.

27. Ley 779: Arto 8 literal f Ley integral contra la violencia hacia las mujeres y de reforma a la ley 641 Código Penal.

28. Los Procesos de victimización. Avances en la asistencia a víctimas: <http://www.juridicas.unam.mx>

29. Asociación Vasca de criminólogos <http://asociacionvascadecriminologos>

30. DIEZ LANDROVE, G. La moderna Victimología. Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia 1998, pág. 49.

31. DIEZ LANDROVE, G. La moderna Victimología. Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia 1998, pág. 49.

32. SORIA VERDE VV.AA Delincuencia y victimización, en la víctima entre la justicia y la delincuencia. Aspecto psicológico, social y jurídico de la victimización. Edit. PPU.Barcelona 1993 pág. 62

Victimización terciaria:³³ Hace referencia al proceso donde la sociedad se forma una concepción de la persona víctima por cómo la ve, la etiqueta o la juzga ya sea por la visión o costumbre patriarcal o las condiciones del caso.

Discriminación:³⁴ La discriminación es “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, nacionalidad, credo político, raza, edad, idioma, opinión, origen, posición económica, condición social, discapacidad, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas.

Riesgo³⁵ Se puede definir como: “un peligro que puede acontecer con una cierta probabilidad en el futuro.

Valoración del Riesgo³⁶ Consiste en la aplicación de una serie de técnicas psicosociales que permiten predecir el nivel de riesgo que tiene una persona a sufrir una agresión o daño.

Crisis psicológica:³⁷ Es un estado temporal Psicológico de trastorno o desorganización caracterizada básicamente por una incapacidad de la persona para manejar (emocionalmente y conceptualmente) situaciones particulares.

Intervención en crisis:³⁸ La intervención en crisis de primer orden, conocido también como primeros auxilios emocionales son aquellos que se dan cuando las víctimas presentan alteración de su estado emocional normal a consecuencia directa del hecho delictivo.

Discapacidad:³⁹ Es el resultado de la interacción entre la persona con deficiencias y su entorno discapacitante. La discapacidad está enmarcada en las barreras latentes y perpetuas implantadas por la sociedad, que hacen imposible que las personas con discapacidad accedan a la vida social de manera activa, pasiva, directa o indirecta al igual que otro ser humano, la discapacidad por ende no es algo que radique en la persona como resultado de una deficiencia.

33. Esbec, E. (2000). Evaluación psicológica de la víctima. En E. Esbec y G. Gómez- Jarabo, Psicología forense y tratamiento jurídico-legal de la discapacidad. Madrid: Edisofer.

34. Ley 779: Ley integral contra la violencia hacia las mujeres y de reforma a la ley 641 Código Penal

35. (Beck, 1998).

36. Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género.2012, Secretaría de seguridad. España

37. Crisis y emergencias. <http://www.iztacala.unam.mx/creas/crisis.html>

38. Protocolo de actuación fiscal del Ministerio Público en Atención a las víctimas del delito, pág. 29.

39. Arto. 3 Ley 763: De Los Derechos de las personas con Discapacidad.

VII. Aspectos generales de atención a víctimas de violencia de género

Atención adecuada y de calidad

A fin de evitar la victimización secundaria de quienes concurren en calidad de víctimas de violencia de género al Ministerio Público las y los funcionarios y servidores del Ministerio Público deberán atenderlas con sensibilidad, deferencia y oportunamente. La atención Primaria que se le brinde a las víctimas es importante porque es la primera impresión que tiene la víctima de la institución o del funcionario/a o servidor/a, por ello se atenderá y brindará la información de forma clara, evitando el uso excesivo de terminología jurídica, adecuándose a las particularidades de la víctima, su nivel cultural, social, académico y conforme a las necesidades de las víctimas, por ello se deberá tener en cuenta lo siguiente.

- 1) En todas las fases del proceso penal de justicia – investigativa y judicial, las víctimas de violencia serán abordadas y atendidas respetando sus derechos humanos y derechos particulares como víctima.
- 2) Se evitarán **demoras innecesarias** aplicando los principios de atención individualizada, prioridad y urgencia mediante mecanismos accesibles y expeditos de atención observando las siguientes circunstancias:
 - Urgencia y prioridad del caso.
 - Tipo de delito.
 - Edad etérea de la víctima.
 - Niños, Niñas.
 - Estado de embarazo.
 - Personas con discapacidad.
 - Según el orden de llegada.
 - entre otros.
- 3) Se hará del conocimiento de la víctima que él o la Fiscal es su representante dentro del proceso penal de justicia, en cada una de las etapas e instancias debe garantizar un trato comprensible, constructivo y tranquilizador para ello:
 - Cuando esté frente a las víctimas de violencia de género realice preguntas abiertas que le ayuden a la persona a relatar su vivencia.

- Brinde toda su atención.
- Tome en cuenta el lenguaje no verbal, y los niveles de proximidad con la víctima (Cuide la postura corporal: Muchas personas que brindan atención acorralan a las víctimas aproximándose más de lo normal, no la toque sin su autorización.
- Sitúese frente a ella y dele espacio.
- Asuma una actitud relajada.
- Procure que su abordaje sea cálido; cuando uno es cálido, la otra persona lo percibe.
- Realice la escucha activa.

¿Qué es la escucha activa?⁴⁰

Se trata no sólo de oír, sino de saber escuchar. La escucha activa implica la actividad de atender y escuchar con atención el mensaje que otra u otras personas transmiten. Favorece una comunicación eficaz y fluida mediante el “saber escuchar”, ayuda a conseguir información, que no se conseguiría de otra forma.

El escuchar deja de ser un proceso pasivo a un proceso más activo donde se hace el esfuerzo de **entender, valorar el mensaje y conocer más allá de él o ella**. Se utilizarán todos los recursos disponibles para escuchar **de forma interesada y consciente**, aunque lo que le digan vaya en contra de lo que se piensa. Así se consigue escuchar todo el mensaje de forma global, incluida lo que no se dice.

En la escucha activa no sólo cuentan las palabras, también otros elementos como la respiración, tonos y demás.

¿Cuáles son los principales beneficios de la escucha activa?

- Se consigue más información.
- Se evitan los malos entendidos o situaciones confusas.
- La otra persona se siente mejor más valorada o mejor atendida.
- Aumenta el valor social (mejor funcionario o funcionaria pública) y reputación de quien escucha.

Es fundamental que los y las fiscales todas las etapas del proceso tengan un mínimo de empatía con la víctima antes de abordar directamente sobre el tema relacionado al caso para ello se tomará en cuenta lo siguiente:

40. ¿Qué es la escucha activa y cómo se puede aprender la escucha activa? <http://www.gestion.org/recursos-humanos/42586>

Para garantizar empatía:

- 1) Muestre un interés en la problemática.
- 2) Vea a la persona a los ojos y procure estar libre de cualquier distracción. En esos momentos concéntrese en el abordaje a la víctima.
- 3) Escuche el relato de la víctima.
- 4) No interrumpa el relato innecesariamente.
- 5) Modere su tono de voz.
- 6) Es importante tener información sobre el contexto, usos y costumbres de la zona de donde procede la víctima, esto les permitirá iniciar la conversión empática con las víctimas para luego hablar del tema del caso en cuestión.
- 7) Recuerde que su trabajo no es juzgar, sino explicar la realidad objetivamente.
- 8) No de consejos personales, ni cree falsas expectativas.
- 9) Establecer una buena recepción, que trasmita a la víctima una percepción de tranquilidad.
- 10) Ubíquese en el medio socioeconómico y cultural en que está inmersa la víctima para tomarlo en cuenta en el abordaje sin caer en estereotipos o falsas imágenes.
- 11) No desconfiar de la veracidad del relato, validar su experiencia, mostrar una actitud de confianza, sin presionar y animarla a hablar.
- 12) Escuchar sin juzgar, ni emitir apreciaciones personales.
- 13) Al derivar el caso, para la atención integral brinde a la víctima la información de la manera más clara posible.

VIII. Intervención en crisis en víctimas de violencia de género

La intervención en crisis de primer orden, conocido también como primeros auxilios emocionales son aquellos que se dan cuando las víctimas presentan alteración de su estado emocional a consecuencia directa del hecho delictivo.

Características de una crisis

Existen algunas características que permiten detectar si la víctima de violencia de género está atravesando una crisis al momento de la atención, estas son:

1. Desorganización e inestabilidad: La persona llora, muestra expresión triste, o sin expresión, habla descontrolada o agresivamente.
2. Expresa o se le refleja cansancio, agotamiento, desamparo, indefensión.
3. Síntomas físicos: Agitación corporal, tic nerviosos, manierismos, sudoración expresa dolores inexplicables o agudización de enfermedades como dolores de cabeza, hipertensión, diabetes asma, alergias.
4. Desorganización del funcionamiento de sus relaciones familiares: la víctima expresa mala comunicación intrafamiliar, hostilidad, agresividad social. Imposibilidad de soportar y callar.
5. Vulnerabilidad y Reducción de defensas. La víctima, expresa impotencia, ya no logra manejar la situación o justificarla.
6. La víctima expresa en su relato aislamiento social: Sentimientos de soledad, no tiene apoyo de nadie, desconfía del sistema o se ha decepcionado de él, Sentimientos de culpa, emociones negativas de odio o de venganza, consumo excesivo de alcohol o drogas, abuso de medicamento.

Condiciones necesarias para intervenir en la atención en crisis de las víctimas de violencia de género

Cuando las víctimas se presenten en crisis o se muestren alteradas emocionalmente se deberá de atenderlas de inmediato y realizar lo siguiente:

a) Que hacer.

- Abordar a la víctima con un tono de voz calmado y alentador para que la persona se sienta comprendida, aceptada.
- Si la víctima está llorando no debe callársele o reprimirle su llanto; lo recomendable es dejar que estas tomen sus tiempo para desahogarse.
- Cuidar que palabras utilizamos cuando iniciamos el abordaje y en el tono que se hace.
- Estar ahí en el silencio de la víctima; darle una pausa y luego retomar la conversación.
- Hacer un breve ejercicio de respiración, al menos unas tres veces, inhalando por la nariz y exhalando por la boca.
- Hacerle saber que usted comprende su preocupación.
- Haga saber que la ESCUCHA, COMPRENDE Y ACEPTA.
- Tome en cuenta la distancia (Proxemia).
- Hablarles de manera calmada y con respeto.
- Propiciar o improvisar un ambiente mínimo de privacidad para que las víctimas de violencia de género puedan expresarse abiertamente.
- Hacer énfasis en que no tiene culpa de lo ocurrido.

b) Que no hacer.

- Tratar de tranquilizar a la víctima contándole su propia historia como ejemplo.
- Ignorar sentimientos que está expresando la víctima (llanto, enojo, silencio).
- Juzgar, regañar o tomar partido.
- Tocar a la víctima sin su consentimiento.
- Ofrecer pañuelo, café o agua cuando la víctima no se ha desahogado.
- Realizar únicamente preguntas cerradas (que tengan respuestas de si o no)
- Hacer promesas que no puedan ser cumplidas.
- No juzgar a las víctimas, pero tampoco llorar con ellas.
- No forzar en el momento de la crisis a terminar su relato.
- No Elevar el tono de voz.
- No expresarle que no le cree o que su historia no le concuerda.
- No prejuiciar o estigmatizar a la víctima.
- No distraerse con llamadas de teléfono, mensajes de texto, computadora, asuntos administrativos, etc.

IX. Información y orientación a las víctimas

Cuando la víctima de violencia de género acuda a cualquier dependencia fiscal para solicitar información de su caso o a plantear una situación específica, las y los fiscales o personal designado para ello deberán atender y brindarle la información solicitada en ese momento. De no contar con el expediente en físico en ese momento, se solicitará telefónicamente a la dependencia que tenga la información y finalmente brindársela si es el caso, reflejándola en la esquila de atención, con los datos correspondientes, así evitará que la víctima incurra en mayor gasto de dinero y tiempo para obtener su información.

Respecto a la recepción de denuncias en el MP

Cuando las víctimas de violencia de género acudan a cualquiera de las sedes Departamentales, Regionales o Centros de Atención Fiscal del Ministerio Público como primera instancia a plantear su caso e interponer denuncia y se logre visualizar la existencia de un delito, las y los fiscales, asistentes fiscales y/o personal asignado para recepcionar la denuncia deberán:

- Explicarles los derechos e implicancia procesal que tiene al formular una denuncia.
- Explicar la ruta de atención que tendrá que atravesar conforme al Modelo de Atención Integral
- Explicar que se realizara un proceso investigación y que de sus resultados se establecerá el delito y la competencia
- Explicar los procesos alternos como la mediación y la consejería familiar institucional en los delitos menos graves, una vez se obtengan los resultados de la investigación.
- Ofrecer los servicios de la Unidad Especializada de Atención a Víctimas y sus dependencias con las oficinas de atención a víctimas en los departamentos donde las hubieran y/o los servicios de las organizaciones civiles para atención psicosocial.

Remisión a la unidad especializada de atención a víctimas de violencia de género del ministerio público

La Unidad Especializada de atención a víctimas de violencia de Género es de carácter asistencial y humanitaria con el fin de brindarle a la víctima una atención integral y servir de enlace con los fiscales especializados de violencia de Género, para tal fin esta Unidad cuenta con servicios de atención coordinada los que serán brindados desde la unidad o sus dependencias en los departamentos, regiones o sedes donde hubiera para que la víctima pueda acceder a ellos. Por ello una vez que se le haya explicado los servicios que tiene a su alcance y la importancia de los mismos para su empoderamiento a nivel personal y procesal debe hacerse la referencia a la Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia de Género o a sus dependencias donde existan, para que las víctimas cuenten con los siguientes servicios:

- **Área social:** Estudio de la situación personal, familiar, laboral y social de la víctima, orientación e información sobre recursos asistenciales y programas sociales, así como coordinaciones policiales o judiciales y acompañamiento, seguimiento de medidas precautelares, cautelares o principios de oportunidad, informe conjunto de valoración de riesgo. Estudios socio ambientales, etc.
- **Área Psicológica:** Atención en Crisis, atención psicológica a corto plazo para potenciar autonomía personal, coordinación con otros profesionales terapéuticos y acompañamiento.
- **Área jurídica:** información y asesoramiento de sus derechos y el curso de la denuncia, investigación y proceso judicial, coordinación con la red interinstitucional de apoyo, facilitar trámites para la acción civil en sede penal, preparación a juicio, acompañamiento a otras instancias de carácter jurídico.

Para dicha referencia a la UEAVG se deberá llenar el formato preestablecido, (adjunto en anexos), y remitir a la víctima con dicho formato. Realizar la coordinación previa para su debida atención de acuerdo a la urgencia y necesidades de la víctima. En caso que a la víctima se le haga difícil o inaccesible por razón de posición geográfica o de costo económico, se remitirá a un centro u organización civil que le sea de mejor acceso para que brinden los servicios de atención que requiera, procurando en todo momento la coordinación con tal institución u organismo.

X. Valoración de riesgo en las víctimas de violencia de género

En los casos de violencia de género, el **riesgo** es un factor que siempre está manifiesto o latente y se requiere saber identificarlo, sirve para re direccionar nuestra actuación en el ejercicio de la acción penal como fiscales y representantes de la víctima; por ello es de suma importancia que tomemos en cuenta lo siguiente:

RIESGO = DAÑO x PROBABILIDAD

Debemos de partir que el riesgo es un peligro que puede acontecer con una cierta probabilidad en el futuro y es por ello que debemos contar si fuese posible en todos los casos con una valoración o informe de riesgo con el objetivo de evaluar a través de un instrumento especial, y de otras técnicas, el riesgo que corre la víctima de sufrir daños (**FISICOS, PSIQUICOS, y SEXUAL**) inclusive la muerte de la persona por determinada situación o condición de la víctima o del agresor.

Que se pretende con identificar los factores de riesgo:

- No busca conocer causas de la violencia, sino factores asociados a ella.
 - Considerar al Agresor, la Víctima y las Circunstancias.
 - Riesgo variable para cada tipo de violencia.
 - Constructo variable, continuo y específico.
 - Decisiones graduadas.

La valoración del riesgo ⁴¹parte de la premisa de que la conducta violenta puede suceder con cierta probabilidad en el futuro en función del agresor, la vulnerabilidad de la víctima, la relación previa existente entre ambos, el tipo de violencia y el contexto de la situación. Es importante considerar en todo momento que la valoración del riesgo se hace tomando en cuenta el contexto específico del caso (no de forma general) y tiene un carácter puramente probabilístico.

41. Protocolo Regional para la investigación con perspectiva de género de los delitos contra las Mujeres cometidos en el ámbito intrafamiliar, pág. 31.

La valoración de riesgo es realizada por un profesional de **psicología en coordinación con trabajo social** y puede ser aplicada en cualquier etapa del proceso pues es dinámica, cambiante según la circunstancia vivencial de la víctima y es un recurso para realizar un plan de protección para la víctima.

Entre las medidas que debemos tomar en cuenta para proteger la vida e integridad física de la víctima tenemos la derivación a los albergues, medidas de protección de urgencia, medidas precautelares, cautelares, intervención inmediata para rescatar o trasladar a niños, niñas y adolescentes, o declaración anticipada entre otros.

Tabla 1. Factores del riesgo según sus características y tipo de violencia (elaborada a partir de Andrés Pueyo y Redondo, 2007)

Factores de riesgo (estáticos y dinámicos) según el tipo de violencia al que están asociados			
	Violencia sexual	Violencia contra la pareja	Violencia domésticas
Estáticos	<ul style="list-style-type: none"> • Abusos sexuales sufridos en infancia • Historia violencia anterior 	<ul style="list-style-type: none"> • Historia violencia contra pareja • Quebrantamiento ódenes alejamiento 	<ul style="list-style-type: none"> • Malos tratos sufridos en infancia • Historia de violencia física
Dinámicos	<ul style="list-style-type: none"> • Consumo alcohol • Creencias erróneas sobre relaciones sexuales 	<ul style="list-style-type: none"> • Celos • Consumo alcohol • Actitudes machistas 	<ul style="list-style-type: none"> • Consumo alcohol • Dificultades económicas • Trastornos afectivos

Los y las fiscales podrán solicitar el informe de valoración de riesgo a las siguientes instancias:

- Unidad Especializada de Atención a Víctimas o sus dependencias donde la hubieren.
- Comisaría de la Mujer.
- Ministerio de la Familia.
- o en su defecto, a las Organización no gubernamentales.

Además de usar instrumentos estandarizados emitidos por los profesionales especializados, para establecer la valoración de riesgo, los y las fiscales podrán identificar al momento de la atención o de analizar el caso, la información facilitada por la víctima sobre su percepción sobre la peligrosidad del agresor y los factores de vulnerabilidad siguientes:

- Posesión de armas o accesibilidad a las mismas.
- Uso de armas en episodios de maltrato anteriores.
- Amenazas con armas.
- Espía, controla el comportamiento.
- Aislamiento de la víctima de su familia o amistades.

- Entorno socioeconómico de la víctima y agresor.
- Amenazas de suicidio.
- Abuso de drogas o alcohol.
- Comportamiento obsesivo.
- Celos patológicos.
- Extrema dominación.

En la entrevista o abordaje que se le haga a la víctima se podrá indagar otros factores de riesgo que deben de medir de la circunstancias de los hechos:

- Empleo de fuerza física
- Tipo de armas empleadas durante las agresiones o amenazas.
- Frecuencia de las agresiones.
- Que los Hijos e hijas hayan presenciado la violencia.
- Amenaza de quitarle a sus hijos e hijas.
- Destrucción de partes o artículos de la casa.
- Agresiones sexuales.
- Agresión física en Estado de embarazo.
- Agresiones asociadas con problemas económicos.

Todo ello con el objetivo de tener claro el nivel de riesgo que presenta la víctima y así tomar todas medidas necesarias para su debida protección, seguridad o intervención para ello es importante tomar en cuenta:

Niveles de riesgo

El nivel de riesgo puede ser: ALTO, MEDIO Y BAJO.

Nivel de riesgo alto

Se trata de casos en los que la víctima ha estado o está en peligro de muerte, bajo los factores de alto riesgo: Presencia de intento de homicidio, agresor con acceso a armas o redes de protección y poder corruptor. Grado de indefensión de la mujer (o de pérdida de control sobre la situación) en función de su situación de salud física y/o mental, de sus posibilidades económicas o de sus recursos personales, como lengua, origen, etcétera. La víctima no cuenta con redes sociales de apoyo o, si las tiene, no pueden dar el apoyo. Estas referencias exigen extremo cuidado y atención.

Nivel de riesgo medio

Se trata de casos de violencia recurrente, de secuelas que pueden llegar a ser graves. El agresor puede tener un perfil violento pero sin acceso a armas de fuego, y no tiene

redes de protección. La mujer cuenta con redes de apoyo activas y relativamente seguras. Presenta signos de preocupación o temor ante un futuro estallido violento y ataque del agresor.

Nivel de riesgo bajo

Se trata de casos de violencia con episodios eventuales pudiendo ser verbal, patrimonial, emocional, es un ciclo sin manifestaciones de haber escalado nivel. La persona que vive el abuso cuenta con recursos para enfrentarlo ya sea emocional o económico, cuenta con espacios amplios sin violencia evidente, la mujer no presenta miedo por las consecuencias de un estallido violento, aunque puede mostrar signos de inseguridad personal.

También para medir estos niveles es importante manejar los lineamientos básicos acerca de **La personalidad, peligrosidad del agresor y vulnerabilidad de la víctima:**

De acuerdo a la Teoría del Ciclo de la violencia, nunca se sabe cuando podría ocurrir la próxima agresión, de tal manera que para determinar la personalidad, riesgo y reincidencia del agresor, y vulnerabilidad de la víctima los y las fiscales tendrán en cuenta lo siguiente:

¿Cómo podemos identificar los rasgos de un agresor?

- Es alguien que mantiene o ha mantenido una relación afectiva con la víctima.
- Dentro de las motivaciones existentes en este tipo de hechos están la necesidad de control o de dominar a la mujer, sentimientos de poder frente a la mujer y la consideración de la independencia de la mujer como una pérdida de control del hombre.
- Salirse de los roles o estereotipos socialmente atribuidos a las mujeres o conductas, con frecuencia los hombres atribuyen las agresiones hacia sus parejas al hecho de no haber desempeñado correctamente sus obligaciones de buenas esposas.
- Separación de la pareja.
- Percepción del agresor que la mujer rehace su vida.
- El hecho que la mujer inicia una nueva relación sentimental.
- Indiferencia del agresor ante las consecuencias jurídicas de sus actos Referencias (directas o indirectas) al suicidio.

Vulnerabilidad de la víctima

En este acápite es importante valorar los factores que rodean a la víctima que la hacen más susceptibles a seguir inmersa en el ciclo de la violencia o espiral, siendo necesario que se indague en lo siguiente:

- Habilidades de afrontamiento: equilibrio emocional, cuidado personal, atención a los hijos/ otros familiares, manejo de la crisis.
- Consumo de alcohol y drogas. (fármacos)
- Aislamiento social.
- Ideas o intentos de quitarse la vida.
- Autonomía o dependencia financiera.
- Fuentes de apoyo de la víctima: Carencia de apoyo de familiares, amistades, vecinos o instituciones (Se trata de anotar recursos, los elementos positivos que han de servir para facilitar la superación de la situación, junto con los elementos negativos dificultades, los obstáculos....)
- Disputa legal (hijos, bienes, etc).

En este sentido cuando se realice la solicitud del informe de valoración de riesgo los y las fiscales deben de orientar que el trabajo psicosocial contenga como mínimo lo siguiente:

1. Nivel de afectación de la víctima para el desarrollo de su vida cotidiana.
2. El nexo causal entre la situación de violencia sufrida y el estado anímico de la víctima.
3. Las consecuencias de la violencia en la vida personal, familiar, laboral, afectación de proyección de vida en la víctima.
4. Se evidencie el relato de violencia a través de entrevistas a sus familiares, vecinos, compañeros/as de trabajo, amistades, maestros, líder comunitarios, líder religioso, se podrá valorar el impacto que la violencia ha ejercido en diversos planos de la vida de la víctima.
5. Entorno socioeconómico y cultural de la víctima y el agresor
6. Identificación manifiesta del ciclo de violencia.
7. Relación de poder.
8. Indicadores de riesgo (drogas, explotación laboral o sexual, armas etc.)
9. Conclusiones.
10. Recomendaciones específicas.

XI. Criterios de actuación en la atención a víctimas de violencia de género en la fase investigativa

A fin de garantizar la articulación y complementariedad de las acciones de atención a las víctimas de violencia de género se creó el **Modelo de Atención Integral** con el objetivo de que las víctimas accedan a la justicia y a los servicios integrales para alcanzar la restitución de sus derechos, instrumento que es vinculante y obligatorio para todas las instituciones que brindan atención dentro del sector justicia. Independiente a la modalidad en la que este implementado este modelo en la fase de investigación es importante que las y los funcionarios y servidores/as del Ministerio Público siempre aborden a la víctima garantizando el respeto a los Derechos Humanos y constitucionales que le asisten.

Por ello en el abordaje a las víctimas deberán:

- Brindar a la víctima un trato humanizado, evitando la re victimización.
- Tener en cuenta los enfoques transversales (De Género, Derechos Humanos, Intercultural y Generacional)
- Asegurarse que la víctima de violencia de género desde la Investigación tenga los servicios de atención médica, psicológica y social; para ello deberá asistirse de las instituciones u organizaciones de su territorio o localidad que brinden estos servicios y conforman parte de la comisión Interinstitucional de lucha contra la violencia establecida en la ley 779 en cada sede territorial o distrital del país.
- Realizar las coordinaciones y orientaciones jurídicas necesarias a la comisaria de la Mujer y/o Auxilio judicial en su caso, para garantizar los elementos de convicción del caso en concreto.
- Elaborar de manera conjunta con la Comisaria de la Mujer y/o Auxilio judicial el plan de Investigación según el MAI para la obtención de los elementos de convicción del caso.
- Orientar a la Comisaria de la Mujer y/o Auxilio judicial en su caso, se realice la entrevista única conforme al Modelo de Atención Integral (MAI) de manera completa y que se agregue una copia de la misma en el expediente.
- Brindar información a la víctima del estado de la causa o etapa procesal en que se encuentra su caso sin perjuicio de los establecido en el arto 52 del Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

- Las y los fiscales y o asistentes fiscales o personal a cargo de la atención al público evitaren emitir pronunciamientos previos a las víctimas sobre la forma de resolución de sus caso a fin de no producir falsas expectativas, desilusiones, frustraciones entre otros sentimientos en las víctimas.
- Cuando las víctimas sean pertenecientes a grupos étnicos, indígenas, extranjeras, discapacitados -sordos mudos y no se cuente dentro de la institución con una persona que entienda su lenguaje, se deberá coordinar con las instancias respectivas (universidad, asociación, organismos, comunidad etc.) a fin de garantizar un intérprete o la persona adecuada que facilite la comunicación con la víctima. En las zonas rurales alejadas, la ausencia de intérprete podrá suplirse por la asistencia de tercera persona, (familiares, que pueda actuar como tal).
- Emitir medidas precautelares dependiendo del riesgo o vulnerabilidad que presente la víctima y/o solicitar medidas de protección de urgencia y cautelares que procedan.
- Tomar en cuenta la voluntad de la víctima cuando se adopten medidas relacionadas a su protección, ejemplo: Tipos de albergue, tipo de medidas según su realidad, centros de atención, etc.
- Orientar a la víctima acerca del alcance, trascendencia, beneficios y plazos de la Consejería Familiar Institucional que establece el reglamento de la ley 779, decreto 42-2014. Y una vez entendida la víctima explicarle sobre la necesidad de su consentimiento informado por escrito. Es importante que la víctima no sienta que la funcionaria o funcionario le está obligando a tal alternativa.
- Facilitar la participación activa de la víctima en la investigación y en el proceso judicial haciéndole saber sus derechos en cada etapa, promoviendo la aportación de pruebas, presencia en las audiencias si así lo desea la víctima, entre otros.
- Proteger la intimidad de la víctima, garantizando la confidencialidad de las actuaciones.
- Hacer uso en el ejercicio de la acción penal de los instrumentos internacionales relacionados a la violencia de género, a la atención y protección de las víctimas, sin defecto de lo establecido en nuestra legislación Nacional.

XII. Atención a víctimas en la fase del proceso judicial

Es importante tener en cuenta que la víctima ya ha atravesado una ruta en la etapa de investigación, y que ahora se encuentra en la etapa donde en muchos casos se manifiesta la retractación de las víctimas, ya que esta etapa les genera una cierta angustia emocional porque se estará en un lugar y personas totalmente desconocidos para ellas/os. Es por ello, que las y los fiscales deben brindarle en todo tiempo un trato digno, respetuoso y actuar en defensa de sus intereses y derechos.

Por ello, con el fin de evitar la victimización secundaria, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Establecer empatía con la víctima.
- Presentarse como el abogado o abogada que la representará y estará ahí para defender sus derechos e intereses, lo que hará que la víctima se sienta respaldada y confiada.
- Solicitar al juez el uso de la mampara en caso que exista en el juzgado o improvisar un mecanismo que permita que la víctima no tenga contacto visual con su agresor.
- Explicar brevemente y con palabras sencillas a la víctima como se desarrollará la audiencia o juicio y cuáles son los derechos que tiene en ella.
- Solicitar si el caso lo amerita la prueba anticipada de la víctima, conforme al arto.44 de la ley 779.
- Es necesario sentar las bases para que en sentencia condenatoria la autoridad judicial establezca el resarcimiento de daños y la víctima pueda emprender el proceso de ejercer la acción civil en sede penal.
- Identificar si la víctima ha recibido asistencia psicológica o en su defecto determinar en qué etapa del ciclo de violencia se encuentra para establecer el tipo de abordaje, tanto en la atención como el manejo del interrogatorio en el juicio en función de acreditar el sometimiento y dependencia emocional, patrimonial o de cualquier tipo que condicione la libre determinación de la víctima.
- Evitar reprogramaciones innecesarias o hacerlo ver al juez a través del escrito pertinente.
- En el interrogatorio en los juicios orales adoptar un lenguaje sencillo y acorde a las condiciones de las víctimas tales como: La edad, nivel educativo, grado de madurez, discapacidad, o condiciones socio culturales.
- Asegurarse de la notificación a las víctimas de las audiencias, Juicios o reprogramaciones, así como de las resoluciones Judiciales como: Cambios de medidas cautelares, ordenes de captura, orden de protección, declaración de incompetencia, entre otros.
- Estar atentos para no permitir interrogatorios o contrainterrogatorios impertinentes que no guarden relación con el objeto del proceso o que afecten directamente la moralidad o intimidad de las víctimas.

- Explicar con un lenguaje sencillo el resultado de la audiencia o juicio y la decisión del judicial.
- En los principios de oportunidad es importante velar que en los acuerdos o medidas para ese efecto siempre se procure que el agresor se someta a una asistencia psicológica para modificar las actitudes relativas al papel y la condición del hombre y de la mujer.
- En el interrogatorio a niños y niñas, es necesario que el o la fiscal haya logrado hacer empatía con ellos previamente, para que el niño o niña pueda identificarle como la persona que estará para defenderlo.
- En el interrogatorio a niños y niñas se deberá tomar una postura corporal adecuada, siendo mucho mejor bajarse a la altura de los niños y niñas, moderar el tono de voz y verlos a los ojos.

XIII. La retractación

Retracción es el abrupto cambio de versión brindado por una víctima tras haber relatado una situación de Violencia. Ocurre cuando junto a la rabia y el desprecio que motivó la confesión, subyacen sentimientos de culpa por haber denunciado a su familiar, pareja o cónyuge.

La retractación también se da cuando las víctimas sientan que todas las amenazas efectuadas por el agresor o los familiares de este se cumplirán.⁴² Es en esta etapa donde la víctima necesita mayor atención para no flaquear y sostener lo que ha relatado.

Por ello, a menos que la víctima de violencia de género reciba un apoyo sustancial ante su denuncia, normalmente se retractara. Esto no indica que la víctima mintió acerca del hecho, sino que generalmente es una consecuencia lógica de la intensa presión ejercida sobre ella. Así, la retractación les permite volver al seno de la familia y eludir el sistema legal.

Existen algunas variables que se pueden relacionar con el fenómeno de la retractación, específicamente en contextos de violencia conyugal, sin embargo ninguna de ella es concluyente, ni necesaria. A continuación se reflejan algunas variables relacionadas:⁴³

1. **Dependencia Económica importante:** Gran parte de las víctimas que se retractan, se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica, ingresos nulos o con muy bajos ingresos y trabajos esporádicos, por lo que ella concibe que la supervivencia tanto de ella como de sus hijos necesita del agresor, quien les brinda vivienda, alimento y apoyo económico.
2. **Dependencia Emocional⁴⁴:** Es la necesidad afectiva extrema que una persona siente hacia otra a lo largo de sus diferentes relaciones de pareja, por ejemplo, en la medida que la víctima mantenga un vínculo erótico y/o afectivo con el imputado, aumentaran las posibilidades de retractación.

42. La "Teoría de la Adaptación" o "Teoría de la Acomodación" Ronald Summit. <http://revistaprocesopenal.com.ar/articulos-pdf/octubre-2011/abuso-sexual.pdf>

43. Orientaciones técnicas para la intervención psicosocial con mujeres. Unidad de violencia. CHILE. 2012

44. <http://www.revistafuturos.info>: Dependencia Emocional y Violencia doméstica.

3. **Privación de libertad del agresor:** En muchos de los casos cuando la víctima es consciente de la pena que tendrá que pagar el agresor si se condena, (cárcel), le surgen sentimientos de culpa, desconcierto, inseguridad, lastima, etc. Lo que facilita que se retracte con el fin de evitar tanto la privación de libertad de este y evitar dejar registro de de sus acciones como antecedentes. de ahí viene la frase *“solo le quería dar un susto” pero no quería lo que llevaran a juicio.*
4. **Represalias:** El miedo a las represalias en las víctimas de violencia de género es muy común, dado que la mayoría de las veces, el acusado o los familiares de este para persuadir a la víctima para que levante la denuncia o no comparezca al juicio son bajo la sombra de las amenazas de futuras agresiones hacia ella o algún familiar o limitación o impedimento de beneficios o circunstancias.
5. **Victimización Secundaria:** En la medida que la víctima sienta que tiene que asistir a muchas audiencias, en que se sienta poco entendida en la policía fiscalía, o desconfíe de la eficacia del sistema, o sienta que no la tratan como corresponde; es muy probable que la víctima se retracte para no tener que volver esa decepción o impotencia de ver que no le apoyan, terminando ella, por sus propios medios.
6. **Escasas Redes de Apoyo:** Las víctimas que están aisladas socialmente, que cuentan con pocas amistades, pocos familiares y poca participación en instituciones y que no ha recibido una atención psíquica que trabaje en el empoderamiento de la víctima, es posible que se retracte. Ya que el imputado o acusado es casi la única fuente de apoyo que ella cree tener, por más cuestionable que sea su conducta.

XIV. Indicios que permiten identificar la posibilidad de retractación

Las y los fiscales en cualquier etapa del proceso es importante que sepan identificar o tomen en cuenta al momento de la atención a las víctimas de violencia de género algunos indicios que le permiten identificar una posible retractación de la víctima, tales como:

Barreras psicológicas

- Temor a no ser creídas.
- Vergüenza.
- Sentimientos de culpa.
- Miedo a la reacción del agresor.
- Sentimientos hacia su pareja.
- Dificultad para reconocerse como víctimas
- No identificarse con la imagen de la violencia que transmiten los medios de comunicación.
- Carencia de autonomía económica.
- Falta de comprensión por parte del entorno personal.
- Complicidad social con el maltratador, control social.
- Aislamiento y coacciones impuestas por éste.
- Desconfianza en los recursos para salir de la situación.

En el aspecto legal

- Búsqueda de la confesión para buscar la verdad formal.
- Discriminación de la víctima.
- Pretensión de no judicializar actos de investigación.
- Desconectar con el sistema o funcionarios
- Procedimientos lentos y formalistas.
- Desvirtualización del contradictorio y la garantía del juicio justo.
- Posturas verticales de los tribunales.

Manejo de la retracción

En caso de que la víctima se aparte de la investigación o del proceso

Si la víctima en cualquier momento de la investigación o del procedimiento, manifieste su intención de no seguir adelante con el proceso, la o el fiscal adoptará todas las medidas debidas para garantizar la protección de la víctima y la continuación del proceso hasta su resolución definitiva. Cuando la víctima manifiesta un indicio de retractación es importante hacer todo lo necesario para hacer uso de las l de declaraciones anticipadas.⁴⁵

- Es importante se verifique dependiendo la fase donde la víctima muestre los signos de la retractación informarle, en su caso, de las medidas de protección que pudieran adoptarse. En ningún caso y de ninguna manera la víctima será presionada para actuar en contra de su voluntad y decisión. Deberá procurársele la información más exhaustiva para que tome la decisión de forma libre y debidamente informada.
- Remitirla de inmediato para que reciba de inmediato la atención psicológica para su empoderamiento y buscarle redes de apoyo para que no se siente sola
- En todo caso el o la fiscal deberá tener la habilidad de intuir y detectar con anterioridad las barreras psicológicas o legales que pueden estar incidiendo en la disposición de la víctima y procurar persuadirla haciéndole ver las fases del ciclo de la violencia y el derecho que tiene a vivir libre de violencia.
- Si este fenómeno se da en el momento del Juicio Oral y esta se presenta manifestando su intención el o la fiscal no podrá forzarla a declarar y si decide hacerlo se deberá dirigir el interrogatorio para acreditar tal situación.

45. Protocolo regional para la investigación con perspectiva de género de los delitos de violencia contra las mujeres cometidos en el ámbito intrafamiliar

XV. Lineamientos de atención especial a grupos vulnerables

Niñas, Niños y Adolescentes

Las niñas y los niños y adolescentes en particular, las víctimas de delitos sexuales y violencia intrafamiliar deber ser atendidos en cualquier etapa del proceso penal con especial atención teniendo en cuenta que estos pueden presentarse con distintos tipos de comportamientos tales como: temerosos, desconfiados, deprimidos, agresivos, distraídos, callados, nerviosos, irritable, renuentes a contestar, con olvido o pérdida temporal de la memoria, con ideas confusas o incoherentes e indiferentes⁴⁶:

Es por ello la importancia que la o el fiscal o funcionario del Ministerio Público que atienda a niños, niñas y adolescentes tome las medidas concretas para evitar la victimización secundaria, carente de empatía y no ajustada a las particularidades del caso:

- Priorizar la atención de Niñas, Niños y Adolescentes por encima de otras víctimas que estén en espera de ser atendidas, evitando todo formalismo innecesario. Así mismo se Dispondrá el tiempo necesario para brindar la atención.
- En la atención a este grupo de personas vulnerables es importante que el fiscal siempre se presente como la persona que les brindara su apoyo.
- En los casos de violencia intrafamiliar se evitara la intervención de los familiares o terceros que puedan predisponer o coartar al niño, niña y adolescente en su entrevista o declaración.
- Se debe tomar en cuenta que la vinculación entre los adultos y los niños y las niñas víctimas de violencia con las y los fiscales se basa en el respeto y en el ejercicio de los derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes, evitando criterios discrecionales de actuación e intervención que generalmente reproducen las condiciones de re victimización del niño y la niña.

46. Protocolo de actuación del Ministerio público en atención a las víctimas del delito.

- La atención debe de realizarse en un ambiente especial o improvisando uno para este fin, procurando que la niña o niño se sienta lo más cómoda y relajada posible, sin interrupciones y en un entorno que le provea privacidad.
- La o el fiscal debe procurar un trato acogedor, amable, que contemple los tiempos de la Niñas y Niños, sus necesidades y favorezca un vínculo de confianza.
- Mantener calma y paciencia en la entrevista o abordaje.
- En el caso que el Niñas, Niños y Adolescentes víctima de delitos sexuales, trata de persona o delitos conexos deberá considerarse siempre si es necesario el anticipo jurisdiccional de Prueba conforme al arto 202 del Código procesal penal o artículo 44 de la ley 779. Para su debida protección, misma que se realizara a la luz de la privacidad, pertinencia etc.
- Informar a los padres y/o tutores o representantes legales sobre los servicios existentes en la unidad especializada de atención a víctimas de violencia de género y/ Red de derivación para el acompañamiento psicosocial que ayuden a superar la afectación causada por el delito en las victimas.
- En todo momento se deberá garantizar la confidencialidad, evitando en cualquier etapa del proceso la divulgación de los nombres o imágenes de los mismos.
- Tomar en cuenta si el niño, niña y adolescente manifiesta sentir miedo, la culpa, vergüenza, la confusión para brindarle el tiempo y las condiciones para el desahogo y la comunicación de las experiencias vividas.
- Mostrar empatía y comprensión a los sentimientos y a las experiencias traumáticas vividas por los Niña, Niño y Adolescente, se debe creer en la historia contada por la víctima.
- Cuando el niño, niña o adolescente presente algún tipo de Discapacidad: En el proceso judicial se respetara el acceso a los niños, niñas y adolescente, debe de realizarse un proceso sin discriminación y garantizando la comunicación en base al tipo de discapacidad, y con todas las garantías conferidas por la Constitución política de la Republica y las Leyes.⁴⁷ Priorizando en todo momento su atención.
- Identificar los factores de riesgo o vulnerabilidad para realizar el plan de intervención con las autoridades pertinentes.
- Velar por garantizar los servicios de atención, medica, psicológica o acompañamientos.
- Limitar el número de entrevistas:⁴⁸ Deberán aplicarse procedimientos especiales para obtener pruebas de las victimas Niños, Niñas y Adolescentes, a fin de reducir el número de entrevistas, trámites innecesarios o duplicados.

Lo que no se debe hacer cuando se entrevista a un niño, niña o adolescente víctima

1. Emitir sermones, frases o exclamaciones que hagan sentir culpable a la niña, niño o adolescente víctima.

47. Ley 762 Arto 32, 33 De los Derechos de las personas con Discapacidad

48. Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delito, Consejo económico y social ECOSOC, pág. 189.

2. Expresar frases, juicios o expresiones inapropiadas, exclamaciones o gestos que expresen lastima hacia la niña, niño o adolescente víctima.
3. Conducir el diálogo con curiosidad.
4. Culpar a la víctima de lo sucedido.
5. Hacer juicios de valor personales durante el abordaje.
6. Decir cosas de la que no se tiene seguridad, ni mentirle.
7. Dar regalos para que cuente el hecho.
8. Hacer promesas que no se puedan cumplir.
9. Presionar al niño, niña o adolescente para que brinde información.

Mujeres adultas mayores⁴⁹

De acuerdo con las reglas de Brasilia e instrumentos internacionales sobre acceso a la Justicia de personas en situación de vulnerabilidad el Ministerio Público a través de las y los fiscales adoptaran las medidas necesarias para facilitar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género que se encuentren en situación de vulnerabilidad por razón de su edad, discapacidad, pertenencia a comunidades indígenas o minorías, migrantes o personas con especiales dificultades de acceso a la justicia. Las y los fiscales y servidores públicos deben de garantizar a las víctimas especialmente vulnerables:

Generalmente los delitos contra las mujeres adultas mayores se cometen en el seno de su hogar o del centro (asilo) donde se encuentran. Desde el punto de vista de la investigación se debe darles un trato humanizado, paciente y sensible.

En relación a los actos de investigación se deberá hacer uso en su mayoría de la prueba científica para acreditar los hechos. Así mismo tomar medidas precautelares o cautelares destinadas a su protección.

En el abordaje y atención a las personas adultas mayores los y las fiscales o el personal encargado adoptarán cautelas semejantes a las ya mencionadas para los niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, se actuará con prontitud en la investigación, sencillez en las entrevistas, evitando la confrontación con el presunto agresor, acondicionando los espacios físicos para ganar la confianza de la víctima y asegurando la privacidad de las actuaciones. Los informes de trabajo social son fundamentales las condiciones en las que se encuentra la víctima adulta mayor o el estado de abandono o desamparo en el que se encuentra, la dependencia emocional o económica con su agresor o agresora y los posibles indicios de retractación.

49. Protocolo regional para la investigación con perspectiva de género de los delitos de violencia contra las mujeres cometidos en el ámbito intrafamiliar, pág.: 16, 17 y 18.

Mujeres con discapacidad

En el caso de víctimas con discapacidad auditiva, la entrevista se desarrollará en un lugar sin distracciones. El/la fiscal se situará frente a la víctima, facilitando que le vea ojos labios y realizará gestos para facilitar la comunicación, atendiendo también a sus gestos y lenguaje corporal. En caso de contar con intérprete de lengua de signos, se tomará en cuenta que se trata de un mero apoyo, de modo que si fuera preciso aclarar alguna respuesta se le pedirá a la víctima, no al intérprete.

En caso de víctimas con discapacidad visual, se identificará a todas las personas que participan en la entrevista. Siempre que se le haga entrega de algún documento será preciso leer en voz alta su contenido.

En caso de víctimas con discapacidad intelectual, debe garantizarse el respeto a la víctima y el trato igualitario. Las entrevistas serán cortas, interrumpiéndolas si es necesario, sin presiones a la víctima, con preguntas breves y directas y respetando el tiempo necesario para la respuesta. Se procurará que la víctima reciba acompañamiento y apoyo de profesionales del trabajo social y/o psicología.

Los delitos de violencia de género contra mujeres con discapacidad se cometen frecuentemente en el seno de su hogar o del centro de acogida donde residen. Se practicarán informes periciales médicos, psicológicos y/o de trabajo social para acreditar la afectación en la salud física y psíquica de la víctima lo que casi siempre será una agravante.

Los informes de valoración de riesgo debe quedar establecido esta condición de la víctima y de cómo la hace depender de su agresor por la misma condición, si es en el entorno familiar el o la fiscal deberá activar la coordinación correspondiente para su debida protección.

Pertenecientes a comunidades indígenas, afrodescendientes o minorías

Para la atención a víctimas pertenecientes a comunidades indígenas, afrodecientes es necesario en primer lugar saber o determinar el lugar o comunidad de donde procede pues así se comprenderá su actuación, pensamiento o costumbre. Para ello se deberá auxiliar del personal que entienda o conozca de dicha región o costumbre o lengua a fin de activar una comunicación efectiva con la víctima, es importante que el fiscal que no sea de esa zona haga un sobre esfuerzo por hacerle comprender a la víctima que usted esta para apoyarle en todo lo que este a su alcance. De no contar con el personal que le sirva de interprete deberá coordinar con las instituciones u organizaciones pertinentes para lograr tal objetivo o bien los familiares de estas o terceros para facilitar la traducción.

Se debe tener especial consideración con estas víctimas porque posiblemente esa víctima por las condiciones geográficas o de recursos no vuelva a presentarse a las

instalaciones del Ministerio Público por ello desde su abordaje se deberá procurar brindarle todos los medios necesarios para los servicios de salud y atención psíquica que amerite, así como realizar todos los actos de investigación necesarios para la investigación y pruebas de carácter científico. Explicándoles en todo momento de forma clara y sencilla la importancia o pertinencia de dicha diligencia de investigación, procurando que la víctima sea acompañada por un familiar o en su caso por alguna organización civil que brinde apoyo.

Mujeres extranjeras, migrantes o refugiadas

Como Representantes de las víctimas por imperio de ley esa representación y atención debe hacerse sin distinción alguna por ello se debe procurar facilitar el acceso a la justicia y la protección debida a aquellas mujeres víctimas de violencia de género que se hallen fuera de su contexto geográfico, familiar, cultural o lingüístico, por motivo de itinerancia, migración, refugio etc. ya en ese contexto son mayormente vulnerables por ello deberán observarse las siguientes recomendaciones:

Las mujeres víctimas extranjeras presentes en el país de forma temporal, se deberá ser informada de sus derechos en su propio idioma, para ello como se ha referido anteriormente se deberá contar con un intérprete gratuito o persona de su confianza. Así mismo se procura velar por la protección de la misma a través de la Unidad Especializada de Atención a Víctimas o sus dependencias para su debida protección en relación a brindarles un lugar seguro, avisos a sus consulados o embajadas si es el caso. Así mismo se deberá de actuar con la debida diligencia para asegurar que la denuncia, exámenes médicos físicos o psicológicos, etc para que se practiquen sin demora, con la debida observancia a no violentar sus derechos humanos y finalmente realizar las gestiones necesarias la práctica de prueba anticipada.

En el caso de mujeres inmigrantes o refugiadas, en todos los casos es necesario contar con un informe socio ambiental o de Valoración de Riesgo el que deberá resaltar las posible dependencia emocional y económica con respecto a su agresor. Se valorará también el peligro derivado de la situación administrativa o legal que se halle la víctima en el país, entre otros. Por las y los fiscales harán las respectivas coordinaciones con las instituciones gubernamentales para ver esta situación o condición de la víctima para obtener permisos de estancia o residencia en el país de acogida, refugio y evitar la expulsión del país etc por razones humanitarias y la coordinación con organizaciones de la sociedad civil para ese acompañamiento especial.

Mujeres en situación de pobreza extrema o exclusión social

En el caso de mujeres en condición de extrema pobreza a través de las efectiva coordinación con los gobiernos municipales, proyectos u organismos no gubernamentales y agencia de cooperación internacional ubicadas en el territorio se deberá realizar las

coordinaciones pertinentes para garantizar la atención médica, traslado a su domicilio o alojamientos mientras dure el proceso de investigativo o judicial, y cualquier otro tipo de ayuda. Así mismo se deberá orientar a la comisaria de la mujer y auxilio judicial para los traslados y acompañamiento para la práctica de diligencias de investigación donde se requiera la presencia de la víctima.

XVI. De la coordinación interinstitucional

Como hemos visto a lo largo del presente protocolo la coordinación es un factor determinante en la atención a víctimas de violencia sin el cual sería imposible que esta pueda acceder a los servicios integrales a los cuales tiene derecho. Bajo este principio también se evita la victimización secundaria. En este sentido la ley integral contra la violencia hacia las mujeres mandata en su artículo, la necesidad de creación de las comisiones de lucha contra la violencia en cada territorio, municipio o región. Por ello el o la Fiscal especializados o el personal designado para ello, debe mantener una presencia activa y continua en dichas comisiones para fortalecer la coordinación operativa en la investigación, y agradecer las redes de derivación y apoyo que estén a disposición para facilitar la atención y protección para las víctimas a las cuales representamos.

Registro de lo actuado

Es necesario registrar las actuaciones tanto en el ejercicio de la acción penal como en la atención brindada a las víctimas, sobre todo en la atención, referencia y contrareferencia realizadas con las víctimas de violencia de género en tal sentido en las sedes o centros de atención fiscal se deberá registrar lo siguiente:

- Llenar un libro de atención que por cada víctima de violencia nombre y generales, delito, no de expediente, fecha de atención, orientación brindada.
- Registrar las referencias y contrarreferencias para atención psicológica, médica o jurídica o la Unidad Especializada de Atención a víctimas de violencia de Género.

De la restitución y la reparación de daños

La restitución se distingue de los conceptos de reparación de daños e indemnización de perjuicios, porque aquella no pertenece técnicamente a la institución jurídica de la reparación del daño. A este respecto, basta tener presente, y al margen de otras consideraciones, que, mientras el derecho a la restitución se circunscribe, específicamente, a la devolución de la cosa, el resarcimiento o indemnización abarca no solamente la

indemnización de la disminución del valor que hubiere sufrido la cosa por deterioros o menoscabos, o el pago de su valor equivalente, en caso de no ser posible su devolución, sino también la indemnización de los daños no patrimoniales.

Sobre este aspecto, sabemos que no en todos los casos será posible procurar este aspecto, sin embargo los y las fiscales deberán procurar desde la investigación ir dando las pautas para la investigación de los posibles bienes que tengan el acusado y una vez con el fallo de culpabilidad solicitar la restitución o reparación según proceda en el debate de pena debidamente fundamentado. De lo contrario si no es establecido en sentencia y según el caso los y las fiscales podrán coordinar con las universidades que formen parte de la comisión de lucha contra la violencia u organizaciones civiles que brinden este apoyo para facilitarle la documentación necesaria (sentencia) para que realicen la acción civil en sede penal según lo establecido en el arto 81 al 87 del Código Procesal Vigente de Nicaragua.

Es importante relacionar que si en la sentencia condenatoria el juez que dictó la sentencia ya ordenó la restitución, no es necesario pedirlo en el ejercicio de la acción civil en sede penal.

XVII. Bibliografía

- A. Álvarez, J. Zermatten & Herrero. 2011. Compendio de documentos de referencia en materia de justicia juvenil. Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delito, Consejo económico y social ECOSOC. Printex Nicaragua.
- Berlnerblan Virginia Nino, Viola. 2012. Guía ampliada del Protocolo Completo de la ONU Contra la trata de personas *Global Right* Washington D.C.
- CEDAW: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
- Constitución Política de Nicaragua.
- Directriz No FG -001-2014 Procedimiento para la derivación a Consejería Familiar Institucional a víctimas de violencia de género de delitos menos graves.
- Equipo Técnico del MAI Modelo de Atención Integral a víctimas de violencia de género en Nicaragua UNFPA, 2012. Managua Nicaragua.
- Eugarrios Y, Martínez. Protocolo de Actuación del Ministerio Público en atención a las víctimas del delito Editronic S.A Managua, Nicaragua. 2011.
- Instituto Canario de Igualdad Consejería de la Presidencia Justicia e igualdad DE Gobierno de Canaria. 2012. Guía para la atención a mujeres víctimas de violencia de género Gobierno de Canaria.
- Ley integral contra la Violencia hacia las Mujeres y las reformas a la Ley No 641, "Código Penal, con sus reformas incorporadas.
- Ley especial e integral contra la trata de personas.
- Ley No. 406: Código Procesal penal.
- Ley No.641: Código Penal de la Republica de Nicaragua.
- LEY No. 287 Código de la Niñez y la Adolescencia.
- Ley 287: Ley 870 Código de Familia.
- Ministerio de Salud. 2011. Atención de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años víctimas de abuso sexual Ministerio de Salud. Chile.
- Protocolo Regional para la investigación con perspectiva de género de los delitos de violencia contra las Mujeres cometidos en el ámbito intrafamiliar.
- Torros y Llamas Martin, 2008. Protocolo Andaluz para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de género Red Andaluza de Formación contra el maltrato a las mujeres. Andalucía España.
- 100 Reglas de Brasilia, sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. 2008.

Anexos

Valoración de riesgos en caso de delitos sexuales a niñas, niños y adolescentes

Psicólogo(a)

Fecha.....

Seleccione acápite a o b, siendo a=1 y b=0

Aspectos a evaluar
1) Caracterización de la actuación del abuso intrafamiliar o –extra familiar a) El abuso es intrafamiliar b) el abuso es Extra familiar
2) Tipo de relación agresor /víctima a) El agresor pertenece a la familia b) El agresor no pertenece a la familia
3) Acceso del agresor niño/ña o adolescente a) El agresores alguien que vive en el mismo hogar o que tiene fácil acceso a la víctima b) El agresor alguien que no vive en el mismo hogar o que no tiene fácil acceso a la víctima
4) Respuesta del o los adulto/s no agresor/es frente a la revelación del abuso a) El cuidador(a)tiene una relación cercana con el abusador b) El cuidador(a) no tiene una relación cercana con el abusador
5) a) No existe en el entorno familiar nadie que asuma el rol de protector del (la)menor b) Existe en el entorno familiar uno o mas miembros que asuman el rol de protector del (la)menor
6) a) No existe en el entorno social o comunitario alguien que asuma el rol de protector del (la) menor b) Existe en el entorno social o comunitario alguien que asuma el rol de protector del (la) menor
7) a)Existe complicidad `por parte de los otros adultos de la familia con el agresor b) Existe apoyo por parte de los otros adultos de la familia con el menor /adolescente
8) Edad del niño/niña o adolescente a) El (la) menor es de rango de edad menor de 0-13años b) El (la) menor es de rango de edad menor de 13-18 años
9) Tipo de relación de pareja y presencia de violencia. a) El abusador es el esposo o conviviente y ejerce abuso en contra de la madre de la niña (o) b) El abusador no es el esposo o conviviente y no ejerce abuso en contra de la madre de la niña (o)

10) a) Existencia de violencia en contra de la madre del (la) menor abusado b) No hay abuso en contra de la madre del (la) menor abusado
11) Existencia de denuncias, intervenciones legales a) Hay antecedentes de denuncias no resueltas b) No hay antecedentes de denuncias no resueltas
12) Abuso sexual de la madre en la infancia a) Hay antecedentes de abuso sexual en la infancia de la madre b) No hay antecedentes de abuso sexual en la infancia de la madre
13) Existencia de violencia intrafamiliar en el entorno. a) Hay existencia de violencia intrafamiliar en el entorno b) No hay existencia de violencia intrafamiliar en el entorno
Escala de riesgo
Riesgo mínimo de 0 a 3
Riesgo moderado de 3 a 6
Riesgo grave de 7 a 10
Riesgo inminente de 8 a 13

Formulario de valoración del riesgo contra la víctima de violencia de género

VÍCTIMA:

Nº DE CÉDULA O PASAPORTE:

FECHA:

1. Por favor, señale la puntuación, conforme al baremo indicado, sobre cada uno de los indicadores, tomando en cuenta las fuentes de las que haya recibido la información y la intensidad con que estima la concurrencia de cada indicador.
2. Respecto a las FUENTES tome en cuenta las manifestaciones de las víctimas, declaraciones de testigos y familiares, impresiones de los servicios de policía intervinientes, inspección ocular en el lugar de los hechos, reportes médicos, informes periciales, antecedentes del presunto agresor)
3. Respecto a la INTENSIDAD, debe asignar a cada indicador un valor (en la escala de 0 a 2/3, considerando que 0 se atribuirá en los casos en que no concurre el indicador y 2/3 cuando la intensidad es alta)
4. La valoración es siempre aproximativa, sin embargo en caso de que NO esté de acuerdo con la valoración resultante, marque en el cuadro inferior el nivel de riesgo que Ud. Considere más adecuado al caso, justificando su valoración personal. Sólo podrá incrementar el nivel de riesgo, nunca disminuirlo. Las medidas de protección y/o cautelares a adoptar o solicitar serán acordes al nivel de riesgo resultante del cuadro anterior, excepto en caso de que su valoración personal incremente el riesgo, en cuyo caso se adoptarán y solicitarán las medidas correspondientes a su valoración subjetiva.

5. En todo caso, el formulario ha de ser completado por persona que haya mantenido entrevista personal con la víctima y analizado todas las fuentes existentes.

I. Datos del presunto agresor y de la víctima	Valoración
1. Pertenencia de la víctima y/o del presunto agresor a comunidad indígena o minoría, persona migrante o desplazado/a interno/a	0 o 1
II. Relación entre víctima y presunto agresor	Valoración
1. La víctima está recientemente separada, ha anunciado al posible responsable que piensa separarse o abandonarlo o ha puesto una denuncia penal o ha solicitado medidas de protección y/o cautelares por agresiones contra ella o sus hijas e hijos o ha existido amenaza por parte del agresor de llevarse a sus hijos o hijas más pequeños si decide separarse	0 o 1
2. La víctima ha tenido que salir de la casa por riesgo de muerte	0 o 1
3. La víctima está aislada o retenida por el posible responsable contra su voluntad en el momento o lo ha estado previamente	0 o 1
III. Tipo de violencia ejercida	Valoración
2. Ataques previos con riesgo de muerte por ahorcamiento, asfixia, inmersión, ataque con arma blanca, contundente o de fuego (aunque no haya sido disparada), golpes y heridas graves, tirarle el carro encima, precipitarla por la escalera, envenenamiento	0-3
3. Existencia de violencia física susceptible de causar lesiones	0- 2
4. Violencia física en presencia de hijos/as u otros familiares	0- 2
5. Aumento de la frecuencia y gravedad de la violencia	0-3
6. Amenazas graves o de muerte a la víctima.	0-3
7. Agresiones sexuales en la relación de pareja	0 a 2
IV. Perfil del presunto agresor	Valoración
8. Acoso, control y amedrentamiento sistemático a la víctima	0-3
9. Historial de conductas violentas con una pareja anterior	0- 2
10. Abuso sexual y/o abuso físico del presunto responsable contra los hijos o hijas u otras personas menores de edad de la familia cercana, así como tentativa de realizarlo	0 a 3
11. Historial de conductas previas de delitos de violencia física o sexual contra otras personas	0 a 3
12. El presunto agresor es una persona con acceso y conocimiento en el uso de armas de fuego y/o que trabaja con ellas o porta armas.	0 a 3
13. Abuso de alcohol o drogas por el presunto agresor	0 a 3
14. El presunto responsable tiene antecedentes psiquiátricos (internamiento psiquiátrico, medicación por depresión)	0 a 1
15. Intento o amenaza de suicidio de parte del agresor.	0 a 1
16. Conductas frecuentes de crueldad, de desprecio y falta de arrepentimiento	0 a 3
17. Habiéndose dictado medidas de protección y/o cautelares de no acercarse a la víctima, el presunto agresor muestra menosprecio a la autoridad, no respeta las órdenes, irrumpe por la fuerza en la casa o acosa a la afectada, en su lugar de trabajo o en otros lugares.	0 a 2

V. Vulnerabilidad de la víctima		Valoración
18. La víctima considera que el presunto agresor es capaz de matarla		0 a 3
19. La víctima ha retirado denuncias previas, ha reanudado la relación de convivencia o ha renunciado a la protección conferida.		0 a 3
20. La víctima ha recibido atención en salud como consecuencia de las agresiones o ha recibido atención psiquiátrica producto de las agresiones vividas		0 a 2
21. Vulnerabilidad de la víctima por enfermedad, soledad o dependencia emocional o económica del presunto agresor		0 a 2
Riesgo bajo (0-12) Riesgo medio (13-26) Riesgo alto (27-53)		
Control de la calidad del formulario		
¿Está Ud. de acuerdo con el resultado de la valoración? Marque opción deseada:	SÍ	NO
Si NO está de acuerdo ¿qué resultado le parece más adecuado? Por favor, indíquelo y razone su opinión:		

Observaciones:

.....

.....

Ministerio Público. Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia de Género

FICHASOCIAL/VISITA DOMICILIAR

I. Datos generales

Fecha de Nacimiento Lugar de Nac.

Nº Expediente Juzgado Teléfono

Dirección

Nivel educativo

II. Motivos de la visita:

.....

.....

.....

III. Situación socio familiar:

3.1 Composición Familiar

Nombre y Apellidos	Parentesco	Edad	Ocupación	Estado civil	Presenta Discapacidad/ Tipo

3.2 Tipo de Familia

Nuclear (...) monoparental (...)
Desintegrada (...) consanguínea (...)
Reconstruida (...)
Otros

3.3 Problemática Familiar

Violencia Familiar (...) Drogadicción (...)
Prostitución (...) Delincuencia (...) Alcoholismo (...) Trabajo infantil (...)
Otros

IV. Vivienda y entorno social

La vivienda es:
De personas que habitan en la vivienda
De habitaciones para dormir
Material en las paredes
Material piso.....
Material techo.....

Servicios básicos.....
.....

Entorno social.....
.....
.....

V. Situación de salud de la familia

.....
.....
.....

VI. Aspecto económico

Condición laboral, Ocupación e ingreso de los miembros adultos de la familia:

.....
.....
.....
.....

VII. Conclusiones

.....
.....
.....

VIII. Recomendaciones

.....
.....
.....

Fecha:

.....
Trabajadora Social
Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia de Género.
UEAVG- Ministerio Público

Oficina de atención a víctimas del delito

REFERENCIA DE SOLICITUD DE ATENCIÓN

DEPARTAMENTO Y/O MUNICIPIO:
NÚMERO DE EXPEDIENTE FISCAL:
FECHA DE REFERENCIA:
REFERIDO A:
INSTITUCIÓN U ORGANISMO:

A) DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE QUIEN REQUIERE LA ATENCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS:

TELÉFONOS:
DIRECCIÓN

EDAD: MESES (...) AÑOS (...) SEXO F (...) M (...)

Nº. DE CÉDULA DE IDENTIDAD: Embarazada: Sí (...) No (...)

DISCAPACIDAD: Sí (...) No (...)

ESCOLARIDAD: OCUPACIÓN:

TIPO DE VÍCTIMA: Directa (...) Colateral: (...)

RELACIÓN CON EL VICTIMARIO:

DELITO:

B) TIPO DE ATENCIÓN SOLICITADA:

JURÍDICA (...) PSICOLÓGICA (...) MÉDICA (...) SOCIAL (...)

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**PARA EFECTOS DE SEGUIMIENTO DEL PRESENTE CASO, SOLICITAMOS INFORMAR
SOBRE LA ATENCIÓN BRINDADA.**

Favor dirigirse a: Oficina de Atención a Víctimas

Teléfonos de contacto: 255–6800. Ext. 6794

Correo electrónico: yeugarrios@ministeriopublico.gob.ni

Lic. Yaosca Eugarrios Calderón
Fiscal Jefa de la Oficina de Atención a Víctimas
Credencial #0264

Ficha de Registro

Nº.

I. DATOS DE LA VÍCTIMA

Nombre y Apellidos:.....
Cédula: Edad Oficio:
Dirección:
No. Telefónicos:
No. Expediente MP:
Delito:

Datos de familiar o persona de contacto

II. DATOS DEL VICTIMA

Nombres y Apellidos:.....
Dirección:
Edad: Oficio:
Relación de Parentesco (C/Victima)

III. MOTIVO DE CONSULTA:

IV. RESUMEN DE HECHOS:

V. DIAGNOSTICO VICTIMO LÓGICO:

VI. ATENCIÓN ESPECIALIZADA:

Jurídica (...) Psicológica (...)

PROCEDENCIA: Fecha de atención:

Observaciones:

.....
.....
.....
.....

Atendido por:.....

Centro de Atención Fiscal. Distrito.....

Remitido a la Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia de Género

Nombre de la Víctima:

Número de Expediente Fiscal:

Delito:

Estado de la causa:

Fecha de remisión del expediente a la sede central del MP:.....

Recibido por:.....

Solicitud de atención para:

1. Preparación a JOP (...)
2. Seguimiento de medidas precautelares (...)
3. Valoración de Riesgo (...)
4. Atención psicológica (...)
5. Acompañamiento (...)

Nombre del Fiscal que referencia:

Fecha de referencia:.....

Atendido por:.....

Protocolo para la Investigación con Perspectiva de Género de los delitos de Violencia contra las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes cometidos en el ámbito sexual e intrafamiliar

Juan Pablo Sánchez

Presentación

El Estado de Nicaragua ha venido avanzando sustancialmente en la modernización de su marco normativo, particularmente en materia penal, procesal penal, prevención e investigación del delito, con un enfoque transversal de género y derechos humanos.

En este contexto la Policía Nacional y particularmente la **Especialidad de Comisaría de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia (CMNA)** han valorado la necesidad de contar con un instrumento normativo que oriente la investigación de aquellos hechos que atentan contra los bienes jurídicos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Al efecto, esta Especialidad policial se ha dado a la tarea de actualizar el documento denominado ***“Protocolo para la Investigación con Perspectiva de Género de los delitos de Violencia contra las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes cometidos en el ámbito sexual e intrafamiliar”***, incorporando disposiciones relacionadas a la labor de investigación del delito, derivadas estas de la Constitución Política de la República y sus reformas; Código Penal y sus reformas; Código Procesal Penal; Ley No. 872: Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, publicada en la Gaceta, Diario Oficial, No. 125 del 07 de julio del 2014; Ley No. 779, Ley integral contra la violencia hacia las mujeres y de Reformas a la Ley No. 641, “Código Penal” y sus reformas; así como el Decreto No. 42 - 2014, Reglamento a la Ley 779 y el Decreto No. 43 - 2014 que contiene la *Política de Estado para el Fortalecimiento de la Familia Nicaragüense y la Prevención de la Violencia*, publicados en La Gaceta, Diario Oficial No. 143, del jueves 31 de julio del año 2014, entre otras normas nacionales e internacionales.

Todo este esfuerzo tiene el propósito de unificar los procedimientos, la visión de trabajo institucional y articular la labor interinstitucional, particularmente con el Ministerio Público, en su calidad de ente acusador, en función de fortalecer la estrategia de abordaje del fenómeno de violencia contra la mujer, niñez y adolescencia, sustentando esta acción en las disposiciones constitucionales que estatuyen el *“Modelo preventivo, proactivo y comunitario”*, contando con la participación protagónica de la familia y la comunidad.

El presente Protocolo recoge la filosofía, visión y adopta una serie de normas de investigación previstas en el *"Protocolo Regional para la Investigación con Perspectiva de Género de los delitos de Violencia contra las Mujeres cometidos en el ámbito intrafamiliar"*, aprobado en el mes de noviembre del año 2013, todo ello en el marco de los esfuerzos que viene realizando en el país la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), a través del Programa de Cooperación Regional de la Unión Europea, EUROsocial II.

El presente Protocolo incorpora en su contenido y en su visión de aplicación la perspectiva de género en el desarrollo de la investigación policial, exigiendo en tal sentido contar con funcionarios/as policiales y personal civil, sensibilizados y especializados en la temática de violencia de género y de derechos humanos de mujer, niñez y adolescencia; requiriendo en este orden una formación continua, donde prevalezca el respeto a la persona y su dignidad humana y se tome en consideración el análisis, la perspectiva o enfoque de género, entendiendo por género ese conjunto de características, roles, actitudes, valores y símbolos que conforman el deber ser de cada hombre y de cada mujer, impuestos a cada sexo mediante el proceso de socialización y que hacen aparecer los sexos como diametralmente opuestos por naturaleza.

Queda, entonces, el presente instrumento en las manos y en la actuación de cada mujer y hombre que forma parte de la gran familia de la Policía Nacional nicaragüense, con el propósito que sirva de directriz técnica en el desempeño de cada miembro de la institución, abogando, promoviendo el profundo respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas de esta nación centroamericana, teniendo el desafío de ser una de las mejores policías del mundo, con profunda vocación de servicio, enraizada en el pueblo, siendo éste su origen y destino!

I. Objeto del “Protocolo para la investigación con perspectiva de género de los delitos de violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes cometidos en el ámbito sexual e intrafamiliar”

1. El presente Protocolo persigue situar a las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas en el centro de la investigación de los hechos de connotación penal sucedidos en el territorio nacional, lo cual exige de cada miembro de la institución policial una práctica profesional de extraordinaria calidad, con perspectiva de género. Para ello se adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar el seguimiento, acompañamiento y protección de las víctimas y/o sus familiares a lo largo de la investigación y del procedimiento. La víctima deberá estar en todo momento informada de sus derechos y de la marcha del proceso.

2. La Policía Nacional de la República de Nicaragua asume firmemente el compromiso de generar estrategias institucionales y/o interinstitucionales dirigidas a garantizar la protección especializada y la asistencia integral a las víctimas, así como su derecho a una vida libre de violencia y de discriminaciones, tal como lo establece la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará: OEA, 09-06-94) y la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés: ONU, 18-12-79).

3. El presente **“Protocolo para la Investigación con Perspectiva de Género de los delitos de Violencia contra las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes cometidos en el ámbito sexual e intrafamiliar”** de la República de Nicaragua, retoma y consecuentemente incorpora en su contenido valiosas disposiciones previstas en el *“Protocolo Regional para la Investigación con Perspectiva de Género de los delitos de Violencia contra las Mujeres cometidos en el ámbito intrafamiliar”*, aprobado en el seno de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y que constituyen necesariamente su OBJETO; persiguiendo entre ello:

- a) Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la investigación de los delitos de violencia contra las mujeres, dotando a las autoridades correspondientes de los

principios de actuación, herramientas y procedimientos necesarios para luchar de forma efectiva contra la impunidad de la violencia de género y garantizar la adecuada protección y reparación a las víctimas.

- b) A los efectos de este Protocolo se entenderá por **violencia de género** *todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico, sexual o patrimonial para la mujer, así como la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, siempre que se cometa en el marco de una relación de afectividad, con o sin convivencia, sea actual o pasada. Incluye también en su ámbito de aplicación los actos de violencia contra las mujeres cometidos por familiares y miembros del mismo hogar por razón de discriminación de género o en el marco de relaciones de poder asimétricas.*
- c) Facilitar la presencia y participación de las víctimas en todas las fases de la investigación y el proceso judicial. Las víctimas de violencia de género están inmersas en un círculo de violencia que sólo se rompe cuando la víctima tiene la certeza de contar con apoyos en el exterior. En este marco es preciso ganar su confianza en el sistema judicial, disponer de recursos asistenciales que contribuyan a romper la dependencia emocional respecto del posible agresor, así como resolver cuestiones relativas, entre otras, al sostenimiento e integridad de los/as hijos/as en común, al uso de la vivienda y a las obligaciones y derechos patrimoniales. Sólo a través del acompañamiento y empoderamiento de las víctimas es posible asegurar su participación y colaboración con la investigación criminal.
- d) Servirse de técnicas de investigación científico - criminal que permitan acreditar la comisión del hecho delictivo y la posible existencia de un patrón de conducta dominante del hombre sobre la mujer dentro de la relación de afectividad o de familia, para lo cual, cuando sea necesario, se analizará el contexto familiar, económico, social y cultural en que se desarrolla o se ha desarrollado la relación. Se tratará así de garantizar la mayor rigurosidad en la investigación, basándose en pruebas sólidas que le den consistencia y eviten la impunidad de estos delitos.
- e) Actuar con la diligencia debida desde el inicio de la investigación/recepción de la denuncia para recabar el mayor número de evidencias del hecho criminal, recurriendo a los medios de prueba previstos en los Códigos Procesales Penales nacionales y cualquier otro medio de prueba que responda al Principio de prueba ampliatoria sea testimonial, documental o pericial, de modo que la investigación no se centre de forma exclusiva o primordial en el testimonio de la víctima. Se pretende luchar contra la impunidad frecuente en este tipo de delitos, derivada de la retractación o ausencia de las víctimas en el procedimiento, ya sea por la dependencia emocional o económica respecto al agresor, por las presiones que reciben de su pareja, familia o terceras personas o por las dificultades de acceso a las instituciones encargadas de la protección de las víctimas.
- f) Orientar la investigación a dar una respuesta ajustada a la gravedad de los hechos, evitando en todo caso la adopción de medidas alternativas al proceso penal que presupongan la minimización o justificación de la violencia ejercida. Para ello será preciso disponer del equipo humano y medios materiales adecuados, utilizar las

mejores técnicas investigativas y trabajar de forma coordinada con otras instituciones como el Ministerio Público, los juzgados, los servicios de atención a las víctimas y las organizaciones sociales y comunitarias en la lucha contra la impunidad de los delitos.

- g) Adquirir las capacidades y herramientas necesarias para eliminar prejuicios y estereotipos en el análisis, tratamiento e investigación de los delitos, especialmente en la atención prestada a la víctima de la violencia y/o a sus familiares, erradicando todo comportamiento discriminatorio o barreras de acceso a la justicia así como eludiendo cualquier comentario o actitud culpabilizadora.
- h) Establecer una guía de criterios y prácticas unificadas de investigación para las autoridades policiales a todos los niveles, que contribuyan a la sensibilización, prevención y sanción de la violencia de género, así como promover un cuerpo policial con un alto grado de sensibilidad, que incorporen el Principio de Igualdad de Género en sus principios de actuación y en su propia filosofía de vida.

II. Régimen jurídico

1. Internacional

4. Desde hace algunas décadas se ha avanzado en materia de disposiciones jurídicas que promueven los derechos de las mujeres contra la discriminación y la desigualdad que estas sufren por motivos de género.

5. El Sistema Internacional de Derechos Humanos se ha ocupado de la discriminación por género en diversas instancias, constituyendo en la actualidad un *corpus* de gran relevancia que rige para el país. Entre los principales instrumentos normativos se cuentan:

a) Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer o CETFDCM (también conocida como la CEDAW, por sus siglas en inglés)

Esta Convención es fruto del trabajo de años realizado por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, creada en 1946 por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Dicha Comisión, basándose en la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de Naciones Unidas de 1967, comienza a preparar la CETFDCM en 1974. Un año más tarde se celebra la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, que incorpora la Declaración, y la Asamblea General de Naciones Unidas finalmente la aprueba el 18 de diciembre de 1979.

La no discriminación, la igualdad y la obligación del Estado de cumplir constituyen la base de esta Convención. *El primer artículo de la CEDAW establece que la discriminación es toda distinción o diferencia, exclusión o rechazo, restricción o prohibición que se hace por el hecho de ser mujer.*

b) Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicar la Violencia hacia la Mujer (OEA, Belém do Pará, 1994).

Reconociendo que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración

Universal de los Derechos Humanos y reafirmado en otros instrumentos internacionales y regionales; afirmando en tal sentido que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. La violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.

Belém do Pará dispone en su Art. 2 que: *Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:*

- *que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;*
- *que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, **violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual** en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar...*

El Art. 3 de esta Convención establece que *“toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia; tanto en el ámbito público como en el privado.”*

c) “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”

La Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua, en virtud del Acuerdo No. 83, emitido en fecha 06 de octubre del año 2008, Acuerda Ratificar en cada una de sus partes, las **“Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”** conocidas como las 100 Reglas de Brasilia, las que fueron aprobadas por Nicaragua en la XIV Asamblea Plenaria, celebrada en Brasilia los días 4,5 y 6 de marzo de 2008, y en la que participaron los Presidentes de las Cortes Supremas y Altos Tribunales de Justicia y de los Consejos de la Judicatura de Iberoamérica.

d) Guías de Santiago sobre Protección de Víctimas y Testigos

Aprobadas en Punta Cana, República Dominicana, los días 9 y 10 de julio del año 2008, en la XVI Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).

Las Guías de Santiago proponen cooperar en un objetivo común a través de un lenguaje compartido, aun cuando se parta de realidades bien diversas y de opciones legislativas y organizativas distintas fundadas en la soberanía de los diferentes Estados para conformar sus sistemas jurídicos y sus organizaciones de servicio al ciudadano.

La víctima de los delitos de violencia de género se caracteriza muchas veces por su resistencia al contacto con las Instituciones, siendo remisa a confiarles tanto el hecho como su persecución, así como a implicarse en un proceso de recuperación personal dirigido institucionalmente. En muchas ocasiones, la víctima es extraída de su entorno, con serias dificultades de recolocación, ya que a ello se suma, en no pocas ocasiones, la existencia de situaciones de ilegalidad sobre su presencia en el país. La opción de retorno de las víctimas se ve, finalmente, obstaculizada tanto por motivos de seguridad en el mismo como por su mera ejecución material.

e) Convención sobre los Derechos del Niño (ONU)

Aprobada por las Naciones Unidas el 20 de noviembre del año 1989, y en vigor desde el 2 de septiembre del año 1990; aprobada y ratificada por el Estado nicaragüense en ese mismo año, pasando a formar parte del Derecho interno nicaragüense, siendo incorporada en el Art. 71, in fine, constitucional, por lo cual tiene *plena vigencia*.

Los Arts. 34 y 35 de este cuerpo normativo internacional establecen que los gobiernos **deben** proteger a los niños y niñas *de todas las formas de explotación y abusos sexuales* y tomar todas las medidas posibles para asegurar que no se les secuestre, venda o *"trate."*

f) Protocolo facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía

Este Protocolo ofrece definiciones de delitos como "venta de niños", "prostitución infantil" y "pornografía infantil". **Obliga a los gobiernos** a castigar las actividades relacionadas a estas conductas. Pero **no solamente para quienes ofrecen o entregan niños y niñas** para su explotación sexual, transferencia de órganos, obtención de beneficios o trabajos forzados, sino también **para todo aquel que acepte a un niño o niña** destinado a estas actividades.

g) Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional

La Declaración del Milenio, aprobada por los Jefes de Estado reunidos en las Naciones Unidas en septiembre de 2000, reafirmó los principios en que nos inspiramos y ha de servir para alentar a todos los que luchan en pro del imperio de la ley. En la Declaración se afirma que ***"los hombres y las mujeres tienen derecho a vivir su vida y a criar a sus hijos con dignidad y libres del hambre y del temor a la violencia, la opresión o la injusticia"***.

En diciembre de 2000, al suscribir en Palermo (Italia) la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la comunidad internacional

demostró la voluntad política de abordar un problema mundial con una reacción mundial. Si la delincuencia atraviesa las fronteras, lo mismo ha de hacer la acción de la ley. Si el imperio de la ley se ve socavado no sólo en un país, sino en muchos países, quienes lo defienden no se pueden limitar a emplear únicamente medios y arbitrios nacionales. Si los enemigos del progreso y de los derechos humanos procuran servirse de la apertura y las posibilidades que brinda la mundialización para lograr sus fines, nosotros debemos servirnos de esos mismos factores para defender los derechos humanos y vencer a la delincuencia, la corrupción y la *trata de personas*.

La Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional es un tratado multilateral patrocinado por Naciones Unidas en contra del crimen organizado transnacional, fue adoptado en 2000. Es también llamado la Convención de Palermo, y sus tres Protocolos (los **Protocolos de Palermo**) son:

- *Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños;*
- *Protocolo de las Naciones Unidas contra el Contrabando de Migrantes por Tierra, Mar y Aire;* y,
- *Protocolo de las Naciones Unidas contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego.*

Todos estos tres instrumentos contienen elementos de las actuales leyes internacionales sobre trata de personas y el tráfico ilegal de armas. La Convención y el Protocolo están bajo la jurisdicción de Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés *United Nations Office on Drugs and Crime*). La Convención entró en vigor el 29 de septiembre de 2009.

h) Protocolo Regional para la Investigación con Perspectiva de Género de los delitos de Violencia contra las Mujeres cometidos en el ámbito intrafamiliar

Los países integrantes de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) aprobaron el 19 de noviembre del año 2013, en Quito (Ecuador), el "*Protocolo Regional para la Investigación con Perspectiva de Género en los Delitos contra las Mujeres cometidos en el ámbito familiar*"

El referido Protocolo es uno de los resultados de la primera fase del Proyecto Violencia de Género en Iberoamérica: Investigación de delitos, atención a víctimas y coordinación interinstitucional de EUROsociAL II. Este proyecto se ejecuta por la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) con la colaboración de la AIAMP.

El Protocolo para la investigación de la violencia contra la mujer, es un marco de referencia y podrá ser adaptado a la realidad de cada país, se centra en las formas de

violencia más agresivas que son aquellas que se manifiestan en las relaciones familiares y afectivas. Hay que tomar en cuenta que EUROsociAL es un programa regional de cooperación técnica de la Comisión Europea para la promoción de la cohesión social en América Latina. La cohesión social es una de las prioridades de la relación estratégica UE-ALC tal como se acordó en las cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno de: Guadalajara (2004), Viena (2006), Lima (2008) y Madrid (2010). La Fase I del Programa se realizó del 2005 - 2010 y la Fase II se ejecuta en el periodo 2010 - 2014.

El objetivo general de EUROsociAL es contribuir a *aumentar la cohesión social en América Latina*. Su objetivo específico es apoyar políticas públicas nacionales dirigidas a mejorar los niveles de cohesión social, fortaleciendo también las instituciones que las llevan a cabo.

Este Protocolo tiene por objeto impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la investigación de los delitos de violencia contra las mujeres, dotando a los Ministerios Públicos suscritos de los principios de actuación, herramientas y procedimientos necesarios para luchar de forma efectiva contra la impunidad de la violencia de género y garantizar la adecuada protección y reparación de las víctimas.

Quedan, por tanto, excluidas de su ámbito de aplicación otras formas de violencia contra las mujeres ejercidas fundamentalmente en el ámbito público y que precisan de instrumentos de investigación específicos.

La incorporación de la perspectiva de género a la investigación de los delitos se sirve del concepto de género como categoría de análisis que permite visibilizar la asignación social diferenciada de roles y tareas a cada uno de los sexos, evidenciando relaciones de poder asimétricas originadas por las diferencias en los atributos, expectativas, identidades, características y posibles conductas atribuidas social y culturalmente a cada uno de los sexos que generan discriminación y se traducen, entre otras conductas, en aquellas tipificadas en el Código Penal.

2. Nacional

6. Las acciones de la Comisaría de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia en el marco de la investigación de delitos contra víctimas y sobrevivientes de Violencia de género, intrafamiliar y sexual, igualmente, se sustentan en la Legislación Nacional, a saber:

a) Constitución Política de la República de Nicaragua

Supranorma reformada, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 26, del lunes 10 de febrero del año 2014, misma que incorpora la figura de la víctima como figura central en la tutela de sus derechos fundamentales, disponiendo al efecto el Art. 34 Cn. que el/

proceso judicial deberá ser oral y público. El acceso de la prensa y el público en general podrá ser limitado por consideraciones de moral y orden público.

El ofendido será tenido como parte en los juicios desde el inicio de los mismos y en todas sus instancias. El Estado protegerá a las víctimas de delito y procurará que se reparen los daños causados. Las víctimas tienen derecho a que se les proteja su seguridad, bienestar físico y psicológico, dignidad y vida privada, de conformidad a la ley.

Las garantías mínimas establecidas en el debido proceso y en la tutela judicial efectiva en este artículo son aplicables a los procesos administrativos y judiciales.

Por su parte, el Art. 4 Cn. refiere que *el Estado nicaragüense reconoce a la persona, la familia y la comunidad como el origen y el fin de su actividad, y está organizado para asegurar el bien común, asumiendo la tarea de promover el desarrollo humano de todos y cada uno de los nicaragüenses, bajo la inspiración de valores cristianos, ideales socialistas, prácticas solidarias, democráticas y humanísticas, como valores universales y generales, así como los valores e ideales de la cultura e identidad nicaragüense.*

En esta misma dirección, el Art. 5 Cn. estatuye los principios de la nación nicaragüense, entre los que sobresalen: *la libertad, la justicia, el respeto a la dignidad de la persona humana, el pluralismo político y social, el reconocimiento a los pueblos originarios y afrodescendientes de su propia identidad dentro de un Estado unitario e indivisible, el reconocimiento a las distintas formas de propiedad, la libre cooperación internacional, el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, los valores cristianos, los ideales socialistas, las prácticas solidarias, y los valores e ideales de la cultura e identidad nicaragüense.*

Los valores cristianos aseguran el amor al prójimo, la reconciliación entre hermanos de la familia nicaragüense, el respeto a la diversidad individual sin discriminación alguna, el respeto e igualdad de derecho de las personas con discapacidad y la opción preferencial por los pobres.

Los ideales socialistas promueven el bien común por encima del egoísmo individual, buscando la construcción de una sociedad cada vez más inclusiva, justa y equitativa, impulsando la democracia económica que redistribuya la riqueza nacional y erradique la explotación entre los seres humanos.

La solidaridad entre las y los nicaragüenses, debe ser un accionar común que conlleve a abolir prácticas excluyentes, y que favorezcan a los más empobrecidos, desfavorecidos y marginados; como sentimiento de unidad basado en metas e intereses comunes de nación, siendo que la colaboración y ayuda mutua promueve y alienta relaciones de entendimiento, respeto y dignificación, como fundamento para la paz y la reconciliación entre las personas.

Asimismo, el Estado reconoce la existencia de los pueblos originarios y afrodescendientes, que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución y en especial, los de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales...

De igual manera, la Carta Magna reza que *todas las personas son iguales ante la Ley y tienen derecho a igual protección. No habrá discriminación por motivo de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social*. Que toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral.

En el territorio Nacional, toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los Derechos Humanos y de la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y en la Convención Americana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

En este orden, el Art. 48 Cn. estatuye que *se establece la igualdad incondicional de todos los nicaragüenses en el goce de sus derechos políticos; en el ejercicio de los mismos y en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades, existe igualdad absoluta entre el hombre y la mujer*.

Es obligación del Estado eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre los nicaragüenses y su participación efectiva en la vida política, económica y social del país.

b) Código Penal de la República de Nicaragua (Ley No. 641)

Ley penal sustantiva aprobada por la Asamblea Nacional en el año 2008, bajo el No. de Ley No. 641, publicado en Las Gacetas Nos. 83, 84, 85, 86 y 87 del 5, 6, 7, 8 y 9 de Mayo del 2008, respectivamente, vigente desde el 10 de julio de ese mismo año.

Este cuerpo normativo establece que bajo el Principio de Legalidad ninguna persona podrá ser condenada por una acción u omisión que no esté prevista como delito o falta por ley penal anterior a su realización.

No será sancionado ningún delito o falta con pena, medida de seguridad o consecuencia accesoria que no se encuentre prevista por la ley anterior a su realización.

Particularmente el Art. 5 de esta Ley 641 establece el **Principio de Reconocimiento y Protección de la Víctima**, preceptuando al efecto que *el Estado garantiza a toda persona*

que ha sido víctima de un delito o falta penal el reconocimiento y protección de sus derechos y garantías, entre ellos, a ser tratada por la justicia penal con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

En cuanto al Derecho Consuetudinario o Costumbrista, el Art. 20, in fine, del Código Penal vigente regula que *los delitos y las faltas cometidos por miembros de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Caribe nicaragüense en el seno de ellas y entre comunitarios, cuya pena no exceda de cinco años de prisión, serán juzgados conforme al derecho consuetudinario, el que en ningún caso puede contradecir a la Constitución Política de Nicaragua. No obstante, queda a salvo el derecho de la víctima de escoger el sistema de justicia estatal al inicio mismo de la persecución y con respeto absoluto a la prohibición de persecución penal múltiple.*

En este ámbito comunitario, es importante que la Autoridad policial, en el marco de sus investigaciones especializadas, tome en cuenta la particularidad, idiosincrasia cultural y la costumbre de los miembros de las comunidades étnicas, indígenas o afro descendientes, sean éstos en su condición de sujetos activos o pasivos de una infracción penal. En tal sentido, deberá garantizarse el derecho al uso de las lenguas originarias de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política (Arts. 5, 11 y 33 inc. 2.1), Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de Nicaragua (Art. 17), Ley No. 28: Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua (Art. 18) y Ley de Uso Oficial de las Lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua (Ley No.162) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) referido a los Pueblos Indígenas y Tribales.

c) Código Procesal Penal de Nicaragua (CPP)

Esta Ley penal adjetiva o procedimental fue aprobada por el Parlamento nacional el 13 de noviembre del año 2001, siendo publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 243 y 244 del 21 y 24 de Diciembre del 2001, respectivamente.

Esta norma jurídica establece que *el proceso penal tiene como finalidad solucionar los conflictos de naturaleza penal y restablecer la paz jurídica y la convivencia social armónica, mediante el esclarecimiento de los hechos y la determinación de la responsabilidad de los acusados, la aplicación de las penas y medidas de seguridad que en justicia proceda y de otras soluciones basadas en la disposición de la acción penal, la mediación y acuerdos entre las partes en los casos autorizados por el CPP.*

El CPP reconoce en su Art. 9 la *intervención de la víctima*, señalando en tal sentido que *de acuerdo con la Constitución Política de la República, el ofendido víctima de delito tiene el derecho a ser tenido como parte en el proceso penal desde su inicio y en todas sus instancias, derecho que está limitado por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común.*

El Art. 110 CPP regula los Derechos de la víctima señalando que ésta, como parte en el proceso penal, podrá ejercer los siguientes derechos que este cuerpo normativo le confiere:

- *Conocer oportunamente la propuesta de acuerdo mediante el cual el Ministerio Público prescindirá total o parcialmente de la persecución penal y hacer uso de sus derechos en los casos previstos en el presente Código;*
- *Ser oída e intervenir en las audiencias públicas del proceso, en las que se haga presente y solicite su intervención;*
- *Solicitar medidas de protección frente a probables atentados en contra suya o de su familia;*
- *Constituirse en el proceso como acusador particular o querellante, según proceda;*
- *Ofrecer medios o elementos de prueba;*
- *Interponer los recursos previstos en el presente Código;*
- *Ejercer la acción civil reparatoria o resarcitoria en la forma prevista por el presente Código, y,*
- *Los demás derechos que este Código le confiere.*

Asimismo, al conocer de la denuncia y en los casos que proceda, el Ministerio Público, por medio de su dependencia de atención a las víctimas de delitos, en coordinación con la Policía Nacional y las instituciones estatales de salud física y mental, con las entidades de servicio y proyección social de las universidades estatales y las universidades y asociaciones privadas civiles o religiosas que lo deseen, prestará la asistencia técnica y profesional inmediata que requieran las víctimas, cuando se trate de personas naturales.

Asimismo el CPP contempla la “Asistencia especial”, la que por razones humanitarias podrán prestar las Escuelas y Facultades de Derecho y organizaciones sociales para asistir a las víctimas de escasos recursos, pudiendo proporcionar por medio de sus Abogados, asistencia jurídica gratuita.

d) Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley No. 287 - CNA -)

Aprobado el 24 de marzo de 1998, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 97, del 27 de mayo de ese mismo año y vigente desde el mes de noviembre de 1998.

Contiene una gama de Derechos y Responsabilidades de las niñas, niños y adolescentes; la Política Nacional de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia y el Sistema de Justicia Penal Especializada de Adolescentes; así como un conjunto de principios relacionados a la atención integral a la niñez y la adolescencia; estableciendo, asimismo, Medidas de Prevención y Protección para la niñez y la adolescencia víctima de violencia.

Entre estas disposiciones sobresalen: el Principio del Interés Superior de la Niña, Niño y Adolescentes, así como el Principio de Protección de los derechos e intereses de las víctimas u ofendidos del delito.

De igual manera, se estatuye en este cuerpo normativo que *ninguna niña, niño o adolescente, será objeto de cualquier forma de discriminación, explotación, traslado ilícito dentro o fuera del país, violencia, abuso o maltrato físico, psíquico y sexual, tratamiento inhumano, aterrador, humillante, opresivo, trato cruel, atentado o negligencia, por acción u omisión a sus derechos y libertades.*

Es deber de toda persona velar por la dignidad de la niña, niño o adolescente, poniéndolo a salvo de cualquiera de las situaciones anteriormente señaladas.

La niña, niño y adolescente tiene derecho a la protección de la Ley contra esas injerencias o ataques y los que los realizaren incurrirán en responsabilidad penal y civil.

La interpretación y aplicación de las disposiciones de la Justicia Penal Especial del Adolescente deberá hacerse en armonía con sus principios rectores, con los principios generales del Derecho Penal, del Derecho Procesal Penal, con la doctrina y normativa internacional en materia de niñez y adolescencia, en la forma que mejor garantice los derechos establecidos en la Constitución Política, los Tratados, Convenciones y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua.

El Art. 121 CNA estipula que la víctima u ofendido será tenido como parte en el proceso y podrá interponer los recursos correspondientes, cuando lo crea necesario para la defensa de sus intereses. Podrá comparecer por sí mismo o representada por un Abogado.

En cuanto a la detención de adolescentes este mismo cuerpo normativo regula que *la Policía Nacional podrá detener sólo con orden judicial a los presuntos responsables de los hechos denunciados, pero por ninguna circunstancia podrá disponer la incomunicación de un adolescente. En caso de detención en flagrante delito lo remitirá inmediatamente a la autoridad competente en un plazo no mayor de veinticuatro horas.*

e) Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres y de Reformas a la Ley No. 641, “Código Penal” (Ley No. 779)

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 35, del miércoles 22 de febrero del año 2012.

Esta Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres, con el propósito de proteger los derechos humanos de las mujeres y garantizarle una vida libre de violencia, que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación; establecer medidas de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y prestar asistencia a las mujeres víctimas de violencia, impulsando cambios en los patrones socioculturales y patriarcales que sostienen las relaciones de poder.

El Art. 2 deja claro que esta Ley se aplicará a quien ejerza violencia contra las mujeres de manera puntual o de forma reiterada. Los efectos de esta Ley, serán aplicables a quien ejerza violencia en el ámbito privado, definiendo que este tipo de violencia es *la que se produce dentro del ámbito familiar o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer.*

La Ley 779, se funda entre otros, en los siguientes principios:

- **Principio del interés superior del niño:** Se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente todo aquello que favorezca su pleno desarrollo físico, psicológico, moral, cultural y social, en consonancia con la evolución de sus facultades que le beneficie en su máximo grado y en especial el reconocimiento, vigencia, satisfacción y disfrute de sus derechos, libertades y garantías de forma integral.
- **Principio de no discriminación:** Es la eliminación de toda distinción, exclusión o restricciones basadas en el nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, edad, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica, condición social, discapacidad, que tenga por objeto o resultado, el menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. También es discriminación las acciones u omisiones que no tengan intención de discriminar pero sí un resultado discriminante.
- **Principio de no victimización secundaria:** El Estado deberá garantizar que las autoridades que integran el sistema de justicia y otras instituciones que atienden, previenen, investigan y sancionan la violencia, deberán desplegar medidas especiales de prevención, para evitar situaciones de incomprensión, reiteraciones innecesarias y molestias que pueden ser aplicadas a las víctimas.
- **Principio de protección a las víctimas:** Las víctimas de los hechos punibles aquí descritos tienen el derecho a acceder a los órganos de justicia de forma gratuita y deberán ser atendidas de forma expedita, sin dilaciones indebidas o formalismos inútiles y obtener una resolución en los plazos establecidos por la Ley, sin menoscabo de los derechos de las personas imputadas o acusadas.

f) Ley de Modificación al artículo 46 y de adición a los artículos 30,31 y 32 de la Ley No. 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y de Reformas a la Ley No. 641, “Código Penal”

Aprobada el 25 de Septiembre del 2013 y publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 185 del 01 de Octubre de 2013.

Creación de Juzgados especializados

Se crean los Juzgados de Distrito Especializados en Violencia, integrados por un Juez o Jueza especializada en la materia. Deberá existir como mínimo un Juzgado de Distrito Especializado en Violencia en cada cabecera departamental y de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, así como en los municipios en que, por su ubica-

ción, sea difícil el acceso a los Juzgados ubicados en las cabeceras departamentales o regionales.

Los Jueces o Juezas de Distrito Especializados en Violencia conocerán y resolverán en primera instancia, de los delitos señalados en la Ley 779, cuya pena a imponer sea menos grave y grave. En el caso de los delitos menos graves y graves cometidos en el territorio de su competencia, dichos Jueces conocerán desde la audiencia preliminar e inicial hasta la audiencia del juicio oral y público.

De igual manera, se habilita a los Jueces y Juezas de Distrito de lo Penal de audiencias de las diferentes circunscripciones para conocer, tramitar y resolver en primera instancia los delitos menos graves y graves establecidos en la Ley 779, quienes también conservarán la competencia que tienen establecida de conformidad con el Código Procesal Penal.

Asimismo, los fines de semana y días feriados, asumirán los Jueces Suplentes. En el departamento de Managua se habilita al Juez o Jueza de Distrito Penal de Audiencia de Tipitapa y al Juez o Jueza de Distrito Penal de Audiencia de Ciudad Sandino para conocer, tramitar y resolver los delitos de la presente Ley. En las cabeceras departamentales donde existan dos o más Jueces de Distrito Penal de Audiencia, se habilita al Juez Primero de Distrito Penal de Audiencia para conocer, tramitar y resolver los delitos a que se refiere la presente Ley.

En los Juzgados de Distrito Especializado en Violencia, se crearán equipos interdisciplinarios integrados al menos por una psicóloga y una trabajadora social, encargados de brindar asistencia especializada a las víctimas, en apoyo a la función jurisdiccional en las audiencias; con el fin de brindar seguimiento y control de las medidas de protección impuestas por el juzgado.

Los Juzgados Locales Únicos y Jueces Locales de lo Penal conocerán en primera instancia hasta el auto de remisión a juicio de los delitos señalados en la presente Ley. Dictado el auto de remisión a juicio, se deberá remitir las diligencias al Juzgado de Distrito Especializado en Violencia de la circunscripción territorial correspondiente.

Competencia Objetiva

Los Juzgados de Distrito Especializados en Violencia, son competentes para conocer y resolver en primera instancia los procesos relacionados con los delitos tipificados en la Ley 779 y además, los siguientes delitos:

Delitos Contra la Vida

- Inducción o Auxilio al Suicidio
- Aborto, Manipulaciones Genéticas y Lesiones al No Nacido
- Aborto sin consentimiento

- Aborto Imprudente
- De las Lesiones en el que está por nacer

Lesiones y Riña Tumultuaria

- Violencia doméstica o intrafamiliar
- Contagio Provocado

Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual

- Violación
- Violación a menores de catorce años
- Violación agravada
- Estupro
- Estupro agravado
- Abuso sexual
- Incesto
- Acoso Sexual
- Explotación sexual, pornografía y acto sexual con adolescentes mediante pago
- Agravantes específicas en caso de explotación sexual, pornografía y acto sexual con adolescentes mediante pago
- Promoción del Turismo con fines de explotación sexual
- Proxenetismo
- Proxenetismo agravado
- Rufianería
- Trata de personas con fines de esclavitud, explotación sexual o adopción.

Delitos Contra la Libertad de Actuar

- Inseminación sin Consentimiento
- Inseminación Fraudulenta

Delitos Contra el Estado Civil

- Matrimonio Ilegal
- Simulación de Matrimonio
- Celebración Ilegal de Matrimonio
- Incumplimiento de Deberes Familiares
- Incumplimiento de los deberes alimentarios

Delitos Contra las Relaciones Madre, Padre e Hijos, Tutela y Guarda

- Sustracción de menor o incapaz.

Todos ellos siempre que se hubiesen cometido contra mujeres, niñas, niños o adolescentes, mayores discapacitados que se hallen o hubieren estado ligados al autor del delito por relación de consanguinidad, afinidad, sujetos a tutela, cónyuges, ex-cónyuges, convivientes en unión de hecho, ex convivientes en unión de hecho,

novios, ex novios, cualquier relación de afectividad, o que el autor del hecho sea desconocido.

Finalmente esta Ley No. 846 reforma el artículo 46 de la Ley No. 779, referido a la prohibición de la Mediación, señalando al efecto que no procederá la mediación en los delitos graves sancionados con pena de cinco o más años de prisión en su límite máximo, señalados en esta Ley.

La mediación sólo procederá en los delitos menos graves enumerados a continuación:

- a) Violencia física si se provocan lesiones leves (artículo 10 literal a);
- b) Violencia psicológica si se provoca daño a su integridad psíquica que requiera tratamiento psicoterapéutico (artículo 11 literal a);
- c) Violencia patrimonial y económica exceptuando la explotación económica de la mujer (artículo 12 literal e);
- d) Intimidación o amenaza contra la mujer (artículo 13);
- e) Sustracción de hijos o hijas (artículo 14);
- f) Violencia laboral (artículo 15);
- g) Violencia en el ejercicio de la función pública contra la mujer (artículo 16);
- h) Omisión de denunciar (artículo 17);
- i) Obligación de denunciar acto de acoso sexual (artículo 18).

Procedencia de la Mediación

La mediación en los delitos menos graves, procederá únicamente ante el Fiscal de la causa o ante el Juez, una vez iniciado el proceso.

Es importante tener en cuenta que las autoridades de la Policía Nacional no están facultadas por la ley para realizar mediaciones, esto le corresponde, en todo caso al Ministerio Público, a la Dirección de Resolución Alternativa de Conflictos (DIRAC) o al Juez/a respectivo. En el caso de la DIRAC, tiene competencia para realizar mediaciones en los delitos de: 1) *Matrimonio Ilegal*, 2) *Simulación de Matrimonio*, 3) *Celebración Ilegal de Matrimonio*, y 4) *Incumplimiento de deberes alimentarios*, en virtud que de conformidad con la Ley 846 la competencia objetiva *sigue el procedimiento del CPP* y no de la Ley 779.

g) Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional (Ley No. 872)

Esta norma jurídica policial fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 125, del lunes 7 de julio del año 2014, la misma deroga la ley No. 228 "Ley de la Policía Nacional", publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 162, del 28 de agosto de 1996; así como el Decreto No. 26 – 96, "Reglamento de la Ley de la Policía Nacional", publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 32, del 14 de febrero del año 1997, entre otras normas que deroga.

El Art. 1 de la Ley 872 define la Naturaleza de la institución policial, señalando al efecto que la Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil, profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante. Es el único cuerpo policial del país, es indivisible y tiene a su cargo la totalidad de la actividad policial.

Se regirá en estricto apego a la Constitución Política de la República de Nicaragua a la que guardará respeto y obediencia. Estará sometida a la autoridad civil que será ejercida por el Presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo de la Policía Nacional.

Las disposiciones de la presente Ley contribuyen a la Política Nacional de Prevención y Seguridad Ciudadana y Humana.

De conformidad con su Art. 2, tiene por Misión proteger la vida, la integridad y la seguridad de las personas y sus bienes; el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas, garantizar el orden público, la convivencia social, la prevención, la persecución e investigación del delito en general, del crimen organizado, terrorismo, actividades de narcotráfico y delitos conexos, y las demás que le señale la ley. Forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Democrática (SNSD).

La Policía Nacional se organiza en un Modelo Preventivo, Proactivo y Comunitario, con la participación protagónica de los habitantes, la familia y la comunidad, cuyo objetivo es desarrollar de forma coherente y de manera sistemática las relaciones entre la institución y la población en todo el territorio nacional, orientada a la prevención del delito, la seguridad de las personas y sus bienes, contribuyendo a alcanzar una mejor calidad de vida de las familias nicaragüenses.

Este modelo es inclusivo, de responsabilidad compartida, de integración y articulación de esfuerzos de los distintos sectores de la sociedad, la comunidad y el Estado, de revisión y ajustes sistemáticos; todo ello según lo dispuesto en el Art. 3 de la citada norma jurídica.

Refiere su Art. 17, inciso 8) que la Comisaría de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia *es la Especialidad encargada de llevar a cabo la prevención, investigación y tratamiento de los ilícitos penales relacionados con la violencia de género, así mismo realizar en coordinación con las instituciones pertinentes y con sectores de la comunidad, la atención especializada a las víctimas sobrevivientes, de conformidad con las leyes de la materia.*

h) Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados: (Ley No. 735)

Aprobada el 9 de Septiembre del año 2010, publicada en Las Gacetas, Diario Oficial, Nos.199 y 200 del 19 y 20 de Octubre del 2010, respectivamente.

Esta Ley tiene por objeto regular las funciones del Estado para prevenir, detectar, investigar, perseguir y procesar los delitos relacionados con el crimen organizado y la administración y disposición de los bienes, objetos, productos, equipos u otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en la comisión de los delitos comprendidos en esta Ley.

De igual forma esta ley coordina las políticas, planes y acciones de lucha en contra de estas actividades ilícitas por medio de los órganos competentes del Estado, encargados de preservar el orden interno, la seguridad ciudadana y la soberanía nacional.

El Art. 3, referido a los Delitos de crimen organizado preceptúa que: Independientemente de que en el futuro cambie su denominación jurídica o la numeración del artículo en que se tipifique en la Ley No. 641, Código Penal aprobado el 13 de noviembre de 2007 y publicado en Las Gacetas, Diario Oficial No. 83, 84, 85, 86 y 87, correspondientes a los días 5, 6, 7, 8 y 9 de mayo de 2008, a efectos de esta Ley se consideran delitos de crimen organizado los delitos graves, que revistan en su comisión las conductas típicas de esos delitos, siendo estos, entre otros, los siguientes (numerales 8,18,19 y 26):

- 8) **Trata de personas** con fines de esclavitud, explotación sexual o adopción, tipificado en el artículo 182 del Código Penal.
- 18) **Explotación sexual, pornografía y acto sexual con adolescentes mediante pago**, tipificado en el párrafo primero, segundo y cuarto del artículo 175 del Código Penal.
- 19) **Promoción del turismo con fines de explotación sexual**, tipificado en el artículo 177 del Código Penal.
- 26) **Cualquier otro delito realizado en concurso** o conexidad con los delitos anteriormente indicados.

i) Reglamento de la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados (Decreto No.70 - 2010)

Aprobado el 12 de Noviembre del año 2010 y publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 223, del 22 de Noviembre del 2010.

El presente Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones reglamentarias para la aplicación de la Ley No. 735 “Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados”, publicada en La Gacetas, Diario Oficial, números 199 y 200 del diecinueve y veinte de octubre del dos mil diez respectivamente.

j) Reglamento a la Ley 779, Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres de Reformas a la Ley No. 641, Ley del “Código Penal”

Decreto No. 42-2014, aprobado el 30 de Julio de 2014 y publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 143 del jueves 31 de Julio de 2014.

Considerando que el objetivo de la Ley 779 es garantizar el fortalecimiento de las familias nicaragüenses mediante acciones de prevención que promuevan el derecho a la vida, dignidad, igualdad y no discriminación en las relaciones entre mujeres y hombres, en la familia y la sociedad a fin de fortalecer una cultura de convivencia familiar en respeto y equidad, erradicando la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes en todas sus manifestaciones.

Que en tal sentido se han adoptado medidas legislativas y de políticas públicas que contribuyen a erradicar la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes en todas las manifestaciones, que el respeto al derecho a la vida, dignidad, la igualdad y no discriminación debe observarse en las relaciones entre mujeres y hombres, en la familia y la sociedad.

Que en cumplimiento a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, el Estado de Nicaragua asume el *principio de debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres* en procura de garantizar sus derechos protegidos, en particular el derecho a vivir una vida libre de violencia y discriminación.

El referido Reglamento a la Ley 779 define una serie de definiciones, figuras y entidades comunitarias, procesos y procedimientos que todos los actores y actoras involucrados/as debemos dominar con precisión, a fin de cumplir sus disposiciones en función de la prevención e investigación de los hechos de violencia. Entre ello se cuenta:

k) Política de Estado para el Fortalecimiento de la Familia Nicaragüense y Prevención de la Violencia (Decreto No. 43-2014)

Publicada mediante Decreto Ejecutivo No. 43 – 2014, en La Gaceta, Diario Oficial, No. 142 del 31 de Julio del 2014.

La Política de Estado para el fortalecimiento de la familia Nicaragüense y prevención de la violencia, tiene como objetivo la promoción, protección y restitución de los derechos humanos de las familias, las mujeres, niñas, niños y adolescentes, garantizando una vida libre de violencia, que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación, estableciendo para ello medidas integrales para prevenir, sancionar y erradicar progresivamente la violencia, a través de la atención a las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia e impulsando cambios en los patrones socioculturales.

Los Objetivos estratégicos definidos en esta Política de Estado están orientados a:

- Desarrollar en la sociedad Nicaragüense una cultura basada en valores y actitudes que promuevan relaciones entre hombres y mujeres sustentadas en la equidad, no discriminación, igualdad y el respeto de los derechos humanos, así como la corresponsabilidad orientada a la erradicación de la violencia hacia la mujer, niña, niño y adolescente, estableciendo acciones de prevención primaria sustentadas en la perspectiva de Derechos Humanos y de Género.
- Elevar la calidad de los servicios de atención a víctimas de violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, creando o fortaleciendo las capacidades y habilidades de los recursos humanos de las instituciones que trabajan el tema de violencia.
- Crear o adecuar mecanismos, normas de actuación, instrumentos y servicios que mejoren el acceso y oportunidades a mujeres, niños, niñas y adolescentes en materia de prevención, atención y protección de los Derechos Humanos y de igualdad real, a través de una intervención integral, ágil, eficiente, oportuna y coordinada de las instituciones del Estado de Nicaragua que trabajan la prevención y atención de la violencia.

Entre sus Estrategias generales se cuentan

La violencia es un problema complejo en su origen, expresión y consecuencias, y existe la especial vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia en sus distintas etapas e identidades de la vida. Todas las acciones que se deriven de la Política deberán contribuir en la erradicación de la violencia hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes, y al cambio de modelo sociocultural que sustentan la misma. Para tal efecto, la Política se crea con el fin de garantizar la promoción y protección de los Derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes a vivir una vida digna y sin violencia. Estas acciones deben incorporar de manera transversal la integralidad, la perspectiva de Derechos Humanos y de Género. La estrategia general de implementación de la presente Política se desarrollará sobre las siguientes dimensiones:

- a. Estrategia de prevención.** Se desarrollarán acciones de educación, información, orientación y acompañamiento, dirigidas a evitar la reproducción y las probabilidades de aparición de situaciones conflictivas con el objetivo de incidir en la erradicación de la violencia contra las mujeres, interviniendo desde las causas y raíces culturales identificadas en la misma. Se dirigen a transformar el entorno de riesgo y a fortalecer las habilidades y condiciones de las personas y las comunidades, asegurando una identificación rápida y eficaz, así como la reducción de los impactos y secuelas cuando se presente el problema. Incluye el desarrollo de estrategias familiares y comunitarias para la prevención como las Consejerías Familiares y Comunitarias a través del cual se escuchará, acompañará, orientará o aconsejará a una persona, pareja o grupo familiar para que reconozcan las causas de los problemas que les puede estar produciendo cualquier tipo de alteración en las relaciones interpersonales dentro de su dinámica familiar y les

facilita mecanismos para el establecimiento de compromisos y planes de crecimiento familiar, basados en la comunicación, el respeto, el apoyo mutuo y el amor.

- b. Estrategia de atención.** A través del Modelo de Atención Integral, principal estrategia para la atención, se elevará la calidad de los servicios de atención a víctimas de violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, creando o fortaleciendo las capacidades y habilidades de las instituciones que trabajan la prevención y atención de la violencia a través de instrumentos que garanticen la prevención y una atención integral basada en el respeto a los derechos humanos; con perspectiva de género, de alta calidad humana y técnica, ágil, eficiente, oportuna e integral.
- c. Estrategia de Coordinación interinstitucional.** La presente Política requiere de la coordinación interinstitucional permanente de las instituciones del Estado que trabajan en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes.
- d. Estrategia de Fortalecimiento institucional.** Para la implementación de la Política es imprescindible el fortalecimiento de las capacidades en condiciones materiales, técnicas, especializadas, administrativas, financieros y de sensibilización para la promoción, protección y restitución de los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. Esto pasa por la vigilancia efectiva y analítica del comportamiento de la violencia, la atención que se brinda a la misma; por el desarrollo del trabajo en equipos interinstitucionales; por el fortalecimiento en capacidades técnicas especializadas y administrativas; así como por el fortalecimiento de capacidades que amplíen la cobertura y el acceso a la justicia y a servicios de salud de alta calidad.
- e. Estrategia de Articulación territorial y comunitaria.** Siendo que el problema de la violencia hacia la mujer, niñez y adolescencia es un fenómeno complejo, la implementación de la Política requiere de la articulación de las instancias del Estado y organizaciones comunitarias para la operativización de planes locales, regionales, municipales y comunitarios.
- f. Estrategia de Comunicación.** La comunicación sobre los derechos a una vida sin violencia y a relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, se entiende como estrategia para la articulación, legitimación y apropiación de la Política entre mujeres, niñas, niños, adolescentes y hombres, relaciones familiares y comunitarias, y prácticas institucionales sobre los derechos a una vida sin violencia y a relaciones igualitarias entre hombres y mujeres. La comunicación trasciende a la propaganda, la publicidad, la noticia; implica procesos de construcción colectiva de mensajes que generen prácticas positivas y contribuyan a desconstruir comportamientos y actitudes discriminatorios hacia las mujeres. En el marco de la Política se desarrollarán estrategias de comunicación en las que se integren los procesos de intervención en el tema de violencia hacia la mujer para la prevención, protección, atención, sanción y resarcimiento, articulando mensajes coherentes al espíritu de la Política.

Ejes estratégicos y Líneas de Acción (de la Política)

El Objetivo estratégico No. 1: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA.

Ello implica desarrollar en la sociedad nicaragüense en general una cultura basada en valores y actitudes que conciban relaciones igualitarias entre hombres y mujeres así como la corresponsabilidad orientada a la erradicación de la violencia hacia la mujer, niña, niño y adolescente, estableciendo acciones de prevención primaria sustentadas en la perspectiva de Derechos Humanos y de Género.

Educación en valores

La educación representa el medio estratégico para el desarrollo y sostenibilidad de valores y comportamientos inclusivos, relacionados al respeto, la dignidad e igualdad en las relaciones entre hombres y mujeres. La educación para la promoción de relaciones igualitarias entre hombres y mujeres es fundamental realizarla en todo el curso de la vida; tanto en mujeres como en hombres; dentro del conjunto de la comunidad educativa y de la comunidad en general. Las acciones educativas de información sobre formas de prevención tempranas de la violencia hacia la mujer deberán incluir enfoques acordes a las culturas y lenguas de las comunidades indígenas y afro descendientes.

Líneas de acción para la educación en valores

1. Integrar en los planes y programas específicos de educación formal y no formal, los valores y sensibilización para la construcción y promoción de relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, con respeto de los derechos humanos, libres de discriminación y violencia.
2. Fortalecer las capacidades de las instituciones del Estado, las comunidades y familias para la prevención temprana de la violencia a través de la formación y capacitación en valores, violencia y relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, así como para la detección del riesgo y una atención rápida y temprana de la violencia hacia la mujer, niña, niño y adolescente.
3. Incorporar la perspectiva de derechos humanos, de igualdad en las relaciones entre hombres y mujeres, dentro de las políticas y programas que desarrollan las instituciones del Estado Nicaragüense, particularmente en los programas y políticas desde la primera infancia, de protección social, en el sistema educativo y sistema de salud.
4. Diseñar e implementar programas reeducativos integrales y de seguimiento dirigidos a agresores durante y posterior a las sanciones impuestas, en los que se desarrollen, valores inclusivos y actitudes de respeto e igualdad hacia las mujeres y de relaciones entre hombres y mujeres con perspectiva de derechos humanos.

Comunicación en valores

La comunicación es un proceso sociocultural que puede contribuir en la transmisión de valores y principios que contribuyan de manera efectiva en la erradicación de la violencia hacia la mujer.

En este sentido las instancias del Estado que trabajan el tema, en trabajo coordinado y cooperativo con las y los profesionales, deberán trabajar por la implementación de estrategias conjuntas de comunicación para la promoción de una cultura de paz y de una vida sin violencia, en la que se elimine el uso de mensajes violentos, discriminatorios, sexistas y excluyentes.

Líneas de acción para la comunicación en valores

1. Diseño e implementación de estrategias de comunicación institucional para la prevención de la violencia hacia la mujer y de información sobre rutas de atención a víctimas sobrevivientes, en las que se difundan los instrumentos legales de promoción y protección de los derechos de las mujeres a una vida sin violencia.
2. Diseño e implementación de una estrategia comunicacional a favor de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, así como estimular la participación de los medios de comunicación en acciones que eliminen conductas estereotipadas que alienan, permiten, fomentan y toleran la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes en todas sus modalidades, tomando en consideración las características propias de comunidades indígenas y afro descendientes, personas con discapacidad, personas migrantes y personas adultas mayores.
3. Generación de alianzas con los medios de comunicación a fin de promover su participación para inhibir y eliminar la producción de contenidos que replican, exacerbaban y fomentan actitudes, conductas y percepciones estereotipadas de género que discriminan y subordinan a las mujeres; y logren desarrollar contenidos basados en el respeto, dignidad, igualdad y rechazo a los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres y produzcan campañas de información, sensibilización y toma de conciencia sobre el tema.

Investigación

Desarrollar estudios interdisciplinarios que permitan conocer las diversas expresiones de la violencia hacia la mujer, los factores que las originan, reproducen y evolucionan, la frecuencia y ubicación de este problema, así como las diversas consecuencias que genera a nivel individual, familiar y social. Los resultados de estas investigaciones contribuirán en el desarrollo de nuevas líneas de acción tanto en la prevención como en la atención, protección, sanción y resarcimiento.

Las investigaciones también representarán instrumentos para la prevención, en tanto sus resultados serán llamados de alerta ante las diversas manifestaciones, origen o consecuencias de la violencia hacia la mujer.

Líneas de acción para la investigación

1. Definición y promoción de líneas de investigación interdisciplinaria dentro de la comunidad educativa para analizar las diferentes dimensiones, manifestaciones y consecuencias del fenómeno de la violencia.

2. Promoción de la investigación sobre las características y efectos de la violencia hacia las mujeres en poblaciones especialmente vulnerables y en contextos diferentes.
3. Creación de líneas de publicación para la promoción, divulgación y reflexión sobre el conocimiento de la violencia hacia la mujer en Nicaragua.

Redes comunitarias de prevención de la violencia

Creación o fortalecimiento de redes comunitarias y sociales para prevención temprana de la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, promoviendo la participación de las Consejerías Familiares y Comunitarias, los Gabinetes de la Familia, Comunidad y Vida, la iglesia, las pastorales juveniles y familiares y los consejeros familiares.

Líneas de acción para organización de las redes de prevención

1. Organizar y fortalecer redes comunitarias y sociales para prevención temprana de la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
2. Fortalecimiento de la articulación intersectorial para la prevención, atención y protección, seguimiento, acompañamiento y resarcimiento de daños y secuelas en la atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.
3. Promover la participación de los Gabinetes de la Familia, Comunidad y Vida, la iglesia, las pastorales juveniles y familiares y los consejeros familiares.

1) Acuerdo Ministerial del Ministerio de Salud (Decreto No. 67-96)

Desde los años 90, Nicaragua reconoció oficialmente la violencia intrafamiliar como *“un problema de salud pública”* identificando este problema y orientando su abordaje a través de la emisión del Decreto Ministerial No. 67- 96. A través de este Decreto el Ministerio de Salud (MINSa), se aboca al diseño de políticas y estrategias para contribuir a su erradicación.

En tal sentido, la Dirección de Atención Integral a la Mujer y la Niñez del MINSa, a través del Modelo de Atención, elaborará planes integrales para la prevención de la misma, regulará, conducirá y velará por la eficacia y calidad global de dicha atención, así como divulgación y difusión del problema, y de esa manera impulsará la disminución de los índices de violencia que afectan significativamente la salud de la familia.

Además el Ministerio de Salud, promoverá en conjunto con la sociedad civil una instancia de coordinación intersectorial para implementar acciones y contribuir a la solución del problema.

III. La investigación policial especializada en materia de violencia de género, intrafamiliar y sexual

1. Principios que rigen la investigación

a) Principios doctrinarios

La Policía Nacional nicaragüense como una institución surgida del seno popular, pretende un reconocimiento permanente de la sociedad, una alta legitimidad social, constituirse en una entidad moderna, eficiente, profesional y en permanente transformación, con clara vocación de servicio, altos valores humanos, íntima vinculación a la comunidad, respetuosa de los derechos humanos, cimenta toda la vida y actuar de sus miembros, conforme a los siguientes principios:

- **Patriotismo:** Es el amor a la Patria, cuya máxima expresión es la determinación consciente de los ciudadanos para defenderla ante cualquier amenaza o riesgo.
- **Respeto a los derechos humanos:** El ser humano es el centro y razón de ser de la actividad policial, por tanto constituye un elemento transversal en nuestro modelo policial, el respeto profundo al ser humano y a su dignidad; la protección y defensa de sus derechos inalienables, su vida, seguridad, libertad y demás garantías consagradas en la Constitución Política y en especial la defensa y protección a los derechos de la mujer, niñez y adolescencia.
- **Solidaridad:** Es para la institución policial, un elemento vital de cohesión interna y de unidad, que promueve el desarrollo de relaciones armónicas, de respeto, lealtad, solidaridad y cooperación entre sus miembros, y hacia fuera, es el hilo conductor que se expresa en el espíritu de entrega, sacrificio y compromiso de sus miembros hacia la comunidad, en la construcción de espacios de seguridad, justicia y equidad.
- **Integridad:** Honestidad, dignidad, transparencia, compostura y decencia en la vida laboral, personal y social. Comportamiento acorde con la ley y las normas sociales, abstenerse de todo acto de corrupción, oponerse a él resueltamente, mantener una actitud ejemplar en todos los aspectos de la vida, que fortalezcan el honor de la Institución y sus miembros ante la comunidad.

- **Equidad de género:** Reconocer y asumir plenamente la equidad de género por convicción de su necesidad y justeza, incorporarlo en sus políticas internas de selección, formación, y carrera policial, restituyendo el derecho de la mujer a participar en todos los ámbitos de la institución en igualdad de condiciones. Así como a contribuir a generar a nivel institucional y social cambios de valores, actitudes y conductas, orientadas a reconocer y restituir la equidad entre hombres y mujeres y a eliminar cualquier tipo de discriminación por razones de género.
- **Espíritu de cuerpo y orgullo policial:** Conciencia y convicción de pertenencia al cuerpo policial, que propician y promueven la cooperación, fortaleza, unidad y cohesión de sus miembros hacia fines y objetivos institucionales. Lealtad y fidelidad a la institución, sus mandos y compañeros, cohesionados alrededor de los principios, valores, visión y misión de la Policía Nacional.
- **Vocación de servicio:** Asumir la calidad de servidores público, de forma consciente, con respeto y dedicación encaminados a atender y satisfacer las demandas de la comunidad y la población en materia de seguridad ciudadana y humana, trabajando estrechamente con ella bajo un enfoque proactivo y preventivo.

b) Principios de actuación

El personal policial en el cumplimiento de sus funciones se regirán conforme a los principios de actuación establecidos en la Ley No. 872: a su condición de servidores públicos y respetando los derechos humanos. También estarán regidos por lo dispuesto en el Reglamento de Ética de la institución y el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley.

- **Legalidad:** Es el respeto irrestricto, observancia y cumplimiento a la Constitución Política y las leyes de la República, la defensa y promoción del Estado de Derecho.
- **Profesionalismo:** Actuar con absoluta neutralidad e imparcialidad, sin discriminación alguna, con total dedicación, decisión y sin demora. Recibir instrucción académica que le permita una formación integral con énfasis en derechos humanos. Sujetarse en sus actuaciones a los principios de jerarquía y subordinación. La obediencia debida en ningún caso podrá amparar órdenes o acciones que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a las leyes.
- **Tratamiento digno a las personas:** Respetar el honor y la dignidad de las personas, velando por su vida e integridad física y psíquica, especialmente cuando se encuentren detenidas, observando y cumpliendo en todo momento los trámites, plazos y requisitos establecidos por la Constitución Política y las leyes.
- **Uso racional de la fuerza y empleo de armas de fuego:** Hacer uso solo de la fuerza necesaria para evitar un daño grave, inmediato e irreparable, rigiéndose en su actuación por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance.
- Las armas de fuego solamente se utilizarán cuando exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o la de terceras personas; o con el propósito

de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro, que oponga resistencia a la autoridad, y solo en caso que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos; o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para el orden público.

- **Debida diligencia e inmediatez:** En virtud de la naturaleza de los hechos investigados se exige al investigador o investigadora policial un máximo de eficacia y eficiencia en sus actos practicados, a fin de dar una respuesta oportuna a la víctima o sobreviviente y de igual manera evitar se esfume la evidencia, elementos o piezas de convicción del delito. Ello implica, asimismo, articular su labor investigativa con el resto de agentes implicados, en el marco de sus competencias y dentro de los límites legales.
- **Principios de adaptación y aplicación:** Dentro de sus facultades de dirección y coordinación los y las agentes policiales y del Ministerio Público coordinarán estrechamente sus acciones, a fin de adaptar en lo mejor posible el *“Protocolo Regional para la Investigación con Perspectiva de Género en los Delitos contra las Mujeres cometidos en el ámbito intrafamiliar”*, tomando en cuenta el contexto nacional, la estrategia de lucha contra la violencia y la Política de Estado para el Fortalecimiento de la Familia Nicaragüense y Prevención de la Violencia; así como los elementos culturales y la idiosincrasia del país.

2. Procedimientos policiales ante la denuncia, investigación y detención ante el conocimiento de hechos de naturaleza penal

Conocimiento de un hecho

A) Iniciativa propia

Ello significa que la Policía Nacional al tener conocimiento de la ocurrencia de unos hechos de connotación penal, procede por sí misma, a practicar las diligencias de rigor.

B) Recepción de denuncia

Aspectos generales sobre la recepción de una denuncia

- Es toda notitia criminis sobre la comisión de algún delito o falta penal en forma verbal o escrita, a través de medios telefónicos, electrónicos, impresos, radiales, televisivos, comunicacionales u otros.
- Todo funcionario/a policial tiene la obligación de recepcionar la denuncia, tan pronto sea de su conocimiento y practicar los actos de investigación necesarios, para su posterior tramitación por parte de las autoridades especializadas de la Comisaría de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia.
- La Policía Nacional atenderá a todas las personas ofendidas, víctimas y cualquier ciudadano/a que tenga conocimiento de un ilícito de acción pública.

- En los delitos de acción pública a instancia particular (*violación cuando la víctima sea mayor de dieciocho años, el estupro y acoso sexual*), la Policía Nacional debe iniciar de oficio los actos de investigación correspondientes, sin detrimento de la facultad de la víctima de formalizar su denuncia. (Arts. 53, 54, 222 CPP)
- En las denuncias por faltas penales, se debe indicar a la víctima que tiene la opción de celebrar un *trámite de mediación* ante las instancias correspondientes, siendo una de ellas la Dirección de Resolución Alternativa de Conflictos (DIRAC) o continuar el proceso mediante una acusación formulada por parte de la misma víctima, la autoridad administrativa afectada o la Policía Nacional, según el caso, la que podrá interponerse de forma verbal o escrita ante el juez local competente.
- La denuncia deberá contener, en lo posible, (conforme formato de denuncia) datos generales del denunciante, la relación circunstanciada del hecho, identidad de perjudicados o víctimas, testigos y demás elementos que puedan conducir al o la investigador/a policial a la verificación del hecho punible, como a su posible calificación legal, firma del denunciante, identificación y firma del funcionario policial que recibe la denuncia. El contenido de la denuncia debe procurar dar respuesta a las siguientes preguntas:
 - ¿Qué hecho se denuncia?
 - ¿Cómo sucedió?
 - ¿Cuándo ocurrió?
 - ¿Dónde se cometió?
 - ¿Quién o quiénes?
 - ¿Por qué?
- Una vez recibida la denuncia, se clasifica como delito o falta y se procede a ingresar al Sistema Automatizado de la Investigación Policial (SAIP), procediendo subsiguientemente a realizar los actos de investigación.
- La denuncia se redacta en tercera persona singular (Ej. no debe decirse considero, consideramos....sino: *“se considera, se cree, se presume...”*)

En materia de Justicia Penal Especial de Adolescentes

Cuando el denunciado sea una persona adolescente o presumiblemente dentro de este rango de edad (según el Art. 97 CNA), cuyas edades se encontraren **entre mayor de trece años pero menor de quince años**, la entrevista del adolescente (si optare por declarar, puesto que desde el punto de vista constitucional y procesal éste tiene derecho a guardar silencio, lo cual no le depara ningún grado de responsabilidad, tomando en cuenta que de acuerdo al inc. d) del Art. 127 CNA, cualquier declaración brindada por el adolescente ante la Policía Nacional no tendrá valor o efecto alguno, dentro o fuera del proceso) deberá realizarse en presencia de su defensor y, *de ser posible, de su madre, padre o tutores, guardadores o representantes legales*; además, deberá asistir el representante del Ministerio Público, procurando que sea un Fiscal especializado en materia de Justicia Penal de Adolescentes.

El propósito de esta diligencia será averiguar los motivos del hecho que se le atribuyen al adolescente mayor de trece años y menor de quince años de edad, estudiar su

participación e investigar las condiciones familiares y sociales en que se desenvuelve (Art. 163 CNA).

La entrevista del adolescente no tendrá las formalidades o rigurosidad de la entrevista del proceso penal ordinario, en cuanto lo perjudique y deberá prevalecer, en todo momento, el interés superior del adolescente. La inobservancia de las garantías previstas en el Art. 163 CNA hará nula la actuación policial y no tendrá ningún valor o efecto alguno, dentro o fuera del juicio.

La entrevista del adolescente **mayor de quince años, pero menor de dieciocho años de edad** deberá realizarse en presencia de su defensor, la madre, padre, tutores, guardadores o representantes, cuando el adolescente lo solicite. También deberá asistir el representante del Ministerio Público, procurando que sea un Fiscal especializado en materia de Justicia Penal de Adolescentes.

La inobservancia de lo anterior relacionado a las garantías previstas en los Artículos 163 y 164 CNA hará nula la actuación y no tendrá ningún valor o efecto alguno, dentro o fuera del juicio.

Qué hacer cuando se trata de personas evidentemente alteradas o en estado de ebriedad o bajo efectos de sustancias psicotrópicas, alucinógenas, enervantes o prohibidas por la ley. En estas situaciones es terminantemente prohibido tomar declaraciones o denuncias a estas personas que están sedadas o dopadas por la ingesta de bebidas o drogas. En todo caso lo que debe hacerse es dejar pasar un tiempo prudencial para esperar que recuperen su estado normal de raciocinio o lucidez.

Actuación ante el conocimiento del hecho.¹

Se documentará la información, utilizando para ello el formato de denuncia establecido, que contiene los detalles siguientes:

- Contexto o circunstancia en que se dio el hecho (fecha y hora). Es una información primaria del proceso de investigación interpuesta por el ciudadano ante la autoridad policial. La narración de los hechos constituye la información que brinda el denunciante sobre la forma en que estos ocurrieron.
- Asignación provisional del delito o falta.
- Datos Generales y número de cédula del o la denunciante.
- Datos Generales y número de cédula del o la víctima.
- Datos Generales del o los presuntos responsables.
- Breve narración de los hechos.
- Objetos afectados.
- Instrumentos y/o medios utilizados.

1. **Formato Único de Denuncia.** Sistema Automatizado de Investigaciones Policiales (SAIP).

- Firma del denunciante.
- Firma del funcionario policial que recibe la denuncia.

Principios básicos de actuación policial ante una denuncia

En los Delitos de Acción Pública

- Proceder de inmediato a comprobar el hecho denunciado.
- Evitar peligros, preservar el orden, la vida y salud de las personas, la protección y seguridad de los bienes en general.
- Delimitar la escena y preservar los indicios o evidencias.
- Identificar y perseguir al o los presuntos autores.
- Identificar y separar posibles testigos.
- Disponer de las fuerzas y medios necesarios, para acudir a la escena del crimen y realizar los actos de investigación correspondientes.

En los Delitos de Acción Pública a instancia particular

Iniciar investigación cuando se trate de delito flagrante o por solicitud expresa de la víctima o personas facultadas para interponer la denuncia, que conlleve a impedir que el delito siga produciendo sus efectos, prestar auxilio a la víctima y realizar actos urgentes de investigación.

Fundamento legal

Las denuncias serán recepcionadas de acuerdo con lo estipulado en: Art. 97 de la Cn.; Art. 10, numeral 2, y Art. 31 de la ley 346 Ley Orgánica del Ministerio Público; Arts. 222, 223 de la Ley 406 del Código Procesal Penal.

Obligación de denunciar

Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública:

- Los funcionarios o empleados públicos que conozcan los hechos en el ejercicio de sus funciones.
- Los que presten servicios relacionados con la salud y conozcan esos hechos al proporcionar los auxilios propios de sus oficios o profesión, salvo que alguna información obtenida esté cubierta por el secreto profesional.
- Las personas que por disposición de la ley, de la autoridad o de un acto jurídico tuvieren a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o el control de bienes o intereses ajenos, siempre que conozcan del hecho con motivo del ejercicio de sus funciones.

C) Orden del Ministerio Público

La Policía Nacional investiga desde el punto de vista científico, técnico, práctico, operativo. El Ministerio Público también investiga pero lo hace, conforme a la ley, desde el punto de vista jurídico, es quien orienta desde esta esfera la investigación practicada por la autoridad policial. En consecuencia, el o la agente de la Policía Nacional deberá

proceder a investigar cualquier hecho que pudiera constituir delito o falta, a impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, a individualizar y aprehender a los presuntos autores y partícipes, y a reunir elementos de investigación útiles y demás elementos de información necesarios para dar base al ejercicio de la acción por el Ministerio Público.

D) Casos de Flagrancia

Recibida la notitia criminis por la autoridad policial a través de cualquier medio de parte de la víctima o del aviso de terceras personas, el reporte o parte policial deberá referir el contenido exacto de las manifestaciones y requerimiento realizados por el/la interlocutor/a. Como mínimo, deberá mencionar: lugar de los hechos, nombre de la persona que realiza la llamada o aviso, identidad y relación con la víctima, identidad del presunto agresor, identidad de posibles testigos, hechos de violencia relatados, referencia a posibles lesiones físicas, ruidos ambientales de la llamada (llantos, gritos, golpes, disparos, sonidos, rotura de objetos...).

Al efecto, la autoridad policial deberá desplazarse de forma inmediata al lugar de los hechos tan pronto reciban una llamada telefónica, aviso o requerimiento de auxilio. Las autoridades policiales respectivas deberán emplear todos los medios de transporte y comunicación a su alcance, con independencia de que la víctima pueda encontrarse en un lugar remoto o alejado respecto a la Delegación de Policía. Si fuera preciso, solicitarán el auxilio de otras autoridades o funcionarios.

La actuación de las Unidades de Policía irá orientada, de forma preferente, a prestar ayuda inmediata y directa a la víctima, detener al presunto agresor y preservar la escena del crimen, así como las evidencias y elementos de convicción, garantizando la cadena de custodia de rigor; todo según lo previsto en el Art. 245 CPP.

En materia de adolescentes

La Policía Nacional sólo podrá detener con orden judicial a los presuntos responsables de los hechos denunciados, pero por ninguna circunstancia podrá disponer la incomunicación de un adolescente. En caso de detención en flagrante delito lo remitirá inmediatamente a la autoridad competente en un plazo no mayor de veinticuatro horas.

Durante este plazo la Policía Nacional en sus actuaciones deberá:

- a) *Proteger la dignidad e integridad física, mental y moral del adolescente.*
- b) *Informarle del motivo de la privación de su libertad y proceder a solicitar la presencia de su madre, padre o tutores y de la Procuraduría General de Justicia.*
- c) *No recluir al adolescente en un centro de detención con personas adultas.*
- d) *Advertir del derecho que tiene a guardar silencio y que cualquier declaración brindada por el adolescente ante la Policía Nacional no tendrá valor o efecto alguno, dentro o fuera del proceso.*

Constituidos en el lugar de los hechos, las autoridades policiales procederán, para efectos de asegurar la aplicación de la perspectiva de género en la investigación y dentro de los límites de su competencia y acorde al ordenamiento jurídico nacional, de la siguiente manera:

- a. Actuar con la debida diligencia para salvaguardar la integridad física, psíquica, moral y social de la víctima, de sus hijos/as y/o de terceras personas que puedan hallarse en el domicilio o lugar cerrado. En caso de flagrancia del delito o de riesgo grave de su perpetración la autoridad policial podrá allanar el domicilio, sin autorización de su propietario/a ni de la autoridad judicial. Una vez que se ingrese en el domicilio, deberán comunicarlo al/la fiscal respectivo; todo ello según lo previsto en los Arts. 26 Cn. y 241 CPP.
- b. Si al llegar al lugar de los hechos no fuera posible comprobar de manera directa la flagrancia del delito (silencio en el interior del local cerrado, luces apagadas, ausencia de personas en el exterior), las autoridades de la Comisaría de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia u otra autoridad policial competente deberá hacer todas las comprobaciones necesarias para descartar que se trata de una llamada falsa, confirmarán que la dirección del lugar es la correcta y verificarán los hechos con los vecinos/as o posibles testigos de lo acontecido. Si fuera necesario para practicar la detención del presunto agresor, procederán a ingresar en el domicilio, sin autorización del propietario/a, acorde con lo dispuesto en los Arts. 26 Cn. y 241 CPP.
- c. En caso de duda, deberán consultar previamente a ingresar en el domicilio con la autoridad competente, preferiblemente con el/la fiscal de guardia o turno.
- d. A fin de ingresar en el domicilio, las autoridades policiales utilizarán los medios que sean necesarios para garantizar la entrada y proteger a la víctima.
- e. Debe salvaguardarse la identidad o datos de investigación de las mujeres víctimas, niñas, niños y adolescentes, evitando al efecto el ingreso de los medios de comunicación social al domicilio o escena del crimen, impidiendo el contacto de estos con la víctima.
- f. Una vez en el domicilio deben mantener la calma y establecer o restablecer el orden.
- g. Con el fin de garantizar la protección de la víctima, se procederá a separar a la víctima y al posible responsable, quien será reducido y/o detenido, solamente si fuese necesario. Se situará a la víctima en lugar seguro, evitando la confrontación visual y/o auditiva o de otra índole con el presunto agresor, recomendándole que si recibiese un chats, sms, WhatsApp, twitter u otro tipo de comunicación u hostigamiento, no deberá responder, sino por el contrario, debe ponerlo en conocimiento inmediato de la autoridad policial, fiscal o Abogado/a que la represente, quienes tomarán las medidas o acciones pertinentes.
- h. De igual manera, la Policía Nacional deberá al mismo tiempo preservar la escena del crimen, evitando su contaminación o alteración de la misma. Si concurrieran niñas, niños, adolescentes o personas adultas mayores en el lugar de los hechos,

serán acompañadas por un/a agente policial específico/a (*preferiblemente de la Comisaría de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia*) quien les informará del procedimiento y garantizará seguridad, tranquilidad y estabilidad emocional.

- i. Una vez que la víctima sea trasladada a un lugar protegido y lejos de la confrontación con el presunto agresor, las autoridades policiales recogerán la primera manifestación espontánea de la víctima sobre lo sucedido. Igualmente se observará si la víctima presenta lesiones físicas externas así como su estado anímico al tiempo de narrar los hechos. En el parte/reporte policial se incluirá la comparecencia de los agentes que se personaron en el lugar donde deberán hacer constar las manifestaciones espontáneas de la víctima, así como las lesiones observadas y, en su caso, el estado de la víctima.
- j. La autoridad policial deberá informar a la víctima de los derechos que le asisten a ella y sus hijos/as, en particular su derecho a recibir asistencia médica y/o psicológica, si lo solicitase o requiriese; el derecho a interponer denuncia, el derecho a designar un Abogado/a que le represente en el proceso, el derecho a obtener reparación del daño causado así como el derecho a solicitar la adopción de medidas de protección de urgencia, precautelares o cautelares en cualquier momento de la investigación o del proceso judicial, según corresponda.
- k. La Policía Nacional observará y preservará la escena del crimen, fijándola fotográficamente o por medio de video (cámara designada o en última instancia por medio de celular u otro medio electrónico) realizando una primera valoración de lo sucedido (objetos rotos, mobiliario roto o golpeado, prendas rotas o por el suelo, desorden, manchas hemáticas, de fluidos por pared o suelo, presencia de armas...), evitando contaminar o alterar el lugar de ocurrencia del delito.
- l. La autoridad policial adoptará todas las cautelas necesarias para evitar que el posible agresor genere cualquier situación de riesgo para la víctima, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores o para los/as agentes. Le calmarán y procurarán recibir sus primeras manifestaciones espontáneas. Los/as agentes observarán igualmente su estado físico y anímico así como la posible presencia o influencia de bebidas alcohólicas o drogas en su organismo. Todas las observaciones que realicen serán reflejadas en la comparecencia que se incluirá en el parte/reporte policial a remitir al Ministerio Público.
- m. Las autoridades policiales efectuarán un registro corporal del presunto agresor a fin de incautar aquellos objetos que tenga en su poder y que puedan estar relacionados con el hecho delictivo, o que representen peligro o riesgo para la autoridad, la víctima u ofendido del delito, así como para las niñas, niños y adolescentes o sean propiedad de la víctima.
- n. En caso de flagrancia o hechos que puedan dar lugar a la medida cautelar de prisión preventiva, los/as agentes de la Policía Nacional procederán, previa lectura de derechos, a la aprehensión/detención del posible responsable para su inmediata puesta a disposición del Ministerio Público o Juzgado competente, según el delito cometido. En cualquier otro caso deberá ser debidamente identificado a fin de facilitar su posterior localización por el ente acusador.

- o. En caso de que el presunto agresor o su Defensor lo precise o sea evidente la necesidad de atención facultativa, será trasladado a una unidad de servicios médicos para ser atendido, tratado y sanado de las lesiones que pueda presentar.
- p. Los/as testigos de los hechos deberán ser identificados consignando su nombre completo, cédula de identidad o identificación similar, dirección domiciliar, número de teléfono, correo electrónico, si lo tuviere, para su localización posterior.
- q. Las autoridades de la Policía Nacional informarán de forma inmediata al Ministerio Público de la comisión del hecho delictivo. En caso de que el lugar de los hechos presente evidencias del empleo de violencia, será preciso que por los miembros del ente acusador se realice la inspección ocular del lugar del suceso.
- r. En el transcurso de la inspección ocular será preciso que la autoridad competente recoja cualquier evidencia de la violencia ejercida: prendas de ropa con manchas hemáticas, prendas rotas o tiradas por el suelo, armas de cualquier tipo que se hallen en el lugar, objetos rotos o tirados en el suelo, descripción y fotografías del lugar de los hechos (manchas de fluido en suelo o pared, desorden, estado general de la vivienda, posibles daños a objetos) y documente la escena del crimen por medio de fotografía, planimetría y video.
- s. Cuando existan indicios de la comisión de un hecho delictivo, los agentes de la Policía Nacional se abstendrán de todo intento de mediación o conciliación entre las partes, ya que ese trámite (si cupiese) le corresponde exclusivamente al Ministerio Público o al/la Juez/a respectivo/a, no a la Comisaría ni autoridad policial alguna.

Si la víctima presenta lesiones físicas o se sospecha de su existencia, aunque no resulten visibles, será trasladada de forma inmediata por las autoridades policiales al puesto o centro de salud más cercano. Se procurará la atención preferente a las víctimas de violencia de género y sexual.

En el caso de víctimas de delitos sexuales, si la víctima presenta lesiones físicas como consecuencia de la violencia, deberá ser en primer lugar trasladada de inmediato por los agentes policiales al puesto o centro de salud más próximo. El/la médico/a forense y el/la fiscal deberán desplazarse, en este caso, al centro hospitalario o de salud donde se encuentre la víctima a fin de recibir su denuncia y realizar las pruebas periciales necesarias para acreditar la comisión del delito. En todos los casos de flagrancia y de hechos ocurridos hasta 72 horas antes deberá utilizarse el kit de delitos sexuales para informes o peritajes forenses.

Si la víctima de violencia física o sexual se niega a recibir asistencia sanitaria, deberá ser persuadida pero bajo ninguna circunstancia podrá ser obligada a ello. En todo caso deberá ser informada por la autoridad policial o por el/la fiscal de la continuación del proceso, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley 779, el CPP y otros cuerpos jurídicos, y de las dificultades que se puedan derivar para la investigación.

Si hubiera niños, niñas o adolescentes dependientes de la víctima de violencia de género y ésta no pudiera hacerse cargo de los mismos, se localizará a los familiares, amistades o vecinos/as que, por indicación de la propia mujer, se consideren idóneos para hacerse cargo de los niños, niñas y adolescentes durante las primeras diligencias. En su defecto, se contactará con los servicios psico - sociales del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (MIFAN), a efectos que brinde protección especial. Deberán igualmente ponerlo en conocimiento del Ministerio Público.

El parte/reporte informe policial deberá incluir en todo caso:

- a. Datos de identificación de víctima y de la persona agresora, adjuntando nombre, cédula de identidad o documento semejante, dirección domiciliar, número de teléfono, correo electrónico, si lo tuviere.
- b. Datos de identidad y/o localización de posibles testigos, adjuntando nombre, cédula de identificación o documento semejante, dirección domiciliar, número de teléfono, correo electrónico, si lo tuviere.
- c. Breve descripción de los hechos.
- d. Comparecencia de los/as agentes policiales que se personaron en el lugar de los hechos, describiendo el motivo por el que acudieron al lugar, descripción del estado de la escena del delito, descripción del estado físico y emocional de víctima y posible agresor, transcripción literal de las manifestaciones realizadas por víctima y agresor de forma espontánea, referencia a posibles testigos.
- e. Referencia a la presencia de niñas, niños y adolescentes, debiendo constar sus datos de identificación. Se consignará la descripción de su actitud ante lo sucedido, así como las manifestaciones que hayan realizado en presencia de las autoridades policiales. Se procurará la transcripción literal de lo expresado. En ningún caso se les entrevistará en el lugar de los hechos, puesto que ello puede fijar o marcar la imagen de lo sucedido con mayor fuerza, afectándoles psicológicamente.
- f. Si la víctima hubiera recibido asistencia en el centro de salud o servicio médico de urgencia, se procurará disponer de un parte médico de atención, redactado de forma legible, preferentemente en levantado de texto y con una referencia descriptiva a las lesiones sufridas, al relato de la víctima y al tratamiento recibido.
- g. Parte médico sobre el presunto agresor, si presentare lesiones físicas.
- h. Referencia a denuncias o intervenciones policiales anteriores por hechos de violencia de género, intrafamiliar o sexual, relativos a la víctima y al agresor.

El Informe Policial deberá ser remitido con la mayor celeridad posible al Ministerio Público, dentro del plazo legal y en el marco de las coordinaciones interinstitucionales establecidas.

De la retractación de la víctima

Si bien el sistema penal genera una serie de medidas de protección a las víctimas, y que además busca conducir el conflicto hacia una salida que se exprese en una

sentencia, los hallazgos de la investigación indican que un alto porcentaje de las causas sometidas a proceso penal terminan por la retractación de la víctima.

Las razones expresadas por las víctimas para retractarse de seguir en sede penal se asocian a componentes propios de la vida social cotidiana, la continuación de la vida en pareja, la protección de los hijos e hijas, la aportación económica, cuestiones todas que están lejos de encontrarse en una salida penal.

Los altos porcentajes de retractación y las razones que la sustentan llevan a plantear el carácter sociocultural y transversal del fenómeno de la violencia de género, intrafamiliar y sexual que como tal debiese ser abordado por una institucionalidad que recoja el problema desde su integridad y no sólo desde lo punitivo, permitiendo que la víctima sea quien seleccione la mejor opción conforme a sus necesidades. Esto traería un espiral de beneficios: por una parte se reconoce a la víctima como un sujeto con participación en la salida a su conflicto y por otra parte legitima la intervención penal desde un sentido de realidad y no en el peligro de lo simbólico. Se trata entonces de empoderar a la víctima, de acompañarla en su proceso, de fortalecerla desde el punto de vista psicológico, moral y social, de brindarle confianza y hacerla sentir segura, protegida pero sobre todo respetar profundamente su testimonio, no culpabilizándola ni censurando su actuación o toma de decisiones.

Investigación en casos de niñas, niños y adolescentes²

La Policía Nacional, en estrecha coordinación con el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, iniciará de inmediato la investigación y comprobación, cuando tuviere previo conocimiento por cualquier medio, que alguna niña, niño o adolescente se encuentre en cualquiera de las circunstancias expuestas a continuación:

- a) *Cuando los tutores, abusen de la autoridad que le confiere la guarda y tutela de los menores o actúen con negligencia en las obligaciones que les imponen las leyes.*
- b) *Cuando carezcan de familia.*
- c) *Cuando se encuentren refugiados en nuestro país o sean víctimas de conflictos armados.*
- d) *Cuando se encuentren en centros de protección o abrigo.*
- e) *Cuando trabajen y sean explotados económicamente.*
- f) *Cuando sean adictos a algún tipo de sustancias psicotrópicas, tabaco, alcohol, sustancias inhalantes o sean utilizados para el tráfico de drogas.*
- g) *Cuando sean abusados y explotados sexualmente.*
- h) *Cuando se encuentren en total desamparo y deambulen en las calles sin protección familiar.*
- i) *Cuando sufran algún tipo de maltrato físico o psicológico.*
- j) *Cuando padezcan de algún tipo de discapacidad*

2. Artículo 76 de la Ley 287

- k) *Cuando se trate de niñas y adolescentes embarazadas.*
- l) *Cualquier otra condición o circunstancia que requiera de protección especial.*

La autoridad administrativa correspondiente (Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez) tomará las medidas necesarias para proteger y rescatar a las niñas, niños y adolescentes cuando se encuentre en peligro su integridad física, síquica o moral. Podrá contar con el auxilio de la policía, la que deberá prestarlo sin mayor trámite.³

La víctima u ofendido será tenido como parte en el proceso y podrá interponer los recursos correspondientes, cuando lo crea necesario para la defensa de sus intereses. Podrá comparecer por sí mismo o representada por un/a Abogado /a.⁴

Inspección ocular de la escena del crimen

La diferencia entre la Inspección técnica y la inspección ocular, es que en la primera se aplican los métodos científicos - técnicos que posibilitan el descubrimiento de las evidencias vinculadas al caso y la forma en cómo se van a manipular y guardar; en tanto, la inspección ocular es la observación simple.

Para efectuar el trabajo técnico en la escena del crimen, se requiere que los y las oficiales dispongan de las aptitudes, por lo que será necesario que, además de interactuar en los cursos regulares de capacitación, participen de períodos de inducción con al menos tres meses de duración, los cuales deberán ser brindados por el Departamento de Inspección de la Escena del Crimen de la Dirección de Auxilio Judicial, capacitaciones que servirán, indistintamente, de suficiente certificación de las competencias que se requiere para el ejercicio del cargo.

Los/as Oficiales de Inspección de la Escena del Crimen, no se consideran peritos, puesto que su labor principal es la búsqueda, revelación fijación, recolección y embalaje de los indicios y evidencias encontrados en la Escena del Crimen, no realizan determinaciones periciales (dictámenes), por lo que no requieren acreditación especial, más que el nombramiento correspondiente por parte de la División de Personal de la Policía Nacional.

Para efectos de la presentación en Juicio Oral y Público, los Oficiales de Inspección de la Escena del Crimen, deberán hacer constar el estado de los indicios y evidencias encontrados en la Escena del Crimen.

Importancia de la Inspección en la Escena del Crimen

- Con la Inspección de la Escena del Crimen se logra establecer hipótesis de cómo ocurrió el delito que se investiga.

3. Art. 85 CNA

4. Art. 121 CNA

- La inspección ocular se realizará siempre en todos los delitos que dejan rastros o indicios, con el propósito de revelarlos, fijarlos, embalarlos y remitirlos al Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses (ICCF) de la Policía Nacional para efectos de análisis.

Elementos que se deben tomar en cuenta en la Escena del Crimen

- De acuerdo al tipo de delito deberá tomarse en cuenta diversas fuentes de información, (Registros operativos, bases de datos, informantes, testigos).
- Tomar nota de la hora de inicio y de finalización del procesamiento de la escena del crimen.
- La calidad de preservación de la escena del crimen, hasta la llegada del equipo técnico de Investigación.
- Una vez que se encuentre el equipo técnico de investigación en la escena del crimen; el Investigador Policial o detective, coordinará todos los aspectos necesarios para efectuar una eficiente investigación policial.
- Delimitar las diferentes áreas y señalización de indicios en la escena del crimen.

Práctica de la Inspección Ocular en la Escena del Crimen

- El Equipo Técnico designado deberá anotar la actuación realizada por los funcionarios policiales que preservan la escena, con el fin de establecer qué objetos fueron desplazados, qué zonas fueron alteradas para evitar indicios falsos.
- Recopilar información preliminar, con el propósito de contar con la posible identificación de víctimas, autores o testigos.
- Examinar exhaustivamente el lugar con el fin de verificar la presencia de personas ocultas, otras víctimas o el autor del hecho, teniendo la precaución de no alterar los indicios que se encuentren en el lugar, estableciendo vía de entrada y salida.
- Señalar mediante la colocación de letras las áreas y con números los indicios que fueron encontrados.
- Verificar los enseres existentes en el lugar, con respecto a la posición que ocupan, si es la normal o si han sido alterados.
- Tomar las fotografías (Panorámicas, de Orientación, Centrales y a Detalle) que sean necesarias y filmar con videos la escena del crimen, señalizándolas e indicando a qué corresponde.
- Buscar, revelar, fijar, recolectar y embalar huellas, cabellos, manchas o cualquier otro tipo de indicio que pueda tener relación con el hecho investigado.

Acta de Inspección Ocular Técnico Policial de la Escena del Crimen

- Elaborar el acta de inspección ocular de la escena, la que describirá los indicios, estado de las cosas y demás efectos materiales, haciendo contar las medidas y ubicación de dichos indicios.
- Describir cerraduras, ventanas, puertas y todo cuanto se considere importante según el tipo de delito y lugar de su comisión.
- Describir las armas encontradas, así como las brechas de disparo que se hayan producido, trayectorias, casquillos y su posición, en los casos que corresponda.

- En los casos que exista un cadáver, se describirá el estado (putrefacción, rigidez cadavérica, fenómenos cadavéricos), posición (cubito prono, cubito supino, cubito lateral derecho o izquierdo, fetal) y ubicación (dependiendo de los puntos cardinales), señales de violencia observadas, la naturaleza de las lesiones, pruebas que se hayan practicado en el cadáver, examen de las vestimentas y señales de lucha y describir la silueta del cuerpo.
- En casos de hallazgos de cadáver cuando el cuerpo presenta un estado de putrefacción, se le buscaran señas particulares: Tatuaje, lunares, dentaduras y serán fijados a detalle por fotografía o video para su futura identificación. Además, se le confeccionará la *necrodactilia* (reseña decadactilar posmortem).
- Confeccionar croquis de la escena del crimen. En los casos en que existan distintos lugares que correspondan a un mismo hecho, se deberá elaborar croquis de cada lugar, detallando las mediciones y características de cada uno de ellos.

Protocolo de Inspección Ocular Técnico Policial de la Escena del Crimen

- Es el documento donde queda acumulada la información y lo actuado por parte del especialista de la escena del crimen, que consiste en confeccionar el Protocolo de Inspección Ocular Técnico Policial, el que contendrá la información general del caso (tipicidad, hora de ocurrencia y denuncia, dirección del lugar, afectados, presuntos autores, nombre de los miembros del Equipo Técnico de Investigación). Además contiene una breve descripción de los hechos ocurridos.
- Describir el estado y causa de la mala preservación del lugar, y alteraciones causadas por el perjudicado, curiosos, autoridad policial u otros, así mismo, se describirá las técnicas aplicadas en la Escena del Crimen (fotografía, video Dermatoscopia, Balística, Trazología etc.), los métodos de la inspección aplicada y determinaciones realizadas en el lugar.
- Describir las evidencias ocupadas en la escena del crimen (Lugar donde se encontró, fotografía, señalización y método de embalaje). También, se lleva un registro de las tomas fotográficas en la inspección realizada (descripción del tema, distancia, diafragma, velocidad, iluminación y observación)
- Confeccionar croquis de la escena del crimen. En los casos en que existan distintos lugares que correspondan a un mismo hecho, se deberá elaborar croquis de cada lugar.

Cadena de custodia de las evidencias e indicios materiales

Fundamento Legal aplicable: Arts. 245, 247 y 273 CPP.

La cadena de custodia de las evidencias e indicios es el procedimiento de control, que la Policía Nacional, aplica a objetos materiales relacionados con un delito, desde su localización hasta su presentación en la audiencia de juicio oral.

Este mecanismo de control tiene como propósito no viciar el manejo de las evidencias e indicios, evitar contaminaciones, alteraciones, daños, sustituciones, pérdida o

destrucción de las evidencias, conservándolas en su estado original, de tal forma que la certeza de su relación con el hecho que se investiga no dé lugar a duda. Por tanto, debe hacerse constar en acta el estado de las evidencias e indicios materiales que puedan constituirse en piezas de convicción, útiles para el juicio.

Aspectos generales

- a. La recolección de evidencias e indicios podrá efectuarse durante la inspección ocular en la escena del crimen, allanamiento y registro de morada u otros locales.
- b. Las evidencias materiales relacionadas con los delitos investigados permanecerán almacenadas en los locales destinados por la Policía Nacional para el resguardo y conservación de las mismas, en las diferentes delegaciones policiales del país, donde podrán ser inspeccionadas por las partes incorporadas y que intervienen en el proceso penal cuando éstas lo requieran, debiéndose documentar, mediante fotografías, inspección ocular y la anotación en el libro de control de evidencia.
- c. Los indicios y/o evidencias serán examinadas por peritos/as especializados/as del Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses (ICCF) y Laboratorio del Instituto de Medicina Legal. Obtenidos los resultados periciales, podrán constituirse en piezas de convicción válidas en juicio. En caso de evidencias que requieran el análisis de expertos no oficiales que hayan intervenido en los actos de investigación, adquirirán la condición de peritos si son declarados idóneos por la autoridad judicial competente y se cumpla con el procedimiento que establece el CPP, para ello se exigirá título que certifique la profesión o experiencia.
- d. Para que las evidencias sean admisibles en juicio tienen que ser lícitas. Son lícitas cuando se han recabado respetando las formalidades que para ello exige la ley.
- e. Toda documentación (Recibo de ocupación, protocolo técnico de inspección ocular, etc.) que soporte la ocupación de evidencias deberá ser firmada por la persona que se le ocupa, el/la funcionario/a policial que la recolectó, el funcionario de control de evidencias y la Jefa de Comisaría de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia o Jefe de Policía del Municipio respectivo, en aquellos casos donde no haya Comisaría.
- f. El ingreso, egreso e inspección de las evidencias que se realice en el local destinado para su conservación, hasta su presentación en juicio, será registrado en el Libro de Control de Evidencias.
- g. La cadena de custodia es una sucesión de eslabones entrelazados que garantizan la identidad e idoneidad de las evidencias desde la escena del crimen, que consiste en la búsqueda, fijación, recolección, embalaje, transporte y custodia hasta el local de resguardo.

Actuación del/la investigador/a en la escena del crimen

- Anotar dirección exacta, hora de llegada, condiciones de la escena, condiciones meteorológicas.
- Entrevistar al funcionario que preserva la escena para información.
- Garantizar la protección de la escena para la preservación de indicios.

- Mantener comunicación con el Puesto de Mando.
- Efectuar una inspección minuciosa de la escena para seleccionar, revelar, fijar y preservar las evidencias.
- Buscar huellas de sangre y verificar su forma para determinaciones posteriores.
- Orificios en las ropas, huellas de quemaduras, piel humana debajo de las uñas y lesiones que puedan indicar forcejeo.
- Buscar armas de fuego, armas blancas, casquillos e impactos de bala.
- Instrumentos corto punzantes.
- Levantamiento del cadáver si lo hubiera.
- Búsqueda en el contorno de la escena de cómo mínimo quinientos metros.
- Individualizar testigos y sospechosos, los cuales deben ser separados para evitar que se comuniquen entre sí, para que no establezcan una coartada.
- Establecer Puesto de Mando operativo provisional, para evitar intromisiones de curiosos, los medios de comunicación y otros.
- Establecer hipótesis del móvil del hecho mediante la valoración de evidencias y entrevista con familiares, amigos, vecinos y conocidos del sospechoso.
- Concluidas las investigaciones, el equipo se reúne y valora los resultados obtenidos según el trabajo analítico y plan de trabajo posterior.
- Si el caso se esclareció el plan será completarlo hasta cerrar expediente.

Una vez definido el grado de preservación en la escena del crimen por el Equipo Técnico de Investigación, se procederá a:

- a) Verificar la seguridad adecuada de la escena del crimen, aun cuando hubieran informado que ya había sido protegida antes de la llegada del Equipo Técnico de Investigación.
- b) Obtener información de las autoridades policiales o personas que hayan preservado la escena del crimen y tengan conocimiento de su estado original, esto permitirá al investigador establecer los límites y objetivos de la inspección, lo mismo que definir la táctica y el método de examen de la escena para la búsqueda de indicios.
- c) Realizar la búsqueda, previa valoración del lugar, de tal forma que se tenga la certeza de poder identificar los indicios que puedan constituirse posteriormente en evidencias, y evitar que al ingresar a la escena se destruyan involuntariamente algunos indicios. Esto permite al detective e investigador policial, en coordinación con el oficial de inspecciones, definir el método de inspección.
- d) Fijar las evidencias encontradas en la escena del crimen a través de fotografías, videos y croquis, que ilustren el sitio del hallazgo.
- e) Señalar los lugares a través de letras y números, que indique el lugar donde se encontraron las evidencias, las que deberán reflejarse en el croquis.
- f) Recolectar las evidencias encontradas en la escena del crimen, empleando las técnicas e instrumentos idóneos que no dañen, contaminen, destruyan o alteren de alguna manera su valor investigativo.

- g) Embalar los indicios y evidencias en el recipiente adecuado, rotulado, sellado adecuadamente, garantizando la integridad de los mismos.
- h) La etiqueta adherida al empaque de los indicios y evidencias contendrá los datos siguientes: lugar, fecha, hora, tipo de indicio o evidencia y funcionario que la recolectó.
- i) Cerrar todos los recipientes o embalajes de los indicios y evidencias en la escena del crimen.
- j) Evitar la manipulación innecesaria de los indicios y evidencias después de haber sido recolectadas.
- k) Elaborar croquis específico y de orientación de la escena del crimen.
- l) Al trasladar los indicios y evidencias, desde el lugar de su hallazgo hasta su destino o lugar de custodia, deben considerarse los factores ambientales de temperatura, presión, movimiento y duración del traslado, que de alguna manera puedan afectar los indicios o evidencias durante su transportación.
- m) Cuando el/la recolector/a de los indicios y evidencias entregue la custodia a otro/a funcionario/a, se efectuará de forma controlada mediante registros habilitados al efecto.

Investigado

Todo investigado tiene derecho de abstenerse a declarar o que se encuentre presente su Abogado/a Defensor/a en su declaración. Es necesario aclarar que la información que el investigado aporte deberá ser voluntaria y espontánea, tratando de establecer durante la entrevista los siguientes aspectos:

- Establecer los vínculos, la relación o no con el lugar del hecho y/o con la víctima.
- Indagar lugar, hora y fecha en donde se encontraba el investigado al momento en que se cometió el delito.
- Comparar el testimonio del investigado con los testimonios brindados por la víctima y/o testigos, procurando encontrar puntos coincidentes o contradictorios que den pautas en la investigación.
- Aportar las evidencias materiales necesarias que fortalezcan legalmente el testimonio mediante la ocupación de los objetos e instrumentos del delito o mediante la localización de testigos.
- Determinar las causas y condiciones que favorecieron la comisión del hecho delictivo.

Inspección Corporal y de Fluidos

Inspección Corporal⁵

Es el examen que se realiza para averiguar si la persona porta entre sus ropas o en los pliegues de su cuerpo, algún objeto o evidencia incriminatoria relacionada a la investigación de un hecho delictivo.

5. Ley 406 CPP. Art.237.

Cuando sea estrictamente necesario por la naturaleza del delito investigado, si hay probabilidad fundada de comisión de un hecho delictivo, se procederá a la inspección corporal de cualquier persona respetando su pudor e integridad. Cuando la inspección afecte las partes íntimas, deberá efectuarse por persona del mismo género.

De la investigación de fluidos biológicos en la escena del crimen

Es la recolección de fluidos biológicos (sangre, sudor, lágrimas, saliva, semen, orina, heces, etc.), realizada durante la inspección ocular practicada en la escena del crimen, que pudieron ser encontradas en un hecho de violación o de violencia intrafamiliar, que produjo lesiones graves, gravísimas o la muerte de una persona.

De la investigación de fluidos biológicos del imputado⁶

Es la extracción de fluidos biológicos (sangre, sudor, lágrimas, saliva, semen, orina, heces, etc.) realizada al imputado, determinada la necesidad de efectuar esta acción sobre el cuerpo del investigado, para compararla con los fluidos encontrados en la escena del crimen, por lo tanto se procederá de la manera siguiente:

- Solicitar autorización judicial debidamente motivada.
- Requerir la intervención del Instituto de Medicina Legal, Sistema Nacional Forense o en su defecto del personal paramédico, para que efectúe la extracción del fluido biológico respectivo.
- Remitir la muestra extraída al Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses Laboratorio de la Policía Nacional o al Laboratorio Forense del Instituto de Medicina Legal para el análisis científico correspondiente.
- Cuando resulte imposible obtener de manera oportuna la autorización judicial para realizar este acto, se realizará el examen, quedando supeditado a la convalidación del Juez, la que será solicitada dentro de un plazo de 24 horas.
- En la solicitud de convalidación, se justificarán las causas de la urgencia del hecho, siempre y cuando se demuestre que haya sido imposible localizar al Juez/a respectivo.

Investigación corporal de conformidad con la Ley 779 (Art. 45)

Se deberá realizar de forma inmediata la investigación corporal y extracción de fluidos biológicos en los delitos contra la vida y en los delitos contra la libertad e integridad sexual de la víctima, sólo en aquellos casos que sea pertinente por el hallazgo de una evidencia que pueda ser analizada y comparada con fluidos biológicos de la persona investigada. La autorización de dicho acto de investigación deberá ser ordenada por la autoridad judicial atendiendo criterios de proporcionalidad, siempre y cuando no ponga en peligro la salud de la persona investigada y cuando sea indispensable para identificar al presunto responsable del hecho. Como se observará este procedimiento previsto en la Ley 779 es más preciso que el estatuido en el CPP, en todo caso

6. Ley 406 CPP. Art. 238

las disposiciones establecidas en el CPP vienen a fortalecer y complementar a la ley 779 (Art. 5 Ley 779, *relacionado a la interpretación de esta norma jurídica*).

Reconocimiento de persona

La Policía Nacional podrá practicar el reconocimiento de una persona para identificarla o establecer que quien la menciona efectivamente la conoce o la ha visto.

Antes del reconocimiento, quien deba hacerlo será interrogado para que describa a la persona de que se trata, diga si la conoce o si con anterioridad la ha visto personalmente o en imagen. Además, deberá manifestar si después del hecho ha visto nuevamente a la persona, en qué lugar y por qué motivo.

Posteriormente, se invitará a la persona que debe ser sometida a reconocimiento a que escoja su colocación entre otras de aspecto físico semejante y se solicitará a quien lleva a cabo el reconocimiento, con las medidas de seguridad del caso, que diga si entre las personas presentes se halla la que mencionó y, si responde afirmativamente, la señale con precisión.

Pluralidad de reconocimientos

Cuando varias personas deban reconocer a una sola, cada reconocimiento se practicará por separado, sin que las personas se comuniquen entre sí. Si una persona debe reconocer a varias, el reconocimiento de todas podrá efectuarse en un solo acto.

Reconocimiento por fotografía

Cuando sea necesario reconocer a una persona que no esté presente ni pueda ser habida, su fotografía podrá exhibirse a quien deba efectuar el reconocimiento, junto con otras semejantes de distintas personas, observando en lo posible las reglas precedentes.

Requisa

La Policía Nacional podrá realizar la requisa personal, cuidando el pudor, siempre que haya motivos suficientes para presumir que alguien en forma ilegal porta arma u oculta entre sus ropas pertenencias u objetos relacionados con el delito o los lleva adheridos a su cuerpo.

Las requisas de mujeres deben ser practicadas por otras mujeres.

Durante el Allanamiento y Registro

- a. Antes de efectuar el allanamiento se deberá fijar fotográficamente el sitio y sus alrededores.
- b. Inspeccionar minuciosamente los locales para obtener objetos relacionados al delito.
- c. Una vez localizados los efectos e instrumentos del delito serán fijados fotográficamente y de ser posible con videos.

- d. Posteriormente se procede a identificar, inventariar y poner bajo custodia segura los objetos ocupados.
- e. El investigador /a policial elaborará el recibo de ocupación en el cual se detallan todas las características particulares de los bienes u objetos ocupados.
- f. Elaborar el acta de resultado de registro y requerir las firmas de al menos dos testigos que hayan presenciado el acto de investigación, del/la Investigador/a policial y de ser posible por el investigado.
- g. Trasladar y almacenar los bienes u objetos ocupados en el local destinado para el resguardo de las evidencias, siguiendo los controles establecidos de control y resguardo.

Allanamiento y registro de morada

Fundamento Legal aplicable: Art. 26 Cn.; Arts. 217, 218, 230, 241, 242, 243, 246 CPP.

Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado, en sus dependencias, casa de negocio u oficina, el allanamiento y registro será realizado con orden judicial, la cual deberá solicitarse y decretarse fundadamente y por escrito.

La diligencia de allanamiento deberá practicarse entre las seis de la mañana y las seis de la tarde. Podrá procederse a cualquier hora cuando el morador o su representante consientan o en los casos sumamente graves y urgentes, en los que los jueces resolverán en un plazo máximo de una hora las solicitudes planteadas por el fiscal o el jefe de la unidad policial a cargo de la investigación. Deberá dejarse constancia de la situación de urgencia en la resolución que acuerda el allanamiento.

Modalidades del allanamiento

A. Allanamiento sin orden. Podrá procederse al allanamiento sin previa orden judicial cuando:

- 1) Los que habitan en una casa manifiesten que ahí se está cometiendo un delito o de ella se pida auxilio;
- 2) Por incendio, inundación u otra causa semejante, que amenace la vida de los habitantes o de la propiedad;
- 3) Cuando se denuncie que personas extrañas han sido vistas en una morada o introduciéndose en ella, con indicios manifiestos de ir a cometer un delito;
- 4) En caso de persecución actual e inmediata de un delincuente, y,
- 5) Para rescatar a la persona que sufra secuestro.

B. Allanamiento de otros Locales. El allanamiento de locales públicos, establecimientos de reunión o recreo, mientras estén abiertos al público y no estén destinados a habitación, no requerirá de autorización judicial. Tampoco regirán las limitaciones horarias establecidas para el allanamiento y registro de morada.

En estos casos, deberá avisarse a las personas encargadas de los locales, salvo que sea perjudicial para la investigación.

- En los casos en que se proceda sin orden judicial, la convalidación judicial del allanamiento, secuestro o detención deberá solicitarse, según el artículo 246 CPP,

indicándose en la misma la situación de urgencia, de los objetos, sustancias o personas que se espera encontrar en dicho lugar.

C. Allanamiento de morada con autorización judicial. Se practicará en los casos siguientes:

- Para ejecutar orden de captura emitida por autoridad judicial.
- Para registrar el inmueble con el propósito de buscar y ocupar objetos o instrumentos relacionados al delito que se investiga.
- En los lugares públicos, mientras estos permanezcan abiertos y no estén destinados a habitación, no regirán las limitaciones horarias establecidas para el allanamiento y registro de morada, consecuentemente no será necesario orden de allanamiento. Además se podrá actuar de forma expedita sin tomar en cuenta todas las formalidades que requiere un allanamiento.

Procedimiento del allanamiento con autorización judicial

- a. Solicitud al juez competente que contenga los datos siguientes: nombre de la persona, lugar dónde se efectuará, describir objetos, sustancias o personas que se pretende encontrar en el lugar, motivos para realizar el allanamiento, fecha y hora en que se practicará la diligencia y la autoridad que realizará el allanamiento.
- b. Planificar la actividad con el propósito de evitar complicaciones que puedan presentarse, ya que este acto de investigación reviste peligrosidad por la resistencia que puedan oponer los moradores, tomando en consideración los aspectos siguientes:
 - Información debidamente comprobada.
 - Peligrosidad de la (s) persona (s) a capturar.
 - Presencia de niños (as) que puedan correr riesgo o exponerse al peligro y personas en delicado estado de salud, incluyendo a personas adultas mayores.
 - Características estructurales del lugar objeto de allanamiento previendo aquellos sitios que puedan ser utilizados para facilitar la huida de personas a capturar, ocultamiento de evidencias, de tal forma que facilite a las autoridades policiales una operación exitosa.
 - Auxiliarse de planos existentes, informantes que conozcan el lugar, empleados o ex-empleados del lugar y de servicios públicos como: ENACAL, ENITEL, CLARO, MOVISTAR, UNIÓN FENOSA.
 - Realizar reuniones con todo el personal que participará en la operación, simulacros, distribución de tareas (personal que ingresa primero, el que conoce a sospechosos, el que asegura el lugar, los Investigadores que ubicarán las evidencias y realizan la inspección ocular, personal que asegura los lugares de escape, medios de transporte, tipos de comunicaciones y distintivos de identificación y manejo de la prensa).
 - Realizar la diligencia cumpliendo con el horario comprendido entre las 06:00 a las 18:00 horas, pero en situaciones excepcionales que represente gravedad y urgencia de los casos que se investiga se podrá incursionar al inmueble fuera del horario establecido con el consentimiento del representante o morador, y luego solicitar la convalidación judicial dentro de las 24 horas siguientes, en caso contrario se recomienda vigilar adecuadamente el lugar a la espera del horario estipulado.

Ejecución del registro

- a. El personal de la Comisaría de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia u otra autoridad policial deberá presentarse debidamente identificado (CHIP, Carnet, chaleco, uniformado/a), ante él o los moradores de la vivienda.
- b. Ubicar a los moradores del inmueble en un sólo lugar.
- c. Antes de proceder al allanamiento, se debe efectuar la fijación fotográfica o en video, del o los locales objeto de este acto de investigación, con la finalidad de dejar constancia de los bienes u otros efectos encontrados en el mismo.
- d. Solamente se ocuparán y conservarán los objetos e instrumentos relacionados al delito que se investiga.
- e. Fijar fotográficamente o con videos los efectos e instrumentos que se vayan ocupando.
- f. Concluida la diligencia se elaborará el acta de resultado de allanamiento y registro.
- g. Otros objetos encontrados en el lugar de ejecución del allanamiento y que no están especificados en la orden del mismo, se procede a ocuparlos a través de acta y se deja constancia de lo ocupado, se especifica a que hecho está vinculado y se abre la investigación correspondiente.

Esta diligencia le permite al Investigador/a policial, retener a las personas por un tiempo no mayor de tres horas, en la escena del crimen, cuando no se tenga individualizado al o los presuntos autores o testigos de un hecho que se investiga, (Art. 229 CPP).

De ninguna manera podrá trasladarse a persona alguna a la unidad policial, mientras no se tenga definida la responsabilidad de cada una de ellas.

Determinada la individualización e identificación del presunto autor en la escena del crimen, el investigador policial, debe auxiliarse del personal de apoyo o de una patrulla de vigilancia, para trasladar al imputado en calidad de detenido, previniéndolo de los derechos que le asisten.

Si un testigo por su espontánea voluntad solicita al/la investigador/a policial que lo traslade a la unidad policial u otro lugar donde se sienta seguro para emitir su versión sobre el hecho que se investiga, se podrá hacer.

En la práctica de la retención deberán separarse a los testigos entre sí, de igual manera a los presuntos autores, para evitar que éstos se comuniquen entre sí y tergiversen las versiones que puedan obstaculizar la investigación.

De la detención policial

Fundamento Legal aplicable: Art. 33, inciso 1, 2.2 Cn.; Art. 231, del CPP; Arts. 101, 103, 111, 203 CNA.

En cumplimiento con lo preceptuado en la Constitución Política y Código Procesal Penal, que establecen que nadie puede ser detenido arbitrariamente, salvo por causas

fijadas por la ley con arreglo a un procedimiento legal. (Art. 33, inciso 1 de la Cn.; Art. 231 del CPP), la Policía Nacional sin necesidad de mandamiento judicial (excepción a la regla) podrá detener en las circunstancias siguientes, exceptuando a los menores de 13 años de edad:

- 1) Cuando el presunto autor se encuentra en flagrante delito.
- 2) **Huyendo del lugar del hecho o se le sorprenda con los instrumentos, armas u objetos en el lugar del hecho o cerca del mismo.**

En los casos de flagrancia previstos en el párrafo anterior, cualquier particular podrá proceder a la detención, siempre que el delito amerite pena privativa de libertad. Acto seguido deberá entregar al aprehendido a la autoridad más cercana.

Los jefes de las delegaciones de la Policía Nacional, bajo su responsabilidad personal, podrán emitir orden de detención, con expresión de las razones que la hagan indispensable, contra quienes haya probabilidad fundada de la comisión de un delito sancionado con pena privativa de libertad, dentro de las doce horas de tener conocimiento del hecho. Sin embargo, estos casos no serán considerados como de persecución actual e inmediata de un delincuente para efecto de allanamiento de domicilio.

En los demás casos, se requerirá de mandamiento judicial para proceder a la detención.

Recuérdese que a todo detenido se le debe respetar sus derechos constitucionales, entre ellos notificar motivo de su detención, facilitar comunicación con sus familiares, amigos o abogado etc. Cuyos procedimientos se encuentran contenidos en el Manual de manual de funciones de oficiales de control de detenidos y conductes de las delegaciones departamentales y municipales del país.

Los Circulados y Prófugos serán detenidos, previa existencia de orden judicial vigente. Esta orden deberá presentársele al detenido a su llegada a la delegación policial, cuando sea en aquellos casos en que esté circulado por otra delegación.

De la detención de Adolescentes

Fundamento Legal aplicable: Arts. 107, 111, 118, 119, 127, 136, 142, 143, 144, 202 CNA.

Las autoridades de la Comisaría de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia u otro/a funcionario/a de la Policía Nacional no podrá detener a ningún adolescente, salvo por causas fijadas por la ley (flagrancia), con arreglo a un procedimiento legal y por la orden de autoridad competente, ni limitar el ejercicio de sus derechos, libertades y garantías más allá de los fines, alcances y contenidos de cada una de las medidas que se le deban de imponer, de conformidad a la Justicia Penal Especial del Adolescente.

En los casos que la Policía Nacional requiera la restricción de la libertad de los adolescentes mayores de 15 y menores de 18 años, y en flagrante delito, destinará áreas exclusivas para los adolescentes y los deberá remitir en el término no mayor de veinticuatro horas a la disposición de la autoridad correspondiente.

Derechos y garantías de los Adolescentes

- A ser tratado con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano que incluye el derecho a que se proteja su integridad personal.
- A ser informado del motivo de su detención y de la autoridad responsable de la misma; al derecho a permanecer en silencio y a solicitar la presencia inmediata de su madre, padre, tutor y su defensor, so pena de nulidad de todo lo actuado por la autoridad, funcionario o empleado que lo realizare no produciendo efecto alguno en juicio o fuera de él.
- A que se le presuma inocente hasta tanto no se le compruebe mediante sentencia firme, por los medios establecidos en este Código u otros medios legales, los hechos que se le atribuyen.
- A que toda limitación, privación o restricción de sus derechos, libertades y garantías, sea ordenada judicialmente.
- A no ser perseguido y procesado más de una vez por el mismo hecho aunque se modifique la calificación legal.

Al igual que los adultos, los adolescentes tienen derechos que hay que respetar, como la presunción de inocencia y si se le encontrara responsabilidad tiene derecho al debido proceso y la reinserción a la familia y a la sociedad.

En este plazo la Policía Nacional deberá:

- 1) Proteger la dignidad e integridad física, mental y moral del adolescente.
- 2) Informarle del motivo de su privación de libertad y solicitar la presencia de su madre, padre, tutores y de la Fiscalía.
- 3) No recluir al adolescente con personas adultas.
- 4) Advertirle del derecho que tiene a guardar silencio y que cualquier declaración brindada no tendrá efecto a la hora del proceso.
- 5) Si el/la niña, niño o adolescente esta en abandono se le remitirá a MIFAMILIA.
- 6) Preservar la confidencialidad de curiosos y especialmente de los medios de comunicación.

Procedimientos para la Detención

- a. La autoridad policial deberá estar debidamente identificado con su uniforme, carnet y Chip de identificación policial. Si la detención se ejecuta vestido de civil la autoridad policial deberá identificarse a viva voz como agente de la Policía Nacional, mostrar el carnet que lo acredita como miembro de la Institución Policial, chip de identificación policial u otros instrumentos como chaqueta, gorra, etc.

- b. Identificarse con su grado y nombre, informar el motivo de la detención y a la orden de quién se remitirá la persona detenida.
- c. Garantizar la integridad física, síquica y moral del detenido, evitando tratamientos inhumanos, degradantes, a su dignidad humana.
- f. Informar al Ministerio Público en un plazo no superior a las 12 horas sobre la detención de una persona y las diligencias efectuadas.
- g. Coordinar con el fiscal auxiliar para la presentación en audiencia preliminar del imputado ante el Juez competente en el plazo legal correspondiente.
- h. En el caso de los detenidos con orden judicial se pondrá a la disposición del Juez/a en el plazo constitucional, en el caso de las órdenes ejecutadas con resultados negativos, se informará a la autoridad judicial respectiva.

Detención en delitos de violencia de género estatuidos en la Ley 779. De conformidad con el Art. 49 de dicha norma jurídica, las Jefas de la Comisaría de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia o en su caso el Jefe Policial, bajo su responsabilidad personal, podrán emitir orden de detención, con expresión de las razones que la hagan indispensables, contra quienes haya probabilidad fundada de la comisión de un delito sancionado en la Ley que tenga pena privativa de libertad, dentro de las doce horas de tener conocimiento del hecho. Sin embargo, estos casos no serán considerados como de persecución actual e inmediata de un delincuente para efecto de allanamiento de domicilio.

En los demás casos se requerirá de mandamiento judicial para proceder a la detención.

Cuando se produzca la detención de una persona, los funcionarios policiales deberán informar en un término no superior a las doce horas al Ministerio Público de las diligencias efectuadas y presentar en el plazo constitucional al imputado ante el juez competente.

La Policía Nacional tendrá, además de otros deberes establecidos en la ley, los siguientes:

- 1. Informar a la persona en el momento de detenerla:
 - a) De las causas de su detención en forma detallada y en idioma o lengua que comprenda;
 - b) Que tiene derecho a no ser obligada a declarar contra sí misma, ni contra su cónyuge o compañero en unión de hecho estable o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y,
 - c) Que tiene derecho a ser asesorada por un defensor de su elección, a fin de que lo designe;
- 2. Informar a los parientes u otras personas relacionadas con el detenido que así lo demanden, la unidad policial adonde fue conducido;
- 3. Asentar el lugar, día y hora de la detención en un registro inalterable;

4. Informar de su detención y permitir al detenido informar él mismo a su familia o a quien estime conveniente;
5. Posibilitar la comunicación del detenido con su Abogado/a, y,
6. Solicitar la evaluación del detenido por parte del médico forense o quien haga sus veces, previo a su presentación ante la autoridad jurisdiccional o en caso de grave estado de salud.

El informe policial deberá dejar constancia de la práctica de todas estas actuaciones y de haberse transmitido oportunamente la información concerniente a la persona detenida.

De las entrevistas

La o el Investigador (a) policial, durante las entrevistas, deberá ser bien analítica y observadora, emplear una serie de preguntas, siguiendo una secuencia lógica, poner atención en lo que manifiesta verbalmente la persona entrevistada, pero también, deberá atender los elementos de expresión no verbal o corporal, como gestos, posturas, silencios, etc.

- La preguntas no deben ser cerradas de respuesta directa sí o no, verdadero o falso, etc. Más bien preguntas abiertas que propicien obtener la mayor información posible sobre el hecho, cuidando que sea de forma espontánea.
- La entrevista no debe tener interrupciones.
- Escuchar el relato de los hechos antes de tomar la declaración.
- No minimizar el hecho.
- Establecer un adecuado contacto con la víctima (EMPATÍA).
- Ayudar a tomar una decisión.
- Localizar a testigos idóneos (presenciales y de referencia) para tomarles las entrevistas del caso.
- La entrevistadora deberá explicarle a la víctima sobre las diligencias de la investigación, que inician oficiosamente, por denuncia u orden del/la fiscal.
- La investigadora explicara a la víctima las etapas del proceso penal, que inicia desde la acusación formulada por el Ministerio Público.

Otras consideraciones

- Proporciona Información, que es la parte vital del proceso investigativo.
- Es el Método más directo y económico que se utiliza para obtener información.
- Produce más información al investigador policial, que cualquier otra técnica investigativa.
- La entrevista genera más evidencia que cualquier otro método.
- Crea ambiente adecuado, seguro, que garantice la privacidad.
- Toma las medidas de seguridad para evitar la revictimización.
- Solicita que exponga lo que sucedió (Qué, Cómo, Cuándo, Dónde, Cuántos, Porqué, etc.).
- Hacer la hipótesis de la Investigación.

Fases de la entrevista

La denuncia de un delito por parte de la víctima, normalmente lleva aparejada un *proceso de revelación* y no se da inmediatamente después del acontecimiento de los hechos.⁷

- 1) **La primera fase es la negación** de los hechos, básicamente debido a que, el hechor puede ser un familiar cercano, existencia de las amenazas, los sobornos, desconocimiento del abuso y actos sexuales, culpa, miedo al castigo, etc.
- 2) **La revelación vacilante**, inicia con evasivas como: olvido = “se me olvidó” “ya ni lo recuerdo”; distanciamiento = “eso le ocurrió a María”; minimización = “solo fue una vez”; delito potencial o potenciación = “él trató, pero yo le pegué y salí corriendo”; disociación = “cuando pone sus manos sobre mí, pienso en otra cosa, me voy al bosque”; descargo = “solo era un chiste”, “sólo lo dije en broma”.
 - El niño/a puede estar mintiendo como un intento de ocultar o negar algo que ocurrió. En este caso, con frecuencia tales elementos se asocian a niños/as realmente abusados. Según Dahlenberg (1996), el elemento fantástico prueba el abuso más que desacreditar el relato.
- 3) **Reafirmación:** Afirmar de nuevo lo denunciado al inicio. Corroborar lo dicho al inicio, aunque por algún tipo de presión interna o externa haya revocado anteriormente.
 - a. Se debe establecer un ambiente de confianza que facilite la conversación, eliminando las barreras físicas y psicológicas que puedan impedir la obtención de la información que se requiere.
 - b. Permitir que el entrevistado narre su historia con sus propias palabras y al ritmo que él crea conveniente.
 - c. Tomarse el tiempo que sea necesario durante la entrevista, sin apresurar el desarrollo de la misma.
 - d. Saber escuchar, de manera que permita al investigador policial se convierta en un buen oyente.

Utilizar bitácora operativa

El resultado de las distintas entrevistas que se realicen, será plasmado en una bitácora operativa que contendrá como datos básicos lo siguiente:

- Fecha y hora de la entrevista.
- Nombres y apellidos de los o las entrevistados/as.
- Número de cédula de identidad o cualquier otro documento de identidad de la persona entrevistada.
- Dirección del domicilio.
- Contenido de la entrevista.

7. Tomado del curso de la Entrevista, impartido por expertos colombianos. Noviembre de 2009.

Personas que serán entrevistadas

Se recomienda que en las investigaciones de abuso sexual, todas las entrevistas con los niños/as y adolescentes sean grabadas en audio o video, para prevenir que el propio sesgo del entrevistador contamine los informes y ayude a determinar la confiabilidad de los testimonios (*Bull y Davies, 1992*).

Una variedad de factores influyen la calidad de la información, pero el más importante es la capacidad del entrevistador/a para provocar información, provocar la voluntad del niño/a y para hacer que lo exprese. (*ME Lamb et al. Child abuse and neglect; 31 (2007)*).

La Víctima

La víctima, deberá ser entrevistada de forma inmediata, para conocer la versión sobre los hechos que se investigan. En el caso que la víctima sea niña, niño o adolescente se procederá a efectuar la entrevista en presencia de la madre, padre o tutor.⁸ Esta entrevista debe basarse en lo siguiente:

- Hora aproximada en que pudo ocurrir el hecho.
- Cómo y bajo qué circunstancias se produjo el hecho.
- Quiénes, además de la víctima conviven en el lugar y en concepto de qué (en el caso que el hecho se haya producido en el interior de un inmueble). Obtener descripción física del autor, edad aparente, comportamiento, si hubo resistencia describir detalles: rasguños, equimosis, tumefacciones, ropa desgarrada, etc.
- Conocer qué tipo de amenaza profirió el autor para someterla: en el caso de violación si ocultó su identidad para evitar ser reconocido.
- Si se llevó alguna prenda de vestir u otro objeto, que la describa.

Requisitos para solicitar un Dictamen Médico Legal

Los requisitos para solicitar un dictamen médico legal son los siguientes:

- 1) Hoja de solicitud del dictamen requerido, con los siguientes datos:
- 2) Nombre y apellido de la persona a ser examinada.
- 3) Edad y sexo
- 4) Resumen de las circunstancias en que ocurrieron las lesiones
- 5) Fecha, hora, lugar, circunstancias y tipos de armas usadas, según referencia de la víctima. Estos datos son necesarios para realizar la correcta correlación con los hallazgos, pudiendo de esta manera corroborarlos o descartarlos.
- 6) Resumen de los hallazgos en la escena:
 - Detallar los datos que solicitan de Medicina Legal según el caso (ver formatos en anexos).
 - Nombre del investigador/a, firma, CHIP sello de la autoridad solicitante.

8. Ley 287 CNA. Art. 101 inc.b

En caso de fallecidos, debe emitirse una orden de entrega del cadáver al familiar directo, para que pueda retirar el cuerpo una vez concluida la autopsia.

Indicaciones Básicas para Planificar la Investigación

Con autor conocido se seguirán las siguientes pautas:

- Plan que describa las medidas que se van a tomar.
- Los resultados que se pretenden obtener.
- Fechas de cumplimiento.
- Nombre de los ejecutores.

Contenido del Expediente de Investigación Policial

El expediente es de suma importancia, porque contendrá toda la información de los hechos y personas involucradas, indicios y evidencias, informes, etc. La estructura es la siguiente:

- Por Delito
 - 1) Carátula del Expediente
 - 2) Índice.
 - 3) Formato único de denuncia
 - 4) Informe Policial
 - Relación de los Hechos
 - 5) Acta de detención.
 - 6) Entrevista (a víctimas, testigos),
 - 7) Resultado de valoración psicológica.
 - 8) Resultado de Dictamen Médico legal.
 - 9) Antecedentes policiales.
 - 10) Reconocimiento de fotografías.
 - 11) Reconocimiento de objetos.
 - 12) Acta de Inspección ocular en la escena del crimen.
 - 13) Orden y Acta de Detención (cuando haya detenido)
 - 14) Orden de allanamiento y registro (cuando se practique).
 - 15) Recibo de ocupación.
 - 16) Resultados de peritajes
 - 17) Resultados de la prueba Central de Criminalística.
 - 18) Resultados de Evaluaciones de Medicina Legal.
- Por Falta Penal
 - 1) Acusación.
 - 2) Declaración de testigos
 - 3) Dictamen médico legal
 - 4) Valoración psicológica
 - 5) Acta de no acuerdo en trámite de mediación.
 - 6) Recibo de ocupación. (Si fuera el caso)

Informe de Investigación Policial

Es el documento, que elabora el investigador/a y es donde se plasma el resultado de la investigación que se produce en los casos siguientes:

Cuando existan detenidos en un plazo no mayor de 24 horas, que permita al fiscal decidir si procede o no llevar a juicio el caso.

Según el CPP, Art. 225 se establece un plazo de 20 días, periodo en el cual deberá elaborarse el Informe Policial de aquellos hechos investigados.

Este documento junto a los otros contenidos en el expediente, constituyen base de la acusación que formulará el fiscal del Ministerio Público y debe contener lo siguiente:⁹

- 1) Nombres, datos de identificación y ubicación de la persona investigada o imputado, testigos, expertos o técnicos y víctimas.
- 2) Breve descripción de las piezas de convicción, su relación con los hechos y su ubicación, si se conoce.
- 3) Relato sucinto, en orden lógico y cronológico de las diligencias realizadas y sus resultados.
- 4) Copia de cualquier diligencia o dictamen de criminalística, entrevistas, croquis, fotografías u otros documentos que fundamenten la investigación.
- 5) Constancia de que la policía cumplió con su deber, informando de las causas de la detención, derecho de abstenerse de declarar, facilidad del detenido a comunicarse con sus familiares (Art.232 CPP).

El contenido del Informe de Investigación Policial es el siguiente:

- Destinatario: Ministerio Público
- Remitente (Nombres y apellidos, grado, cargo y número de chip de identificación policial de la investigadora que tramita el caso), sello y firma de la Jefa de la Comisaría de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia.
- Introducción (De conformidad con lo dispuesto en el capítulo II Art. 228 del Código Procesal Penal, se remiten resultados de las investigaciones realizadas con relación al hecho que se investiga, según consta en el Expediente de Investigación Policial No.)
- Nombres y apellidos, número de identificación, ocupación, lugar de trabajo y ubicación de personas investigadas, testigos, expertos, técnicos y víctimas, dirección de la casa de habitación y número telefónico en los cuales se pueda localizar.

Descripción de los hechos (relato de los hechos acontecidos)

- Fecha, hora y descripción exacta del lugar en donde ocurrió el hecho.

9. Ley 406 CPP. ARTO. 228

- Explicar el resultado de la investigación
- Identificación de los partícipes y establecer con claridad y separadamente cual fue la contribución de cada uno de ellos en el caso, que hayan sido varios en la ejecución del hecho investigado.
- Explicar el modo y los medios usados por el autor, para lograr el resultado. En el caso que hayan participado varios, explicar la conducta seguida por cada uno de los partícipes para preparar, iniciar, ejecutar y consumir el hecho y encubrirlo u ocultar su participación.
- Explicar con base a resultado médico o psicológico, quien realizó el hecho, si se comportó en su sano juicio, conforme a una representación mental previa, de acuerdo a la cual se condujo, para obtener el resultado deseado utilizando los medios elegidos.
- Relato sucinto, lógico y cronológico de las diligencias investigativas realizadas y sus resultados.
- Descripción de las diligencias realizadas y quien o quienes la efectuaron, fecha, hora y lugar en que se realizó, contribución en la investigación.
- Descripción de las piezas de convicción, su relación con los hechos y su ubicación si se conoce.
- Dejar constancia de la notificación al detenido si lo hubiere sobre: Causas de la detención tanto del detenido como de familiares, derecho a abstenerse a declarar, asistencia de un defensor, comunicación con abogado defensor. (Art. 232 del CPP).

Normas de auxilio y protección a las víctimas

- a) Según la gravedad del caso, se auxiliará a la víctima, aislándola del escenario del hecho y protegiéndola de su agresor (a).
- b) Se evitará que la víctima de violencia intrafamiliar y/o sexual, comparta espacios físicos con el presunto agresor y en la medida de lo posible, se le mantendrá alejada de otros comparecientes.
- c) Identificar la situación y los daños de la violencia, ya sean físicos o emocionales que presente la víctima; ya sea que ella los refiera en la entrevista que se le realiza o porque se detectan mediante los indicadores de violencia ya establecidos.
- d) Evaluar los riesgos y el grado de peligrosidad que corre la víctima ante la situación de violencia que está viviendo mediante un cuestionario que permiten determinar factores de riesgo.

Si están en situación de riesgo y abandono

- a. La Policía Nacional remitirá al Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia y Centros Alternativos a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en esas situaciones.
- b. La Policía Nacional deberá mostrar en todo momento una actitud de respeto, solidaridad, calidad humana, desde el primer momento en que la persona se presenta en las instalaciones de la Policía Nacional.

3. Actuación policial con perspectiva de género

La autoridad competente para recepcionar la denuncia, de acuerdo con el marco de sus competencias, deberá actuar con perspectiva de género, adoptando todas las cautelos para evitar la revictimización. Para ello:

- a. El personal policial y del Ministerio Público (personal de vigilancia, personal de oficina...) deberá contar con formación especializada en atención a víctimas de violencia de género, intrafamiliar y sexual.
- b. Las víctimas de violencia de género, intrafamiliar y sexual, recibirán atención de forma inmediata y prioritaria.
- c. La autoridad sea policial o fiscal establecerá un buen contacto con la víctima, empleando la empatía, la escucha activa, una posición cercana y respetuosa.
- d. La entrevista deberá celebrarse en lugar reservado, sin interrupciones, garantizando la privacidad de la misma. Los espacios serán diseñados a fin de facilitar el acceso a las víctimas, evitando el contacto con los agresores, así como con espacios de espera cálidos y que permitan la estancia protegida y segura de los niños, niñas o adolescentes que puedan acompañarles. Deberá promoverse la entrevista única y evitar la revictimización.
- e. La autoridad respectiva deberá auxiliar a la víctima, examinar con ella el problema objetivamente, no minimizar ni dramatizar, ayudándole a la toma de decisiones. *Debe evitarse en todo momento inducir a la víctima a incriminar a alguien injustamente. Debe actuarse con altos estándares de profesionalismo, apegándose a la ética y a los criterios y procedimientos científicos de investigación.*
- f. Se valorará en cada caso la oportunidad de tomar declaración a la víctima de forma inmediata. En todo caso, es aconsejable que la víctima relate los hechos de forma libre, espontánea, que pueda desahogarse y después se proceda a sistematizar la información que corresponda.
- g. Deberá estimularse la denuncia como acción que se emprende para romper una relación abusiva y el ciclo de la violencia. Se debe entender el estado emocional de la víctima y no juzgar su decisión en caso de no querer presentar denuncia o en el caso de retirarla posteriormente. Se evitarán culpabilizadores o minimizadores del acto de violencia.
- h. Cuando se juzgue necesario por el grado de afectación de la víctima, ésta podrá ser acompañada en las diligencias de denuncia por un/a profesional de la Psicología o Trabajo Social, con el único propósito de asistirle, evitando inducirle en la dirección o contenido de su denuncia.

Durante la entrevista se indagará sobre las distintas formas de violencia que haya sufrido la víctima en su relación, sea violencia física, psíquica, intrafamiliar, sexual o patrimonial. Para acreditar los diversos actos de violencia deberá reflejarse el lugar y fecha de comisión, los medios empleados, posibles testigos de los hechos, informes médicos anteriores, tratamientos médicos o psicológicos que haya seguido la víctima, datos referentes a su situación patrimonial.

Del mismo modo la entrevista tendrá por finalidad valorar la situación de riesgo en que se encuentra la víctima. Deberá contener preguntas relativas a cuestiones como denuncias previas, medidas de protección de urgencia, precautelares y/o cautelares vigentes o canceladas, antecedentes psiquiátricos del agresor, dependencia a bebidas alcohólicas o drogas del agresor, conductas agresivas hacia otros miembros de la familia o terceros, posesión de armas. Esta valoración se complementará con otros elementos de investigación basados en las averiguaciones policiales o pruebas periciales. En todo caso permitirán valorar el riesgo y solicitar la medida de protección y/o precautelar o cautelar proporcionada a las necesidades de protección de la víctima.

Recibida la denuncia la Comisaría de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia realizará una primera valoración del riesgo a fin de solicitar la imposición de las medidas de protección urgencia previstas en el Art. 111 del Código Penal o la aplicación de medidas precautelares establecidas en los Arts. 23 y 24 de la ley 779.

Si la persona afectada refiere haber sido víctima de delito sexual, será trasladada al centro médico para recibir atención de las lesiones físicas, si las tuviere. Los miembros del Instituto de Medicina Legal o equivalente deberán trasladarse al centro médico para aplicar el protocolo de atención a las víctimas de violencia sexual. En caso de no ser posible el traslado urgente, deberán actuarse coordinadamente con los servicios médicos a fin de asegurar la aplicación del citado protocolo.

Si la víctima manifiesta su intención de no formular denuncia, no participar en la investigación o se retracta de la denuncia interpuesta, deberá procederse conforme con lo dispuesto en los Art. 51, numeral 1) y 54 del CPP.

Víctima adolescente o menor de edad. Cuando la víctima fuere menor de edad o discapacitado, los hechos podrán ser denunciados por sus representantes legales, por la víctima o por las instituciones asistenciales, sociales y educativas o cualquier autoridad o persona que tenga conocimiento de los hechos; todo ello según las voces de los Arts. 41 de la Ley 779 y 222 CPP.

Desestimación de la denuncia. Si el hecho denunciado no constituye delito o falta o es absurdo o manifiestamente falso, la institución o autoridad facultada para DESESTIMAR LA DENUNCIA es el Ministerio Público.

De la solicitud de las medidas precautelares (Art. 27 Ley 779). En el mismo acto de la denuncia la víctima u ofendido, cualquier persona o institución actuando en nombre de ella, podrá solicitar de manera oral o escrita la aplicación de las medidas precautelares ante la autoridad competente, en ambos casos la autoridad que la recibe, levantará un acta que deberá contener:

- a) Nombres, apellidos y domicilio de la víctima u ofendida;
- b) Datos de identificación del presunto agresor, y domicilio si se conociere;
- c) Relación de los hechos denunciados e indicar los elementos de prueba que lo sustente;
- d) Descripción de las medidas precautelares aplicables; y
- e) Lugar para recibir notificaciones.

Aplicación de las medidas precautelares (Art. 28 Ley 779). Presentada la solicitud, la autoridad competente ordenará de inmediato la aplicación de cualquiera de las medidas solicitadas. No obstante, sin perjuicio de lo solicitado por la parte, la autoridad competente podrá ordenar de oficio la aplicación de otras medidas en función de la protección de la integridad física, psíquica, sexual y patrimonial de la víctima.

La resolución que ordena la aplicación de una medida precautelar, deberá notificarse y ejecutarse dentro de las siguientes veinticuatro horas de dictada y no cabrá recurso alguno contra ella.

La resolución se notificará al denunciado o acusado, de manera personal por medio de la Comisaría de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia o de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional o el Ministerio Público. La notificación se podrá realizar en el domicilio o en cualquier lugar donde se encuentre el presunto agresor y a cualquier hora para los delitos establecidos en la presente Ley.

Medidas precautelares (Arts. 23 y 24 Ley 779). Cuando se estuviere en presencia de acciones u omisiones que puedan constituir delitos a que se refiere esta Ley, la Policía Nacional a través de la Comisaría de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, los Jefes de Delegaciones Distritales y Municipales o el Ministerio Público, podrán ordenar y adoptar las medidas precautelares siguientes:

- a) Ordenar el abandono inmediato del hogar al presunto agresor, independientemente de su titularidad, en tanto la violencia es un riesgo para la integridad, física, psíquica, sexual y el patrimonio de la mujer. El presunto agresor no podrá retirar los enseres domésticos o menaje de casa. Únicamente se le autorizará llevar sus bienes de uso personal, instrumentos, herramientas de trabajo y estudio;
- b) Prohibir o restringir la presencia del presunto agresor en la casa de habitación, centro de trabajo, estudio, lugares habitualmente frecuentados por la mujer o cualquier lugar donde ella se encuentre, dentro de un radio mínimo de doscientos metros. Cuando el presunto agresor y la víctima laboren o estudien en el mismo centro, se ordenará esta medida adecuándola para garantizar la integridad de la mujer;
- c) Ordenar el reintegro de la mujer al domicilio donde se le impida su ingreso o de donde fue expulsada con violencia, intimidación o cualquier medio de coacción, independientemente de la titularidad del bien inmueble. En la misma resolución se ordenará la salida del presunto agresor;

- d) Garantizar a la víctima la atención médica, psicológica y psiquiátrica necesaria;
- e) Ordenar el examen médico, psicológico y social a los niños, niñas y adolescentes víctimas directas e indirectas en hechos de violencia y brindarles su debida atención;
- f) Solicitar la intervención del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez en caso de denuncia de vulneración de derechos de niños, niñas. Así mismo se podrá solicitar la colaboración de organismos especializados que brinden apoyo, protección, asesoría, consejería y seguimiento necesario;
- g) Prohibir al presunto agresor realizar actos de intimidación, persecución, acoso o perturbación contra la mujer, cualquier miembro del grupo familiar o las personas relacionadas con la denunciante, ya sea por sí mismo o a través de terceros, por cualquier medio electrónico, escrito y audio visual;
- h) Secuestrar y retener inmediatamente las armas de fuego o armas cortopunzantes y contundentes que se encuentren en manos del presunto agresor, independientemente de que porte o no permiso; y de su profesión u oficio. En todos los casos las armas retenidas deberán ser remitidas a la Policía Nacional y su destino se determinará de acuerdo a las disposiciones de la Ley No. 510, "Ley Especial para el Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados"; Ley No. 872, "Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional"; Ley No. 406, "Código Procesal Penal de la República de Nicaragua" y Ley No. 641, "Código Penal";
- i) Prohibir al presunto agresor que introduzca o mantenga armas en la casa de habitación para intimidar, amenazar o causar daño a alguna de las personas integrantes del grupo familiar;
- j) Levantar un inventario de los bienes muebles existentes en el domicilio familiar, a fin de salvaguardar el patrimonio de la mujer y sus hijos. Esta medida se ejecutará cuando se aplique la medida del literal a) y c) de estas medidas; y,
- k) Ordenar que la mujer pueda llevar consigo, aquellos bienes que garanticen su bienestar y del grupo familiar, cuando decida, por razones de seguridad, salir del hogar que comparte con el agresor.

Las medidas anteriores solamente podrán ser adoptadas observando criterios de proporcionalidad, racionalidad, necesidad y urgencia.

Duración de las medidas precautelares (Art. 26 Ley 779). Las medidas precautelares se aplicarán a solicitud de la víctima u ofendida o por cualquier persona o Institución actuando en nombre de ella, de forma preventiva por un plazo máximo de veinte días, el cual podrá ser prorrogado por una sola vez. La resolución que ordena las medidas o la prórroga de éstas, deberá dictarse de forma motivada.

Iniciado el proceso penal, a petición de parte, el Juez o Jueza resolverá sobre el mantenimiento de todas o alguna de las medidas precautelares aplicadas, de acuerdo a la naturaleza del proceso que es objeto de su competencia.

En su resolución el Juez o Jueza al ratificar las medidas precautelares y ordenar las medidas cautelares, lo hará bajo la debida motivación, justificando que sean proporcionales y necesarias, estableciendo el plazo de duración, que no podrá ser mayor de un año.

El Juez o Jueza deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cada tres meses y cuando cesen o se modifiquen sustancialmente los presupuestos de su resolución, las sustituirá por otras menos gravosas. En cualquier momento procederá la revisión extraordinaria de medidas, a solicitud de parte.

Si el hecho correspondiese a violencia intrafamiliar o sexual, deberá procederse según lo dispuesto en el Código Procesal Penal vigente, teniendo siempre en cuenta la perspectiva de género en cada acto de investigación, así como la reserva de información y la preservación de la identidad de las víctimas y sobrevivientes de violencia en todos los casos; haciendo uso y manejo, si se requiriese, de los servicios especializados del Albergue que se encuentra bajo la administración, regulación y control de la Dirección Comisaría de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, así como de la Línea Telefónica 122 de Emergencia.

Actuaciones en el lugar de los hechos

En la investigación recogerán todas las evidencias posibles tales como: sangre, elementos pilosos, semen, saliva, fibras, uñas, tierra o cualquier otro objeto que ayude a establecer la presencia del presunto agresor o de la víctima en el lugar de los hechos.

En caso de encontrar armas, deberá extenderse acta haciendo constar tipo y características del arma, lugar de hallazgo y estado en que se encuentra.

Se levantará acta que recogerá una descripción del lugar de comisión de los hechos, del estado físico en que se encuentra (referencia a posible rotura de cristales, objetos rotos o desordenados...). Se fotografiará la escena del crimen.

Podrá fotografiarse a la víctima del delito cuando resulte difícil su traslado a centro de salud por razón de la ubicación geográfica de la víctima o cuando exprese su negativa a ser examinada por el/la médico/a forense. Para ello será preciso el consentimiento informado de la víctima y la incorporación de las fotos a las actuaciones con la debida garantía a la privacidad y al derecho a la propia imagen, de acuerdo a los respectivos ordenamientos jurídicos.

Se incautarán los objetos relacionados con el delito, debiendo preservar la cadena de custodia.

4. Particularidades de la investigación en los delitos de violencia de género

En el delito de femicidio

Por femicidio se entiende la muerte violenta de una mujer, por el mero hecho de serlo. Se trata de una categoría jurídico política que evidencia la violencia extrema ejercida sobre las mujeres por la inequidad de género e incluye todas las muertes de mujeres causadas en el ámbito de las relaciones de pareja, muertes violentas en serie y muertes de mujeres en el marco del crimen organizado, tráfico de drogas, tráfico de personas, prostitución o explotación sexual de niños, niñas o adolescentes o de mujeres adultas mayores.

De conformidad con el Art. 34 del Reglamento a la Ley 779

Para la calificación del delito de **femicidio**, éste debe cometerse por un hombre en contra de una mujer en el marco de las relaciones interpersonales de pareja y que como resultado diere muerte a la mujer, en las siguientes circunstancias:

1. Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja de intimidad con la víctima;
2. Mantener en la época en la que se perpetre el hecho o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia de intimidad o de noviazgo;
3. Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima;
4. Por el menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, o la comisión de actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación, en una relación de pareja;
5. Por misoginia en una relación de pareja;
6. Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la pareja.

La investigación del delito de femicidio o de tentativa de femicidio se iniciará de oficio tan pronto como se tenga conocimiento o sospecha del delito y cualquiera que sea el medio por el que se haya tenido conocimiento de la muerte, incluidos los medios de comunicación.

Los servicios de policía que acudan a la escena del crimen deben de proceder inmediatamente a su preservación.

Deberán comprobar si la persona presenta signos de vida y solicitar urgentemente asistencia sanitaria para su traslado al centro médico más cercano. En todo caso custodiarán la escena del delito para conservar las pruebas. Deberán avisar sin dilación al/ la fiscal o autoridad competente, encargado/a de la dirección de la investigación.

La investigación en el lugar de los hechos corresponde a la Policía Nacional, bajo la dirección del Ministerio Público, siendo la encargada de realizar una primera inspección del lugar, recoger los primeros indicios y plantear la teoría del caso del delito, recoger la declaración de los/as testigos y proceder a la aprehensión/detención del presunto agresor.

En caso de no ser posible la presencia de las autoridades y funcionarios de la Comisaría de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, corresponderá a las autoridades de Auxilio Judicial realizar la investigación del delito. Deberán identificar los datos y testigos relevantes, proceder a la detención del presunto agresor, identificar los diversos objetos de interés para la investigación, proceder a su fijación escrita o por fotografía, recogida, conservación y entrega, siguiendo la cadena de custodia.

Toda diligencia de investigación realizada deberá hacerse constar por escrito, incluyendo datos que permitan precisar con exactitud la hora de llegada y la ubicación de la escena.

Además de otro tipo de evidencias, en este tipo de investigación se solicitará la fijación, recolección y embalaje de rastros de sangre en el lugar de la investigación para establecer a quien pertenecen y proceder a su posterior comparación, si fuera necesario.

En caso de fallecimiento, el levantamiento del cadáver será practicado en todo caso por representante del Instituto de Medicina Legal (IML), quien procederá a la fijación y levantamiento de evidencias en el cadáver, a su recolección y embalaje. En el caso de existir indicios como folículos pilosos, fibras, hisopos de uñas, fluidos biológicos, ropas u otros objetos se pondrán a disposición de la autoridad para su envío a los laboratorios de criminalística, garantizando la cadena de custodia.

Deberá identificarse el cadáver, recogiendo sus características fisonómicas, señas particulares, complexión, tomando fotografías y la ficha decadactilar.

El/la profesional del IML llevará a cabo una exploración ginecológica para recoger las muestras biológicas que puedan determinar la existencia, en su caso, de contacto sexual previo a la muerte.

La autopsia médico - legal tendrá como finalidad determinar la causa de la muerte, así como describir la concurrencia de lesiones innecesarias para causar la muerte o mutilaciones en su cuerpo, lesiones con características de forcejeo o lucha, posibles indicios de delito sexual, uso de armas o lesiones previas propias de un maltrato habitual, todo ello con el objeto de comprobar el posible Femicidio

La autoridad policial deberá informar a la familia de la víctima de las circunstancias de la muerte, de los derechos que les asisten como familiares de víctimas de violencia,

incluidas las medidas precautelares en violencia de género o de protección de urgencia en casos de violencia intrafamiliar que pueden solicitarse en caso de riesgo de nuevas intimidaciones o revictimizaciones y las indemnizaciones que les correspondieran.

En caso de tentativa de femicidio/homicidio

- a) Si la víctima hubiera sufrido lesiones como consecuencia del acto, las autoridades policiales se apoyarán fundamentalmente en los dictámenes médicos para diferenciar el hecho como delito de homicidio/femicidio en grado de tentativa o como delito de lesiones en sus respectivos grados y con sus correspondientes agravantes.
- b) El informe del Instituto de Medicina Legal deberá establecer pautas para la valoración del riesgo vital de las lesiones sufridas. Se valorará especialmente el lugar o zona del cuerpo afectado por la acción agresiva y su vulnerabilidad e importancia para la vida de la víctima; la clase, características y dimensiones del arma o instrumento empleado y si ésta es idónea para causar resultados mortales; la dirección, número y violencia de los golpes; la fuerza empleada y la gravedad de las lesiones sufridas.
- c) Con el fin de valorar las circunstancias y motivación del delito se deberán tomar en consideración los siguientes factores: condiciones del lugar y tiempo de comisión del delito; las circunstancias conexas con la acción; las manifestaciones del propio autor, en particular las palabras precedentes y acompañantes a la agresión, así como la actividad anterior y posterior al delito, tales como insultos, provocaciones o amenazas; las relaciones previas existentes entre el imputado y la víctima; la causa del delito; la intervención posterior del agresor, auxiliando o desatendiendo a la víctima, pese a comprender la gravedad del acto y las personalidades de autor y víctima.
- d) Durante la práctica de las diligencias de investigación se extremarán las cautelas para evitar la confrontación visual entre la víctima sobreviviente y el presunto agresor. Se servirán del método de video conferencia, sistemas de grabación o circuitos internos de televisión.
- e) La Policía Nacional velará para que la víctima sobreviviente, sus familiares y los / as testigos estén protegidos durante toda la investigación y el procedimiento frente al riesgo de nuevas agresiones, presiones o intimidaciones del presunto agresor o de su entorno.
- f) Especial atención se tomará sobre niños, niñas y adolescentes descendientes de la víctima y el presunto agresor. Se les deberá garantizar desde el primer momento de conocido el hecho protección, seguridad y acompañamiento especializado garantizando su permanencia temporal o definitiva en el ámbito familiar más idóneo.

En los delitos de violencia doméstica o intrafamiliar

En los casos de violencia intrafamiliar, ocurridos en el interior de un inmueble se debe observar minuciosamente el desorden de muebles, objetos, camas, escaleras, cocina (objetos fracturados, objetos lanzados en el piso, manchas de sangre y cualquier indicio

que pueda ayudar en la investigación), ya que los agresores tratan de justificar o explicar las lesiones de sus víctimas de diversas maneras, dejando entrever en algunos casos, supuestos accidentes domésticos, lo que puede ser desvirtuado con una revisión exhaustiva del escenario, ya que hacen constar el estado o la situación de las cosas.

Después de conocido un hecho de Violencia Doméstica o Intrafamiliar con secuelas de lesiones leves, graves o gravísimas, se conformará el Equipo Técnico de Investigación, el cual se trasladará a la escena del crimen en el menor tiempo posible para realizar las medidas tácticas, técnicas de Criminalística (Inspección Ocular), de dirección y organización, encaminadas a la búsqueda, aseguramiento y valoración de todos los indicios y evidencias relacionadas al hecho. Todas estas medidas deben de ser inmediatas y ágiles, ya que muchos indicios y/o evidencias pueden ser destruidos y/o alterados o los testigos pueden olvidar detalles fundamentales del hecho que se investiga.

El equipo técnico de investigación estará integrado por:

- La o el investigador (a) policial, dirige el trabajo en la escena del crimen.
- El Técnico en Inspección Ocular, encargado de descubrir, revelar, fijar, extraer, recolectar y embalar los indicios físicos que tienen relación con el hecho que se investiga.
- El Conductor Operativo, encargado de conducir el vehículo y garantizar la comunicación radial con el Puesto de Mando y Órganos de Apoyo.
- En dependencia de la naturaleza del hecho delictivo se auxiliará del Fiscal del Ministerio Público, Médico Forense, y otros especialistas de diferentes materias.
- Se valora la urgencia del hecho, estableciendo una coordinación expedita con el Fiscal asignado a efectos de solicitar a la autoridad judicial competente la imposición de algunas de las medidas previstas en el Art. 111 del Código Penal.

En los delitos de Violencia Física y Psicológica

Se fotografiará a la víctima para dejar constancia de las lesiones físicas que presenta. En todo caso, será preciso que la víctima preste su consentimiento informado. Las fotos deben ser incorporadas al procedimiento garantizando el derecho de la víctima a su intimidad y a la protección de su propia imagen, de acuerdo con las cautelas previstas en cada ordenamiento jurídico.

El informe psicológico podrá ir orientado, entre otros aspectos, a valorar la afectación de la víctima para el desarrollo de su vida cotidiana o informar sobre el nexo causal entre la situación de violencia sufrida y el estado anímico de la víctima. En todo caso deberá valorarse la pertinencia y necesidad de la prueba psicológica.

En la investigación de los delitos de violencia psicológica se podrá contar con un informe psicológico que permita determinar el grado de afectación de la víctima como

consecuencia de los actos de violencia. La prueba fundamental consistirá en todo caso en acreditar la comisión de los actos de hostigamiento, amenaza o coacción que supongan un ataque a la libertad e integridad moral de la víctima con independencia del grado de afectación psicológica que tal conducta haya podido producir.

Cuando exista prueba objetiva del hecho constitutivo de delito de violencia física o delito sexual, no será preciso elaborar informe psicológico sobre el grado de afectación de la víctima, excepto cuando se estime necesario para determinar el daño moral causado y la reclamación oportuna. Recuérdese que las pruebas se valoran en su conjunto. En ningún caso el informe psicológico estará orientado a valorar la veracidad del testimonio de la víctima.

El informe de trabajo social irá orientado a la valoración psicosocial de las consecuencias de la violencia en la vida personal, familiar, laboral, afectiva, de descanso y de proyección de futuro de la víctima. A través de entrevistas a sus familiares más cercanos, compañeros / as de trabajo, vecinos / as y / o amistades se podrá valorar el impacto que la violencia ha ejercido en diversos planos de la vida de la víctima.

Se garantizará la privacidad de la práctica de la prueba pericial. La víctima no podrá ser obligada a someterse a una prueba pericial médica, psicológica o social ni ésta podrá practicarse en presencia de los / as representantes de la defensa.

No es recomendable que la víctima de violencia de género y de los delitos derivados de ello sea expuesta o sometida a la reconstrucción de los hechos, salvo que tal diligencia se considere útil, necesaria y pertinente y que la víctima manifieste su plena disposición a colaborar.

En los delitos de violencia patrimonial

Las autoridades de la Policía Nacional contribuirán con el Ministerio Público con todas las diligencias debidas para acreditar la comisión de los actos de violencia económica, de modo que siempre que la víctima refiera haber sufrido algún tipo de presión o impedimentos para el ejercicio de sus derechos económicos, deberán llevarse a cabo las diligencias de averiguación oportunas para acreditar, entre otros:

- a. Acreditación documental de negocios jurídicos por los que se impide el acceso a la titularidad de los bienes o por los que se perturba la posesión o tenencia de los bienes, por ejemplo, limitaciones a la disposición de los salarios o la existencia de cuentas bancarias de titularidad exclusiva del cónyuge o conviviente en unión de hecho estable.
- b. Prueba testifical de familiares, parientes o terceras personas que acrediten la limitación en el acceso o en la tenencia de bienes titularidad o cotitularidad de la esposa o conviviente en unión de hecho estable o actos de privación de bienes titularidad de la esposa o conviviente en unión de hecho estable.

- c. Acreditación de diferencias en el estilo de vida de ambos esposos o conviviente en unión de hecho estable, siempre que sea posible demostrar la disposición de patrimonio del esposo, frente a la situación de penuria o escasez de la víctima y sus hijos/as.
- d. En el caso de destrucción o deterioro de los bienes titularidad de la esposa o conviviente en unión de hecho estable, podrá practicarse inspección ocular en el domicilio o lugar de los hechos, que se apoyará en medios fotográficos o grabaciones que permitan acreditar el estado final de los objetos y bienes de su propiedad tras el hecho violento denunciado.

La autoridad policial podrá auxiliarse de los informes periciales de trabajo social que muestren la situación de dependencia económica, la limitación del acceso y ejercicio de los derechos patrimoniales por la víctima y cualquier otra circunstancia que revele la violencia económica a que pueda haber estado sometida.

El informe de trabajo social irá orientado a la valoración, desde un punto de vista psicosocial, de las consecuencias de la violencia económica en la vida personal, familiar, laboral y de ocio de la víctima. A través de entrevistas a sus familiares más cercanos, compañeros/as de trabajo, vecinos/as y/o amistades se podrá valorar el impacto que la violencia ha ejercido en diversos planos de la vida de la víctima.

Es importante velar porque los peritajes e informes de carácter médico, psicológico o social se correspondan con los siguientes seis criterios:

- La cientificidad
- La imparcialidad
- El profesionalismo
- La ética
- Apego a los protocolos de actuación institucionales
- Basados en los postulados de justicia.

5. Valoración del riesgo (VR) en los delitos de violencia de género

La Spouse Abuse Risk Assessment (SARA, por sus siglas en inglés) fue inicialmente diseñada para identificar el riesgo de violencia física y sexual contra la pareja en el contexto familiar y doméstico en el año 1995. Se ha adaptado al castellano (Andrés Pueyo y López, 2005) y se ha realizado una primera comprobación de su adecuación al contexto jurídico-criminológico español. Así mismo se ha contrastado su capacidad predictiva en situaciones de violencia grave y reiterada contra la pareja, demostrando una utilidad comparable, en su rendimiento a otros países en el que la SARA tiene una mayor tradición de uso profesional. En el caso de Nicaragua se retoma su naturaleza, objetivos y metodología de trabajo en el ámbito investigativo.

La violencia contra la pareja, especialmente la ejercida por el hombre sobre la mujer, es una de las formas más graves de violencia interpersonal, presenta una elevada prevalencia y numerosos interrogantes sobre su génesis, desarrollo y control. En la actualidad es una preocupación social que demanda una importante inversión en medidas socio-sanitarias para combatir sus efectos en las víctimas y también requiere múltiples recursos jurídico-penales dedicados a su erradicación. Siendo un fenómeno prácticamente universal, claramente asociado a los papeles y roles sociales de género, se ha convertido en uno de los principales motivos de malestar y sufrimiento de las mujeres que la padecen así como de sus familias. Después de un amplio debate sobre la delimitación de este fenómeno y de una consideración epidemiológica, se presenta la SARA, como una guía de valoración del riesgo de violencia contra la pareja.

En este contexto, una experta en el tema de la valoración del riesgo de violencia física sobre la pareja, J.C. Campbell, indica que se deben distinguir tres tipos de violencia contra la mujer, en el seno de la pareja y que podemos predecir diferencialmente:

- El asesinato de la pareja (femicidio)
- Nuevas agresiones físicas o sexuales sobre la pareja (violencia física o sexual)
- La reincidencia delictiva en agresores de pareja.

Cada uno de estos tipos de violencia tiene unos predictores diferentes que se encuentran organizados en instrumentos de predicción particulares.

Así, para evaluar el RIESGO DE ASESINATO se utiliza el Danger Assessment Tool (DA) (Campbell, 1995); para valorar el RIESGO DE NUEVOS ATAQUES SOBRE LA PAREJA utilizamos SARA (Kropp et. al. 1995); y para valorar el RIESGO DE REINCIDENCIA DE DELINCUENTES PENADOS POR VIOLENCIA DOMÉSTICA se utiliza el Kingston Screening Instrument for DV (KSID) (Gelles y Tolman, 1998). Cada uno de ellos tiene un conjunto de factores de riesgo comunes y específicos de la Violencia Contra la Pareja (VCP) según el comportamiento cuyo riesgo de aparición se quiere estimar.

Estos factores de riesgo se agrupan en V Secciones que son:

1. **Historial delictivo.** La existencia de una historia anterior de delincuencia, aunque no esté relacionada con delitos de agresión a la pareja está fuertemente asociado al riesgo de reincidencia en la agresión sobre la pareja. Hace referencia tanto a la historia de violencia propiamente dicha como al incumplimiento de las sentencias o medidas dictadas por un tribunal u otras instancias jurisdiccionales. Incluye tres elementos:
 - a) Violencia anterior contra los familiares, b) Violencia anterior contra desconocidos o contra conocidos no-familiares y c) Violación de la libertad condicional u otras medidas judiciales similares.

2. **Ajuste psicosocial.** Dos de los ítems de la SARA reflejan la observación que la violencia está asociada a recientes y continuados desajustes psicosociales: a) “Problemas recientes en las relaciones de pareja” y b) “Problemas recientes de empleo y trabajo”. No es muy importante, en el contexto de la valoración del riesgo, saber si el desajuste está motivado por un problema psicopatológico más o menos crónico o es producto de una situación financiera o personal de estrés grave. En cualquier caso, estos factores aparecen siempre como buenos predictores de la VCP.

Además en esta sección aparecen otros ítems como: a) “Víctima y / o testigo de violencia familiar en la infancia y/o adolescencia”, b) el “Consumo/Abuso reciente de drogas”, c) las “Ideas/intentos de suicidio y/o homicidio recientes”, d) los “Síntomas psicóticos y/o maníacos recientes” y e) el “Trastorno de personalidad con ira, impulsividad e inestabilidad conductual”.

Se considera que el trastorno mental está asociado con dificultades en el uso de las estrategias de afrontamiento y con una situación de estrés social e interpersonal acrecentado y, por eso, los individuos que tienen un trastorno mental y/o un trastorno de personalidad tienen mayor predisposición a actuar y tomar decisiones inadecuadas en situaciones de conflicto real o imaginado con la pareja (Arbach y Andres-Pueyo, 2007; Maden, 2007).

3. **Historia de violencia de pareja.** Esta sección incluye siete ítems relacionados con la violencia anterior sobre la pareja y tiene una enorme especificidad para la VCP, igual que los ítems de la primera sección. Los ítems de esta sección son: a) “Violencia física anterior”, b) “Violencia sexual y/o ataque de celos en el pasado”, c) el “Uso de armas y/o amenazas de muerte creíbles”, d) el “Incremento reciente en la frecuencia o gravedad de las agresiones”. Los tres ítems siguientes se ocupan de las conductas o actitudes que acompañan a la conducta agresiva: a) “Violaciones e incumplimientos anteriores de las órdenes de alejamiento”, b) la “Minimización extrema o negación de la violencia anterior sobre la pareja” y c) las “Actitudes que justifican o disculpan la violencia contra la pareja”.
4. **Delito/agresión actual** (que motiva la valoración). Esta sección comprende tres ítems similares en cuanto a su contenido a otros que aparecen en la sección anterior, pero que hacen referencia exclusiva a la agresión más reciente o la que ha motivado la valoración: a) “Violencia sexual grave”, b) “Uso de armas y/o amenazas de muerte creíbles” y c) “Violación o incumplimiento de las órdenes de alejamiento”.
5. **Otras consideraciones.** Esta sección final no contiene ningún ítem particular o específico. Está disponible para que el evaluador anote aquellas consideraciones que están presentes en un caso concreto, que comportan un alto riesgo de violencia de pareja, pero que son mucho más infrecuentes que las que se incluyen en el protocolo. Ejemplos de este tipo de aspectos son: la historia de comportamientos de acoso y persecución, antecedentes de conductas de tortura, sadismo sexual o de mutilación de las parejas sexuales u otros comportamientos similares.

Una vez concluida la etapa detallada de decisiones en torno a cada ítem y de la importancia crítica de los mismos, se debe realizar la valoración final, que consiste en decidir sobre del riesgo de violencia del caso. Conviene señalar dos cosas previas que enmarcan el resultado de la valoración. **La primera** es que cada valoración está circunscrita a una duración temporal propia del caso (a veces son 6 meses o un año), pero no se toman decisiones de validez indeterminada en el tiempo.

La segunda es que cada valoración es sobre un tipo determinado de violencia y que no se puede generalizar a otras de forma automática. Es decir, que si valoramos el riesgo de violencia sexual no podemos pretender que servirá por predecir también los maltratos psicológicos de la pareja o el riesgo de suicidio.

La tarea de resumir la valoración final del riesgo de violencia mediante el uso de esta “guía” se hace de forma no-reglada ni ponderada cuantitativamente, es decir sin seguir un algoritmo preciso de decisión, a juicio del evaluador. Generalmente se hace teniendo en cuenta el número de ítems que están presentes en la valoración y de aquellos ítems críticos destacados en la misma. La valoración final se resume en cuatro niveles:

a) Bajo, b) moderado, c) elevado, d) e inminente, muy habituales en todos los procedimientos de valoración del riesgo en ámbitos tan variados como la meteorología, la economía y otros riesgos naturales o sociales.

La última etapa del proceso de valoración del riesgo es la que corresponde a la comunicación y difusión de los resultados de la misma valoración. Hay que destacar que normalmente las valoraciones del riesgo de violencia forman parte de diferentes procesos cómo pueden ser: decisiones policiales, de protección y de seguridad, en procedimientos judiciales o penitenciarios, revisiones forenses de situaciones personales de agresores y víctimas, servicios de atención a las víctimas, etc.

Son, por lo tanto, unas valoraciones dirigidas a responder a demandas que hacen agentes externos a los responsables de las valoraciones. Conviene señalar que la información que se puede dar de estas valoraciones, por su propia naturaleza, está condicionada a la duración temporal del pronóstico y a la relatividad probabilística de que suceda, puesto que la predicción del riesgo de violencia no determina la ocurrencia de un hecho concreto sino que estima la probabilidad de que suceda dicha conducta.

Todo este proceso permite al evaluador, más que a cualquier otro profesional, inferir elementos de gestión del riesgo de comportamientos violentos para su posterior aplicación. Haber analizado exhaustivamente la historia del agresor, haber profundizado en el estado clínico del mismo en el momento de la valoración y haber especulado sobre el futuro de este sujeto en condiciones y escenarios diferentes, permite realizar propuestas de gestión del riesgo muy individualizadas y, por lo tanto, prácticas para todos aquellos responsables de la violencia contra las mujeres.

Valoración del riesgo o grado de peligrosidad del agresor

Para valorar los riesgos y el grado de peligrosidad que corre la víctima ante la situación de violencia que está viviendo, se aplicará la siguiente guía de Letalidad:

- a) La frecuencia del uso de la violencia por parte del hombre está aumentando.
- b) La gravedad de la violencia del hombre está aumentando.
- c) El hombre frecuentemente se intoxica con alcohol y usa drogas.
- d) El hombre amenaza con lastimar a los hijos o hijas.
- e) Las hijas (os) están presentes en los episodios de violencia contra su madre.
- f) Intervienen las hijas (os) en los episodios de violencia contra su madre.
- g) El hombre amenaza con matar a la mujer o a otras personas.
- h) El hombre usa fuerza o amenazas para tener relaciones sexuales.
- i) Hay amenazas o intentos de suicidio por parte del hombre o de la mujer.
- j) Hay armas en la casa o son accesibles.
- k) Antecedentes de problemas psiquiátricos en el hombre o la mujer.
- l) Alto nivel de proximidad del hombre y la mujer (si trabajan o viven juntos o muy cerca).
- m) Necesidad del hombre de controlar el contacto con los niños y niñas.
- n) Episodios recurrentes de estrés en la vida de la mujer y el hombre.
- o) Historia criminal previa del hombre.

Si la víctima responde positivamente a tres de las preguntas arriba señaladas se puede considerar que está en una situación de alto riesgo. En estos casos se requiere la toma inmediata de acciones de protección para la mujer y sus hijos e hijas aplicando, medidas de protección de urgencia para la víctima de violencia doméstica o intrafamiliar (Art. 111 Código Penal), por consiguiente se hace necesario la búsqueda de recursos de ubicación temporal (albergue, casa de familia, casa de amigos, otros).

En resumen

Sobre el tema de la Valoración del Riesgo (V.R.)

Una vez conocido el hecho, constitutivo de violencia de género, por cualquiera de los medios o formas previstas en la ley, la autoridad policial deberá:

- a) Realizar una primera Valoración del Riesgo, a fin de adoptar las medidas precautelares correspondientes o solicitar las medidas de protección y/o cautelares más adecuadas, sin perjuicio de las que se adopten posteriormente con el resultado de las diligencias de investigación.
- b) Dentro de su marco de actuación, la Policía Nacional procederá de manera inmediata a destinar a una trabajadora social y / o psicóloga, con el propósito que se integre al Equipo Técnico de Investigación y en el lugar del suceso elabore un “diagnóstico básico operativo” donde establezca la Valoración del Riesgo de violencia.

- c) Para los efectos anteriores, la trabajadora social y/o psicóloga de la Comisaría de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia de la Policía Nacional utilizará la Guía de Valoración de Riesgo de Violencia establecido en la Spouse Abuse Risk Assessment (SARA, por sus siglas en inglés)
- d) En la valoración del riesgo se tomarán en cuenta diversos indicadores relativos a la víctima y al presunto agresor, a la relación previa existente entre ambos y al tipo de violencia ejercida. A cada indicador se le atribuye un valor a asignar por la persona encargada de realizar la valoración. En función de la valoración final se podrá asignar un riesgo bajo, medio o alto de sufrir una nueva agresión. Se incluye modelo de valoración del riesgo en el presente Protocolo, sin perjuicio de futuros ajustes.
- e) La valoración del riesgo será, en todo caso, objeto de reevaluación si se produjeran nuevos ataques.
- f) La escala de valoración del riesgo presentada podrá complementarse con la elaborada por otras instituciones relacionadas con la prevención, atención y sanción de la violencia de género.
- g) La autoridad policial tomará en consideración el resultado de la escala obtenido a fin de decidir sobre la medida precautelar, de protección o cautelar a adoptar o solicitar a la autoridad competente.

Gráficos ilustrativos sobre factores de Valoración del Riesgo

Figura 1. Violencia de género, violencia contra la pareja y violencia familiar: intersección de los tres fenómenos

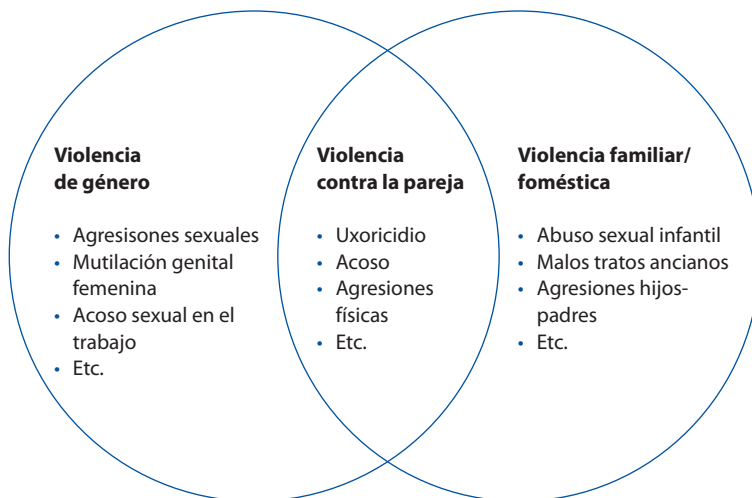


Tabla 1. Factores de riesgo de violencia contra la pareja descritos a partir del Meta-análisis de Stith (2004). Hay que destacar que únicamente se incluyen definiciones genéricas de los factores de riesgo y así mismo que los factores pueden tener relaciones positivas o negativas con respecto a la VCP. Los factores en negrita son predictores más potentes. La organización de los mismos se ajusta a la clasificación de Bronfenbrenner (ver texto)

	Macro-sistema	Exo-sistema	Micro-sistema	Ontogenético (individual)
Agresor	<ul style="list-style-type: none"> • Cultura • Valores sociales • Ideología • Creencias sociales 	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo • Nivel educativo • Estrés laboral/vital • Violencia contra familiares (no-pareja) • Ingresos económicos • Detenciones anteriores • Edad 	<ul style="list-style-type: none"> • Víctima infantil de abusos • Relaciones sexuales forzadas • Acoso • Satisfacción pareja • Separación pareja • Control sobre la pareja • Maltrato animales • Celos • Abuso emocional y/o verbal • Historial de agresiones sobre la pareja 	<ul style="list-style-type: none"> • Abuso drogas ilegales • Odio/hostilidad • Actitudes disculpen la violencia contra las mujeres • Ideología tradicional en roles sexuales • Depresión • Abuso de alcohol • Empatía
Víctima	<ul style="list-style-type: none"> • Cultura • Valores sociales • Ideología • Creencias sociales 	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo • Nivel educativo • Ingresos económicos • Ayuda social • Edad 	<ul style="list-style-type: none"> • Satisfacción pareja • Separación pareja • Núm./presencia hijos • Violencia contra la pareja 	<ul style="list-style-type: none"> • Miedo • Embarazo • Odio/hostilidad • Abuso drogas ilegales • Actitud disculpa la violencia contra las mujeres • Abuso de alcohol • Depresión

En los delitos de violencia sexual contra mujeres, niñas, niños y adolescentes

Por su naturaleza y características de comisión y bien jurídico lesionado, los delitos contra la libertad e integridad sexual previstos en el Código Penal (*Violación; Violación a menores de catorce años; Violación agravada; Estupro; Estupro agravado; Abuso sexual; Incesto; Acoso sexual; Explotación sexual, pornografía y acto sexual con adolescentes mediante pago; Promoción del Turismo con fines de explotación sexual; Proxenetismo; Proxenetismo agravado; Rufianería y Trata de personas...*) provocan un grado de lesión muchas veces irreversible, particularmente en la esfera psíquica y es lo que actualmente se denomina científicamente como el “daño psíquico.”

Un delito sexual no solo es invasivo al cuerpo, sino a los sentimientos, a los proyectos de vida, a la esperanza y confianza depositada muchas veces en la persona agresora. Todo este conjunto de cosas se traduce en un trauma que en griego significa “lesión.”

La evaluación física de la víctima debe determinar la existencia de lesiones extragenitales, paragenitales e intragenitales, tiempo de evolución y sanación así como las secuelas de las mismas.

El informe referirá también la presencia, en su caso, de sustancias tóxicas en la víctima así como otros datos relevantes para el caso. Se podrán practicar análisis de orina, de sangre o tomar muestras de cabello para analizar la presencia de sustancias tóxicas.

En el caso de que la víctima sea niño, niña o adolescente, el examen médico, si se realizara, se llevará a cabo por especialistas en atención a la niñez y la adolescencia o pediatras especializados en este tipo de atención.

En la investigación de los delitos de violación, la inspección o examen de la escena debe realizarse en objetos, instrumentos, restos, rastros o cualquier otro elemento (ropas no lavadas que usaba la víctima o el victimario al momento del hecho, fundas, sábanas, papel higiénico, colillas de cigarrillos, manchas hemáticas de sangre, manchas de semen, saliva, cabello púbico, huellas dactilares, elementos pilosos u otros elementos que contribuyan a identificar al agresor y el lugar donde ocurrió el hecho, así como otras sustancias), que pueda ser analizado en el Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses, para su debida interpretación científica en la resolución del hecho.

Entre las diligencias que el/la investigador/a policial debe asegurar están:

- Garantizar la preservación de la identidad de la víctima.
- Ocupar las piezas de convicción correspondientes, utilizando la técnica y el procedimiento establecido, evitando contaminar o alterar la sustancia o medio de prueba.
- Remitir estas piezas al Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses de la Policía Nacional para su correspondiente análisis.
- Respete su vida íntima, privada y la de su familia.
- Evitar la publicación y divulgación de cualquier dato de la investigación o del proceso que directa o indirectamente posibilite su identidad. La violación de la presente disposición conlleva responsabilidad administrativa, civil y/o penal.
- Evitar exponer a la víctima ante los medios de comunicación social.
- Cuidar de los datos de la investigación, a fin que no sean del manejo de terceros, particularmente de las redes sociales.
- Cuidar de no remitir datos de la víctima vía electrónica, a menos que sea indispensable para el esclarecimiento de los hechos, debiendo tomar todas las precauciones del caso, evitando divulgar información vía chats a personas ajenas a la investigación, dejar correos electrónicos abiertos, laptop, tablets o computadoras de escritorio con información expuesta o en teléfonos, expedientes sobre los escritorios cuando no se esté trabajando en ellos, sobre todo a la hora de almorzar o salidas fuera de la unidad policial.

6. Del anticipo jurisdiccional de prueba (Arts. 44 Ley 779 y 202 CPP)

¿Qué es anticipo jurisdiccional de prueba personal?

Es una diligencia de carácter procesal penal practicada en situaciones extraordinarias. Es decir, no siempre!

¿Quién puede solicitar el anticipo jurisdiccional de prueba?

- a) El Fiscal o,
- b) El Abogado particular

¿A quién se le solicita la autorización de esta diligencia?

A la autoridad judicial competente.

(Si ya se inició el proceso penal, éste debe recibir la declaración, citando a las partes, salvo en casos de extrema urgencia)

¿Y si el proceso penal aún no ha iniciado?

En este caso, la Policía Nacional o el Ministerio Público pueden solicitar al Juez la práctica de esta diligencia.

¿Cómo se solicita?

- a) Si fuese en Audiencia, se hace ORALMENTE.
- b) Si fuese fuera de Audiencia, se hace por ESCRITO, o
- c) Verbalmente en caso de extrema urgencia.

¿En qué situaciones puede solicitarse el anticipo de prueba, SEGÚN LEY 779?

Cuando la víctima o testigo corra peligro de ser expuesto a presiones mediante:

- a) Violencia
- b) Amenaza
- c) Oferta o promesa de dinero
- d) Otros beneficios parecidos.

¿En qué otras situaciones puede solicitarse el anticipo de prueba?

Por razones de:

- a) Reprogramación
- b) Suspensión o interrupción del juicio
- c) Que la víctima se vea imposibilitada de presentarse
- d) Que la víctima no pueda prolongar su permanencia en el juzgado para acudir a la nueva convocatoria de juicio
- e) Cuando el domicilio de la víctima esté alejado del juzgado

- f) Que haya poco acceso a los medios de transporte, por ser estos limitados.
- g) No disponer de recursos económicos suficientes para garantizar su estadía y alimentación.

¿En qué delitos puede pedirse el anticipo jurisdiccional de prueba?

En los delitos previstos en los Arts. 9 al 18 de la Ley No. 779.

¿En qué situaciones puede solicitarse el anticipo de prueba personal, SEGÚN EL CPP?

- a) Cuando se enfrente inminente peligro de muerte del testigo
- b) Si el testigo tuviese la condición de no residente en el país
- c) Cuando se encuentre imposibilitado de prolongar su permanencia hasta el momento del Juicio
- d) Cuando el testigo no pueda concurrir al juicio por razones de caso fortuito o fuerza mayor.

En cuanto al procedimiento:

- 1) En este último caso (inc. d) la parte interesada solicitará al juez recibir la declaración del testigo en el lugar que se encuentre.
- 2) Si aún no se ha iniciado proceso, la Policía Nacional o el Ministerio Público pueden solicitar al juez la práctica de esta diligencia.
- 3) El juez practicará la diligencia, si la considera admisible, citando a todas las partes, si las hubiere, quienes tendrán derecho de participar con todas las facultades y obligaciones previstas en el Código Procesal Penal.
- 4) En casos de *extrema urgencia*, la solicitud podrá ser formulada verbalmente y se podrá prescindir de la citación a las demás partes. Sin embargo concluido el acto se les deberá informar de inmediato y si aún fuere posible podrán éstas pedir la ampliación de la diligencia.
- 5) De igual forma se procederá cuando quien estuviere en inminente peligro de muerte sea un perito que ya hubiere practicado el examen objeto de la pericia y éste fuere irreproducible.
- 6) *Este tipo de prueba anticipada podrá ser introducida lícitamente en el Juicio, solamente cuando el testigo o el perito estén imposibilitados de comparecer al mismo.*

De la dirección de la investigación

La víctima tendrá derecho a ser informada de la marcha de la investigación aunque no intervenga representada por Abogado/a en el proceso. En cualquier momento que solicite información, deberá prestársele de forma clara, concisa y accesible. A tal efecto se tomarán en consideración posibles aportes que la víctima realice a la marcha de la investigación a fin de incorporar nuevos medios de prueba.

Fin de la investigación

Finalizada la investigación, el/la fiscal realizará el acto conclusivo: formular acusación, archivo fiscal, desestimación o sobreseimiento de las actuaciones u optar por alguna de las manifestaciones del Principio de Oportunidad. En todo caso, la finalización del proceso se realizará incorporando la perspectiva de género en el Informe Policial (Art. 228 CPP).

IV. Bibliografía

1. DCMN. (2003) Protocolo, Normas y Procedimientos de Atención Integral para Sobrevivientes de Violencia Intrafamiliar y Sexual. Managua Nicaragua. Segunda Edición. (Versión digitalizada por la Inspectora Dora Alicia Roa – documento utilizado como base para el actual documento).
2. DCMN. (2003) Manual de Procedimientos Policiales para la Atención Especializada a Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Intrafamiliar y Sexual. Policía Nacional, Auxilio Judicial, Comisaría de la Mujer y la Niñez. Managua, Nicaragua.
3. DCMN (2007-2008) “Sistematización del Trabajo Social y Psicológico de las Comisarías en Nicaragua”. Dirección de la Comisaría de la Mujer y la Niñez Managua Nicaragua.
4. DCMN (2007-2008) Memoria: Curso de Entrevista. Impartido por Especialistas de la Cooperación de Suecia. (Documento base que fue utilizado como manual del curso y que sirvió de base para las posteriores memorias) Dirección de la Comisaría de la Mujer y la Niñez Managua Nicaragua.
5. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer o CETFDCM (también conocida como la CEDAW, por sus siglas en inglés).
6. Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicar la Violencia hacia la Mujer (OEA, Belém do Pará, 1994).
7. Convención sobre los Derechos del Niño (ONU).
8. Protocolo facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, ONU.
9. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional.
10. Protocolo Regional para la Investigación con Perspectiva de Género de los delitos de Violencia contra las Mujeres cometidos en el ámbito intrafamiliar (COMJIB-EUROsociAL II).
11. Constitución Política de la República de Nicaragua, 2014.
12. Código Penal de la República de Nicaragua (Ley 641).
13. Código Procesal Penal de Nicaragua (CPP).
14. Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 287).
15. Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres y de Reformas a la Ley No. 641, “Código Penal” (Ley No. 779).
16. Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional (Ley 872).
17. Ley de Prevención, Investigación y Persecución del crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, decomisados y Abandonados: (Ley No. 735).

18. Reglamento de la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, decomisados y Abandonados (Decreto No.70-2010).
19. Reglamento a la Ley 779, Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres de Reformas a la Ley No. 641, Ley del "Código Penal".
20. Política de Estado para el Fortalecimiento de la Familia Nicaragüense y Prevención de la Violencia (Decreto No. 43-2014).
21. Acuerdo Ministerial del Ministerio de Salud (Decreto No. 67-96).

V. Anexos

1. Marco conceptual

Conceptos Básicos

Género. De conformidad con la Política de Género de la Policía Nacional, es una variable de análisis, que analiza las relaciones desiguales entre hombres y mujeres construidas cultural y socialmente, que varía en el tiempo y el espacio. Este marco de análisis sitúa las relaciones de mujeres y hombres en el contexto histórico y permite valorar los procesos y relaciones que reproducen y potencian las desigualdades entre ambos sexos, visibilizando el tema del poder que subyace en las relaciones de género. Es importante entonces retomar esta variable de análisis para la evaluación del desempeño, selección de personal, entre otros y entender el origen de los problemas que se enfrentan en este ámbito.

Igualdad de género. Esto supone que los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de las mujeres y los hombres se consideren, valoren y promuevan de igual manera, es decir que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no dependan si han nacido hombres o mujeres y que los seres humanos son libres para desarrollar sus capacidades personales y tomar decisiones.

Equidad de género. Se entiende como el tratamiento justo a mujeres y hombres de acuerdo a sus necesidades diversas por género, implica la posibilidad de tratamientos diferenciados para corregir desigualdades y eliminar las barreras existentes que promueven las desigualdades en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades.

Transversalización. Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que la de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en

todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los géneros.

Empoderamiento. Es un proceso de cambio que transforma la subordinación, subvaloración e inseguridad de las mujeres en su autovaloración, participación, toma de decisiones y fortalecimiento de la autoestima. Esto empodera a las mujeres policías a nivel del conocimiento y genera procesos de autoconciencia en la defensa de sus derechos; su trabajo es reconocido, se incrementa el acceso a nuevos y mejores cargos a todos los niveles en la toma de decisiones y cadena de mando, visibilizando la competencia de las mismas a nivel interno y externo de la institución, y el acceso a grados; lo que fortalece la autoestima y les genera seguridad, confianza, valoración y respeto de sí mismas promoviendo a su vez el respeto hacia los y las demás.

Violencia contra la mujer. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), en su Art. 1, establece que *para efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.*

Violencia doméstica o intrafamiliar. De conformidad con el Código Penal vigente (Art. 155) la comete quien ejerza cualquier tipo de fuerza, violencia o intimidación física o psicológica, en perjuicio de quien haya sido su cónyuge o conviviente en unión de hecho estable o contra la persona a quien se halle o hubiere estado ligado de forma estable por relación de afectividad, niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, sobre las hijas e hijos propios del cónyuge, conviviente o sobre ascendientes, descendiente, parientes colaterales por consanguinidad, afinidad, adopción, o sujetos a tutela. En el caso de niños, niñas y adolescentes, no se podrá alegar el derecho de corrección disciplinaria.

Violencia de Género. Es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico, sexual o patrimonial para la mujer, así como la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, siempre que se cometa en el marco de una relación de afectividad, con o sin convivencia, sea actual o pasada.

Incluye también en su ámbito de aplicación los actos de violencia contra las mujeres cometidos por familiares y miembros del mismo hogar por razón de discriminación de género o en el marco de relaciones de poder asimétricas.

Mediación previa. Es aquella que se realiza ante el Ministerio Público previo al ejercicio de la acción penal.

Mediación durante el proceso: es aquella que se realiza una vez iniciado el proceso, es decir, cuando el juez admite la acusación en audiencia oral y pública.

Consejería familiar. Es un proceso a través del cual se escucha, acompaña, orienta o aconseja a una persona, pareja o grupo familiar para que reconozcan las causas de los problemas que les puede estar produciendo cualquier tipo de alteración en las relaciones interpersonales dentro de su dinámica familiar y les facilita mecanismos para el establecimiento de compromisos y planes de crecimiento familiar, basados en la comunicación, el respeto, el apoyo mutuo y el amor.

Femicidio. Delito cometido por un hombre en contra de una mujer en el marco de la relaciones interpersonales de pareja y que como resultado diere muerte a la mujer, en las circunstancias que la Ley (779) establece.

Relación desigual de poder. Es aquella ejercida por el hombre contra una mujer en lo físico, sexual, psicológico, patrimonial, económico, social, familiar, laboral, político, cultural y religioso de forma coercitiva, capaz de afectar la conducta, el pensamiento y los sentimientos de otras personas y que tengan por finalidad el control o dominio que conducen a la sumisión de la mujer, discriminación y desigualdad en su contra.

Relación interpersonal. Es aquella que nace de las relaciones de pareja, de convivencia entre un hombre y una mujer, entiéndase, relaciones afectiva con el esposo, ex-esposo, conviviente, ex conviviente, novio o ex novio.

Prevención de la violencia. Políticas, Programas y Acciones de educación, información, orientación y acompañamiento, dirigidas a evitar la reproducción y las probabilidades de aparición de situaciones conflictivas con el objetivo de incidir en la erradicación de la violencia contra las mujeres, interviniendo desde las causas y raíces culturales identificadas en la misma. Se dirigen a transformar el entorno de riesgo y a fortalecer las habilidades y condiciones de las personas y las comunidades, asegurando una identificación rápida y eficaz, así como la reducción de los impactos y secuelas cuando se presente el problema.

Patrimonio familiar. Son aquellos bienes muebles e inmuebles adquiridos por los cónyuges, ex cónyuges, unión de hecho, ex convivientes en unión de hecho, relación de consanguinidad hasta el cuarto grado y segundo de afinidad, que se utilicen o hayan sido utilizados para el uso, goce, disfrute y satisfacción de sus necesidades.

Ámbito de aplicación del Reglamento a la Ley 779. Para los efectos de la Ley y el Reglamento, serán aplicables a quien se halle o hubiere estado ligado por relación de consanguinidad, afinidad, sujetos a tutela, cónyuge, ex - cónyuge, conviviente en unión de hecho, ex - conviviente en unión de hecho, novios, ex - novios.

Violencia Física. Es toda acción u omisión que pone en peligro o daña la integridad corporal de la mujer, que produzca como resultado una lesión física.

Violencia Psicológica. Acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, decisiones y creencias de la mujer por medio de la intimidación, manipulación, coacción, comparaciones destructivas, vigilancia eventual o permanente, insultos, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud mental, la autodeterminación o su desarrollo personal.

Violencia Sexual. Toda acción que obliga a la mujer a mantener contacto sexual, físico o verbal, o participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad o su libertad sexual, independientemente que la persona agresora pueda tener con la mujer una relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco.

Delimitación del concepto de víctima (según las Guías de Santiago sobre Protección de Víctimas y Testigos). Los sistemas jurídicos y las estructuras en las que actúa el Ministerio Público no pueden conformarse con asumir un concepto restringido de víctima que se limite a contemplar como tal al sujeto pasivo de una conducta delictiva. La realidad del delito genera la existencia de víctimas directas e indirectas, pasando a serlo cualquier afectado por su comisión. En definitiva, víctima es cualquier persona que ha sufrido menoscabo en sus derechos como consecuencia de un delito.

Víctimas de Violencia. Se denomina a las mujeres, niñas, niños y adolescentes que son objeto o blanco de la agresión, producto de un proceso de subordinación y desempoderamiento que las coloca en posición de víctimas.

Violencia en el Ejercicio de la Función Pública contra la Mujer. Es aquella realizada por autoridades o funcionarios públicos, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar, denegar o impedir que las mujeres tengan acceso a la justicia y a las políticas públicas.

Violencia Laboral. Es la que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, salario digno y equitativo, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, esterilización quirúrgica, edad, apariencia física, realización de prueba de embarazo o de Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH/SIDA u otra prueba sobre la condición de salud de la mujer.

Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral.

Violencia Patrimonial y Económica. Acción u omisión que implique un daño, pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción en los objetos, documentos personales, valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, bienes de una mujer y los recursos propios o compartidos en el ámbito familiar o de pareja.

También constituye violencia patrimonial y económica el control de los bienes y recursos financieros, manteniendo así el dominio sobre la mujer, la negación de proveer los recursos necesarios en el hogar, desconocimiento del valor económico del trabajo doméstico de la mujer dentro del hogar y la exigencia para que abandone o no inicie un trabajo remunerado.

Sistema de Referencia y Contrarreferencia (SIREC). *El SIREC se constituye como el mecanismo de articulación de los actores que son parte del Modelo, mediante el cual se coordina la integralidad de los servicios para restituir los derechos de las personas, familias y comunidad.*

Modelo de Atención Integral (MAI). Es una intervención diseñada específicamente para apoyar a víctimas y sobrevivientes de violencia de género en sus expresiones intrafamiliar y sexual. Se basa en la integración de la visión de género y derechos humanos con aspectos legales, médicos, psicológicos y sociales en cada persona que brinda la atención, dirigida a acompañar a las mujeres, niñas y adolescentes, en la ruptura de ciclos de violencia, el acceso a la justicia y su empoderamiento.

2. Algunas disposiciones de interés de las 100 Reglas de Brasilia

Concepto de las personas en situación de vulnerabilidad

(Regla 3) Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

(Regla 4) Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad.

La concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características específicas, o incluso de su nivel de desarrollo social y económico.

Edad

(Regla 5) Se considera *niño, niña y adolescente* a toda persona menor de dieciocho años de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad en virtud de la legislación nacional aplicable.

Todo niño, niña y adolescente debe ser objeto de una especial tutela por parte de los órganos del sistema de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo.

(Regla 6) El envejecimiento también puede constituir una causa de vulnerabilidad cuando la *persona adulta mayor* encuentre especiales dificultades, atendiendo a sus capacidades funcionales, para ejercitar sus derechos ante el sistema de justicia.

Discapacidad

(Regla 7) Se entiende por *discapacidad* la deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.

(Regla 8) Se procurará establecer las condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema de justicia, incluyendo aquellas medidas conducentes a utilizar todos los servicios judiciales requeridos y disponer de todos los recursos que garanticen su seguridad, movilidad, comodidad, comprensión, privacidad y comunicación.

Pertenencia a comunidades indígenas

(Regla 9) Las personas integrantes de las *comunidades indígenas* pueden encontrarse en condición de vulnerabilidad cuando ejercitan sus derechos ante el sistema de justicia estatal. Se promoverán las condiciones destinadas a posibilitar que las personas y los pueblos indígenas puedan ejercitar con plenitud tales derechos ante dicho sistema de justicia, sin discriminación alguna que pueda fundarse en su origen o identidad indígenas. Los poderes judiciales asegurarán que el trato que reciban por parte de los órganos de la administración de justicia estatal sea respetuoso con su dignidad, lengua y tradiciones culturales.

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 48 sobre las formas de resolución de conflictos propios de los pueblos indígenas, propiciando su armonización con el sistema de administración de justicia estatal.

Victimización

(Regla 10) A efectos de las presentes Reglas, se considera *víctima* toda persona física que ha sufrido un daño ocasionado por una infracción penal, incluida tanto la lesión física o psíquica, como el sufrimiento moral y el perjuicio económico. El término víctima también podrá incluir, en su caso, a la familia inmediata o a las personas que están a cargo de la víctima directa.

(Regla 11) Se considera *en condición de vulnerabilidad* aquella víctima del delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. *La vulnerabilidad puede proceder de sus propias características personales o bien de las circunstancias de la infracción penal.* Destacan a estos efectos, entre otras víctimas, *las personas menores de edad, las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de delitos sexuales, los adultos mayores, así como los familiares de víctimas de muerte violenta.*

(Regla 12) Se alentará la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito (victimización primaria) Asimismo procurarán que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria) procurarán garantizar, en todas las fases de un procedimiento penal, la protección de la integridad física y psicológica de las víctimas, sobre todo a favor de aquellas que corran riesgo de intimidación, de represalias o de victimización reiterada o repetida (una misma persona es víctima de más de una infracción penal durante un periodo de tiempo). También podrá resultar necesario otorgar una protección particular a aquellas víctimas que van a prestar testimonio en el proceso judicial. Se prestará una especial atención en los casos de violencia intrafamiliar, así como en los momentos en que sea puesta en libertad la persona a la que se le atribuye la comisión del delito.

Género

(Regla 17) La discriminación que la mujer sufre en determinados ámbitos supone un obstáculo para el acceso a la justicia, que se ve agravado en aquellos casos en los que concurra alguna otra causa de vulnerabilidad.

(Regla 18) Se entiende por *discriminación contra la mujer* toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

(Regla 19) Se considera *violencia contra la mujer* cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, mediante el empleo de la violencia física o psíquica.

(Regla 20) Se impulsarán las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en el acceso al sistema de justicia para la tutela de sus derechos e intereses legítimos, logrando la igualdad efectiva de condiciones. Se prestará una especial atención en los supuestos de violencia contra la mujer, estableciendo mecanismos eficaces destinados a la protección de sus bienes jurídicos, al acceso a los procesos judiciales y a su tramitación ágil y oportuna.

Pertenencia a minorías

(Regla 21) Puede constituir una causa de vulnerabilidad la pertenencia de una persona a una minoría nacional o étnica, religiosa y lingüística, debiéndose respetar su dignidad cuando tenga contacto con el sistema de justicia.

Destinatarios: actores del sistema de justicia

(Regla 24) Serán destinatarios del contenido de las presentes Reglas:

- Los responsables del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas dentro del sistema judicial;
- *Los Jueces, Fiscales, Defensores Públicos, Procuradores y demás servidores que laboren en el sistema de Administración de Justicia de conformidad con la legislación interna de cada país;*
- Los Abogados y otros profesionales del Derecho, así como los Colegios y Agrupaciones de Abogados;
- Las personas que desempeñan sus funciones en las instituciones de *Ombudsman*;
- Policías y servicios penitenciarios;
- Y, con carácter general, todos los operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento.

Anticipo jurisdiccional de la prueba

(Regla 37) Se recomienda la adaptación de los procedimientos para permitir la *práctica anticipada de la prueba en la que participe la persona en condición de vulnerabilidad, para evitar la reiteración de declaraciones, e incluso la práctica de la prueba antes del agravamiento de la discapacidad o de la enfermedad. A estos efectos, puede resultar necesaria la grabación en soporte audiovisual del acto procesal en el que participe la persona en condición de vulnerabilidad, de tal manera que pueda reproducirse en las sucesivas instancias judiciales.*

Medio alternativos de resolución de conflictos

Formas alternativas y personas en condición de vulnerabilidad

(Regla 43) Se impulsarán las formas alternativas de resolución de conflictos en aquellos supuestos en los que resulte apropiado, tanto antes del inicio del proceso como durante la tramitación del mismo. La mediación, la conciliación, el arbitraje y otros medios que no impliquen la resolución del conflicto por un tribunal, pueden contribuir a mejorar las condiciones de acceso a la justicia de determinados grupos de personas en condición de vulnerabilidad, así como a descongestionar el funcionamiento de los servicios formales de justicia.

(Regla 44) En todo caso, antes de iniciar la utilización de una forma alternativa en un conflicto concreto, se tomarán en consideración las circunstancias particulares de cada una de las personas afectadas, especialmente si se encuentran en alguna de las condiciones o situaciones de vulnerabilidad contempladas en estas Reglas. Se fomentará la capacitación de los mediadores, árbitros y otras personas que intervengan en la resolución del conflicto.






Difusión e información

(Regla 45) Se deberá promover la difusión de la existencia y características de estos medios entre los grupos de población que resulten sus potenciales usuarios cuando la ley permita su utilización.

(Regla 46) Cualquier persona vulnerable que participe en la resolución de un conflicto mediante cualquiera de estos medios deberá ser informada, con carácter previo, sobre su contenido, forma y efectos.












3. Morfología descriptiva

MORFOLOGIA DESCRIPTIVA										
EDAD APROX.	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60
ESTATURA	100-110	111-120	121-130	131-140	141-150	151-160	161-170	171-180	181-190	191-200
RAZA	BLANCA				NEGRA			AMARILLA		






CONTEXTURA				
 OBESA	 ROBUSTA	 ATLETICA	 MEDIANA	 DELGADA











HOMBROS					
INCLINACION	ELEVADOS	HORIZONTALES	OBLICUOS	CAIDOS	ASIMETRICOS
ANCHURA	ANGOSTOS		MEDIOS	ANCHOS	







Morfología descriptiva del rostro humano




CARA									
FORMA	 ASIMETRICA	 ALARGADA	 CUADRADA	 REDONDA	 PERIFORME	 OVALADA			
ASPECTO	 ARRUGADA	 PECOSA	 MANCHADA	 BARROSA	 CICATRIZADA				
PIEL COLORACION	ALBINA	BLANCA	TRIGUEÑA	MORENA	ROJIZA	NEGRA	COBRIZA	SANGUINO	

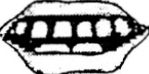





CONTEXTURA FACIAL			
ALTURA	CORTA	MEDIANA	ALARGADA
ESTADO GRASO	HUESUDA	LLENA	MEJILLAS FLACIDAS





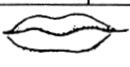
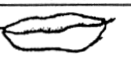


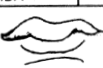
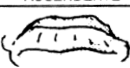
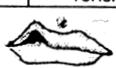
CABELLO					
FORMA	 LACIO	 LISO	 ONDULADO	 ENSORTIJADO	 RIZADO

BARBA						
CANTIDAD	 LAMPINO	 ESCASA	 MEDIANA	 ABUNDANTE		
LONGITUD	 CORTA	 MEDIANA	 LARGA	 POBLADA	 CHIVERA	 PATILLA








OREJAS			
TAMAÑO	 PEQUEÑA	 MEDIANA	 GRANDE
POSICION	 ADHERIDAS	 NORMALES	 SEPARADAS

DETALLES				
	 PELUDAS	 PERFORADAS	 LOBULO ADHERIDO	 LOBULO SEPARADO

DENTADURA			
POSICION	 SEPARADOS	 ORDENADOS	 APIÑADOS
CUIDADO	 CUIDADOS	 DESCUIDADOS	 LESIONADOS







LABIOS	 DELGADOS	 MEDIOS	 GRUESOS		
COMISURA	 CAIDA	 HORIZONTAL	 ASCENDENTE	 ASIMETRICA	 TORCIDA
PARTICULARIDAD	 SUPERIOR PROMINENTE		 INFERIOR CAIDO		 LEPORINO







MENTON







FORMA	 AGUDO	 CUADRADO	 REDONDO	 CON HOYUELO
PERFIL	 SALIENTE	 NORMAL	 ENTRANTE	










CANTIDAD	 ESCASO	 NORMAL	 ABUNDANTE				
LONGITUD	 CORTO	 MEDIO	 LARGO	 MUY LARGO			
PEINADO	 RECOGIDO	 REPARTIDO DERECHA	 REPARTIDO IZQUIERDA	 REPARTIDO MITAD	 PEINADO ATRAS	 SUELTO	 CAPUL








CALVICIE

 TOTAL	 CORONAL	 FRONTO-CORONARIA	 FRONTAL	 LATERAL	 BILATERAL
--	--	---	--	--	---

FRENTE			
ALTURA	 CORTA	 MEDIA	 ALTA
LONGITUD	 ANGOSTA	 MEDIA	 ANCHA

CEJAS			
CANTIDAD	 ESCASAS	 NORMAL	 POBLADAS
POSICION	 SEPARADAS	 NORMAL	 UNIDAS

CUELLO			
LONGITUD	 LARGO	 MEDIANO	 CORTO
GROSOR	 DELGADO	 MEDIANO	 GRUESO
PARTICULARIDAD	 PAPADA	 COTO (BOCIO)	 MANZANA

BIGOTE			
CANTIDAD	 ESCASO	 MEDIANO	 ABUNDANTE
LONGITUD	 RASURADO	 CORTO	 MEDIANO
			 LARGO

Consortio Liderado por



Socios Coordinadores



Participan más de 80 Socios Operativos y Entidades Colaboradoras de Europa y América Latina



EUROsocial es un programa de cooperación regional de la Unión Europea con América Latina para la promoción de la cohesión social, mediante el apoyo a políticas públicas nacionales, y el fortalecimiento de las instituciones que las llevan a cabo. EUROsocial pretende promover un diálogo euro-latinoamericano de políticas públicas en torno a la cohesión social. Su objetivo es contribuir a procesos de reforma e implementación en diez áreas clave de políticas, en ciertas temáticas, seleccionadas por su potencial impacto sobre la cohesión social. El instrumento del que se dota es el de la cooperación institucional o aprendizaje entre pares: el intercambio de experiencias y la asesoría técnica entre instituciones públicas de Europa y de América Latina.



www.eurososocial-ii.eu